

33



Venezuela: nuevos horizontes

Juan Carlos Monedero | Hernán Ouviaña |
Armando Chaguaceda y Marco Antonio Ponce

Informes sobre el conflicto social en 2012

María Celia Cotarelo - Argentina | Dunia Mokrani y Pilar
Uriona Crespo - Bolivia | Roberto Leher *et al.* - Brasil |
Alejandro Alvarado Alcázar y Gloriana Martínez Sánchez -
Costa Rica | Mario Unda - Ecuador | Simona Violetta
Yagenova - Guatemala

Entrevista

**Compromiso político, tarea teórica y movimientos
sociales. Entrevista a Enrique Dussel**
Luz Estrello y Massimo Modonesi

Experiencias latinoamericanas

**De la generación zapatista al #YoSoy132. Identidades
y culturas políticas juveniles en México - Massimo
Modonesi**

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

**Pensamiento social y política de la Revolución -
Fernando Martínez Heredia**





Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

OSAL Observatorio Social de América Latina

Año XIII N° 33 / publicación semestral / mayo de 2013

Editores

Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo de CLACSO

Coordinador

Lucio Fernando Oliver Costilla

Director de la *Revista del OSAL*

Massimo Modonesi

Colectivo Editorial

Guillermo Marcelo Almeyra Casares, Rolando Álvarez Vallejos, Armando Chaguaceda Noriega, Francisco Luciano Concheiro Borquez, Julio César Guanche, Massimo Modonesi, Dunia Mokrani Chávez, Lucio Oliver, João Marcio Mendes Pereira, Franklyn Ramírez Gallegos, Julián Rebón, Agustín Santella, Carlos Abel Suárez

Consejo consultivo editor

Gerardo Caetano [Uruguay], Suzy Castor [Haití], Margarita López Maya [Venezuela], Carlos Walter Porto Gonçalves [Brasil], Pierre Salama [Francia], Boaventura de Sousa Santos [Portugal], Joan Subirats [España], Luis Tapia [Bolivia], Juan Valdés [Cuba]

Secretaria de redacción

Luz Estrella

Asistentes de coordinación

Juan Chaves, Francesca Savoia y Emma Rosa Tenorio Bueno

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana y Caribeña

- Argentina y Uruguay, coordinado por María Celia Cotarelo [Programa de Investigación del Movimiento de la Sociedad Argentina, PIMSA]
- Bolivia, coordinado por Dunia Mokrani Chávez y Pilar Uriona Crespo [Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES-UMSA]
- Brasil, coordinado por Roberto Leher [Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, LPP-UERJ]
- Colombia, coordinado por Guillermo Correa Montoya [Escuela Nacional Sindical, ENS]
- Chile, coordinado por Juan Carlos Gómez Leyton [Departamento de Investigaciones de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, DI-UARCIS]
- Costa Rica, coordinado por Alejandro Alvarado Alcázar [Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, IIS-FCS-UCR]
- Ecuador, coordinado por Mario Unda [Centro de Investigaciones CIUDAD]
- Guatemala, coordinado por Simona Violetta Yagenova [Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de Guatemala, FLACSO-Guatemala]
- México, coordinado por Lucio Oliver y Massimo Modonesi [Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, FCPS-UNAM]
- El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, coordinado por Marco A. Gandásegui, h. [Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, "Justo Arosemena".]
- Paraguay, coordinado por Quintín Riquelme [Centro de Documentación y Estudios, CDE]
- Perú, coordinado por Ramón Pajuelo Teves [Instituto de Estudios Peruanos, IEP]
- República Dominicana y Puerto Rico, coordinado por Mario Serrano Marte [Departamento de Investigación e Incidencia, DII, del Centro "Pedro Francisco Bonó".]
- Venezuela, coordinado por Marco Antonio Ponce [Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, PROVEA]

Escriben en este número

Alejandro Alvarado Alcázar, Marath Baruch Bolaños López, Jacqueline Aline Botelho Lima, María Celia Cotarelo, Armando Chaguaceda, Alice Coutinho da Trindade, Alejandra González Bazúa, Roberto Leher, Fernando Martínez Heredia, Gloriana Martínez Sánchez, Dunia Mokrani Chávez, Massimo Modonesi, Juan Carlos Monedero, Hernán Ouviaña, Marco Antonio Ponce, Efraín Quiñonez León, Valentina Sarmiento Cruz, Mario Unda, Pilar Uriona Crespo, Simona Violetta Yagenova.

Informes

Dirigirse a <www.clacso.org> | <osal.redaccion@yahoo.com.mx>



Año XIV N° 33 - Mayo de 2013

**Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales**

Área de Producción Editorial y Contenidos Web de CLACSO

Responsable Editorial Lucas Sablich

Director de Arte Marcelo Giardino

Diseño de Tapa y Producción Fluxus Estudio

Propietario: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO

ISSN: 1515-3282 – Impreso en Argentina – mayo de 2013

Copyright Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Domicilio de la Publicación

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1101AAX Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145/9505 | Fax [54 11] 4305 0875 | e-mail clacso@clacso.edu.ar | web www.clacso.org.ar



Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO cuenta con el apoyo de la
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI)



La revista Observatorio Social de América Latina (OSAL) es indizada en Directory of Online Access Journals <www.doaj.org>, Directorio Latindex <www.latindex.unam.mx>, Unesco Social and Human Science Online Periodicals <www.unesco.org/shs/shsdc/journals/shsjournals.html>, Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe <www.clacso.org.ar/biblioteca/revistas>, Latin Americanist Research Resources <<http://lanic.utexas.edu/larrp>> e Hispanic American Periodicals Index <<http://hapi.ucla.edu>>.

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723

Dirección Nacional del Derecho de Autor: Expediente N° 641.603

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Observatorio Social de América Latina (OSAL) y sus respectivos isotipos y logotipos son marcas registradas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Sumario

Editorial Guillermo Almeyra	9
---------------------------------------	---

Venezuela: nuevos horizontes

Venezuela y la reinención de la política: el desafío del socialismo en nuevos escenarios Juan Carlos Monedero	15
---	----

Estado, disputa electoral y construcción de poder popular en la Venezuela bolivariana Hernán Ouviaña	37
--	----

Venezuela: proceso sociopolítico y conflictividad social. Un balance de 2012 Armando Chaguaceda Noriega y Marco Antonio Ponce	51
---	----

Informes sobre el conflicto social en 2012

Argentina, 2012: ¿crisis en la fuerza social democrática, nacional y popular? María Celia Cotarelo	65
--	----

Bolivia: informe de coyuntura y balance anual de 2012 Dunia Mokrani Chávez y Pilar Uriona Crespo	77
--	----

Brasil: agravamento da crise, coesão do bloco dominante e novos horizontes para as lutas sociais Roberto Leher <i>et al.</i>	95
--	----

En el tiempo del libre mercado: conflictos y protesta social en Costa Rica durante el año 2012 Alejandro Alvarado Alcázar y Gloriana Martínez Sánchez	111
---	-----

Ecuador en 2012: un largo año electoral Mario Unda	123
--	-----

Guatemala en 2012: reconfiguración autoritaria, movilización popular y criminalización de las luchas	135
Simona Violetta Yagenova	

Entrevista

Compromiso político, tarea teórica y movimientos sociales. Entrevista a Enrique Dussel	153
Luz Estrello y Massimo Modonesi	

Experiencias latinoamericanas

De la generación zapatista al #YoSoy132. Identidades y culturas políticas juveniles en México	163
Massimo Modonesi	

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

<i>Incitaciones a pensar. Apuntes en torno a la trayectoria política e intelectual de Fernando Martínez Heredia</i>	181
Alejandra González Bazúa	
Pensamiento social y política de la Revolución	193
Fernando Martínez Heredia	

Reseñas

<i>De Hacia la recuperación de la soberanía educativa en América Latina: conciencia crítica y programa</i>	213
Marath Baruch Bolaños López	
<i>De Sociabilidades emergentes y movilizaciones sociales en América Latina</i>	219
Efraín Quiñonez León	
<i>De Zapata cabalga por el Tepozteco</i>	223
Valentina Sarmiento Cruz	
Lista de publicaciones recientes	227

Editorial

Venezuela y América Latina después de Chávez

GUILLERMO ALMEYRA

Hugo Chávez era, con mucho, incluso con sus errores y carencias tan grandes como por su figura histórica, el más radical y firme de todos los llamados gobiernos progresistas de América Latina y de todos los políticos de dicho sector en nuestro continente. Era capaz de evolucionar, de sentir la influencia popular, de responder a las adversidades con lucha y tenacidad y, aunque se apoyaba en un aparato –en especial, en las fuerzas armadas–, no dependía del mismo ni para llevar a cabo las acciones que se trazaba ni para hacer política. En un continente de caudillos, y siendo él mismo uno de ellos que medía todo con referencia a su persona y veía la organización de los trabajadores como emanación propia (por eso decía que los sindicatos son contrarrevolucionarios), no era sólo un caudillo.

A diferencia de Rafael Correa, Cristina Fernández, Dilma Rousseff o José Mujica, Chávez era anticapitalista e intentaba, desde el poder, producir –y controlar– un todavía vago poder popular (que las fuerzas armadas y el aparato se encargaban de asfixiar). A diferencia de Evo Morales, no era edificador de un Estado capitalista más moderno, desarrollista y extractivista, pues, aunque aplicaba una política en la que todo sigue basado en la exportación de petróleo a Estados Unidos y aunque promovía la industrialización, buscaba a tientas y sin lograrlo todavía un Estado no capitalista, estructurado sobre bases más democráticas, que él denominaba vagamente Socialismo del Siglo XXI, y que se diferenciaba del neodesarrollismo y a la vez del sistema burocrático soviético, cubano, chino y vietnamita. Por eso su desaparición se hará sentir no sólo en Venezuela sino también en toda América Latina y, en particular, en las organizaciones que él impulsó.

El MERCOSUR, semifrenado por los intereses rivales de un gran país –Brasil– que ve a otro mucho más débil –Argentina– como mercado y no como socio, y

también por los esfuerzos vanos de Buenos Aires por contrarrestarlo, podría salir de ese pantano si Venezuela, con sus excedentes petroleros, desempeñase en su seno un papel importante, a pesar de la reticencia brasileña ante el proyecto chavista de Banco del Sur que Brasilia ve como competidor de su propio Banco de Desarrollo.

Si para afianzarse en el poder el nuevo grupo, que depende del chavismo nacionalista y conservador de las fuerzas armadas, optase por reforzar el clientelismo y la dependencia total de la renta petrolera (que son lastres de la economía venezolana que Chávez combatía) para hacer una política de subsidios, asistencia-lismo e importaciones indiscriminadas, es posible que ese sector logre mantener la popularidad que Chávez buscaba, en cambio, en medidas renovadoras, pero fortalecerá a la boliburguesía y a la corrupción y pondrá sordina a los esfuerzos integradores en el plano latinoamericano.

Ese peligro amenaza también al ALBA, a las relaciones con los países caribeños, al apoyo a Cuba para que tenga combustible más barato y pueda comprar alimentos. Sobre todo porque en el ALBA ningún país está en condiciones de remplazar a Venezuela en su papel de locomotora y ningún líder tiene la talla o el prestigio necesarios para sustituir a Chávez como animador político de esa organización.

Lo mismo sucede con la UNASUR, que se basa en el trío Brasil-Argentina-Venezuela y que si pierde una de las patas del trípode se reduciría casi a acuerdos bilaterales. En dicho grupo, Rafael Correa, y sobre todo Dilma Rousseff, son los que desde el punto de vista político están más firmes en el poder. Pero el primero tiene una economía muy débil y, además, dolarizada, y la segunda depende demasiado de una burguesía muy fuerte a la que satisface continuamente (lo cual hace que algunos hablen, tontamente, de subimperialismo brasileño, a pesar de que Brasil tiene roces constantes con Washington para preservar, justamente, su propio margen de acción capitalista).

En cuanto a Cristina Fernández, muy probablemente no podrá lograr la modificación de la Constitución que le autorice un tercer mandato consecutivo. Su gobierno parece ya un pato renco y un posible sucesor surgido de la tribu que por ahora la reconoce como caudillo en versión femenina, muy probablemente será más derechista que ella. Además, con un gobierno paraguayo de derecha pero constitucional y, por lo tanto, readmitido en la organización; con Chile en crisis política pero sin grandes cambios, y con una crisis política en Colombia que dificulta al presidente Juan Manuel Santos, que apostó a la distensión con Venezuela, en su combate contra el regreso del ultrarreaccionario Álvaro Uribe, el panorama de la UNASUR cambiará mucho con respecto al que imperaba cuando Chávez era una fuerza impulsora.

Todo depende pues, en muy gran medida, del desenlace del postchavismo oficial en Venezuela y, sobre todo, de la reacción popular para defender palmo a palmo las conquistas y la participación de los trabajadores y los pobres, y crear y ampliar el llamado poder popular, dándole fuerza e ideas a la autogestión, a la lucha por la unidad sindical, a la organización de comunas que administren el territorio y le quiten así base a la derecha oligárquica y proimperialista, que ahora está calma porque teme despertar una ola hostil, pero reaparecerá a la luz, y a

los sectores verticalistas y burocráticos del chavismo oficial que buscarán hacerle concesiones a esa derecha y a la boliburguesía.

Lo mejor del legado de Chávez –osar, insubordinarse–, pasado el momento de gran duelo, estará al orden del día, así como una discusión-balance sobre lo que hay que cambiar y sobre cuál debe ser la estrategia para el futuro próximo. Sólo la preparación de las bases del socialismo podrá mantener la independencia nacional y los progresos materiales realizados en tiempos de Hugo Chávez.

Venezuela

Nuevos horizontes

**Venezuela y la reinención de la
política: el desafío del socialismo
en nuevos escenarios**

Juan Carlos Monedero

**Estado, disputa electoral
y construcción de poder popular
en la Venezuela bolivariana**

Hernán Ouviaña

**Venezuela: proceso sociopolítico y
conflictividad social. Un balance de 2012**

Armando Chaguaceda Noriega
y Marco Antonio Ponce

Venezuela y la reinención de la política

El desafío del socialismo
en nuevos escenarios

JUAN CARLOS MONEDERO

Politólogo, profesor titular de Ciencia Política
en la Universidad Complutense de Madrid.

Resumen

Escrito antes de que falleciera el ex presidente Hugo Chávez, en el artículo se analizan los retos que enfrentó el bolivarianismo y los discursos opositores y a favor, y se hace un balance de los logros que alcanzara a fin de concebir un pasaje del populismo al Estado comunitario, del cual se esboza una caracterización programática somera y para lo que se reflexiona de las soluciones a las cuestiones centrales de la política según el liberalismo y el socialismo. El autor sintetiza los problemas históricos del país y plantea las respuestas que se les debe dar, en un balance que comprende su inserción mundial. Entre éstas figura la necesidad de reformular el centralismo en un mayor diálogo en el gobierno y con los consejos comunales, para el logro de una democracia directa y de base. También se enumeran las tendencias futuras de las líneas políticas nodales que afrontaría el próximo gobierno bolivariano, de transición al socialismo.

Abstract

This article, written before former President Hugo Chávez's death, analyses the challenges faced by Bolivarianism and the opposition's and supporter's narrative. It takes stock of successes aimed at conceiving a move from populism to a community-based state, which is briefly characterised from a programmatic point of view and reflected upon to go from solutions to the central political issues from a liberal and a socialist perspective. The author summarises the country's historic problems and suggests answers that should be given, as he draws a conclusion which involves their place in the international sphere. These answers include the need to reformulate centralism as part of a wider dialogue in government and with communal councils, to achieve a direct and grassroots democracy. Future tendencies of central political lines that the next Bolivarian government, in transition to socialism, might face are included.

Palabras clave

Socialismo del Siglo XXI, Estado comunitario, consejos comunales, bolivarianismo, transición al socialismo.

Key words

Socialism in the twenty-first century, community-based state, communal councils, Bolivarianism, transition to socialism.

Cómo citar este artículo

Monedero, Juan Carlos 2013 "Venezuela y la reinención de la política: el desafío del socialismo en nuevos escenarios" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, Nº 33, mayo.

No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Éste es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política.

Hugo Chávez, 8 de diciembre de 2012, antes de partir hacia su cuarta operación contra el cáncer.

1. Dificultades de la agenda postneoliberal, utopía de la agenda postcapitalista, debilidades de la agenda conservadora

Si alguien pensaba que el *shock* que produjo el anuncio realizado por el propio Chávez el 30 de junio de 2011 de que padecía un cáncer en la zona de la pelvis iba a agotar el vértigo de los acontecimientos, andaba bien desencaminado. El anuncio de la enfermedad de Chávez suponía solamente el primero de una serie de terremotos que iban a perfilar el nuevo rumbo de la llamada "revolución bolivariana". Después vendrían cuatro operaciones en Cuba –en La Habana, para garantizar la privacidad del paciente considerando el amarillismo hospitalario de los medios ante un caso de estas características–; las dudas acerca de la posibilidad de ejercer la presidencia –donde, desde los inicios, la información no se ma-

nejó con total transparencia por el gobierno, afectado igualmente por la ausencia de Chávez–; los intentos espurios de la oposición de invalidar indirectamente las elecciones –queriendo hacer de un asunto protocolario, como luego zanjaría el tribunal supremo, un hecho trascendente, como la fecha de juramentación–; los agravamientos de la enfermedad –con el dramático llamado de Chávez a apoyar a Maduro si no salía de la cuarta operación o durante una infección respiratoria donde parecía que el desenlace iba a ser fatal–; las recuperaciones o las primeras fotos del presidente después de la operación –que se hicieron esperar demasiado–; y, sobre todo, dentro del país, la lenta ascensión de que una nueva fase se ha iniciado, aún después de su regreso a Venezuela en febrero de 2013. Eso tras muchos meses esperando la respuesta a una pregunta en boca de todo el país, pero sin una respuesta clara fuera de los medios de la oposición –quienes la respondían dando más de una docena de veces a Chávez por muerto–: ¿cómo seguiría el proceso bolivariano en caso de que el presidente Chávez no pudiera seguir liderándolo?

Si la enfermedad situó la salud del presidente Chávez como el único horizonte, otros desarrollos irían cobrando cuerpo en esos meses dándole contorno al devenir político: las inmediatas citas electorales, que serían ganadas de manera abrumadora por el *chavismo* –tanto en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, con 10,7 puntos de diferencia con el candidato unitario de la oposición, como en las regionales del 16 de diciembre, ganando las fuerzas oficialistas en 20 de las 23 gobernaciones, incluidas plazas fuertes de la oposición como el Zulia–; la necesidad de buscar continuidad al proceso bolivariano con Chávez fuera de la primera línea política, reforzando las peticiones de unidad y articulando un debate interno que evitase la fragmentación –con primarias para la elección de los alcaldes en las elecciones de julio de 2013, un asunto de fricción en otros momentos anteriores, y con la representación de una juramentación del pueblo como presidente el 10 de enero, acompañada de presidentes y representantes de países latinoamericanos, como una forma diferente de dar comienzo al nuevo mandato presidencial–; la reinención de una oposición que hizo de adversar a Chávez el motivo único, prácticamente, de su línea política –con el candidato Capriles bien situado pero cuestionado desde las posiciones socialdemócratas de Acción Democrática–; el problemático ahondamiento de la reinención del Estado –el Estado comunal que, como plantearía Chávez en su alocución “Golpe de timón” del 20 de octubre de 2012, no terminaba de avanzar–; y las duras exigencias económicas que marcaba una crisis económica mundial que terminaría llegando a América Latina².

En voz alta, el propio Chávez se preguntaría repetidas veces algo que buena parte del país, especialmente las filas que apoyan al gobierno, se interroga en silencio: ¿Puede descansar el peso del proceso bolivariano sobre una única persona? ¿Qué revolución es esa en donde la ausencia del presidente implica el fin del proceso de cambio? ¿Cuáles son los mimbres, con voluntad de permanencia, contruidos durante los catorce años de políticas de cambio? ¿Repetiría la revolución bolivariana la suerte de América Latina, incapaz de construir una democracia de alta densidad al margen de figuras consideradas como héroes por una parte importante de la ciudadanía?

El *bolivarianismo*, “más un conjunto amplio de valores y prácticas concretas que una ideología bien estructurada” (Azzellini, 2010: 10), había tenido su refe-

rencia cimentadora en la figura del presidente Chávez. Él era el único actor político con la capacidad suficiente para movilizar a amplios sectores de la población con el fin de sostener unas políticas de cambio que enfrentaban al aparato heredado del Estado, a los sectores privilegiados del país, a las élites venezolanas y mundiales vinculadas al proceso de globalización –incluidas las grandes petroleras–, a los gobiernos de Europa, al de los Estados Unidos y, por si no bastara, también a la jerarquía vaticana, sin olvidar a la cultura política rentista del país, renuente a un cambio que implicara ese plus de acción colectiva que representa el socialismo. La relevancia de la figura del presidente, si bien ha sido una constante en un país al que la renta petrolera había dado contornos verticales y centralistas a la política y la economía, se hacía más evidente cuando el objetivo era romper con la lógica política y económica previa, en especial con los rasgos neoliberales acentuados desde finales de los años ochenta. El hilo conductor de ese impulso transformador desde arriba y desde abajo era una persona con una enorme fuerza carismática –como es el caso del presidente Chávez–, capaz de ser gobierno y aliado popular contra el gobierno, cúpula del Estado y referencia en los barrios más humildes, jefe supremo del ejército y valladar contra los abusos tradicionales de la milicia, cúpula de un Estado heredado ineficaz, corrupto, autoritario, indolente y despilfarrador y base de la autoorganización popular en los consejos comunales. No en vano durante la década pasada era fácil leer en los muros de Caracas una repetida frase: “Chávez es nuestro infiltrado en este gobierno de mierda”, frase llena de paradojas que remiten a la propia complejidad del proceso venezolano. Los problemas ligados a la salud del presidente se convertían, por tanto, en los propios problemas del proceso transformador. La suerte de Chávez, la del proceso bolivariano, la del esfuerzo integrador latinoamericano, volvía a acercarse al realismo mágico en un continente que en la última década ha cambiado las respuestas y las preguntas³.

El proceso bolivariano, mágico por su renuencia al burocratismo weberiano, por su capacidad de reinventar la política en una sociedad desestructurada, y también por sacar conejos de la chistera –un derivado de la renta petrolera–, también gozaba o padecía de esa condición cuando el gran prestidigitador, que al tiempo había sido el gran seguidor para los sectores populares, amenazaba a través de su salud con desaparecer él mismo de la escena política. El proceso de sucesión, detenido durante una década, entraba en escena y marcaba la discusión política en cuanto finalizaron los procesos electorales de 2012⁴.

A raíz de la enfermedad de Chávez, y cuando la crisis económica iniciada en Estados Unidos y continuada en Europa empezaba a llegar al continente latinoamericano, un proceso signado desde sus comienzos por sus tensiones con el poderoso vecino del norte –cualquier análisis del desarrollo de América Latina que ignore la presión imperialista de Estados Unidos sobre el continente se invalida por su inanidad–, éste se situaba en una nueva encrucijada, en este caso extrema, que se jugaba su suerte a la hora de responder si en los 14 años de proceso habían cuajado realmente en la ciudadanía y habían sentado las bases tanto para nuevos liderazgos como para exigir como derechos los logros redistributivos alcanzados. El hecho de que en las elecciones parlamentarias de 2010 las fuerzas de la oposición hubieran empatado en votos –aunque no en escaños– a las fuerzas del chavismo, abría otro elemento de incertidumbre. Finalmente, el presidente Chávez saldría airoso de los

procesos electorales de 2012, aunque su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, mostraba un retroceso electoral, paliado por las otras fuerzas políticas del Polo Patriótico, lo que obligaba a replantear el papel hegemónico que venía reclamando el PSUV. El apoyo popular a la figura omnímoda de Chávez no se trasladaba automáticamente ni a su partido ni a los políticos decididos por el presidente.

Chávez, convaleciente, reconoció la necesidad de ir hacia liderazgos más plurales, al tiempo que reconoció como un error haber cargado en exceso sobre su persona el peso del proceso

Desde el comienzo del proceso bolivariano, la perspectiva de un golpe desde posiciones “oligárquicas” apoyadas por los Estados Unidos estuvo siempre presente. Si Chávez no era controlable –como era la norma con los militares en el continente–, resultaba necesario sacarlo del poder (Villegas Poljak, 2009). Desde el primer momento, Chávez fue un presidente a derrocar por la coalición de poder nacional e internacional que había gobernado Venezuela desde el fin de la dictadura en 1959. Si Chávez hubiera sido sin más “otro dirigente populista”, parece evidente que habría contentado a las élites tradicionales venezolanas –más fáciles de contentar, sin duda, que ganarse a una parte importante del pueblo–. Hubiera sido otro episodio de lo que el politólogo venezolano Rey (1998) llamó “sistema populista de conciliación de élites”. Pero había, pese a los elementos comunes ligados a la *path dependence* –al peso institucional del pasado encerrado en las estructuras estatales–, una voluntad diferente, gestada desde el momento en el que Chávez cobró consciencia nacionalista y bolivariana en un ejército que, debido a la renta petrolera, permitió una oficialidad de origen popular que lo terminaría llevando –y también al propio Chávez– a posiciones afines a los sectores humildes. Eso explica porqué Chávez pudo conectar con las redes sociales y políticas que venían operando desde hacía décadas, aún en silencio, en Venezuela. Chávez no surge de la nada⁵.

Uno de los principios que han guiado a la Venezuela bolivariana desde antes de la victoria de Hugo Chávez en las elecciones de 1998 fue, como ya viene siendo un lugar común repetir, el lema de Simón Rodríguez: “inventamos o erramos”, lema dirigido a orientar un quehacer político que se definía como revolucionario tanto en el hacer como en el decir –la devastación neoliberal en América Latina alcanzó tal tamaño que la reconstrucción no podía ser solamente económica, sino que afectaba a todos los ámbitos de la vida social–, pero que partía de una realidad vehemente e iba a operar en un contexto internacional no menos vehemente que marcaba buena parte de las cartas⁶. El país buscaba una nueva dimensión, y en ese camino reinventó su propia esperanza alejada, primero en los hechos, luego en los discursos, del camino tradicional que había desarrollado la izquierda europea y también latinoamericana. La Venezuela bolivariana, al igual que el Chile de Allende durante la crisis del keynesianismo en la década del setenta, inventaba algo nuevo, y por eso se convertía en un enemigo demasiado real por demasiado simbólico. No deja de llamar la atención que en abril de 2012, Jean-Luc Mélen-

chon, antiguo dirigente del Partido Socialista francés y candidato de la coalición Frente de Izquierdas, asumiera que su orientación para crear a esa nueva fuerza política –la tercera en votos en Francia– fue según los casos del Ecuador de Correa y de la Argentina de los Kirchner. Criticado por su apoyo a Venezuela, rescató las 13 elecciones ganadas por Chávez, la recuperación del petróleo y la reducción de la pobreza como aspectos a defender del proceso bolivariano⁷. Y otro tanto ocurrió con Syriza en Grecia, que señaló a Venezuela como un modelo que brindaba mucha luz en la Europa que repetía los ajustes que sufrió América Latina en los años ochenta y noventa. La capacidad venezolana de presentar buenos resultados económicos trece años después de iniciado del proceso dificultaba su estigmatización, incluso en el contexto complicado de las elecciones francesas o griegas de 2012, tan sujetas a la demagogia.

2. Venezuela: capitalismo de Estado y redistribución de la renta

Una de las matrices de opinión que buscan debilitar al gobierno bolivariano tiene que ver con presentar su desempeño económico como una catástrofe. Esta idea es una constante de las columnas de opinión, de los trabajos que se publican en revistas académicas, de los informes emanados de los *think tanks* económicos. Moisés Naim, editor en jefe (1996-2010) de *Foreign Politics* y actualmente asociado experto del programa de economía internacional del Fondo “Carnegie” para la Paz Internacional –y, como venezolano, ministro de Comercio e Industria en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, precisamente durante el “Caracazo”–, escribió:

El *Financial Times* calcula que por cada 10 barriles de crudo que [Venezuela] vende a Estados Unidos tiene que importar (a un precio más alto) dos barriles de petróleo refinado en el exterior. Esta caída en los ingresos ocurre mientras las importaciones totales del país han pasado de 13.000 millones de dólares en 2003 a más de 50.000 millones hoy. Pagar esas importaciones y los altísimos intereses de la deuda requiere más divisas de las que la economía genera. A todo esto se agrega que la Venezuela de Chávez ha caído a los últimos lugares de las listas que clasifican a los países según su competitividad, la facilidad de hacer negocios o el atractivo para los inversores extranjeros, mientras que se coloca entre los campeones mundiales en materia de homicidios y de corrupción gubernamental (2013).

En uno de los libros más celebrados en el ámbito académico, *Un dragón en el trópico* –no por casualidad premio *Foreign Affairs* en 2011–, el análisis es igualmente catastrófico –obviamente, sin hablar de la crisis mundial, de la debacle incuestionable de la Unión Europea o de las dificultades de China, sino de Venezuela–:

La crisis económica venezolana –fines de 2008 [...]– resultó ser una de las peores del mundo. Se caracterizó por una de las más elevadas tasas de inflación, a pesar de haberse aplicado un control de precios de los más extensivos en décadas; por la escasez generalizada de bienes de consumo, aun con importaciones masivas; por el estancamiento agrícola y la escasez de alimentos, no obstante abundantes subsidios agrícolas; y por la falta de créditos, aunado a tasas de interés reales negativas, pese a la ampliación de la banca estatal. [...] En relación con la sostenibilidad, algunos consideran que el sistema está próximo a desmoronarse. [...] No cabe duda de que un colapso económico haría daño a la competitividad de un régimen híbrido; pero el sistema ha adquirido suficientes características autocráticas como para que bien pueda superar la crisis, aunque con

algunas grietas en su estructura política. [...] Al entrar en fase de colapso, el gobierno, con su amplio repertorio de poderes, puede recurrir a toda suerte de medidas: reprimir a quienes carguen con el costo –si es que protestan–, culpar a actores externos por la penuria económica y continuar ofreciendo a compinches e ideólogos gran parte de lo que buscan –activos tanto tangibles (transferencias gubernamentales y pagos al margen) como intangibles (la impunidad de rendir cuentas e ideología radical)– (Corrales y Penfold, 2012: 95-106)..

En octubre de 2011, el Centro Gumilla –sin vinculación con el Gobierno– publicaba un estudio donde revelaba que el 52,1% de los encuestados opinaba “que el socialismo es mejor sistema que el capitalismo”, mientras que el 71,4% afirmaba que “un sistema socialista garantiza el bien común” y el 70,4% que “en este tipo de sistema el poder lo tiene el pueblo”. Esta encuesta rompía claramente con tendencias anteriores –sobre todo cuando Chávez empezó a hablar de “socialismo” en 2005– que recogían la desconfianza hacia el socialismo en Venezuela, por otro lado consecuencia de la exitosa campaña contraria realizada durante los últimos treinta años⁸. En el mismo estudio se establecía que el 32,6% estaba muy de acuerdo con la afirmación de que la creación de los consejos comunales era “la mejor decisión del gobierno para resolver los problemas de las comunidades”, mientras que el 23,3% estaría muy en desacuerdo. Igualmente se afirmaba que el 35,8% creía que los pobres han sido tomados en cuenta por el gobierno, algo en lo que no estaba de acuerdo el 19%. El porcentaje aumentaba cuando se comparaba la tarea del gobierno de Chávez en relación con gobiernos anteriores –el 39,8% estimaba que ahora son más tomados en cuenta, frente al 20,6% que no lo compartiría–. El 35,6% de los ciudadanos estaría de acuerdo con que las misiones benefician a los ciudadanos de su comunidad, frente al 18,3% que no lo compartiría.

Los resultados económicos de Venezuela en estos 14 años tienen cuatro rubros incuestionables tanto para las estadísticas nacionales como para las internacionales –lo que cierra el paso a críticas sesgadas que restan validez a los datos nacionales pese a su factura homologable–: la reducción de la pobreza, ocupando el tercer lugar con menor número de pobres de América Latina, detrás de Argentina y Uruguay (8,6%) y Panamá (25,8%). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Venezuela habría pasado entre 2002 y 2010 del 48,6% al 27,8% de pobreza (en 2012 bajaría al 21,2%), y del 22,2% al 10,7% para la pobreza extrema (6,5% en 2012). En segundo lugar, la reducción radical de las desigualdades sociales –Venezuela cuenta con el índice Gini más bajo en toda América Latina: 0,394, frente al 0,44 de Uruguay, el 0,52 de Chile o el 0,57 de Brasil y Colombia–. El tercer rasgo claramente positivo está en las cifras de desempleo: 6,4% al cierre de 2012 (14,6% en 1999). Para 2012, el empleo formal alcanzaba al 57,5% del total (53% en 1999). Por último, cabe destacar el avance constante de posiciones en el índice de desarrollo humano, hasta alcanzar posiciones en el tramo “alto” de la escala (puesto 73 de 187)⁹.

El balance a diez años de gobierno realizado por el Center for Economic and Policy Research resaltaba con claridad el buen desempeño económico –ralentizado durante 2010 por motivo de la crisis mundial, pero recuperado durante 2011 y 2012– en términos de crecimiento, reducción de niveles de pobreza, reducción de la desigualdad, caída de la mortalidad infantil, incremento del gasto social, escolarización, mejoras en el empleo y en la calidad del mismo. La inflación, uno de

los rubros más problemáticos históricamente en el país –y que aún no está controlada– sería en 2012 del 20,1%, mejorando en casi 7 puntos respecto al 27,6% del año anterior (Weisbrot *et al.*, 2009). En 2012, año de la crisis mundial, Venezuela cerró con el 5,5% de crecimiento económico. Sin embargo, llama la atención que, tal como lo ha analizado Víctor Álvarez, estos logros, vinculados de manera evidente a la redistribución de la renta petrolera, no han logrado cambiar la estructura económica venezolana –algo que no se cuestiona desde la lectura crítica con el gobierno de los centros económicos y políticos ligados a la oposición–. Con contundencia, Álvarez afirma que desde la llegada de Chávez al gobierno “la economía venezolana es cada vez más capitalista”. Para llegar a esta conclusión, basta comparar la participación pública en el Producto Interno Bruto venezolano para constatar que entre 1998 y 2010, el PIB privado pasó del 65,2% al 69,8%, mientras que el PIB público pasó del 34,8% al 30,02%. Igualmente, en esta década, la economía social apenas llegaría al 2% del PIB, pese a los esfuerzos realizados.

El balance no es amable con los logros desde una perspectiva socialista que vaya más allá de la redistribución de la renta petrolera en sanidad, educación y alimentación, con la consecuente –y obviamente importante– reducción de la pobreza:

Gracias a los incentivos de la política económica bolivariana, el sector capitalista de la economía creció más que el sector público y que la economía social, hasta alcanzar el 70% del PIB. La mayor proporción de la actividad económica en la minería, manufactura, comercio, servicios, finanzas, transporte y almacenamiento, construcción y otros sectores de la economía aún está bajo el control de la economía capitalista privada. El sector no petrolero bajo el control fundamentalmente del capital privado pesa el 77,5% del PIB; mientras que la mayor proporción del sector petrolero que aporta el 11,6% está en manos del Estado (el sector privado pesa apenas el 0,6% del sector petrolero). El 10,9% que completa el 100% del PIB corresponde a los impuestos netos que paga fundamentalmente el sector privado. [...] Estos datos revelan que en la primera década de la Revolución Bolivariana la economía venezolana se hizo más capitalista y explotadora de la fuerza de trabajo asalariada. El sector capitalista de la economía aún pesa el 70% en el PIB y determina la naturaleza explotadora que predomina en el actual modelo productivo de Venezuela (Álvarez, 2011: 80).

Además, el aumento de las importaciones –algo, por otro lado, necesario para el pago de la deuda social al no avanzar con ritmo la producción nacional– repercute en la llamada “enfermedad holandesa”, esto es, en el estrangulamiento de la producción propia al no poder competir con los precios subsidiados de las importaciones. Son estos factores los que motivan las propuestas del presidente Chávez de “radicalización” del proceso bolivariano, es decir, el avance hacia un modelo que apunte claramente hacia las metas igualitarias propias del socialismo –donde los mayores beneficios sociales sean repartidos entre las mayorías más necesitadas–. Y es lo que está detrás del nuevo *Plan Nacional Socialista Simón Bolívar 2013-2019*, que, en palabras del presidente Chávez, buscaría orientar de manera “pro-socialista” la economía venezolana. En la nueva etapa, la voluntad de transformación llevaría a cambiar el discurso mantenido hasta la fecha para empezar a hablar de “poder popular y democracia socialista” en una nueva etapa que se llamaría de transición y que se denominaría “post-rentista, post-capitalista y prosocialista”¹⁰.

El horizonte electoral de 2012 movilizó recursos hacia nuevas misiones –articuladas con rango de ley–, con el fin de atender a colectivos numerosos que

estaban desasistidos en cuatro grandes rubros: vivienda, dependencia –enfermos, ancianos e impedidos–, empleo y personas en situación de marginalidad. Estas nuevas misiones eran entendidas como un puente entre el primer plan socialista (2007-2013) y el nuevo, destinado a sentar las bases de una economía socialista. La *Gran Misión Vivienda*, la *Gran Misión Saber y Trabajo* –dirigida a los 800 mil desempleados–, la *Gran Misión en Amor Mayor* –para personas por encima de los 55 años y sin pensión– y la *Gran Misión Hijos de Venezuela* –para hogares con jóvenes embarazadas o con discapacidad– supuso un gran esfuerzo que recordaba al inicio de la puesta en marcha de este tipo de políticas públicas participadas popularmente¹¹.

Más allá de la apocalíptica visión de la oposición venezolana, el desarrollo económico durante los catorce años de gobierno de Chávez recibía el apoyo popular. En noviembre de 2011, la encuestadora GIS XXI –próxima al gobierno– hacía pública una encuesta según la cual el 82% de los venezolanos entrevistados en el estudio “Estructura Social del Gusto. Octubre 2011”, manifestó ser muy feliz, mientras que sólo el 4% de los entrevistados reveló ser muy infeliz. Otro tanto informaba la encuestadora Gallup –nada próxima al gobierno–, estableciendo que el 88,4% de los venezolanos considera que es muy feliz o bastante feliz¹². Los resultados de las elecciones presidenciales y de las elecciones regionales venían a sancionar en las urnas esa percepción popular. El socialismo aún no ha llegado a Venezuela, pero la redistribución de la renta acerca la realidad del país a ese momento en el que, como dijo Lula, la revolución tiene que ver con comer tres veces al día.

La revolución mágica parecía tener encantados a seis de cada diez ciudadanos votantes del presidente e, incluso, ese encantamiento parecía afectar también a dos de cada cuatro de los que no lo hacen. Como dicen en Venezuela, “mono nunca carga chinchorro pero no duerme en el suelo”.

3. La reinención comunitaria del Estado: los consejos comunales como base de la transición al socialismo y antídoto a los problemas históricos de Venezuela

El populismo, como gobierno basado en una relación directa y flexible del líder con las multitudes, hace referencia a un momento político en donde la confianza personal suple tanto la falta de confianza social como la desconfianza hacia la política institucional¹³. El hecho de que no debe descalificarse, como viene siendo al uso, no implica que esa fase no deba superarse con la clarificación de las reglas del juego que permitan su previsibilidad y la sustitución de la relación interpersonal –imposible de mantener en sociedades complejas– por formas políticas donde intervengan más actores. Redes sociales densas sustituyen el cemento personal propio del momento populista y asientan, sobre la base de la corresponsabilidad, un nuevo modelo de gestión política y económica.

La construcción de un sistema político basado en los consejos comunales abre la posibilidad de transitar experimentalmente por buena parte de los conflictos inherentes a la discusión política, para solventar en la práctica problemas de difícil solución en la teoría. En este contexto, las “misiones” de Venezuela, políticas

públicas participadas popularmente a través de los consejos comunales, pueden aplicar formas de socialismo de mercado, lo que les permite la comercialización de sus productos fuera de la lógica estricta mercantilista afín al modelo competitivo capitalista. Y de la misma manera, otorgan una suerte de “salario universal”. Por último, y por la vinculación con el entorno, son capaces de generar una responsabilidad social auténtica –diferenciada de la empresarial– que supone una remoción radical de las estructuras sociales en camino de la igualdad y de la libertad, en un contexto de corresponsabilidad social¹⁴.

El socialismo de mercado y la renta básica universal son dos de las principales reclamaciones del marxismo analítico que tienen lugar en la Venezuela bolivariana

La organización comunal rompe el atomismo abstracto propio de la tradición liberal. La organización política de la comunidad rompe con la idea liberal de que no hay fines colectivos. Los individuos no son sujetos separados unos de otros y separados de su comunidad. En la comunidad se rompe con la separación entre lo privado y lo público que ha servido de argumento para la disolución del compromiso colectivo en el neoliberalismo. Eso no significa perder la libertad de expresar los propios objetivos o poder defender las ideas particulares. Si la comunidad no fuera capaz de garantizar la libertad de expresión –incluso de las ideas que podrían socavar los valores que la comunidad considera de mayor trascendencia– la organización comunal se convierte en una cárcel. El marco de libertades más amplio que garantiza la Constitución y la labor supervisora del Estado debieran servir para conjurar este riesgo. Si es cierto que la comunidad es una narración –como sostiene Taylor– más grande que nosotros mismos, esa narración crece conforme la adscripción administrativa –región, Estado, comunidad internacional–. La comunidad no tiene siempre y necesariamente razón –esto es, acierta a saber lo que es justo–. De ahí que tenga también que dialogar con otras comunidades, con el Estado y con la Constitución.

Frente a la petición liberal de mercados autorregulados, el socialismo sabe que la garantía pública –lo estatal, pero también lo público no estatal– es la que permite la independencia personal. De ahí que sea de enorme relevancia que los valores de independencia estén anclados en la propia comunidad, so riesgo de entregar esa garantía a jueces o *lobbies* que, directa o indirectamente, mercantilizan la independencia. El acceso a los bienes primarios –una de las principales discusiones de la filosofía política– se da a través del Estado, pero con la colaboración de las personas organizadas en comunidades. Así se hace política real la crítica de Amartya Sen al liberalismo, de que hay que dejar que cada grupo articule cómo quiere obtener sus bienes. La base comunal vence las críticas al atomismo, y al igual que da espacio a las mujeres –como sujetos con derecho a la diferencia–, lo da a las especificidades de cada lugar –algo constitucionalmente exigible en el caso de los indígenas–. Es necesario insistir en que esta tarea estatal debiera operar sobre la base del principio de la *subsidiariedad* –que la parte superior no haga lo

que puede hacer el nivel más bajo–, algo que funciona solamente sobre la base de un diálogo permanente entre los diferentes anillos que construyen la comunidad política. La discusión entre “individualidad” y “circunstancias” se solventa cuando es la comunidad el ámbito en donde se iguala a las personas en sus circunstancias, dejando un ámbito para la libre elección: te cuida pero te reprende cuando te alejas de los intereses colectivos que, siempre, se vuelven, tarde o temprano, contra los propios intereses, entre ellos la creación de sentido en la vida que se pierde cuando el sujeto se convierte en depredador de otros sujetos.

La justicia social siempre discutirá en tres ámbitos: los elementos objetivos –calorías mínimas, los recursos reales que tiene cada sujeto–, los subjetivos –el grado de satisfacción personal– y los sociales –cómo se han logrado los recursos y cómo afecta eso a los demás–. A estos asuntos no los entrega una teoría de manera tan clara como lo hace la vida cotidiana, a la que no es sencillo burlar cuando la vida comunitaria es densa y está bien trabada. La igualdad buscada en una sociedad debe traducirse en la capacidad de los sujetos para convertir los recursos en libertades. Quien mejor dispone de información al respecto es la comunidad. Como resulta cierto que las personas ajustan sus expectativas a su condición social, le corresponde a la vida comunal lograr que los desempeños de cada cual se multipliquen y, en un diálogo donde cada cual pueda participar –*isegoría*–, se jerarquizan. Parece sensato que la comunidad escoja en primer lugar cubrir la alimentación y la sanidad, pese a que otros individuos prefieran bienes suntuosos. Y que el trabajo sea el camino para alcanzar esos ámbitos –tampoco es extraño que el 1 de mayo de 2012 se anunciara la aprobación de una Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela que iba en la dirección radicalmente contraria a las reformas puestas en marcha en Europa bajo el argumento de la crisis económica–. No se trata, por tanto, de que el Estado cuide lo que los sujetos descuidan, sino de que haya consciencia de lo justo. De lo contrario, el Estado ocuparía el lugar que antaño correspondía a dios pero sin la conciencia que acompaña a la idea de un ser supremo que premia y castiga. No hay socialismo sin conciencia de lo público. Y eso se convierte en el primer desarrollo de la organización comunitaria.

La creación de los consejos comunales –incluida la reforma a la ley de consejos comunales de 2009, donde se pusieron las bases para evitar los abusos cometidos, sobre todo en lo referente a los bancos comunales, reconvertidos en unidades administrativas y financieras comunitarias no intermediadas– busca recoger todos estos elementos. La estructura del Estado comunal necesita reubicar los otros ámbitos territoriales existentes –municipios y estados–, de manera que promete cambiar toda la estructura administrativa venezolana.

4. Entre la magia y los fantasmas

En cualquier caso, después de las elecciones de 2012, Venezuela seguiría teniendo como retos principales los ligados a su *path dependence*, a su herencia colonial y rentista y a la estructura global nacida de la Segunda Guerra Mundial, continuada con el hundimiento de la URSS y después desafiada por el surgimiento de nuevos polos de poder geopolítico mundial –China, Rusia, Brasil o Sudáfrica–. Identificados los frenos externos, es momento de prestar atención a los problemas específicos.

Puede afirmarse que en el ADN político de la Quinta República hay mucho “cuartarepublicanismo sociológico” y, podríamos decir, también mucho “mantuanismo sociológico”, “pérezjimenecismo sociológico”, “guerrafederalismo sociológico”. Hay mucha memoria escondida en la cultura política venezolana, en los aparatos del Estado –ejército, judicatura, diplomacia, economía ligada al petróleo–, en las costumbres, tradiciones y referencias colectivas que lastran el vuelo del país.

La Quinta República ha dado respuestas a muchos de los fantasmas propios del neoliberalismo, pero parece más renuente a responder ante los pendientes estructurales. Los problemas de salud de Chávez suponen un desafío aún mayor a la hora de enfrentar estos problemas. Si bien se ha intentado dar algún tipo de solución en los catorce años de gobierno revolucionario, esa memoria anclada en los protocolos institucionales, en las universidades, en los libros, las revistas, los currículums universitarios, las leyes, notarías, tradiciones, familias, iglesias, cultura militar, etc.; refrena el vuelo del proceso de cambio –sin olvidar que de sus catorce años, sólo cuenta en realidad con ocho de gobierno sin excesivos lastres, una vez superados los golpes, paros, guarimbas, sabotajes, etc.–. Las reclamaciones de Maquiavelo en *El príncipe* acerca de las dificultades de permanencia de los nuevos pactos sociales –de los nuevos principados–; los recordatorios de Marx acerca de la necesidad de extremar el cuidado ante los poderosos que impiden la superación del modelo basado en el privilegio –lo que llamó *dictadura del proletariado*–; la queja de Lenin acerca de la diferencia entre el acceso al Estado y el acceso al poder; todo resurge en las posibilidades de Venezuela de superar su dependencia histórica a las que Norbert Lechner llamó “minorías consistentes”. Y de las que han pasado a formar parte una nueva burocracia chavista –la llamada “boliburguesía”– que tiene todos los vicios de la vieja burguesía y ninguna de sus ya ligeras bondades –un capitalismo nacionalista–.

Es en este contexto de superación de sociedades signadas por la violencia institucional y la exclusión ciudadana –sociedades formalmente democráticas pero socialmente fascistas, en expresión de Boaventura de Sousa Santos– donde hay que entender las reformulaciones del “populismo” más allá de su uso peyorativo; esto es, la definición de un proceso político que incluye demandas populares fragmentadas –e incluso inexistentes por su falta de expresión–, sobre la base de una apelación a la capacidad constituyente del pueblo que rompa con la oxidada democracia representativa, recupere formas de democracia directa, apele tanto a la deliberación como a la decisión y recree los orígenes de una democracia que ayer nació frente a las monarquías autoritarias y hoy lo hace sobre una esclerotizada democracia liberal que, como ha demostrado la crisis económica, da prioridad a las exigencias del capital internacional –“los mercados”– antes que a las formas del Estado social.

Es precisamente en las dificultades de la lucha contra la debilidad histórica del Estado como instrumento de inclusión, contra el peculiar capitalismo rentista y su fracaso para insertar a Venezuela de manera competitiva en el capitalismo mundial y de la modernidad como individualización laica y garantista –que, por otro lado, va a permitir que el “afecto” y la “emoción” políticas se conviertan en una posibilidad de reconstrucción social– donde podemos identificar una somera lista de los fantasmas familiares venezolanos que vienen con la propia historia del país.

El primer fantasma que conviene analizar con prudencia es el del *hiperliderazgo*. Esta fortaleza presidencial –que, al igual que la pretensión de construir un partido hegemónico, está ligada a los problemas de consolidación democrática, unidos a su vez a la marginación económica de los países periféricos, a la opresión imperial y a la tarea entorpecedora de las oligarquías– es propia de países con escaso cemento social, con un débil sistema de partidos democráticos y con amplios porcentajes de exclusión. Un liderazgo fuerte e incuestionable es la única respuesta que permite situar una alternativa frente a lo que llamamos la selectividad estratégica del Estado (Jessop, 2008). La burguesía, los poderes del antiguo régimen, los sectores dominantes, tienen a su favor el aparato del Estado y lo utilizan para generar vacíos de poder alternativo e insistir en la fragmentación y la división popular. Pero terminar ahí el análisis sería un error. Ese liderazgo, en el cual se deposita tanta responsabilidad, también viene con problemas. El “hiperliderazgo” desactiva, en última instancia, una participación popular que puede confiar excesivamente en las capacidades heroicas del liderazgo. De la misma manera, sectores importantes del gobierno transforman esa necesaria dirección en un liderazgo acomodaticio, en una tutela permanente que rebaja su responsabilidad y su iniciativa. Cada cesión de responsabilidad de ministros, viceministros, directores, diputados, cuadros políticos, periodistas, profesores, voceros, supone cargar de mayor responsabilidad al líder, que va acumulando grados cada vez mayores de información que apenas podrá compartir con nadie. Al final, ese liderazgo acomodaticio infantiliza a todos los que se le subordinan, pues actúa como una invitación permanente a rehusar el debate –todo aquello que genere ruido y que, en esa lógica, haga de esa persona con iniciativa alguien incómodo– y a asumir posiciones pasivas que, a lo sumo, sirvan como correas de transmisión de las órdenes emanadas de arriba. En última instancia, este actuar debilita el liderazgo. Se da la paradoja de que el “hiperliderazgo” debilita finalmente al liderazgo. Si, como señalamos, la tarea de dirección del proceso revolucionario venezolano ha reclamado hasta ahora el liderazgo del presidente Chávez, esta lógica pasiva –que en algunos ámbitos adquiere tintes de un rancio culto a la personalidad, contra el que ha advertido repetidas veces el propio presidente–, termina por volverse contra ese mismo liderazgo tan relevante para mantener unidas las fuerzas que apoyan el proceso de cambio en Venezuela.

El segundo gran fantasma tiene que ver con la centralización –que sólo simplificando puede confundirse con la necesaria planificación–. Es otra cara de la misma debilidad de la sociedad civil. La descentralización se usó en Venezuela, quizá con la salvedad de la elección directa a alcaldes –introducida en 1989–, para que entrara de facto el neoliberalismo más duro. Fue la cara oculta del Estado mínimo. Pero en un mundo complejo, en un mundo donde cada sector de la sociedad funciona como una isla, la descentralización es un requisito de eficiencia. ¿Es posible lograr fórmulas eficientes de descentralización sin debilitar la unidad estatal? El principio de subsidiariedad podría otorgar luz al respecto –como hemos señalado, que lo que pueda hacer la parte inferior no lo haga la superior, pero que eso no signifique en ningún caso dejación de responsabilidad del nivel superior–. La estructura política basada en comunas genera una estructura en red contradictoria con las tendencias centralizadoras. Son un juego de suma cero donde lo que

gane una lo pierde la otra. La apuesta por la organización comunal es un antídoto frente a ese veneno.

El tercer fantasma es el clientelismo partidista, que no puede ser de un signo ayer y hoy de otro, esto es, ayer ligado a Acción Democrática y hoy al PSUV¹⁵. El clientelismo partidista funge como una alternativa de articulación política allá donde las estructuras administrativas del Estado son débiles, pero siempre es inferior, en términos de emancipación, a las formas impersonales que tienen detrás el socialismo e, incluso, fórmulas liberales como la división de poderes, el imperio de la ley o los derechos civiles, políticos, sociales e identitarios. Es el caldo de cultivo de la llamada “boliburguesía”. Más allá de que el clientelismo siempre roba la dignidad de aquellas personas a las que se clienteliza –de manera que hay una contradicción entre la mayor moralidad que reclama el socialismo y esa usurpación de respeto que supone entregar recursos públicos a cambio de cualquier apoyo partidista–, la clientelización es la forma liberal de la confusión entre el partido y el Estado propia de los regímenes de corte soviético.

El cuarto fantasma es el de la mentalidad rentista. Esta mentalidad, reproducida en el imaginario popular –entre otros sitios, en las telenovelas– es la que lleva a pensar que en Venezuela todo el mundo es rico –o que un golpe de suerte puede hacer llegar la abundancia– y que no hará falta trabajar para vivir. La existencia de petróleo ha llevado incluso a plantear un “socialismo rentista” (Rodríguez y Müller)¹⁶, un país que se lee a sí mismo como escogido por dios –o por la naturaleza– dotado de todo tipo de riquezas –petróleo, agua, biodiversidad, mares y montañas– y que, como pueblo escogido, está por encima de las necesidades que señala la maldición bíblica del trabajo. Pero como no bastan las riquezas naturales para que el bienestar sea un hecho, viene la exigencia al gobierno para otorgar soluciones que ayuden a llevar adelante el propio proyecto individual de vida.

El quinto fantasma es un fantasma conjunto, el de la corrupción y el de la ineficiencia, dos caras de un mismo problema. Conviene aclarar que es la ineficiencia la que permite la corrupción, es decir, la falta de controles claros, “eficientes”, que no hagan gratuito e incluso necesario el uso de caminos alternativos a los legales. La lucha contra la corrupción y la ineficiencia articuló la campaña de 1998 que ganó Chávez, pero aún está esperando una respuesta. La corrupción arrasa con recursos que son de todos y los pone al servicio privilegiado de nuevas castas que hacen del lujo y de la ostentación un objetivo –una vez más, una desinencia de la cultura política venezolana–. Como señalábamos, las nomenclaturas de los regímenes de partido único en el Este de Europa tardaron al menos una generación en construirse. Sin embargo, ya hay una nueva nomenclatura en Venezuela, construida en muy poco tiempo, anclada en este fantasma de la historia. El lujo que ostenta ese grupo de nuevos ricos, debilita la moral popular y mata la mística que necesitan los procesos de cambio radical basados en el modelo populista. La ausencia de castigo para el robo de cuello blanco que se ejerce en el ámbito del Estado cuestiona la intención de trabajar para las mayorías, de manera que, cada día que pasa, lastra más el vuelo revolucionario.

Detrás de este asunto hay un elemento central ya señalado: la debilidad de lo público y, por consiguiente, del Estado. Venezuela fue capitán general y no virreinato, armó su Estado al mismo tiempo que hacía del petróleo su recurso por

excelencia y construyó, desde el Estado, una estructura política clientelar que no terminó de imponer una regulación impersonal basada en el imperio de la ley y la rendición de cuentas (Coronil, 2002). “Caminos verdes”, “resolver”, “cuánto hay para esto”, son frases asentadas en la cultura política de Venezuela. Al igual que los cambios ministeriales dentro de un mismo gobierno, que hacen que cuando cambia el ministro cambie todo el personal que trabaja en la administración, o que hace que cuadros pasen de labores ministeriales al ostracismo y la desaparición de la vida política, desperdiciando así recursos esenciales para la marcha del país e invitando a hacer del paso por la administración una oportunidad de negocio –la rotación ministerial en el chavismo es más alta que en cualquier otro momento de la historia reciente venezolana, de manera que el ministro promedio, entre 1999 y 2008, duró 16 meses en el cargo. Con la enfermedad de Chávez, este promedio aumentó– (Monaldi *et al.*, 2010).

...es la ineficiencia la que permite la corrupción, es decir, la falta de controles claros, “eficientes”, que no hagan gratuito e incluso necesario el uso de caminos alternativos a los legales

El sexto fantasma tiene que ver con el militarismo. La Quinta República ha solventado buena parte de este problema con la unión cívico-militar –basta ver el comportamiento del ejército hondureño durante el golpe contra el presidente Zelaya en 2009 para advertir el diferente comportamiento del ejército en Venezuela–, pero se necesitan formas más audaces que avancen en la definición de cuál es el papel que le corresponde al ejército en una democracia socialista. Cierto es que en una estructura estatal débil el ejército permite una eficiencia desconocida en otros ámbitos de la administración, pero, al tiempo, otorga a este sector armado un poder excesivo que genera una tutela del sistema político que actúa como una permanente espada de Damocles.

El último fantasma que aletea en el país es el de la violencia. Son varios los factores que operan: la voluntad del gobierno de frenar la represión policial contra los sectores populares –que alienta indirectamente al delito al ser menos peligroso–, la infiltración del paramilitarismo desde la frontera con Colombia, la cultura consumista, la dejación de responsabilidades de las alcaldías en manos de la oposición, los problemas de inserción laboral en las zonas deprimidas y las dificultades propias del urbanismo venezolano en los barrios, donde la tarea del Estado es muy complicada.

Venezuela, al igual que América Latina, necesita reinventar el Estado, y una organización política que quiera protagonizar la revolución debe plantearse este reto. En otros momentos de la historia la discusión acerca del Estado pudo ser otra¹⁷. Ahora mismo, incluso para dismantlar el Estado, haría falta un Estado fuerte. La creación de una suerte de Estado transnacional, al que se le han entregado tareas de las que antes se ocupaban los niveles nacionales del Estado, obligan a reconstrucciones políticas fuertes nacionales y regionales. Es la razón del ALBA, de la UNASUR o de la CELAC. Vivimos en un mundo globalizado donde tanto

la presión de las empresas transnacionales y el peso de la competencia como la existencia de una sociedad *inter-nacional* obliga a jugar con esas reglas. Y eso obliga a no dejar fuera de la discusión casi ningún problema. ¿Dónde se decide si Irán es un modelo válido para las mujeres de Venezuela? ¿Quién articula la estrategia petrolera en la OPEP? ¿Quién decide qué productos importar y exportar? ¿Dónde se establece la validez de lo que se comercializa? ¿Cómo será el signo de las votaciones en Naciones Unidas? ¿Quién decide el tipo de cambio de la moneda? ¿Cómo se reparten las riquezas nacionales? ¿En nombre de qué principio se puede cambiar el Estado y su territorio? Igualmente, en el corto plazo, un Estado que quiera salir de su condición de aparato de dominación al servicio de intereses particulares tiene que reorganizar su estructura para que, de entrada, empiece a cumplir los artículos sociales de las *constituciones* que han servido para legitimar sin redistribución a las sociedades capitalistas. La construcción de un servicio civil de carrera con funcionarios especializados, que sustente de manera permanente al Estado, es un requisito urgente, con todos los problemas al respecto que se abren. Y otro tanto ocurre con la formación de un sistema tributario, de una red educativa, de una red sanitaria, de una red de seguridad social y de una red de participación de justicia que se conviertan en referentes institucionales claros que formen parte del horizonte de expectativas de los ciudadanos y ciudadanas. Al menos hasta que se tenga certeza de cómo pueden suministrarse esos bienes públicos de una manera más emancipadora que a través del Estado —es lo que venimos denominando como condición experimental del Estado comunal—. Nuevas preguntas deberán entonces ser respondidas: ¿Es necesaria la afiliación para formar parte de esas redes? ¿Cómo es la relación entre la organización unificada y el aparato del Estado? ¿Decide la política exterior el canciller o el responsable de asuntos internacionales del partido? ¿Cuáles son los derechos de los que no tienen carnet? ¿Tiene que ser militante del partido hegemónico el Defensor del Pueblo? ¿Y el responsable de la televisión pública? ¿Y los embajadores? ¿Y los profesores de las universidades públicas? ¿No debieran estar también ahí los militares? ¿Y los que publiquen en las editoriales del Estado? ¿Sólo van a aparecer en los medios de comunicación públicos personas con carnet del partido asociada al partido de la revolución? ¿Va a existir una religión privilegiada ligada al proceso? Demasiadas preguntas como para ahorrarlas en una forma tan clásica como un partido político. Una vez más, el horizonte del Estado comunal tiene toda esa tarea pendiente.

La solución no puede ser más dosis de estos mismos fantasmas, sino lograr de alguna forma lo que Hegel llamaba *aufhebung*, es decir, esa superación dialéctica que permite acceder a un estadio superior. Es cierto que en la síntesis siempre va a haber parte de la tesis y de la antítesis, pero la solución no puede ser más de lo mismo. De ahí que la construcción de un Estado comunal pertenezca, pese a su condición experimental, a lo más desafiante del proceso bolivariano. Es la propia debilidad histórica del Estado, del capitalismo y de la modernidad en Venezuela lo que permite una reinención social, política y económica que autoricen a ir más allá de los cuellos de botella que la crisis integral del modelo neoliberal, la debacle medioambiental y la incertidumbre geopolítica ponen ante nuestros ojos. Nunca el continente latinoamericano ha tenido tanta responsabilidad histórica. La vinculación con la Pachamama, la salida por encima de las soluciones neolibe-

rales, la recuperación de una identidad regional signada por el antiimperialismo, las reservas energéticas, hídricas y biológicas son todos factores que señalan a América Latina como un referente de solución. Y esa responsabilidad histórica ha sido posible gracias al absoluto convencimiento, que ha acompañado al proceso bolivariano y al presidente Chávez desde el comienzo, de que su suerte no era sino la misma suerte del continente entero.

5. ¿A dónde va la revolución bolivariana?

Desde posiciones de apoyo crítico al proceso bolivariano se han señalado algunos de los problemas que enfrenta el futuro próximo de Venezuela:

Más allá de la dolorosa e insondable tragedia humana referida a la situación de salud de Chávez, se viene pasando lamentablemente por alto una situación que oscila entre el drama y la tragedia política, situación que repercutirá más temprano que tarde en lo profundo de las estructuras políticas e ideológicas que soportan la revolución bolivariana: «El socialismo que no llega, el socialismo que no arranca, el socialismo que parece ser puro “mareo retórico”, la “transición indefinida”, el “capitalismo de Estado” que llaman “socialismo del siglo XXI”, el reformismo-desarrollismo como “nacionalismo burgués”, el “cesarismo” que se diluye en el llamado hiper-liderazgo, la “adequidad” descarnada disfrazada de pumarrosa, el oportunismo más ramplón vociferando consignas del Che, etc., etc.». [...] Y es que la ausencia de discusión es un componente esencial de una derechización paralela al curso de la salud del Presidente que se refuerza con fenómenos como el burocratismo, el dogmatismo, el sectarismo, el doctrinarismo, por más que se disfrazen de consignas, banderas, iconografías o simbologías revolucionarias (Biardeau, 2013).

Es indudable que Venezuela entera, tanto el gobierno, la oposición y el pueblo están en *shock* desde la cadena nacional del 8 de diciembre, donde Chávez anunciaba que entraba de nuevo en quirófano. Siendo altas las probabilidades de que se quedara en la mesa de operaciones, pedía que, en las probables elecciones que debieran convocarse, se eligiera a Nicolás Maduro como referente para guiar el bolivarianismo. Pero en ningún modo eso significa un vacío de poder en Venezuela.

Es un escenario probable la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Toda la actividad política actual tiene como horizonte el anuncio del presidente Chávez de que no podrá hacerse cargo del gobierno –donde el rasgo central sería la preparación del candidato Maduro para la responsabilidad de la presidencia–. En ese escenario, no es complicado pensar algunas similitudes con el caso cubano: Chávez, como Fidel Castro, pasa a la segunda fila política pero mantiene intacta su capacidad moral de influir en el proceso. Su figura sería la de “referente moral y político”. En ese escenario, la victoria de Maduro parece garantizada –por la positiva gestión gubernamental, por el efecto “trasvase” de Chávez y por la desarticulación de la oposición–. La política a desarrollar vendría marcada por el *Plan Socialista 2013-2019* –ya refrendado en las elecciones de octubre de 2012– que sería el programa con el que se presentara el candidato Maduro y que orientaría al nuevo gobierno.

Como tendencia, puede afirmarse que se mantendrá idéntica la relación con Cuba, ya que la colaboración con la isla es esencial para el mantenimiento del proceso bolivariano –tanto en términos de logística como en apoyo concreto en campos como la sanidad–. Los dos países obtienen beneficios de la colaboración,

se necesitan mutuamente, y cambiar las coordenadas de la relación les traería a cualquiera de los dos más perjuicios que beneficios. De igual manera se mantendrá desde Venezuela el mismo impulso de integración latinoamericana, correspondiéndole a Ecuador compensar la falta de empuje político que significa la ausencia del presidente Chávez. La integración latinoamericana es esencial para el mantenimiento del proceso bolivariano, por lo que mantener esas relaciones es vital para Venezuela. Esa integración va a tener tres patas: la ALBA, donde se va a mantener la parte más ideológica de la integración; el MERCOSUR, donde el bloque va a ganar en peso político por la incorporación de Venezuela y, al tiempo, va a incrementar las relaciones comerciales netamente capitalistas entre Brasil y Venezuela; la UNASUR y la CELAC, donde se va a proseguir, sobre todo en la primera, el camino de creciente importancia en la región, sustituyendo a la OEA, que cada vez va a ser menos relevante.

El consejo de gobierno, el consejo de ministros, la división de poderes, la asamblea, los órganos de coordinación política, son elementos que se van a reforzar en sus aspectos formales

Es importante señalar un factor que es válido tanto para asuntos nacionales como para internacionales: la ausencia de Chávez de la primera línea política obliga a una mayor institucionalización de las relaciones políticas. En lo nacional, los órganos de gobierno van a tener una creciente importancia, produciéndose una mayor institucionalización en Venezuela, que no ha existido durante la última década. El consejo de gobierno, el consejo de ministros, la división de poderes, la asamblea, los órganos de coordinación política, son elementos que se van a reforzar en sus aspectos formales. Esa ausencia de la primera línea política de una figura tan carismática como Chávez, obliga a un mayor diálogo, que igualmente va a afectar al PSUV, que tiene que dejar de ser una mera máquina electoral para pasar a ser un partido político con mayor capacidad de deliberación y de decisión –más aún, como vimos, al obtener en las elecciones menos votos que la lista de la oposición–. Puede haber una tensión para profundizar en la revolución, pero al faltar la figura de “consenso dentro del disenso” que significaba Chávez –es decir, la figura capaz de conseguir apoyo popular para cualquier cambio–, es muy probable que se moderen los comportamientos. El riesgo, por tanto, de una derechización de la revolución bolivariana es un hecho, lo que llevará a una mayor movilización de los sectores más concientizados de la misma¹⁸.

Este riesgo de moderación afecta también al ámbito internacional. La relación con Colombia, después de una fase cercana al conflicto bélico con Uribe, está a día de hoy, solventada. Colombia tiene interés en un escenario de cooperación. Igualmente, el gobierno venezolano no puede abrir innecesariamente el frente internacional. El presidente Santos recibe, por su parte, presiones de los empresarios colombianos para mantener la buena relación, ya que de ésta depende el buen resultado económico del intercambio.

La relación de Venezuela con Estados Unidos también puede pensarse proclive a la mejoría. Obama, en su segundo y último mandato, no tiene mucho interés en

tranquilizar a los halcones entregándose a una mayor belicosidad con Venezuela –además de tener más urgentes prioridades en oriente medio–. Con China existen muy fuertes vínculos económicos que hacen que el próspero país asiático tenga mucho interés en que Venezuela marche en paz. Los préstamos de China a Venezuela están por cobrarse, de manera que la continuidad es la política obvia en su caso para tener garantizado el suministro de crudo que Venezuela le adeuda. De la misma manera, es bastante probable que Venezuela disminuya su apoyo al gobierno de Siria, ya que el nuevo gobierno pagaría un precio alto a cambio de casi nada por mantener el apoyo a Bashar Al Assad. Es de prever, por tanto, que en las relaciones internacionales, Venezuela mantenga intactos sus vínculos con los países latinoamericanos, que mantenga intactos sus vínculos con los países aliados tanto en términos geoestratégicos –China, Rusia, Bielorusia, Irán– como en términos de unidad latinoamericana –Cuba, países de la ALBA, UNASUR, etc.–, al tiempo que modere las relaciones de conflicto con otros países, especialmente con Estados Unidos. Para entender este escenario, hay que entender que las fuerzas armadas no van a manifestar un gran interés en entrar en combate de ninguna manera. Si bien es cierto que los militares han experimentado una democratización, eso no implica que, en ausencia de una figura con la fuerza de Chávez, estén dispuestos a grandes sacrificios.

El escenario próximo va a estar guiado por la tendencia al decisionismo o dirigismo desde el gobierno y la necesidad de encontrar bases de apoyo a las decisiones, que no se van a trasladar automáticamente desde el apoyo de Chávez al apoyo a Maduro. Ese apoyo se va a expresar en las elecciones próximas, pero ahí va a acabar, y le corresponderá al nuevo gobierno dar respuesta a las exigencias ciudadanas sin la legitimidad que tiene el presidente Chávez. Para compensar esa falta de carisma, no queda más remedio que consensuar los apoyos, poniendo en marcha una política más dialogada con los diferentes sectores del chavismo –sectores más ideologizados, sindicatos, diferentes sectores militares, diferentes familias del chavismo, sectores territoriales, etc.–. Si el nuevo gobierno de Maduro no pusiera en marcha esa política –parecida a la que Chávez puso en marcha entre 1994 y 1998–, la pérdida de apoyos prepararía el regreso de la oposición. El escenario para el próximo año es un escenario de continuidad en todos los ámbitos. Sólo los errores del nuevo gobierno permitirían entender escenarios de inestabilidad y el regreso de la oposición. Curiosamente, es en la consolidación de posiciones más avanzadas –profundización del Estado comunal, autogestión obrera, mayor control social y auditorías populares, nacionalizaciones, controles más estrictos de la política cambiaria que benefician a sectores importadores y son responsables de la inflación, incremento del debate popular, apertura de los medios públicos al debate– donde la suerte del proceso bolivariano parece poder afianzarse.

Los problemas de salud del presidente Chávez amenazan la profundización del escenario socialista al ser él mismo su principal valedor. ¿Vencerá la deriva burocrática? ¿Frenará la llamada “derecha endógena” el proceso? ¿Creerá la división al interior de la revolución? ¿Se cargarán sobre las espaldas de los sectores populares las dificultades económicas que amenazan en el horizonte? Como hemos señalado, los escenarios más probables son de continuidad. Pero el futuro se construye, y los errores forman parte de él. Si la revolución bolivariana ha madu-

rado lo suficiente como para enfrentar un golpe tan radical como la desaparición de Chávez de la centralidad política, es algo que no puede responderse *a priori*. En aquella intervención en el consejo de ministros del 20 de octubre, donde Chávez quiso marcar el nuevo rumbo, fue inclemente:

Creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no existían. Creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos y seguiremos haciéndolo. Creo que tenemos unos nuevos códigos. Creo que tenemos una nueva arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución. Tenemos leyes de consejos comunales, leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desarrollo; pero no le hacemos caso a ninguna de esas leyes; nosotros, que somos los primeros responsables de su cumplimiento. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo.

¿No es esto un señalamiento de las enormes dificultades que aún esperan al proceso bolivariano?

Bibliografía

- Álvarez, Víctor 2011 *La industrialización socialista* (Caracas: Centro Internacional Miranda).
- Azzellini, Dario 2010 *Partizipation, Arbeiterkontrolle und die Commune Bewegungen und soziale Transformation am Beispiel Venezuela* (Hamburgo: VSA Verlags).
- Barrera, Alberto y Marcano, Cristina 2006 *Hugo Chávez sin uniforme. Una historia personal* (Caracas: Destino).
- Biardeau, Javier 2013 "El drama político de Chávez: el llamado «golpe de timón» en el alto gobierno. ¿Socialismo en construcción o nomenclatura en construcción", en *Aporrea*, sección "Ideología".
- Capriles, Axel 2008 *La picardía del venezolano o el triunfo del tío conejo* (Caracas: Taurus).
- Coronil, Fernando 2002 *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Corrales, Javier y Penfold, Michael 2012 *Un dragón en el trópico* (Venezuela: Hoja del Norte/Brooking Institution).
- Elizalde, Rosa María y Bãez, Luis 2006 *Chávez nuestro* (Caracas: Abril).
- Jessop, Bob 2008 *State power* (Cambridge: Polity Press).
- Laclau, Ernesto 2005 *La razón populista* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- López Maya, Margarita y Lander, Luis 2009 "El socialismo *rentista* de Venezuela ante la caída de los precios petroleros internacionales" en *Cuaderno del Cendes* N° 71, agosto. Disponible en: <www.scielo.org.ve>.
- Monaldi, F.; Amelia; Obuchi R.; Penfold M. 2010 "Political Institutions and Policymaking in Venezuela: The Rise and Collapse of Political Cooperation" en Stein, Tommasi, Spiller, Scartascini (eds.) *Policymaking in Latinamerica: How Politics Shpaes Policies* (Wahington/Cambridge: BID).
- Naim, Moisés 2013 "¿Qué pasará en Venezuela?" en *El País*, 5 de enero, sección "Internacional".

- Panizza, Francisco (comp.) 2009 *El populismo como espejo de la democracia* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Rey, Juan Carlos 1998 "Ideología y cultura política: el caso del populismo latinoamericano" en *Problemas sociopolíticos de América Latina* (Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas-UCV).
- Rodríguez, Simón 2004 *Inventamos o erramos*, en *Monte Ávila* (Caracas: MPP). Disponible en línea.
- Rodríguez Araque, Alí y Müller Rojas, Alberto 2009 "Ideas socioeconómicas y políticas para debatir el socialismo venezolano", en López Maya, Margarita (ed.) *Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI* (Caracas: Alfa).
- Roemer, John (comp.) 1989 *El marxismo: una perspectiva analítica* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Villegas Poljak, Ernesto 2009 *Abril golpe adentro* (Caracas: Galac).
- Weisbrot, Mark; Ray, Rebecca y Sandoval, Luis 2009 *El gobierno de Chávez después de 10 años: Evolución de la economía e indicadores sociales* (Washington: CEPR).

Notas

1 A algunas de estas ideas, en especial las que tienen que ver con la reconstrucción estatal en Venezuela, las he desarrollado en "Venezuela: la revolución mágica" publicado en la compilación de Mabel Thwaites titulada *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas*, editada en 2012 en Santiago de Chile por el CLACSO y la Universidad ARCIS.

2 Para la intervención de Chávez en el Consejo de Ministros, luego difundida con el título "Golpe de timón", véase *Aporrea* <www.aporrea.org>.

3 En el programa estrella matutino de la televisión pública, el presidente Chávez recuperaba en julio de 2011 una discusión del verano de 2009. En un encuentro con intelectuales afines al proceso bolivariano se evaluó críticamente la década de gobierno transcurrida. La pregunta que más relevancia mediática alcanzó tuvo que ver con lo que se definió como "hiperliderazgo", la falta de iniciativa social y política motivada por la figura omnímoda del presidente. En ese programa, Chávez, convaldecía, reconoció la necesidad de ir hacia liderazgos más plurales, al tiempo que reconoció como un error haber cargado en exceso sobre su persona el peso del proceso. Puede verse la discusión en *Aporrea*. Hay un análisis sobre este hecho, de uno de los biógrafos de Chávez, en la sección de actualidad.

4 Se debe a Fernando Coronil la expresión "Estado mágico". Con ella se pretende retratar a un Estado construido al mismo tiempo que la renta petrolera —no como dialéctica entre el capital y el trabajo— y responsable de la imagen colectiva de país rico y ajeno a las dificultades del resto del mundo. La condición petrolera del Estado, que no necesitaría extraer la plusvalía de manera interna al obtenerla de fuera, habría generado una "mentalidad rentista" particular,

que se sobrepondría por encima de la lógica laboral y que constituiría una característica peculiar de Venezuela. Igualmente, esa debilidad estatal, junto a la influencia colonial española, habría generado una estructura social donde lo clientelar y familiar tendría más fuerza que lo legal. El último gobierno de Carlos Andrés Pérez habría sido el gran articulador de esa mentalidad colectiva que, finalmente, no le toleraría la subida del precio de la gasolina y del transporte en 1989, respondiendo a las políticas de ajuste exigidas por el FMI —origen del llamado "Caracazo"—. Véase del autor *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*, impreso en Caracas por Nueva Sociedad en 2002. Para los rasgos arquetípicos de la cultura política venezolana y su oscilación entre el pícaro —que hace de lo público el lugar de nadie en vez del lugar de todos—, y el héroe —tan presente en la mitología venezolana y que se actualiza constantemente en sus telenovelas— que "desprecia el empeño metódico y constante" y prefiere el golpe de suerte o la apropiación a través del "asalto y la conquista [...] del saqueo y el botín", véase *La picardía del venezolano o el triunfo del tío conejo*, de Axel Capriles, impreso en Caracas por Taurus en 2008.

5 Para la evolución ideológica de Chávez, léase *Chávez nuestro*, de Rosa María Elizalde y Luis Báez, impreso en 2006 en Caracas por Abril. Para una visión crítica, *Hugo Chávez sin uniforme. Una historia personal*, de Alberto Barrera y Cristina Marcano, 2006, Caracas, editorial Destino.

6 La frase completa reza así: "¿Dónde iremos a buscar modelos? La América Española es original. Original han de ser sus Instituciones y su Gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos". Léase del autor *Inventamos o erramos*.

7 Véase “El «pequeño Chávez» que agita a los franceses: Jean-Luc Mélenchon” en *El tiempo* (Caracas) 5 de marzo de 2013, disponible en <m.eltiempo.com>. Igualmente, de Eduardo Febbro, “Tomé mis modelos de América Latina”, en *Página 12* (Buenos Aires: La Página) 3 de abril de 2012.

8 Véase “Valoraciones sociales”, en *Sic* (Caracas: Centro Gunmlla) N° 738, septiembre-octubre, 2011.

9 Véanse las estadísticas en <www.ine.gov.ve>. Para los datos de la CEPAL, véase el informe “Panorama social de América Latina 2011”, en <www.eclac.cl>.

10 El plan se puede consultar en <www.mre.gov.ve>.

11 En términos generales, el apoyo al presidente Chávez tiene necesariamente que ver con el desempeño redistribuidor de la renta. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías Eljuri, afirmarí en abril de 2012 que el gasto social de Venezuela entre 1999 y 2012 habría ascendido a 772 mil millones de dólares, pasando del 36% durante la IV República al 60% bajo el gobierno de aquél.

12 Para consultar la encuesta completa: <www.gjsxxi.org>.

13 Es ya un lugar común citar a Ernesto Laclau, en *La razón populista*, como la reflexión que reubica las críticas oficiales –mediáticas y académicas– a la gestión catalogada como “populista”. Véase igualmente la compilación de Francisco Panizza titulada *El populismo como espejo de la democracia*, editada en Buenos Aires en 2009 por el Fondo de Cultura Económica.

14 El socialismo de mercado y la renta básica universal son dos de las principales reclamaciones del marxismo analítico que tienen lugar en la Venezuela bolivariana. Véase la compilación de John Roemer de 1989 titulada *El marxismo: una perspectiva analítica*, editada en México por el Fondo de Cultura Económica.

15 La creación del Partido Socialista Unificado de Venezuela fue lanzada por el presidente Chávez el 15 de diciembre de 2006 y a partir de ese momen-

to fue la discusión política por excelencia. Esto no hace sino más urgente el debate sobre los instrumentos políticos que acompañan los cambios en América Latina, aún más cuando la voluntad de crearlo y su anuncio precedieron a las definiciones claras de objetivos, ideología, estructura, etc. Una vez más, en el continente ha primado la ecuación *acción-reflexión-acción* –frente a *reflexión-acción-reflexión*–, si bien en este caso la relevancia del instrumento obliga a acelerar el esfuerzo teórico.

16 También puede consultarse “El socialismo *rentista* de Venezuela ante la caída de los precios petroleros internacionales”, de Margarita López Maya y Luis Lander, en *Cuaderno del Cendes* N° 71, agosto de 2011. Disponible en <www.scielo.org.ve>.

17 La idea *zapatista* de Holloway de *cambiar el mundo sin tomar el poder* nació en un momento de desesperanza respecto de las posibilidades electorales en América Latina. Aunque el fondo teórico es la consideración de cualquier Estado como un instrumento nacido de la dominación de clase, de alguna forma se hacía de la necesidad virtud: como no se podía alcanzar el poder estatal, ese poder se equiparaba con la más terrible de sus imágenes. Pero la derrota de partidos como el PRI en México, y las victorias de Hugo Chávez, Evo Morales y Lula da Silva, entre otros, han hecho a parte de ese debate obsoleta. Sigue siendo válida, sin embargo, su advertencia ante los problemas estructurales de los partidos y el Estado. Para la izquierda, el Estado, como cualquier poder, no puede verse sino como táctica. Además, aprendiendo de los errores del pasado, no hay que desdeñar aquello que decía Canetti de que uno termina pareciéndose demasiado a aquello a lo que combate.

18 El grupo “Marea” parece perfilarse como el sector con mayor capacidad de referenciar al sector más exigente del proceso bolivariano. Véase el documento de este colectivo “De la incertidumbre a la sucesión”, en *Radio Nacional de Venezuela* (Caracas) <www.rnv.gov.ve>.

Estado, disputa electoral y construcción de poder popular en la Venezuela bolivariana

HERNÁN OUVIÑA

Doctor en Ciencias Sociales. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO “El Estado en América Latina: continuidades y rupturas”.

Resumen

En ocasión de las elecciones presidenciales recientes en Venezuela, el autor analiza la experiencia del Socialismo del Siglo XXI desde el paradigma que estudia la relación entre el Estado y la sociedad civil, en lo que encuentra tensiones irresueltas entre el conservadurismo, el estatismo, el presidencialismo, la concentración del poder, la corrupción, el consumismo, el paternalismo, el despilfarro de los recursos fiscales, el burocratismo y la ineficiencia gubernamental, varios derivados de la dependencia de la renta petrolera, y las políticas públicas participativas, los consejos comunales, la democracia popular y la politización del proletariado. Desde una perspectiva gramsciana que concibe las contradicciones y ambivalencias del poder del Estado, lo que le permite resolver las dificultades del vanguardismo elitista y del antiestatismo, lo propone en tanto que un lugar estratégico de la lucha de clases, no exento de problemas

Abstract

In the context of presidential elections in Venezuela, the author analyses the experience of Socialism in the twenty-first century from the point of view of the paradigm that studies the relationship between state and the civil society, where he finds unresolved tensions between conservatism, statism, presidentialism, concentration of power, corruption, consumerism, paternalism, the squandering of taxpayer's resources, bureaucratism, governmental inefficiency, several derivatives of the oil revenue and participatory public policies, communal councils, popular democracy and proletariat politisation. From a Gramscian perspective, which views contradiction and ambivalence in state power, it is possible to solve the challenges of an elitist vanguardism and anti-statism. This idea is advanced from the view of a strategic vantage point in class struggle, not free from problems caused by a failure to become socialised, the persistence of the capitalist matrix and

por no haberse socializado, por la persistencia de la matriz capitalista y por la pervivencia de tendencias regresivas en el chavismo. Además, menciona la cuestión del autoritarismo en el PSUV, refiere a las misiones, en particular a la Misión Agrovenezuela, al igual que al Plan Guayana Socialista y al Plan Nacional Socialista “Simón Bolívar” 2013-2019, y señala la necesidad de sopesar las interpretaciones de los procesos de viraje hacia la izquierda en una propuesta de socialismo latinoamericano.

the endurance of Chavism’s regressive tendencies. In addition, he tackles the question of authoritarianism within the Venezuelan United Socialist Party (Partido Socialista Unido de Venezuela), deals with missions, in particular Agrovenezuela Mission (Misión Agrovenezuela), and also the Socialist Guayana Plan (Plan Guayana Socialista) and the 2013-2019 “Simón Bolívar” National Socialist Plan (Plan Nacional Socialista “Simón Bolívar” 2013-2019), and points out the need to include interpretations of left-wing processes in the context of a proposal for Latin American socialism.

Palabras clave

Socialismo del Siglo XXI, chavismo, poder popular.

Key words

Socialismo del Siglo XXI, chavismo, poder popular.

Cómo citar este artículo

Ouviña, Hernán 2013 “Estado, disputa electoral y construcción de poder popular en la Venezuela bolivariana” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 33, mayo.

Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica, una verdadera crisis gramsciana, una crisis histórica. Lo que está muriendo se niega a morir y todavía no termina de morir, y lo que está naciendo tampoco ha terminado de nacer. [...] Estamos en el epicentro de la crisis. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica hasta que no muera definitivamente la IV República y nazca plenamente la quinta, la República socialista y bolivariana de Venezuela
Hugo Chávez

El surgimiento en el cono sur de gobiernos caracterizados como “posneoliberales”, cuyas expresiones más radicales pueden visualizarse en las experiencias contradictorias de Venezuela, Bolivia y Ecuador, más allá de los matices entre ellos, sin duda le ha dado a la discusión en torno a la llamada “transición al socialismo” un carácter acuciante y de primer orden, no sólo en el plano académico, sino fundamentalmente en el político-práctico. Es así como en el seno de las ciencias sociales comienza a despuntar la necesidad de problematizar y actualizar el clásico debate alrededor de una práctica socialista, que tenga como horizonte la consolidación tanto de una democracia sustantiva y radical como de proyectos

viables de desmercantilización de la vida social, y que en conjunto remiten a la creación de una institucionalidad plebeya y de nuevo tipo. Dicho proyecto no sólo involucra la necesidad de tornar la gestión pública más permeable a las demandas populares emergentes de la sociedad civil, sino también de retirar de los sectores dominantes el monopolio de la definición de la agenda estatal, avanzando hacia una superación del capitalismo como modo de organización de la vida en sociedad. Asimismo, esto ha implicado la necesidad, por parte de un conjunto de autores enmarcados en el pensamiento latinoamericano contrahegemónico, de revisitar críticamente y poner en cuestión los conceptos de Estado y transición predominantes en las ciencias sociales, y anclados por lo general en una definición acotada a la noción de régimen político o incluso a una acepción minimalista, que visualiza este proceso a partir de un conjunto de mecanismos procedimentales que fijan las pautas de reclutamiento y/o renovación del personal estatal.

En función de esta caracterización, el propósito del presente artículo es analizar la coyuntura vivida en Venezuela en las recientes elecciones nacionales, donde resultó reelecto Hugo Chávez Frías como presidente, así como la dinámica subterránea de construcción de poder popular que se teje a nivel cotidiano desde una perspectiva emancipatoria y de largo aliento. Una de las hipótesis que subyace a nuestra caracterización del proceso en curso en dicho país es que este tipo de coyunturas, de confrontación electoral en el marco de la institucionalidad estatal y el orden democrático, devienen disputas estratégicas al momento de dirimir o bien modificar la relación de fuerzas sociales y políticas que se expresa en el proyecto político bolivariano, aunque ello no implica desvalorizar la apuesta por constituir un sujeto contrahegemónico con vocación anticapitalista. No obstante, como intentaremos demostrar, esta inédita propuesta de edificación de un Socialismo del Siglo XXI no está exenta de contradicciones y ambivalencias.

Las elecciones como disputa estratégica

Domingo 7 de octubre de 2012. El reloj indica las tres de la mañana en punto y el “toque de diana” resuena en los parlantes diseminados por la Coordinadora “Simón Bolívar” en los sitios claves de la parroquia *23 de Enero*, uno de los barrios más combativos de toda Caracas. La música militar, emblema de los momentos más neurálgicos del proceso bolivariano, se entremezcla en los parlantes con la voz del presidente y candidato Hugo Chávez Frías, que arenga insistentemente a la población: “¡Los que quieran Patria, vengan conmigo!”. La escena se repite en casi todo el territorio nacional y tiene como objetivo despertar a las y los votantes bien temprano, para definir el resultado de las elecciones lo antes posible y poder dar paso a la celebración popular en las calles. Algunos jóvenes suben a las terrazas para lanzar cohetes al cielo y reafirmar este doble propósito: despabilar a la vecindad y anticipar la fiesta que parece ser ya un hecho.

“Vine a votar temprano por mi comandante y por la revolución”, expresa, con una sonrisa dibujada en el rostro, un vecino en la puerta de la escuela que oficia de centro de votación. Como él, miles de personas decidieron asistir a primera hora, o incluso antes, a las mesas electorales. “Antes de las doce del mediodía tenemos que haber metido seis millones de votos, para que a la derecha no le den

más ganas de querer imponer otro presidente”, agrega el hombre exhibiendo su dedo meñique pintado de azul como símbolo de haber ya votado. Después de semanas enteras de intensa campaña y movilización en las calles, el 7-O por fin llegó. Y lo que se ha jugado en ese día fue mucho más que una contienda electoral en torno a dos candidatos; aunque nadie negaría que, sin Chávez, esta disputa política resultaría inexplicable. Como supo indicar uno de los tantos jóvenes integrantes del Comando de Campaña “Carabobo”, en esta coyuntura “se definió la continuidad o no de un proceso de cambio que ya lleva 14 años, y al que bautizamos socialismo del siglo XXI”. Una verdadera batalla que, a nuestro modo de ver, condiciona la correlación de fuerzas no sólo en Venezuela, sino en el conjunto del continente americano, incluyendo, por supuesto, a Estados Unidos, que en el marco de la actual crisis económica mundial se presenta como una potencia imperial en relativa decadencia.

Esta caracterización del momento *estratégico* de confrontación entre bloques socio-políticos no resulta exagerada, ya que por primera vez la oposición unificada ha logrado superar cierto umbral de votos que le ha permitido en dicha jornada, a diferencia de otras elecciones, y exceptuando el *referéndum* de 2007 para reformar la Constitución, disputar seriamente la contienda. Para ello, ha tenido que resignificar sus propuestas de corte neoliberal bajo un discurso de tipo “progresista”. En efecto, luego de fracasar en sus diversas tentativas golpistas –recordemos, entre otras, la intentona del 11 de abril de 2002 impulsada por la entidad patronal Fedecámaras y los medios de comunicación hegemónicos, o el truncado boicot petrolero fogueado meses más tarde por los sectores opositores al chavismo afincados en Petróleos de Venezuela S.A.–, la derecha ha optado por aprender la lección: a Chávez hay que ganarle en las urnas y, si es preciso, también asumir buena parte de las políticas públicas implementadas como favorables bajo su mandato.

De ahí que el candidato de la oposición unificada, Henrique Capriles Radonski, se haya visto obligado a reconocer durante su campaña que, en caso de ser electo, se comprometería a darle continuidad a las *misiones*, que son uno de los principales puntales del proyecto bolivariano. Surgidas como estructuras paralelas a la *administración pública* tradicional, con el propósito de dinamizar políticas sociales que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más desfavorecida de Venezuela –no solamente en el plano socio-económico, sino sobre todo desde una perspectiva *integral* que apunta a la recuperación de la dignidad–, hoy constituyen el basamento material, y también simbólico-cultural, que ha echado sólidas raíces para que los sectores populares mejoren sustancialmente su nivel de vida. Por nombrar sólo a algunas de las más de treinta: desde las misiones Robinson y Sucre, que erradicaron el analfabetismo e hicieron que el país ocupe uno de los primeros lugares en matriculación de estudiantes universitarios; pasando por la Misión Barrio Adentro, que ha construido miles de centros de salud a lo largo y ancho del territorio nacional, donde médicos cubanos y venezolanos, junto con la propia población, edifican espacios de salud integral comunitaria; hasta la Misión Vivienda, que está desplegando actualmente uno de los planes de vivienda más importantes de América Latina, con la participación activa en todo el proceso de quienes luego morarán en ellas. A esta altura, y agotados los variados ensayos de golpe, las clases dominantes tienen muy claro que los sectores popu-

lares han asumido como propio este crisol de políticas públicas participativas, y las defenderán fervientemente frente a cualquier intento de recorte o supresión orquestado por la derecha. Este es, sin duda, uno de los mayores logros del llamado Socialismo del Siglo XXI: trastocar y potenciar la conciencia de cientos de miles de personas que, luego de décadas de pobreza extrema y marginación política, devinieron sujetos políticos protagonistas de su destino.

La politización de la sociedad civil y la ruptura de modelos

“Aquí lo más importante no es que hoy gane Chávez, sino que la gente se ha metido en la política, y la ha asumido como algo que es parte de su vida, cosa que antes, con el *puntofijismo*, no ocurría”. La frase sale de la boca de un referente barrial con muchos años de militancia, y que afirma estar comprometido a rajatabla con la llamada revolución bolivariana. Este proceso de *subjetivación política* es, quizás, el mayor reaseguro para garantizar la continuidad del proyecto de cambio que se evidencia en Venezuela. En efecto, tras la debacle de los partidos tradicionales de la Cuarta República (Acción Democrática y COPEI, responsables del “Pacto de Punto Fijo”, un acuerdo espurio que les permitió desde 1958 y hasta que llegó Chávez al gobierno, alternarse en el poder como garantes del orden) estamos en presencia de una de las sociedades más politizadas de América Latina, y ello se percibe no sólo caminando por las calles y dialogando con la población en parroquias y comunidades; también por el incremento de la participación ciudadana en las elecciones “no obligatorias” de octubre, que superó el 80% del total del padrón, uno de los más altos de toda la historia.

En un plano más general, podemos afirmar que “a contrapunto con algunas corrientes analíticas que sostienen que este proceso es estatalista –entendido como la colonización de la sociedad civil por parte del aparato de Estado–, las evidencias muestran que lo que está experimentando Venezuela es un ensanchamiento de la sociedad civil, tal como la entendía Gramsci”, es decir, una ampliación de aquellas instituciones y organismos que, gestados por “los diferentes grupos y clases –tanto las dominantes como las subalternas– se disputan la hegemonía” (Ruiz, 2012). Esta creciente politización ha permitido que se instalen como acervo cotidiano del lenguaje popular palabras como “burguesía”, “anti-imperialismo”, “poder popular” o “socialismo”. La empatía con algunos de estos significantes ha tenido que ser reconocida incluso por las encuestadoras más conservadoras. De acuerdo a una serie de estudios de opinión realizados, más del 60% de la población del país prefiere el socialismo al capitalismo. “Sí, eso es así”, nos dice la integrante de una televisora popular, aunque se encarga de aclararnos que “el nuestro es un socialismo a la venezolana, con la idiosincrasia y las tradiciones que nos caracterizan”.

He aquí una clave para entender esta revolución anómala, “pacífica pero armada”, como gustan decir con un dejo de ironía las y los militantes de base por estas tierras. Si en los años setenta Salvador Allende definió al proyecto chileno encarnado en la Unidad Popular como un “socialismo con empanadas y vino tinto”, a éste cabe sazonarlo con arepas y guayaba. Un socialismo único e irreplicable, que al igual que otros procesos revolucionarios pasados –pensemos, por caso, en el cataclismo teórico y político que generó la experiencia cubana en el seno del

marxismo más ortodoxo—, tiende a romper moldes y esquemas preconcebidos. Una vez más, resulta certera la consigna de José Carlos Mariátegui de que el marxismo no puede oficiar de itinerario preconcebido, sino más bien constituir una brújula que oriente nuestro análisis crítico y transformador —una brújula de las más importantes, aunque desde ya no la única—.

La especificidad del proceso venezolano también nos invita a escamotear su intrincado recorrido social y político al momento de concebir vías posibles de construcción del socialismo en el resto de *Nuestra América* profunda. Basta mencionar, a modo de ejemplo, dos rasgos distintivos del devenir histórico de Venezuela, casi imposibles de encontrar en otras latitudes del continente: por un lado, el estrecho vínculo tejido, en particular a partir de su inédita articulación el 13 de abril de 2002 en las calles y cuarteles para desbaratar el golpe de Estado, entre los sectores populares de izquierda y los militares bolivarianos de bajo y mediano rango en el ejército, algo impensable en países donde las dictaduras más sangrientas han sido una constante, como el caso de Argentina; por el otro, la particularidad de ser una sociedad rentista-petrolera que ha gestado y mantenido como *habitus* una subjetividad tan contradictoria como consumista, abonando a la dependencia mono-productiva y al paternalismo, así como a la corrupción endémica, al despilfarro de los recursos públicos y a la ineficiencia gubernamental, algo que debió ser reconocido en clave autocrítica por el propio Hugo Chávez durante su última campaña electoral.

Contradicciones y dilemas del Estado y el poder popular

Al igual que todo proceso transicional, este no está exento de paradojas y ambigüedades. Una de ellas remite al desequilibrio entre el liderazgo indiscutible, ratificado sin lugar a dudas en las últimas dos elecciones realizadas en 2012, de Hugo Chávez, y la edificación de instancias colectivas de toma de decisiones en materia de gestión pública. Los *consejos comunales*, creados en 2006 con el objetivo de que sean las propias comunidades y organizaciones de base quienes formulen e implementen de manera directa las políticas públicas y los proyectos orientados a dar respuestas a las necesidades concretas de los territorios, si bien constituyen una iniciativa genuina de democratización de los ámbitos locales de poder, no han logrado aún cobrar la envergadura debida ni involucrar al grueso de los sectores populares en el ejercicio cotidiano del autogobierno, por lo que todavía resulta un horizonte a conquistar la mentada “explosión del poder popular” pregonada por Chávez. Además de ciertas tendencias regresivas en curso, tales como “la pretendida cooptación de las instituciones a su autonomía, la escasez de recursos en relación con las necesidades y el poco estímulo productivo de estos espacios de organización comunal” (Evans, 2011), en numerosas ocasiones su creación ha partido de las propias estructuras estatales clásicas, fortaleciendo aún más los lazos verticales y el delegacionismo con respecto a quienes ocupan cargos representativos. En palabras de una integrante activa de los consejos, “lo que ha ocurrido es que ellos se han consolidado en aquellos lugares donde la organización popular y la tradición de lucha ha sido más fuerte”. Idéntica caracterización realiza una diputada del ala crítica del Partido Socialista Unido de Venezuela: “Coño, es que

tú puedes crear cientos de consejos, pero si no hay saldo organizativo y conciencia revolucionaria la cosa no sirve”, nos dice. Las limitaciones inherentes a este despliegue de democracia popular han sido advertidas incluso en el manifiesto emitido en el marco del Primer Encuentro Nacional de los Consejos Comunales realizado en 2007, en el que se denuncia “la peligrosa tendencia de asumir los consejos comunales como simples planificadores y ejecutores de obras, castrando su potencial real de constructor de la nueva sociedad y el nuevo estado comunal”.

En efecto, otro dilema en juego en el proceso bolivariano estriba en cuáles son las instancias o herramientas organizativas para incidir tanto en los ámbitos locales de ejercicio del poder popular como en las estructuras estatales de orden nacional. La mirada acerca de las potencialidades del ejercicio de la democracia interna en el seno del PSUV –creado en 2007 por iniciativa del presidente Chávez y con más de siete millones de afiliados, la mayoría de ellos no activos a nivel cotidiano– no es del todo positiva para muchos militantes de base que, con el trascorrir de los años, han visto naufragar o bloquearse innumerables proyectos de transformación radical impulsados desde abajo, como consecuencia de la desidia, la corrupción y el conservadurismo de aquellos que ocupan los puestos claves dentro del partido: “es que nosotros tenemos que luchar al interior de esta organización también con lo que llamamos la «derecha endógena»”, agrega sin medias tintas otro integrante del PSUV. Se refiere a los sectores más pragmáticos de esta organización, que en muchos casos son quienes delinear e imponen los rumbos del proceso político en curso en el país, tal como ha ocurrido en las elecciones del 16 de diciembre, cuando se definieron las candidaturas a gobernadores, y buena parte de la militancia se enteró de quiénes habían sido designados para estos cargos a través de la televisión o por las tapas de los diarios. Una vez más, como suelen denunciar los sectores más críticos del PSUV y de otros partidos, “primó el dedo por sobre la democracia protagónica”.

En función de estas y otras disyuntivas o limitaciones, la pregunta que queda flotando en el aire entonces es cómo combinar aquellos nuevos formatos de democracia de base y de organización popular –desde ya, no exentos de contradicciones– con la enorme concentración de poder que existe en las altas esferas de la administración pública, y en particular en la figura descollante de Hugo Chávez. En efecto, como ha hecho notar Javier Biarreau (2011), existe el peligro real de que el “momento de protagonismo popular” pierda centralidad ante “la exaltación de la legitimación carismático-personalista del poder”. Por ello, al debate en torno a la transición –o no– al socialismo, se le suma una transición casi tan importante como esta: la que deberá realizarse cuando el actual presidente ya no ostente su cargo. Su delicado estado de salud y los no pocos personajes polémicos que rodean al líder y despuntan como sus posibles sucesores hacen más urgente que nunca la discusión alrededor de este dilema.

Asimismo, y en sintonía con este liderazgo unívoco, otro interrogante que se presenta de cara al futuro inmediato es qué ocurrirá en caso de verse obligados a convocar a nuevas elecciones para elegir presidente. Muchos de los gobernadores, alcaldes y referentes públicos que adscriben al PSUV, algunos de ellos alineados con el proyecto bolivariano más por conveniencia coyuntural que por convicción estratégica, han sido avalados por Chávez, a pesar de lo cual no son bien vistos por el grueso del activismo de izquierda y por sectores cada vez más amplios de la población, que

cuestionan tanto la gestión que llevan a cabo en sus estados o regiones como el distanciamiento cada vez mayor con respecto a las bases. De ahí que resulte previsible conjeturar que el rotundo triunfo en las urnas tanto del 7 de octubre (en 22 de los 24 estados de toda Venezuela), como del 16 de diciembre (en 20 de 23 gobernaciones de estado, logrando a la vez mayoría parlamentaria en 22 de 23 consejos legislativos estadales), no se replicará necesariamente en futuras elecciones, lo que puede obligar al presidente Chávez –o a quienes posiblemente lo sucedan, como Nicolás Maduro–, a abrir canales de negociación y a generar concesiones a la oposición, a los efectos de garantizar la estabilidad de su mandato, o bien a dinamizar aún más un proceso de relevo de cuadros y referentes de base que ocupen este tipo de cargos. En caso de optar por la segunda alternativa –algo esperable, y por cierto cada vez más urgente, atendiendo al delicado estado de salud de Chávez–, se oxigenaría con creces la gestión pública estadual y municipal, con autoridades surgidas a partir de la voluntad popular, que permitirían ir gestando las condiciones necesarias para eliminar el hiato que existe actualmente entre la dirigencia política y el pueblo, desburocratizando así las estructuras estatales, aunque sin desatender en paralelo ciertos flagelos reales –como la violencia social, la constante inflación que desvaloriza los salarios y la corrupción endémica– sobre los que se monta la oposición para validar su discurso y erosionar el consenso del proceso bolivariano en marcha.

Un dato no menor en este sentido es el aumento del caudal de votos obtenido en las elecciones de octubre por parte de la oposición, que llegó a arañar los seis millones y medio del total de quienes asistieron a las urnas (44%, contra el 55% conseguido por Chávez). Estos simples guarismos no deberían leerse solamente como un “corrimiento a la derecha” de cientos de miles de personas. Entre otros factores, uno que no es menor y que incide es el natural desgaste y la parcial decepción de muchos venezolanos frente a una coalición política que ya lleva catorce años en el poder, y que aún no ha logrado resolver del todo problemas acuciantes de la sociedad, como la pobreza y el desempleo. Si bien en ambos casos las cifras han bajado notablemente desde que Chávez asumió la presidencia en 1998, reduciéndose a menos de la mitad en la actualidad, aún persisten como flagelos a desterrar –un 27% de pobreza y algo más del 7% de desocupación–. Lo mismo podría afirmarse con respecto a la corrupción y el burocratismo, que continúan contaminando sin respiro tanto a las viejas como a las nuevas estructuras estatales.

Este descontento se evidenció en la masiva concurrencia que tuvo la interna abierta donde resultó electo Capriles como candidato de la derecha. En esta ocasión, el bloque encabezado por Chávez erró el pronóstico al asegurar que el evento no iba a convocar siquiera a un millón de personas, cuando fueron más de tres millones quienes terminaron participando en él. En una sociedad donde la burguesía estrictamente hablando constituye una ínfima minoría, no cabe pensar que a ese número de personas lo componen sólo oligarcas y reaccionarios irrecuperables, menos aún si ampliamos la base social de apoyo a los seis millones y medio de votantes que optaron por el candidato opositor. Como supo expresar un compañero, con cruda sinceridad, en medio de los festejos en los alrededores del Palacio de Miraflores la misma noche del domingo 7 de octubre: “Mira pana, el problema mayor aquí no es la burguesía, que es bien pequeña, sino la inmensa cantidad de gente que no apoya ni quiere aún el socialismo. Cómo cuadramos

para que sean parte del proyecto bolivariano es uno de los desafíos mayores que tendremos que resolver a partir del 8 de octubre”.

Otro de los retos del proceso en curso en Venezuela estriba en la ya mencionada fragilidad sobre la que se sostiene: la ratificación o no del proyecto de transformación en cada acto eleccionario. El haber optado por una “revolución democrática” actualiza el viejo debate en torno a la vía violenta o pacífica de transición al socialismo y –tal como ya advertimos– convierte a ciertas instancias, como a la que remite a la disputa electoral, que tradicionalmente se concebía como algo meramente “táctico”, en un momento de confrontación estratégica. Esta inédita experiencia, al igual que la vivida en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, nos obliga a repensar el vínculo complejo y dialéctico entre la reforma y la revolución, teniendo como ámbito central de la lucha de clases a las propias instituciones estatales. Así, si en los años sesenta y setenta en América Latina –e incluso durante los ochenta, en el caso de Centroamérica– se impuso como modelo casi unívoco y pre-requisito para iniciar la transición al socialismo la revolución entendida como asalto armado al poder, hoy en día no cabe pensar en una matriz común ni, menos aún, en la dinámica insurreccional clásica como condición *sine qua non* para dar comienzo al proceso transicional.

De igual modo, podemos establecer otro rasgo distintivo del momento histórico que se vive actualmente en ciertas realidades de nuestro continente. Si en los años sesenta y setenta, para realizar reformas estructurales, era necesario hacer la revolución –claro está, concebida como “asalto” al poder estatal–, hoy en día pareciera ocurrir un proceso inverso: para realizar la revolución se torna ineludible impulsar reformas de estructura que permitan ir transformando, desde ahora, las condiciones de existencia de las clases subalternas. No obstante, este tipo de conquistas parciales, plasmadas en políticas públicas participativas asentadas en la resocialización de la renta petrolera, como es el caso de las misiones, deben estar orgánicamente vinculadas por el horizonte estratégico de trastocamiento y superación integral de la sociedad burguesa, estableciendo un nexo dialéctico entre dos dinámicas complementarias: por un lado, las múltiples luchas cotidianas que despliegan –en los respectivos territorios en disputa en el seno de la sociedad civil y del Estado en sentido estricto– los grupos y clases subalternas y, por el otro, la ligazón de éstas con el objetivo final de quebrantar y trascender el orden social dominante, de forma tal que cada una de esas resistencias devengan mecanismos de ruptura y focos de contrapoder que aporten al fortalecimiento de una visión estratégica global y reimpulsen al mismo tiempo aquellas exigencias y demandas parciales desde una perspectiva emancipatoria y contra-hegemónica de largo aliento. De lo contrario, existe el peligro real de que sean ellas subsumidas en la lógica de domesticación plebeya propia del sistema capitalista.

El hiato entre la retórica socialista y la persistencia de la matriz capitalista

Teniendo en cuenta los dilemas mencionados, al momento de sopesar los avances y logros del proceso de transición vivido en Venezuela cabe destacar como uno de sus rasgos la existencia de una cierta “inflación ideológica” por parte de

algunos núcleos del bolivarianismo, que se sostienen más en la retórica y el consignismo que en el análisis fidedigno y crítico de la realidad. La infinidad de carteles y marquesinas que publicitan productos “hechos en socialismo” en plazas, subterráneos y calles de Caracas no se condice con el porcentaje o peso real que este tipo de empresas de propiedad social y/o estatal tienen en el conjunto de la economía del país. De acuerdo con cifras del propio Banco Central de Venezuela, el producto bruto interno privado representa actualmente cerca del 70% del total de la economía.

Este es uno de los límites más evidentes de la ruptura cabal con respecto a la estructura capitalista tradicional, que a pesar de las para nada desdeñables expropiaciones y nacionalizaciones concretadas por el gobierno en la última década, en particular en ciertos sectores estratégicos tales como los de la electricidad, la siderurgia, la telefonía, las plantas cementeras y algunas cadenas de distribución de alimentos, no ha logrado aún revertir el predominio del capital como relación social de producción y consumo hegemónica en la sociedad venezolana. Sumado a esto, otro eje problemático que genera tensiones y desencuentros es la propuesta del control obrero de la producción. Hasta ahora, existe una única experiencia piloto de envergadura impulsada por el gobierno: el *Plan Guayana Socialista*. En esta región industrial se ha intentado fomentar el control obrero y la autogestión popular en la creación de un nuevo modelo productivo. El entusiasmo y la combatividad de las y los trabajadores ha debido enfrentarse en no pocas ocasiones con sectores políticos que, a pesar de autodenominarse “bolivarianos”, bloquean todo tipo de ejercicio de la democracia de base en las empresas e incluso en ámbitos laborales del Estado, a lo cual se suma la resistencia de las cúpulas sindicales que ven peligrar sus privilegios como casta burocrática. En este plano, como supo advertir Víctor Álvarez (2011),

también habrá que lidiar con los viejos dirigentes sindicales que ahora, en nombre de la revolución, harán lo posible por imponer un falso control obrero orientado a desplazar a los anteriores gerentes y presidentes por los miembros de las juntas directivas de los sindicatos, poniendo de manifiesto su afán por preservar sus espacios de poder que les ha permitido medrar de las empresas y entes del Estado a través de tráfico de influencias para realizar negocios e influir en las contrataciones públicas.

Si bien la recuperación de la plena potestad del petróleo con posterioridad al boicot escuálido de finales de 2002 y principios de 2003 le permitió al gobierno redistribuir esta abundante renta y asignar cuantiosos fondos para proyectos y sectores sociales hasta ese entonces postergados fundamentalmente a través de las misiones, queda el interrogante de cómo avanzar hacia una matriz económica que apunte a la diversificación productiva y garantice la soberanía alimentaria, haciendo real el tan mentado “desarrollo endógeno” que se viene pregonando desde hace años, y dotando por tanto de mayor protagonismo en este proyecto a los consejos de trabajadores y trabajadoras. Resulta clave entender que un proceso de transición al socialismo que tiene entre sus metas más prioritarias el mejorar las condiciones de vida simbólico-materiales de las clases subalternas no puede depender de los vaivenes del precio internacional de los hidrocarburos para la consecución de este objetivo –recordemos que alrededor del 90% de las exportaciones

de Venezuela se restringen al petróleo y a sus derivados como único producto—. Tampoco es un dato menor el hecho de que casi el 70% de los alimentos que se consumen en el país sean aún hoy importados.

queda el interrogante de cómo avanzar hacia una matriz económica que apunte a la diversificación productiva y garantice la soberanía alimentaria, haciendo real el tan mentado “desarrollo endógeno”

Para revertir esta tendencia, el gobierno ha impulsado –bajo la consigna de “sembrar petróleo”– la Misión *Agrovenezuela*, que incluye políticas públicas para la inversión en sectores estratégicos del campo, con el propósito de apuntar a la gestación de un modelo agrícola socialista que priorice a las cooperativas, los consejos comunales, los pequeños productores y las llamadas empresas de propiedad social comunitaria, y resulte compatible con el cuidado del ambiente. A modo de complemento, programas como el “todas las manos a la siembra” buscan fomentar la producción de alimentos nutritivos y con la utilización de abonos orgánicos en las 24 mil escuelas y liceos ubicados tanto en ciudades como en comunidades rurales de todo el país. El nuevo Plan Nacional Socialista “Simón Bolívar” 2013-2019, difundido en el marco de las recientes elecciones, también reconoce y refuerza esta necesidad de transformar y orientar la economía desde una óptica post-rentista y anticapitalista. No obstante, al igual que en otras ocasiones, el peligro latente es que la propuesta caiga en saco roto y no se concrete en la realidad, como ha ocurrido con varios proyectos e iniciativas de ley que terminaron siendo letra muerta que dormita en los cajones de los ministerios.

Algunas palabras para un final abierto

En función de esta inédita experiencia abierta en Venezuela es preciso trascender la rudimentaria concepción del Estado como bloque monolítico e instrumento al servicio exclusivo de las clases dominantes y avanzar hacia una caracterización más compleja, tanto de lo estatal como de la praxis política misma, aunque sin negar su carácter de clase. Por lo tanto, contradicción y asimetría constituyen dos elementos centrales de ciertas configuraciones estatales en América Latina como la que hemos intentado analizar, y que evitan caer tanto en una definición del Estado en tanto que “fortaleza enemiga a asaltar”, como en otra, de matriz populista, que lo concibe como una instancia totalmente virgen y a colonizar.

En este sentido, la estrategia gramsciana de “guerra de posiciones” aparece como una sugestiva metáfora para denominar a gran parte de las nuevas formas de intervención militante que han germinado en los últimos años en la región, logrando distanciarse de los formatos propios del “vanguardismo” elitista y de la vieja estrategia de “asalto” abrupto al poder. A partir de ella, la revolución pasa a ser entendida como un prolongado proceso de constitución de sujetos contrahegemó-

nicos, que si bien parten de una disputa multifacética en el seno de una sociedad civil cada vez más politizada, no desestiman las posibilidades de incidencia y participación en ciertas áreas del Estado –aunque sea desde una perspectiva antagonista que introduce “elementos de la nueva sociedad” en el ordenamiento jurídico e institucional– en pos de transformar sustancialmente sus estructuras simbólico-materiales y avanzar así hacia una democratización sustantiva no solamente del Estado, sino del conjunto de la vida social.

En suma, que se esté avanzando o no hacia el socialismo en Venezuela no es algo que pueda responderse *a priori* y desde la mera relectura o “aplicación” lineal de ciertos conceptos o estrategias revolucionarias formuladas por los clásicos de marxismo en otra realidad y tiempo histórico, sino en función de un diálogo fraterno y sin prejuicios con el complejo proyecto político bolivariano, el cual, como laboratorio de experimentación, se encuentra en permanente transformación y cambio, con indudables avances pero también con peligros y ambigüedades asediándolo en forma constante. Partiendo de este presupuesto, coincidimos con Juan Carlos Monedero en que “la reinención del socialismo es una tarea práctica que necesita orientaciones teóricas”, por lo que sopesar las interpretaciones que, en la última década, se han realizado en torno a este tipo de procesos en curso, resulta una tarea ineludible tanto de la intelectualidad crítica como de los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda.

Al fin y al cabo, como supo expresar Lelio Basso (1974), toda revolución

se topa en su curso con contradicciones que están ligadas a las contradicciones de la propia sociedad de la cual brota: en la capacidad de resolver esos problemas, de superar estas contradicciones, allí reside la grandeza de los dirigentes, la madurez de un movimiento obrero; por lo que podemos concluir diciendo que no existen soluciones que puedan ser consideradas válidas sobre el papel: la revolución es un movimiento, y el problema del movimiento, como el sofisma de Zenón, se resuelve caminando.

El desenlace de este intrincado proceso dependerá sin duda de la solidaridad activa de todos los pueblos del continente, pero sobre todo de que las masas cobren cada vez mayor centralidad en la profundización del poder popular y la edificación del socialismo en la República Bolivariana de Venezuela. Un socialismo que –tal como nos enseñó dos siglos atrás el maestro Simón Rodríguez– sí o sí deberá ser reinventado a lo largo y ancho de Nuestra América. Caso contrario, se volverá a errar indefectiblemente.

Bibliografía

- Alvarez, Víctor 2011 *Del Estado burocrático al Estado comunal: la transición al socialismo de la revolución bolivariana* (Caracas: Centro Internacional Miranda).
- Basso, Lelio 1974 “El uso de la legalidad en la transición al socialismo”, en VV.AA. *Acerca de la transición al socialismo* (Buenos Aires: Editorial Periferia).
- Biardeau, Javier 2011 “Democracia socialista. Desprenderse del «Marxismo soviético», construir pensamientos contra-hegemónicos”, en *COMUNA* (Caracas) N° 4, Centro Internacional Miranda.

- Evans, Micmer 2011 "Tensión legal e institucional entre el Estado y el poder popular: ¿Hacia el Estado comunal?", en *COMUNA* (Caracas) N°4, Centro Internacional Miranda.
- Monedero, Juan Carlos 2009 *Socialismos del siglo XXI. Utopías con los pies en el suelo* (Caracas: Centro Internacional Miranda).
- Ouviaña, Hernán 2011 "La transición socialista y el problema del poder estatal revisitados. Algunos interrogantes e hipótesis para el análisis de los procesos políticos contemporáneos en América Latina", ponencia presentada en el Primer Encuentro Internacional del Grupo de Trabajo "Estado en América Latina" (Lima: CLACSO).
- Primer Encuentro Nacional de Consejos Comunales 2007 "Manifiesto del Primer Encuentro Nacional de Consejos Comunales", disponible en *Aporrea*.
- Ruiz, Miguel 2012 *Crisis estatal y lucha de clases en la Venezuela contemporánea* (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar).
- Thwaites Rey, Mabel y Ouviaña, Hernán 2012 "La estatalidad latinoamericana revisitada. Reflexiones e hipótesis alrededor del problema del poder político y las transiciones" en Mabel Thwaites Rey (ed.) *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas* (Santiago de Chile: ARCIS/CLACSO).

Venezuela

Proceso sociopolítico y conflictividad social. Un balance de 2012

ARMANDO CHAGUACEDA NORIEGA

Máster en Ciencia Política por la Universidad de la Habana y doctor en Historia por la Universidad Veracruzana. Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, especializado en temas de sociología política latinoamericana (Cuba, Nicaragua y Venezuela). Miembro del colectivo editorial de la revista del OSAL.

MARCO ANTONIO PONCE

Coordinador General del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Profesor de Sociopolítica en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Investigador de conflictividad y protesta social en Venezuela. Coordinador del comité venezolano del OSAL.

Resumen

En este artículo, Armando Chaguaceda y Marco Antonio Ponce realizan un sobrevuelo por el actual contexto sociopolítico en Venezuela, marcado por la nueva victoria electoral de Hugo Chávez, pero también por las interrogantes abiertas tanto a raíz de su delicado estado de salud, como por el evidente crecimiento de los votos opositores. Haciendo énfasis en la relación existente entre la sociedad política chavista y las organizaciones de la sociedad civil, el objetivo de los autores es ofrecer un balance de los procesos y acontecimientos más relevantes durante 2012 en aquel país. Entre otros fenómenos, destacan la ratificación de la vía democrática electoral para definir el rumbo del país, así como el patente empoderamiento de la sociedad venezolana, una de las más politizadas de América Latina y del mundo. Así, Chaguaceda y Ponce hacen un recorrido por las fortalezas y certezas del proceso bolivariano, pero también por sus retos, contradicciones e incertidumbres.

Abstract

In this article, Armando Chaguaceda and Marco Antonio Ponce take a general view of the current sociopolitical context in Venezuela, marked by the recent electoral triumph of Hugo Chávez, but also by the doubts surrounding his delicate health, and the noticeable increase of opposition votes. The aim of the authors is to take stock of the most relevant processes and events in Venezuela in 2012, while they highlight the relationship between a Chavista political society and civil society organisations. Among other issues, they underscore the ratification of the democratic pathway through elections to decide the country's direction, and also the evident empowerment of the Venezuelan society, one of the most politicised in Latin America and the world. Thus, Chaguaceda and Ponce go over the strengths and weaknesses of the Bolivarian process, but also its challenges, contradictions and uncertainties.

Palabras clave

Chavismo, proceso electoral, sectores populares, revolución bolivariana.

Key words

Chavism, electoral process, popular sectors, Bolivarian revolution.

Cómo citar este artículo

Chaguaceda, Armando y Ponce, Marco Antonio 2013 "Venezuela: proceso sociopolítico y conflictividad social. Un balance de 2012" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 33, mayo.

El año 2012 finaliza como uno de los más convulsionados en la historia contemporánea y democrática de Venezuela, en un contexto nacional marcado por el incremento de la conflictividad social, pero también por la creciente politización de la sociedad y su presencia y participación en los asuntos públicos. Tal situación se enmarca en una gestión de gobierno liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con conocidas divisiones internas pero cohesionado de manera estratégica bajo la figura y legado del presidente Hugo Chávez, intentando consolidar el denominado Socialismo del Siglo XXI.

El análisis del caso venezolano no es simple: hechos y procesos políticos cargados de aciertos, contradicciones, incertidumbre y conflictos dificultan una caracterización precisa, clara y fácil de digerir. Por ello, es de suma relevancia combinar un análisis desde un enfoque contextual –con observación *in situ*– y los aportes de diversas fuentes primarias. En líneas generales –y a modo de introducción– en los próximos párrafos haremos un balance de los antecedentes y del contexto sociopolítico nacional, para posteriormente dar paso a la cobertura de los procesos y acontecimientos relevantes de los pasados doce meses, caracterizados por un ambiente electoral, de elecciones primarias para el candidato presidencial de la oposición y de candidaturas variadas –algunas repetidas, otras nuevas– para las regiones, así como de la designación de candidatos oficialistas para las candidaturas presidencial y regionales. También por la correlación de fuerzas y resultados electorales, visibilizándose el liderazgo del partido de gobierno y su intento de legitimación de un modelo de acusados rasgos centralizadores y militaristas a través del voto popular, a lo cual habría que añadir el impacto de la enfermedad del presidente Chávez en distintos ámbitos clave de las políticas del país. Todo ello sirve de trasfondo al incremento de la protesta social en demanda de mejores condiciones de vida y de rechazo a un modelo de gestión pública poco eficiente, situación acompañada por un aumento de la violencia sindical-laboral y los conflictos carcelarios.

Antecedentes y contexto de la actual coyuntura

Con el arribo al poder del presidente Hugo Chávez se abre un proceso de transición política, caracterizado por cambiantes asimetrías de poder, con viejas elites enfrentadas a grupos emergentes en la búsqueda de posiciones de ventaja dentro

de la política nacional, todo ello dentro de un marco institucional amenazado por las tensiones y las pretensiones hegemónicas de un nuevo proyecto político. En ese contexto, las demandas de participación y la expresión de ciudadanía impulsaron a numerosos actores sociopolíticos –como las organizaciones civiles y los movimientos sociales– a incidir más activamente en la esfera pública, estableciéndose una compleja relación entre la sociedad política chavista (funcionarios, burócratas) y las organizaciones bolivarianas de la sociedad civil (Ruiz, 2010: 69), así como entre el polo oficialista y sus adversarios¹.

Como síntoma de las indefiniciones programáticas y las urgencias prácticas de la oposición, algunas organizaciones civiles comenzaron, en fechas tempranas del proceso, a adquirir protagonismo de cara a la crisis de los desacreditados partidos, articulándose con estos dentro de la opositora Coordinadora Democrática frente a un gobierno y a un proyecto bolivarianos a los que percibieron como una amenaza común (Calcaño, 2009: 16-17). La incursión de las organizaciones civiles opositoras en la política se expresó a través de las *asambleas de ciudadanos* (2002-2003) compuestas por actores de clase media, las cuales a menudo compartieron las demandas –e idealizaciones– en torno a la participación, la democracia directa y el asambleísmo abrazadas por sectores populares identificados con el oficialismo (Calcaño, 2009: 86-105).

Estos últimos, por su parte, buscaron ocupar un mayor espacio social y político, así como aquel ampliar su base electoral, amparados en los recursos y estrategias del Estado, reuniéndose tanto organizaciones preexistentes (barriales, indígenas, grupos evangélicos y armados urbanos) como otras creadas por el gobierno y sus aliados coyunturales. Algunas de las primeras (incluidas varias integrantes del Foro por la Vida, como la internacionalmente reconocida organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos) participaron en la constituyente de 1999 –apoyando a los candidatos y propuestas chavistas o postulando personal propio²– y lograron incorporar aproximadamente un 50% de sus propuestas a la nueva Constitución. Otro fenómeno relevante fue la multiplicación de centrales sindicales, ante la crisis de una Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) comprometida por el apoyo de su dirigencia al golpe de 2002 y el paro petrolero ocurrido meses después. La aparición de una Fuerza Bolivariana de Trabajadores dentro de la CTV y la creación, en 2003, de la Unión Nacional de Trabajadores –claramente oficialista y enfrentada a la CTV– vino de la mano con otros conflictos, derivados de la división entre las diversas tendencias (Ruiz, 2010: 66-67), la injerencia gubernamental y la continuación de las acciones de sicariato (Uzcátegui, 2010: 119-138)³. Sin embargo, desde el inicio del proceso comenzó a constatarse una diferencia de ruta entre las propias organizaciones adscritas al proceso bolivariano, que se ha profundizado con el avance a la nueva fase de “Socialismo del Siglo XXI”. Algunas replican la lógica de “correas de transmisión” de corte leninista y la añeja tradición de subordinación a la hegemonía estatal-partidista en la política venezolana, como lo revela una organización juvenil del chavismo, el Frente “Francisco de Miranda”, caracterizada por una estructura militarizada, jerárquica y fuertemente ideologizada –verbigracia el adoctrinamiento recibido en Cuba– y oscilante en su membresía y misiones (Calcaño, 2009: 78-79). Frente

a esta tendencia, encontramos aquellas que muestran mayor apego al tema de su identidad y autonomía, como acontece con ciertas organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientales (Calcaño, 2009: 18-19), las cuales han salido de la alianza chavista sin por ello sumarse al carro opositor, asumiendo posiciones puntuales de confrontación a algunas de sus políticas y de reconocimiento a los avances sociales favorecidos por el gobierno. Así, la coexistencia entre un conjunto de movimientos y organizaciones sociales que defienden su derecho a incidir en las políticas públicas, preservar su autonomía y expandir los derechos ciudadanos, y actores sectoriales y/o comunitarios fuertemente vinculados y/o subordinados a las agendas estatales, permite comprender este universo asociativo como un campo donde confluyen las prácticas ciudadanizantes y la injerencia del régimen chavista, revelándolo como un terreno de lucha en la pugna entre la democratización y la desdemocratización.

Los adherentes al chavismo protestan en sus barrios cuando la calidad del empleo y los servicios dista mucho de las promesas del discurso oficial

Aunque la labor de expansión de los espacios de participación y de organización promovidas por el gobierno –al amparo de la renta petrolera– ha sido evidente en barrios populares, diversos actores de clase media, religiosos y organizaciones civiles mantienen una presencia y vitalidad apreciables, que los vincula al trabajo de los partidos y liderazgos de la oposición. Además, el descontento de segmentos de los sectores populares con los resultados de las políticas sociales del gobierno –en términos de sostenibilidad, cobertura y calidad– hace que la labor de cooptación y control de las estructuras políticas gubernamentales no sea total y definitiva. De hecho, si bien han aparecido actores colectivos directamente vinculados al proceso –organizaciones populares y sectoriales bolivarianas– se constata el protagonismo de actores –estudiantiles, comunitarios y civiles– ajenos al oficialismo o que asumen una posición abiertamente opositora, lo cual complejiza el campo político a partir de su incidencia relevante en dominios estatales y societales.

Durante los últimos años, los éxitos de la ciudadanía frente a intentos de fortalecer la hegemonía estatal –mediante propuestas como la *reforma constitucional* (2007) y la Ley de Universidades (2010)– se debieron, en buena medida, a movimientos ideológicamente plurales, protagonizados por actores sociales (estudiantes, trabajadores, vecinos, etc.) que se posicionaron en el espacio público concientizando a la sociedad sobre los riesgos que estos cambios tendrían en tanto merma de derechos y libertades de toda la ciudadanía⁴. Los adherentes al chavismo protestan en sus barrios cuando la calidad del empleo y los servicios dista mucho de las promesas del discurso oficial y cuestionan, así, la gestión de los alcaldes y gobernadores oficialistas. La oposición ha conseguido discretos avances en zonas y estratos poblacionales otrora dominados por el chavismo, consciente quizá de la necesidad de combinar su presencia institucional con una mayor acción colectiva –manifestaciones, foros, campañas públicas– desarrollada acorde a

la legalidad vigente, acciones dirigidas a aislar las tendencias golpistas que habitan en la alianza opositora, presionar pacíficamente al oficialismo y ampliar la base social del voto opositor.

La contienda electoral

Iniciamos el análisis de la situación venezolana en el año que recién concluye con el tema electoral, toda vez que la dinámica político partidista y la lucha por el poder abarcaron todos los aspectos de la vida nacional. En 2012 vimos un país en constante campaña, donde se realizaron tres procesos electorales de importancia, desde febrero hasta las últimas semanas de diciembre: elecciones primarias de oposición para elegir al candidato presidencial y los candidatos para las regiones, elecciones presidenciales y elecciones regionales.

El 12 de febrero, el grupo opuesto al gobierno, articulado en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), realizó elecciones primarias para elegir representantes para las elecciones presidenciales y regionales. La contienda logró convocar a una gran cantidad de electores, ya que su relevancia se basa en la designación del futuro contendedor del presidente Hugo Chávez, dispuesto a la reelección. Según datos oficiales de la Comisión Electoral de Primarias⁵ hubo unos 3.040.449 votos escrutados, cifra inédita para este tipo de contiendas, dejando clara la imagen politizada y participativa de los venezolanos y sobre todo la importancia que se le da al poder presidencial en la política doméstica. El resultado de estas elecciones internas dio como ganador a Henrique Capriles –del partido Primero Justicia, de tendencia centro derecha– con 1.900.528 votos, un 64,22% del total.

El 7 de octubre, Venezuela vivió uno de los episodios más emblemáticos e importantes de su historia contemporánea y democrática. El aspecto más significativo fue la apuesta a la reelección por parte del presidente Chávez –en el poder desde 1999–, quien se presentó a la contienda con serios problemas de salud que ponían en tela de juicio su capacidad para alcanzar el triunfo e incluso la posibilidad de ejercer funciones al quedar electo. Por otra parte, la oposición venezolana vio, por primera vez en mucho tiempo, una posibilidad real para alcanzar el poder, asumiendo como un aspecto positivo la reagrupación de sus fuerzas bajo el liderazgo de la MUD y su candidato Henrique Capriles y el visible descontento social con la gestión pública –más allá de las firmes lealtades políticas– demostrado a través del incremento de la protesta social, entre otros aspectos.

Chávez gana las elecciones presidenciales de manera clara y contundente, con diez puntos por encima de su más cercano contendedor, Henrique Capriles, amparado en su indiscutible liderazgo, carisma y apoyo popular, y con el uso masivo de los recursos y estructuras del Estado para la realización de la campaña. Destaca en ese sentido el apoyo dado por todos los poderes públicos e instituciones del Estado, siendo un ejemplo claro la postura de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que institucionalmente se declararon revolucionarias y chavistas⁷ –a despecho de lo estipulado en la Constitución–, haciendo uso de una de las expresiones proselitistas más populares utilizadas por el PSUV.

Cuadro 1 - Resultado electoral del 7 de octubre de 2012

Candidato	Votos	Porcentaje
Hugo Chávez	8.191.132	55,07%
Henrique Capriles	6.591.304	44,31%

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional Electoral.

El triunfo de Chávez se presenta en un escenario con dos aspectos políticos que resultan decisivos para el estudio de la correlación de fuerzas en la lucha por el poder en Venezuela. El primero es la existencia, en el seno del PSUV, de dos líneas claras que se disputan el poder: un sector civil liderado por el vicepresidente Nicolás Maduro, de corte más ideológico y partidista, y un sector militar liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de corte pragmático y empresarial. El segundo aspecto tiene que ver con la reagrupación de las fuerzas opositoras bajo la conducción de la MUD y con un candidato joven y de una imagen alejada de los partidos tradicionales, la cual sin embargo no ha estado exenta de divisiones entre, fundamentalmente, los defensores de competir y avanzar dentro de la institucionalidad político-electoral –como sería el caso del propio Capriles– y aquellos que optan por incrementar las acciones de protesta civil ante lo que consideran una notoria parcialidad y asimetría de fuerza, favorable al oficialismo, en el marco institucional.

El 16 de diciembre se realizaron las elecciones regionales, caracterizadas por una marcada abstención de la población votante, un 46,16% según datos oficiales del CNE. Los resultados consolidan al PSUV como el principal partido de Venezuela al obtener 20 de las 23 gobernaciones en disputa, quedando en evidencia el apoyo de amplios sectores populares a la figura y legado de su comandante-presidente, la crisis generada en un sector de la oposición por la derrota en las presidenciales y el uso de los recursos e instituciones del Estado para apoyar a los candidatos del gobierno.

Llama la atención el triunfo de once candidatos ex miembros de las Fuerzas Armadas –incluidos varios de los pasados ministros de defensa–, lo que equivale a más del 50% de las 20 gobernaciones obtenidas por el partido de gobierno⁸. Resulta interesante observar cómo los militares llegan ahora al poder por la vía del voto popular, ofreciendo un nuevo matiz al proceso revolucionario, que hasta el momento tenía una fuerte presencia de militares en la gestión pública, pero no encumbrados mediante la elección popular. En ese sentido, es paradójico ver a los militares llevando las riendas del país, siendo Venezuela un ícono de los gobiernos progresistas de la región, recordando que muchos de estos gobiernos se han caracterizado por promover el ascenso y empoderamiento de los sectores populares oprimidos históricamente por las elites empresariales, políticas y militares.

Los resultados de octubre y diciembre nos dejan algunos aspectos que pueden ser útiles para proyectar un análisis sobre la realidad política de Venezuela en el corto plazo: 1) se reafirma el modelo chavista como la esperanza de los sectores populares para obtener mejor calidad de vida; 2) crecen paulatinamente los votos opositores, con un candidato consolidado y un bloque parlamentario importante; 3) se ratifica la vía democrática electoral para definir el rumbo del país; 4) se mantiene

una sociedad politizada y empoderada en constante movimiento; 5) se produce la legitimación por la vía electoral de candidaturas con fuerte influencia militar; 6) se reafirma la figura de Hugo Chávez como un factor indispensable para la cohesión del chavismo y su permanencia en el poder, en términos físicos o simbólicos.

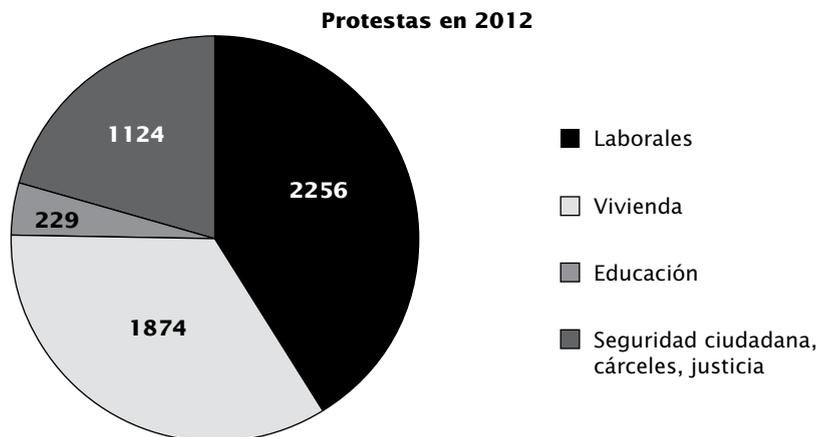
2012: incremento de la conflictividad social

El de 2012 fue el año con más protestas pacíficas durante la gestión del presidente Chávez, con unas 5 mil 483 según datos reportados por el OVCS9. De estas protestas, más del 70% fueron para exigir reivindicaciones de orden social. Así, la protesta popular se inscribe como un denominador común en la vida de muchos venezolanos y su número se incrementa cada año.

La construcción de una cultura de la protesta, como expresión de participación y exigencia de derechos, se consolida progresivamente. Las personas afectas al gobierno –principalmente en los estratos E y D– son los que más protestan en Venezuela, aunque el fenómeno permea todos los espacios y estratos sociales. Una característica clave de las protestas populares es exigir el cumplimiento de promesas y reivindicaciones, rechazando la magra labor de funcionarios públicos e instituciones, pero excluyendo al presidente Chávez de cualquier responsabilidad.

Esta expresión popular se puede leer desde tres registros: *a)* una sociedad que sabe que tiene derechos y los exige de manera pacífica; *b)* una gestión pública deficiente, que a pesar de los grandes ingresos resultantes de la venta del petróleo, no responde de manera efectiva y oportuna a las demandas de las comunidades; *c)* personas que más protestan identificadas con el partido de gobierno, rechazando una gestión pública poco eficiente y al mismo tiempo demostrando su simpatía por el presidente Chávez.

Cuadro 1 - Resultado electoral del 7 de octubre de 2012



Cuadro 3 - Frecuencia de protestas en los meses de 2011 y 2012

Meses	2011	2012
Enero	408	291
Febrero	429	396
Marzo	433	436
Abril	389	399
Mayo	408	454
Junio	456	466
Julio	493	482
Agosto	502	498
Septiembre	497	506
Octubre	489	521
Noviembre	478	532
Diciembre	356	502
Total	5338	5483

Fuente: OVCS.

Protestas laborales

En este balance revisaremos las principales demandas de comunidades y colectivos organizados, relacionados con aspectos laborales y de vivienda: se seleccionan estos dos derechos por ser emblemáticos en la satisfacción de los derechos sociales, ejes de las movilizaciones populares y prioritarios en la gestión de gobierno. Por otra parte, haremos mención a la crisis carcelaria que vive el país, y que en 2012 dejó en evidencia las debilidades que en esta materia tiene el Estado venezolano. Por ello fue declarada una situación de emergencia por decreto presidencial.

Se destaca la conflictividad en el entorno laboral, que en este periodo reportó 2 mil 256 protestas –equivalentes al 41% de todas las registradas a nivel nacional–, tensiones que poseen como origen debilidades estructurales en las relaciones laborales. En los últimos años las principales industrias del país han sido nacionalizadas, de manera que el sector público ha pasado a ser el principal empleador de los venezolanos, por ello la mayor cantidad de reclamos laborales van dirigidos al Estado. Por otra parte, en el mes de mayo se aprobó una nueva ley del trabajo denominada Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)¹⁰, que trajo un incremento de la protesta de trabajadores y gremios. La ley fue promulgada de manera inconsulta con los sectores afectados, provocando la inconformidad de muchos actores (centrales sindicales, sindicatos de diversa filiación ideológica –incluidos los oficialistas–, patronos privados agrupados en diversos entes) y, como sostienen especialistas en derecho y organizaciones especializadas en el tema, posee visos de inconstitucionalidad. Del impacto de este nuevo marco legal se destaca lo siguiente:

1. La vuelta a la retroactividad fue bien recibida por la masa laboral, pero en el día a día los trabajadores no han notado grandes cambios.
2. El aumento de la conflictividad laboral se expresa en protestas con un alto índice de requerimiento de mejoras laborales, de resolución de la situación de los tercerizados y de exigencias por la discusión de los contratos colectivos –algunos de los cuales tienen varios años vencidos, especialmente en el sector público– y se observan protestas de los tercerizados reclamando y exigiendo su inclusión en la nómina, como dice la nueva ley.
3. El sector privado se va adecuando poco a poco a la nueva ley y, cuando hay conflictividad, generalmente se resuelve a corto plazo.
4. En el sector público, autor de la nueva ley, es irónicamente donde más se manifiestan los conflictos y las inconformidades.

Cuadro 4 - Protestas laborales en 2012

Enero	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
96	164	189	177	184	191	199	225	201	204	217	209

Fuente: OVCS.

El incremento de los conflictos laborales –que representan el 41% de la conflictividad venezolana– coincide con el aumento de la violencia sindical, principalmente en el sector de la construcción. En los primeros nueve meses de 2012 se reportó el asesinato de al menos 65 sindicalistas-trabajadores, existiendo un alto grado de impunidad. No se observan investigaciones de los crímenes ni voluntad del Estado y de las partes involucradas en eliminar las causas, por ejemplo, del paralelismo sindical y la venta de cupos de empleo¹¹.

Cuadro 5 - Sindicalistas-trabajadores asesinados por mes hasta septiembre de 2012

Enero	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
13	3	5	5	10	12	7	7	3	65	217	209

Fuente: OVCS.

Protestas por una vivienda digna

En 2012 los conflictos relacionados con el derecho a la vivienda alcanzaron las mil 874 protestas, más de 30% del total general, consolidándose junto a los derechos laborales como los principales derechos sociales demandados por el pueblo venezolano y evidenciando la falta de garantía de este derecho en la sociedad venezolana. Las principales tensiones fueron escenificadas por las personas que quedaron damnificadas por las lluvias de los últimos dos años, y que fueron ubicadas por el gobierno nacional en refugios y hoteles de manera temporal.

Cuadro 6 - Protestas por vivienda en 2012

Enero	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
109	127	135	119	130	152	158	167	192	197	201	187

Fuente: OVCS.

La problemática de la vivienda en Venezuela fue abordada por el gobierno nacional en mayo de 2011, catalogándola como un problema nacional: en ese mes lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que dentro de sus planes contempla la construcción de 2 millones de unidades habitacionales en seis años. Sin embargo, durante todo 2012 los damnificados se mantuvieron protestando de manera pacífica para exigir respuestas inmediatas. Datos oficiales estiman un déficit habitacional de 2 millones de casas, y en la GMVV se han construido unas 346 mil 798 en 20 meses¹². Estas cifras permiten inferir que las protestas por las viviendas en Venezuela continuarán en los próximos meses.

Conflictos y violencia carcelaria

El sector penitenciario venezolano reportó altos niveles de conflictividad durante los doce meses estudiados. Las personas privadas de libertad y sus familiares realizaron más de 500 protestas en todo el territorio nacional, lo que equivale a más de una protesta diaria en todo el país. Con una marcada radicalización de las formas de protesta, se registraron huelgas de hambre y sangre, además de retenciones de familiares y funcionarios penitenciarios por parte de los internos. Las protestas se fundamentaron en la exigencia del plan gubernamental de humanización de las cárceles, celeridad procesal, traslados, condiciones dignas de reclusión y respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades del nuevo Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP).

En los últimos dos años se han presentado grandes conflictos armados entre los internos y funcionarios militares, exponiendo una gran red de corrupción y violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano. Un ejemplo de ello es que en las cárceles venezolanas las personas privadas de libertad poseen armas de alto calibre, desde pistolas automáticas hasta fusiles de asalto, propios de los cuerpos militares o policiales. Esta situación tuvo como respuesta gubernamental el Decreto presidencial 9,228, publicado en la *Gaceta Oficial* N° 40.03113, que establece una emergencia de infraestructura carcelaria en todo el país. A pesar de este decreto y de la voluntad política de solventar la situación, la violencia y las condiciones poco dignas de reclusión continúan en las cárceles venezolanas.

Conclusión

El balance de los procesos electorales vividos por el país en los últimos 14 años testimonia la persistencia de un país dividido, con aproximadamente un 55% afecto al oficialismo y poco más del 44% identificado con la oposición. En ese escenario, tanto cualquier intento de establecer un control político total por parte

del oficialismo como una resistencia opositora que desborde los cauces institucionales –o que sea percibida/manipulada por el primero como amenaza a su autoridad– serán motivos de graves convulsiones políticas. Sin embargo, en ausencia de una opción totalitaria y de los debidos contrapesos opositores, algunas interpretaciones sugieren que la situación pudiera avanzar a la configuración de un esquema de gobernabilidad autoritario con algunas similitudes al establecido bajo el régimen postrevolucionario mexicano: un presidencialismo fuerte montado sobre una formación partidista dominante en fusión con el aparato estatal; una oposición acotada y, en cierta medida, testimonial; una relativa libertad de expresión y organización, siempre que no amenace el orden vigente; unidos estos factores a mecanismos de cooptación extensos y formas de represión selectivas y bien planificadas para los sectores contrarios al oficialismo.

...la protesta social, incrementada en los últimos años, pondría en aprietos a cualquier intento de avance autoritario

Sería este un esquema donde se mantienen ciertas formalidades y espacios democráticos –elecciones, prensa y oposición– siempre que no se altere el *status quo* dominante; y donde permanecen abiertas las oportunidades para hacer buenos negocios –siempre y cuando al empresariado no se le ocurra meterse en el mundo de la política– y expresar el disenso popular –siempre que no atente contra los centros neurálgicos del poder institucionalizado–, lo cual hablaría de un orden fundado sobre una anatomía democrática –fundante y formal– pero que operaría con una fisiología tendencialmente autoritaria. Aunque en el caso venezolano el factor militar, unido a la influencia ideológica y geopolítica cubanas, podrían sugerir una mayor radicalización del proceso político, no cabe duda de que en este nuevo escenario se habrían alterado las reglas del juego y correlaciones de fuerzas que han conformado, de 1998 a la fecha y en un perenne dinamismo, la realidad sociopolítica venezolana. Y la protesta social, incrementada en los últimos años, pondría en aprietos a cualquier intento de avance autoritario, al menos en los espacios sociales.

La superación de la polarización actual y la construcción de nuevas referencias sociopolíticas en Venezuela es una precondition para la real superación de la crisis del modelo de desarrollo basado en la democracia delegativa y la renta petrolera, del cual el chavismo es una continuación y no una ruptura, porque bajo la polarización vigente no hay cabal autonomía para las iniciativas sociales y populares y porque será la transformación cultural y societal inducida por los diversos actores político-institucionales y, sobre todo, por los movimientos y organizaciones sociales –mediante la difusión de valores y prácticas democráticas y contrahegemónicas– las que modificarán estructuralmente los escenarios vigentes.

Bibliografía y referencias

Calcaño, Luis G. 2009 *La disolución de las fronteras: sociedad civil, representación y política en Venezuela* (Caracas: CENDES).

OVCS 2012 "Tendencias de la conflictividad social en Venezuela en 2012", 9 de agosto.

Ruiz Acosta, Miguel 2010 *Venezuela: crisis estatal y lucha de clases* (Xalapa: IIHS-UV) Cuaderno de Trabajo N° 36.

Uzcátegui, Rafael 2010 *Venezuela: la revolución como espectáculo. Una crítica anarquista al gobierno bolivariano* (Caracas/Madrid/Tenerife/Buenos Aires: El Libertario/Editorial La Cucaracha Ilustrada/La Malatesta Editorial/Tierra de Fuego/Libros de Anarres).

Páginas de internet del Consejo Nacional Electoral, la Mesa de la Unidad Democrática y los ministerios de Poder Popular para la Información y la Comunicación, para el Trabajo y la Seguridad Social y para la Vivienda y el Hábitat.

Notas

1 Para una aproximación más profunda de estas problemáticas –participación, organización y protesta popular– resultan insustituibles los trabajos de las investigadoras Margarita López Maya y María del Pilar García Guadilla, que abarcan los principales actores y procesos involucrados en la evolución sociopolítica venezolana de las últimas dos décadas de crisis de la democracia puntofijista y ascenso del proceso bolivariano.

2 En ese proceso constituyente emergió el problema de la representatividad social de las organizaciones civiles y a la postre fue evidente la cooptación por Chávez de candidatos provenientes de estas (Calcaño, 2009: 77-85).

3 Durante la coyuntura abierta en diciembre de 2000 (con un referendo donde se decidía la continuidad de dirigencias sindicales en espera de las elecciones organizadas por el Poder Electoral), los sindicalistas disidentes de la CTV escogieron a un candidato del partido Patria Para Todos (cercano al gobierno pero crítico) en vez que a Nicolás Maduro, propuesto por el Movimiento Quinta República (Ruiz, 2010: 54- 55).

4 Tras pagar el costo de desconocer –de 2002 a 2005– la institucionalidad como vía para consolidarse como opción en la vida política venezolana, la oposición tampoco debería apostar en exclusiva a desarrollar su agenda desde los espacios conquistados dentro del poder legislativo y los gobiernos regionales, ante la asimetría de poder y recursos con el gobierno nacional y su control de los diversos poderes públicos. Las consecuencias de las recientes derrotas electorales son particularmente reveladoras en ese sentido.

5 En el sitio web de la MUD se puede acceder a más información sobre el proceso de elecciones primarias. Cf. <www.unidadvenezuela.org>.

6 En el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE) se puede acceder a más información sobre todos los procesos electorales venezolanos. Cf. <www.cne.gov.ve>.

7 Según declaraciones del ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, reseñadas en el diario oficialista *Correo del Orinoco* el 12 de febrero de 2012. "La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es chavista porque dependemos de una sola persona, que es el comandante en jefe, que por constitución y por nuestra Ley de la Fuerza Armada es la máxima autoridad jerárquica de la institución". Se puede acceder a la entrevista completa en <www.correodelorinoco.gob.ve>.

8 Se sugiere consultar el sitio web del CNE para profundizar en los pormenores de los resultados electorales.

9 Se sugiere consultar en el sitio web del OVCS los informes mensuales y especiales sobre conflictividad y protesta social en Venezuela. En <www.observatoriodeconflictos.org.ve>.

10 En el sitio web del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social puede descargarse la LOTTT. Cf. <www.mintra.gov.ve>.

11 Ver informes sobre conflictividad y violencia sindical en Venezuela en el sitio web del OVCS.

12 Se sugiere acceder al sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat para acceder a más información sobre la GMVV. Cf. <www.mvh.gov.ve>.

13 Se puede acceder al decreto completo en el sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación en el enlace <www.minci.gov.ve>.

Informes sobre el conflicto social en 2012

Argentina, 2012: ¿crisis en la fuerza social democrática, nacional y popular?

María Celia Cotarelo

Bolivia: informe de coyuntura y balance anual de 2012

Dunia Mokrani Chávez
y Pilar Uriona Crespo

Brasil: agravamento da crise, coesão do bloco dominante e novos horizontes para as lutas sociais

Roberto Leher *et al.*

En el tiempo del libre mercado: conflictos y protesta social en Costa Rica durante el año 2012

Alejandro Alvarado Alcázar
y Gloriana Martínez Sánchez

Ecuador en 2012: un largo año electoral

Mario Unda

Guatemala en 2012: reconfiguración autoritaria, movilización popular y criminalización de las luchas

Simona Violetta Yagenova

Argentina, 2012

¿Crisis en la fuerza social democrática, nacional y popular?

MARÍA CELIA COTARELO

Profesora de Historia y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Investigadora del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. Coordinadora del comité de Argentina y Uruguay del OSAL.

Resumen

A pesar de que no se han cumplido dos años del aplastante triunfo de Cristina Kirchner, en Argentina están sembradas varias dudas: ¿El kirchnerismo está perdiendo el respaldo de la ciudadanía? ¿Acaso ha comenzado a deteriorarse políticamente? ¿O se trata solamente de la impresión que, en la opinión pública, quiere generar la oposición? Estas son las interrogantes que María Celia Cotarelo utiliza como eje para estudiar las distintas aristas del conflicto social durante 2012 en Argentina. Tras una revisión del discurso que defiende la tesis del fin del kirchnerismo, así como del que afirma lo contrario, la autora señala que dicha oposición (kirchnerismo-antikirchnerismo) atraviesa todos los terrenos donde hubo confrontación. Así, María Celia Cotarelo expone quiénes fueron los actores, sus reivindicaciones y sus formas de lucha. Destaca, por ejemplo, la disputa que actualmente se está dando en el ámbito de los medios masivos de comunicación, pero también las movilizaciones y protestas callejeras que, de acuerdo con el análisis de la autora, han superado en cantidad las registradas durante los tres años anteriores.

Abstract

Cristina Kirchner's crushing victory was secured less than two years ago. However, several doubts have arisen. Is Kirchnerism losing citizen support? Has the movement begun to crumble politically? Or is this just the feeling that the opposition is trying to engender to change public opinion? These are questions María Celia Cotarelo uses as leading points to study the various perspectives of the Argentine social conflict in 2012. Following a review of the narrative that upholds the end of Kirchnerism, and the narrative that proclaims the contrary, the author points out that this contrast (Kirchnerism-antikirchnerism) runs through every environment where there has been confrontation. Thus, María Celia Cotarelo presents who the actors were, their vindications and their types of struggle. She notes, for example, the current confrontation in mass media, and demonstrations and street protests which, in the author's view of her analysis, have outnumbered the ones in the previous three years.

Palabras clave

Kirchnerismo, desgaste político, modelo nacional popular, movilización social.

Key words

Kirchnerism, political stress, national popular model, social mobilisation.

Cómo citar este artículo

Cotarelo, María Celia 2012 "Argentina, 2012: ¿crisis en la fuerza social democrática, nacional y popular?" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 33, mayo.

En octubre de 2011 la presidente Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos, obteniendo casi 40 puntos más que el candidato que se ubicó en el segundo lugar. Asumió así su segundo mandato el 10 de diciembre de 2011, con un amplio respaldo de la ciudadanía y un espacio opositor fuertemente fragmentado. Sin embargo, un año después, se ha instalado, al menos en una parte de la sociedad, la sensación de que ese respaldo se ha ido erosionando, que el entusiasmo y la épica militante popular se ha desvanecido y que el kirchnerismo ha perdido la iniciativa política. ¿Cómo pudo pasar esto tan rápidamente? ¿Qué pasó durante 2012 para que se produjera tal deterioro? ¿O se trata de una simple sensación, generada e instalada deliberadamente a través de los medios masivos de comunicación, a fin de ir socavando la legitimidad del gobierno ante los ojos del pueblo?

Algunos sostienen el fin del kirchnerismo como una realidad incontrastable. Por ejemplo, el economista de derecha Miguel Braun (2013)¹ señala que "cada día que pasa hay menos dudas del agotamiento del modelo económico kirchnerista, y mayor certeza del final del ciclo político de Cristina Fernández de Kirchner"; o el dirigente político peronista Julio Bárbaro (2012)², que también considera que "todo indica que estamos frente al final de un nuevo ciclo histórico, el kirchnerismo muestra signos claros de agotamiento, la sociedad vuelve a percibir el miedo al futuro". Por su parte, desde la vereda opuesta, el periodista kirchnerista Hernán Brienza (2012) rechaza estas afirmaciones y sintetiza la posición dominante en las filas oficialistas, con el argumento de que sólo se trata de una operación política:

De buenas a primeras pareciera que la Argentina se asomó al abismo. Masivo cacerolazo, paro general y amenaza de default, todo junto en sólo quince días. Tres ingredientes que hacen temblar al más pintado. Tibiamente algunos empezaron a hablar de un clima de fin de ciclo. El problema es que en la Argentina hace rato que las cosas no son lo que parecen. [...] Quedan todavía tres años de gobierno, pero hay algunos sectores que están desesperados por instalar ese clima de fin de ciclo.

Intentando apartarse de las afirmaciones terminantes en un sentido u otro, el analista político y abogado de derecha católica Mariano Grondona (2012)³ advierte a los cuadros dirigentes del espacio que él expresa que:

La oposición al kirchnerismo cometió su propio error en 2009, cuando la rotunda derrota de Néstor Kirchner [...] hizo suponer que el ciclo kirchnerista terminaba, pero sólo estaba agotándose el 'hemiciclo' de Néstor y estaba por nacer otro, el de Cristina. [...] La vertical caída de la Presidenta

en las encuestas obliga, hoy, a replantear la cuestión: su descenso, ¿es acaso un télus, un final anunciado, o sólo completa un hemiciclo del que finalmente podrá reponerse? Aquí no hay que confundir las ganas que tenga el observador, por más nobles que sean, con las posibilidades reales de la situación, que podrían contradecirlo aunque no le gustaran.

¿A qué error de apreciación se refiere Grondona? Veamos algunos ejemplos. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el neoliberal Mauricio Macri, aseguraba en 2009 que “el ciclo kirchnerista llegó a su fin”⁴; el periodista del diario *La Nación* Joaquín Morales Solá afirmaba en 2008 que “el kirchnerismo, como ciclo político histórico, está terminado. El concepto, claro y concluyente, lo desgranó un gobernador de anteriores e inculcables simpatías con los Kirchner”, al tiempo que insistía en que estábamos ante “el final irremediable de un ciclo político”. Desde sectores de izquierda se proclamaba también el fin del kirchnerismo. En una publicación del Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) se sostenía:

desde las elecciones legislativas de junio pasado no ha hecho más que comprobarse que estamos ante el fin del ciclo kirchnerista. Como muestra la crisis política [...], el tiempo de la camarilla gobernante erigida en una situación excepcional, donde todas las fracciones de la burguesía necesitaban recomponer la autoridad presidencial y el régimen jaqueado por la rebelión popular, se encuentra agotado (Maiello y Romano, 2010).

Y a comienzos de 2010, el informe político al XIX Congreso del Partido Obrero se titulaba “La etapa final de los Kirchner”. En el ámbito académico se señalaba la crisis del kirchnerismo, aunque en términos más relativos. Por ejemplo, se afirmaba que:

Los efectos combinados de un debilitamiento y la falta de consolidación de la imagen de conducción de la figura presidencial de Cristina Fernández, la pausa y luego recuperación del crecimiento de la economía debido a la crisis internacional en el año 2009, sumados a las crisis institucionales [...], parecieron desgastar al kirchnerismo y en parte a la propia oposición. De esta manera, un modelo de gestión política proclive a modificar la matriz neoliberal (aunque no en todas sus áreas) no logra consolidarse hegemónicamente, y cercado por una crisis política muchas de sus políticas comienzan a perder efectividad (Moreira y Barbosa, 2010);

Esta crisis política abrió un escenario característico en el que [...] el kirchnerismo parece comenzar a perder iniciativa y consenso. Las distintas fracciones de la burguesía reclaman, cada vez más violentamente, por sus intereses inmediatos; la iglesia toma aún mayor distancia del gobierno; los medios masivos de comunicación, hasta ayer condescendientes, se convierten en medios de la oposición; la burocracia sindical se inquieta; las fuerzas políticas opositoras, débiles y dispersas, empiezan a reagruparse y a envalentonarse; el apoyo se deteriora entre los trabajadores. Y el gobierno pierde paulatinamente su iniciativa hasta quedar a merced de los vaivenes de la coyuntura. Las crecientes repercusiones en la economía doméstica de la crisis financiera global, que ya está hundiéndose en la depresión al mercado mundial, pueden por sí mismas volver irreversible esta pérdida de rumbo del kirchnerismo. La razón es sencilla. El kirchnerismo no reemplazó los mecanismos de disciplinamiento de mercado sobre los trabajadores vigentes durante la década de los noventa y colapsados en 2001, sino que simplemente navegó en el gatopardismo durante un lustro de bonanza económica. Y, si se acaba la bonanza, se acaba el gatopardismo (Bonnet, 2010).

O bien:

[...] límites políticos en el gobierno que probablemente marquen el fin de la 'era K' –al menos en su configuración desde 2003, que combina apelaciones a una 'nueva política' y esperanzas de construir una fuerza partidaria transversal de centroizquierda con una alta concentración de poder en el poder ejecutivo y el uso instrumental de aliados, incluso dentro del bloque dominante–. Este estilo de gobierno [...] está siendo cuestionado actualmente por una parte significativa de la sociedad –sobre todo, las clases medias–, que rechaza el autoritarismo de la pareja presidencial, que no cree en sus promesas de renovación y que demanda que el poder sea democratizado (Svampa, 2008)⁵.

Varias de las medidas del gobierno, bajo la forma de decretos o de leyes, fueron frenadas a través de medidas cautelares y apelaciones en distintas instancias judiciales

Vemos que entre 2008 y 2010, tras el llamado conflicto de las patronales del campo con el gobierno nacional y las elecciones legislativas de 2009, se hablaba casi en los mismos términos que en 2012. Si los pronósticos sobre el fin del kirchnerismo fueron desmentidos por la realidad hace unos años y la crisis que varios investigadores señalaban logró ser superada por el kirchnerismo, ¿por qué esos pronósticos habrían de ser acertados ahora? ¿Qué cambió para que esto fuera así?

Kirchnerismo-antikirchnerismo

Esta antinomia domina la escena política argentina de los últimos años. Uno de los terrenos en los que en 2012 se libraron –y se seguirán librando– las confrontaciones políticas entre ambos bloques fue el de los medios masivos de comunicación, tal como sucede también en otros países de la región. A través de los medios opositores, principales formadores de la opinión pública, se propalaron cotidianamente fuertes críticas a cada acción del gobierno nacional, se instalaron los temas que supuestamente preocupaban a la "gente" –inseguridad, corrupción, autoritarismo, inflación– y se intentó construir una imagen positiva de ciertos dirigentes de la oposición a fin de crearlos como posibles candidatos alternativos al oficialismo para las próximas elecciones –las legislativas de 2013 y las presidenciales de 2015–. Por un lado, se fue construyendo la imagen de un gobierno dictatorial, soberbio, populista, corrupto, que no respeta la libertad de prensa ni las instituciones republicanas, que atenta contra la propiedad privada, que apunta a hacer de Argentina una nueva Venezuela o Cuba. Por otro lado, esta imagen se combina con la de un gobierno que se disfrazaría de progresista pero que en la realidad beneficiaría a los grandes capitales en detrimento de los trabajadores y las clases medias. Por lo tanto, con un discurso tanto desde la derecha lisa y llana como desde un supuesto progresismo, se apuntó a deslegitimar al gobierno y a construir la argamasa ideológica de una fuerza social neoliberal conservadora. Se intentó generar un estado de ánimo signado por el miedo, la indignación, el hartazgo y el odio, creando condiciones para la movilización masiva contra el gobierno. El diario *La Nación* y los radios, diarios y canales de televisión pertenecientes al Grupo Clarín fueron los principales medios difusores de esos relatos.

Esta acción sistemática se complementó con una intensa actividad a través de las redes sociales, multiplicándose los grupos de Facebook, los mensajes por Twitter y los blogs, que promovieron y canalizaron críticas, matizadas con fuertes insultos, a la presidente y a otros funcionarios.

Por su parte, desde los medios y los programas radiales y televisivos oficialistas, y a través del mecanismo de transmisión de los discursos presidenciales por cadena nacional, se respondió a la acción opositora exaltando los logros reales o supuestos del gobierno kirchnerista, apelando al amor y a la alegría en contraposición al odio y la crispación, intensificando la confrontación con el Grupo Clarín –como blanco casi exclusivo–, calificando a las acciones y declaraciones de sectores opositores, reales o supuestos, como destituyentes y funcionales a los intereses de las grandes corporaciones y apelando a la defensa a ultranza y acrítica del llamado modelo nacional y popular. Se apeló una y otra vez a la legitimidad del gobierno con base en el porcentaje de votos obtenido en las elecciones presidenciales de 2011. Se eludió sistemáticamente la discusión acerca de los asuntos que pudieran poner en cuestión el carácter nacional y popular del modelo, tales como los acuerdos con las grandes transnacionales mineras, el avance permanente de los productores sojeros sobre tierras de comunidades indígenas y de campesinos, los acuerdos con la principal transnacional productora de agrotóxicos (Monsanto), la falta de una reforma impositiva, la sanción de leyes que atentan contra intereses de sectores del pueblo –como la ley antiterrorista y la ley de riesgos del trabajo–, la falta de un control efectivo sobre los precios de productos de primera necesidad, la falta de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y de los topes para el cobro de las asignaciones familiares que afectan el salario de una parte creciente de los trabajadores y el pago de la deuda externa –que hace unos años se probó que es ilegítima e ilegal–, entre otros. Asimismo, el gobierno instaló y difundió eslóganes que cumplen la función de sintetizar el espíritu de la supuesta transformación económica, social, política y cultural en marcha: “profundizar el modelo”, la frase predominante hasta 2011, fue reemplazada por “sintonía fina” a comienzos del nuevo período presidencial –referida a ajustes en el modelo nacional y popular, como, por ejemplo, la reducción paulatina de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos–. Más adelante, sin explicar por qué, dejó de lado la “sintonía fina” y la nueva frase pasó a ser “vamos por todo”, sin mayores precisiones.

Otro de los terrenos en que se libraron las confrontaciones fue el institucional, en particular, el sistema judicial. Varias de las medidas del gobierno, bajo la forma de decretos o de leyes, fueron frenadas a través de medidas cautelares y apelaciones en distintas instancias judiciales. La principal confrontación que se desarrolló en este ámbito a lo largo de 2012 fue la referida al cumplimiento integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 y que aún no logró entrar en vigencia en todos sus artículos debido a las apelaciones judiciales del Grupo Clarín. Después de una larga campaña mediática oficial anunciando la inexorable puesta en vigencia de la ley a partir del 7 de diciembre (llamado el 7D), ésta finalmente fue postergada por nuevos fallos y apelaciones del grupo mediático monopólico. Por su parte, el gobierno también apeló, recusó y denunció a jueces, impulsó la sanción de una ley reglamentando el *per saltum* –mecanismo para apresurar la resolución de litigios jurídicos– y amenazó con impulsar una

profunda reforma judicial, aunque hasta ahora sin avanzar en ese sentido. Fueron varias también las causas que se tramitaron en el sistema judicial por denuncias de corrupción que involucraron a funcionarios públicos, entre ellos, al vicepresidente Amado Boudou y a dos ex secretarios de Transporte, ampliamente fogueadas a través de los medios masivos de comunicación.

A la vez, como en años anteriores, se impulsaron movilizaciones callejeras que parecieron querer remedar las que precipitaron la caída del gobierno del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001: a través de las redes sociales se convocó a *cacerolazos* en contra del gobierno nacional en junio, septiembre y noviembre, y se produjeron saqueos a comercios en diversas ciudades del país en el mes de diciembre. Ninguna organización se adjudicó las convocatorias, lo que dio lugar a que fueran atribuidas a distintos sectores: los *cacerolazos* fueron presentados como espontáneos por la oposición y como convocados por la derecha por el kirchnerismo, que a su vez atribuyó los saqueos a comercios a una agrupación anarquista (la Agrupación “1° de Mayo”, de la ciudad de Bariloche), a narcotraficantes o a sectores políticos no identificados. Por su parte, desde el gobierno o desde partidos y agrupaciones nucleadas en una nueva instancia organizativa kirchnerista, Unidos y Organizados⁶, se convocó a actos oficiales y a varias manifestaciones callejeras de carácter festivo o conmemorativo, de celebración más que de confrontación, de militantes más que del pueblo en general, tales como el acto por el noveno aniversario de las elecciones de 2003, el 27 de abril en el estadio de Vélez Sársfield en la ciudad de Buenos Aires; la concentración frente al Congreso Nacional para celebrar la sanción de la ley de nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el 3 de mayo; diversas actividades culturales y actos en el sesentavo aniversario de la muerte de Eva Perón, en julio; la marcha por el Día de la Independencia el 9 de julio en Tucumán; el acto por el Día de la Lealtad en Córdoba el 17 de octubre, bajo el lema “Lealtad al Peronismo Nacional y Popular”; eventos culturales en el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner en octubre y la Fiesta Patria Popular en la Plaza de Mayo de Buenos Aires del 9 de diciembre, en ocasión del primer aniversario de la asunción de la presidente y del Día de los Derechos Humanos y la Democracia, entre otros.

En síntesis, todos los conflictos se encontraron –y se encuentran– teñidos por la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo. Ésta atravesó –y atraviesa– a todos los movimientos sociales y las organizaciones políticas, sindicales, sociales, empresariales, estudiantiles, intelectuales, etc.

Entonces, hasta aquí, ¿qué fue lo novedoso en 2012 que pudiera llevar a plantear la posibilidad del fin del ciclo kirchnerista? Ciertamente no los terrenos de la lucha, ni el carácter de las confrontaciones, ni el tenor de los discursos, ni los difusores de los mismos, ni las políticas generales implementadas por el gobierno. Pero sí cabe señalar algunos aspectos que presentan ciertas diferencias con respecto a años anteriores. A nivel discursivo, se observan dos grandes cambios: uno de ellos es el ya mencionado pasaje de la consigna “profundizar el modelo” a “sintonía fina” y luego a “vamos por todo”, con el consiguiente aumento de vaguedad en su contenido; el otro fue el acento puesto desde el oficialismo en la obtención de una gran mayoría de votos en las elecciones como fuente privilegiada de legitimidad del gobierno, en detrimento del énfasis en el carácter de las políticas implemen-

tadas: si bien en sus discursos la presidente abundó en referencias a los logros alcanzados desde 2003, el mérito principal del gobierno que diversos funcionarios señalaron ante las protestas fogueadas por la oposición fue el amplio triunfo electoral. De esta manera, el gobierno sería legítimo principalmente por haber ganado cómodamente las elecciones y no por los intereses que defiende o por contener a diversos sectores populares en la toma de decisiones, tal como estaba planteado a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner en 2003. Esto se vincula con el vaciamiento del contenido de la insurrección de 2001 –que creó las condiciones para el proceso abierto en 2003– en el discurso oficial, que a la vez fue reemplazando la reivindicación de la lucha popular que llevó a la caída del gobierno de De la Rúa por la referencia a esas jornadas de lucha como un hecho nefasto. Por un lado, este hecho es presentado como si hubieran sido acciones de desesperación provocadas por el estallido del modelo neoliberal, un hecho que no se debe repetir, del que se destacan las muertes ocurridas; por otro lado, como un complot para provocar la caída del gobierno, lo que tampoco se debe repetir. El otro cambio, vinculado a lo anterior, fue la menor apelación a la movilización popular callejera como parte de la confrontación política por parte del gobierno, a diferencia de lo que sí había ocurrido durante el conflicto con las patronales del campo en 2008. Esto parece responder a la concepción de que la fuerza proviene fundamentalmente de los votos y no tanto de la lucha popular activa, y menos aún de aquella que no se dé encuadrada y disciplinada.

Estos cambios, que muestran el proceso de institucionalización y de restablecimiento del orden vigente, parecen ser un indicador del alejamiento del kirchnerismo de los procesos de lucha que lo generaron, debilitando su capacidad de movilización y de transformación y mostrando los límites del llamado modelo nacional y popular.

Rasgos de la conflictividad en 2012

Hasta aquí hemos centrado la mirada en la acción del gobierno y el kirchnerismo. Pero lo que nos importa observar son los procesos de lucha de los que el kirchnerismo y la otra cara de la moneda, el antikirchnerismo, son expresión. Por eso nos referiremos ahora a los principales rasgos de la rebelión desarrollada a lo largo del año.

Lo primero que salta a la vista es el aumento en la cantidad de hechos de protesta en 2012 con relación a los tres años anteriores⁷ y la realización de varios hechos importantes de oposición al gobierno nacional –los primeros de carácter masivo desde el prolongado conflicto de las patronales del campo de 2008–, protagonizados por diversas fracciones sociales, algunas de las cuales habían formado parte de la alianza social en el gobierno. ¿A qué obedeció el aumento de hechos de protesta? ¿Quiénes se movilizaron? ¿Qué reclamos plantearon? ¿Contra quiénes dirigieron su protesta? ¿Se observa algún cambio en relación con la conflictividad registrada en los años previos?

Los principales protagonistas de los hechos de protesta registrados en el año fueron los trabajadores asalariados organizados sindicalmente y los ciudadanos. Casi un tercio del total de hechos registrados (31,3%, unos 810) correspondió a protestas de trabajadores asalariados ocupados. La mayor cantidad fue realizada

por trabajadores estatales (400), pero la participación de los trabajadores de empresas privadas no fue desdeñable (329); 60 hechos fueron llevados adelante por trabajadores estatales y privados conjuntamente. Los gremios más activos fueron, en primer lugar, los de trabajadores de transporte (190 hechos), destacándose la participación de los choferes de camiones y los trabajadores del subterráneo; en segundo lugar, los trabajadores de la administración pública, tanto nacional como provincial (163 hechos); en tercer lugar, los docentes (104 hechos) y, en menor medida y cuarto y quinto lugar, los trabajadores industriales y los de la salud, con 52 y 43 hechos respectivamente. En 96 hechos (11,9%) participaron trabajadores de distintos gremios en forma conjunta. En el 90,5% de los hechos se movilizaron solos y sin recibir apoyo de otros sectores, lo que muestra un alto grado de aislamiento de las acciones de los trabajadores. Es interesante señalar que si bien fueron los que más se movilizaron, la proporción de hechos que llevaron a cabo se encuentra entre las más bajas desde que llevamos registro (1994); sólo en 2008 fue menor (26,3%). El tipo de organización predominante fue, como es habitual, la organización sindical, aunque en una proporción relativamente baja, similar a la de los últimos cuatro años (28,3%). Entre las diez primeras organizaciones convocantes de hechos de protesta se encontraron seis organizaciones sindicales: cuatro sindicatos –la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Choferes de Camiones, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), este último sin personería gremial–, un frente de sindicatos estatales –la Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz–, y una central sindical –la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por Pablo Micheli⁸. Los hechos conducidos por cuerpos de delegados, comisiones internas y líneas sindicales internas opuestas a las conducciones de los sindicatos no fueron significativos (12%). Se acentuó la tendencia al aumento de los hechos de protesta de trabajadores contra el gobierno nacional –que entre 2004 y 2008 fueron alrededor del 5%, mientras que en 2012 fueron el 19,5%–; así como también los hechos de oposición al “modelo económico y social” que, tras haber prácticamente desaparecido entre 2004 y 2011 (no superaron en ningún año el 0,7%), fueron algo más del 3% del recuento.

Estos dos últimos rasgos se expresaron fundamentalmente en una serie de hechos convocados por distintos agrupamientos sindicales –como el acto convocado por el Sindicato de Choferes de Camiones en el Parque Roca de la ciudad de Buenos Aires el 26 de abril, la huelga general y concentración en la Plaza de Mayo convocada por varios sindicatos del 27 de junio, la huelga convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina conducida por el estatal Pablo Micheli, con una concentración en la Plaza de Mayo, a la que se adhirió la Confederación General del Trabajo (CGT) conducida por el camionero Hugo Moyano, el 10 de octubre; la concentración frente al Congreso Nacional convocada por la CGT liderada por Moyano y la CTA de Micheli contra un proyecto de ley sobre riesgos del trabajo, perjudicial para los trabajadores, el 24 de octubre; hasta llegar, finalmente, a la primera huelga general nacional contra el gobierno desde 2003, convocada por la CGT de Moyano, la CTA de Micheli y la CGT Azul y Blanca el 20 de noviembre. Varios de estos hechos contaron con la adhesión de organizaciones de pobres (como la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, el

Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive” y otras), de propietarios rurales (la Federación Agraria Argentina), de estudiantes (la Federación Universitaria Argentina), así como de partidos políticos de izquierda. De esta manera, volvió a aparecer en las calles la confluencia de organizaciones predominante en la década del noventa, movilizadas entonces contra las políticas neoliberales. Los reclamos centrales de estas protestas, dirigidas contra el gobierno nacional, fueron de índole económico-corporativa: el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que deben pagar los trabajadores asalariados, la universalización de las asignaciones familiares, el pago de la deuda que el Estado nacional mantiene con las obras sociales y el aumento de las jubilaciones. Si bien la adhesión a estos hechos no fue masiva, resultó significativa, dado que el movimiento obrero organizado sindicalmente ha sido uno de los pilares fundamentales del llamado modelo nacional y popular durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el primer período presidencial de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011). En 2012 se produjo un realineamiento al interior del movimiento sindical, que llevó a una fractura de la principal central sindical: la CGT se dividió en lo que puede denominarse la CGT Moyano y la CGT Caló, la primera encabezada por el camionero Hugo Moyano y la segunda por el metalúrgico Antonio Caló. Esta división respondió al paso a la oposición al gobierno nacional por parte de un conjunto de sindicatos, cuyo referente principal es Moyano. Este cambio de posición llevó, a la vez, a la unidad en la acción de esa parte de la CGT con la CTA conducida por Micheli –una de las partes en que quedó dividida la CTA; la otra parte está encabezada por Hugo Yasky, alineado con el gobierno nacional–, la CGT Azul y Blanca, encabezada por el gastronómico Luis Barrionuevo –escindida de la CGT en 2008– y algunas seccionales de sindicatos, líneas sindicales, comisiones internas y cuerpos de delegados de izquierda. En síntesis, el movimiento sindical aparece fracturado en función de la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo, la cual, como dijimos, atraviesa a toda la sociedad. Pero cabe mencionar un elemento importante: una parte del movimiento sindical comenzó a postularse como cabeza de la alianza social en el gobierno y no meramente como su columna vertebral. El sector encabezado por Hugo Moyano intentó ocupar mayores espacios políticos dentro de la alianza y planteó la necesidad del acceso al poder por parte de los trabajadores⁹. Aun cuando estos objetivos no implicaban de ninguna manera trascender el sistema, quedó en evidencia el límite con el que inevitablemente se topan dentro del mismo.

El otro gran protagonista de los hechos de protesta de 2012 fueron los ciudadanos “indignados”, que llevaron a cabo el 12% (314) del total de hechos registrados, duplicando su participación más alta hasta el momento –en 2008, cuando dieron cuenta del 6% de los hechos–. Su movilización se dio principalmente bajo la forma de cacerolazos: tres en junio (uno por semana), el 13 de septiembre y el 8 de noviembre. Este último, conocido como 8N, constituyó la manifestación más numerosa de los últimos tiempos. Si bien los medios de comunicación y los dirigentes políticos opositores insistieron en exaltar que fueron hechos espontáneos, fueron convocados a través de las redes sociales por distintos tipos de organizaciones y por individuos supuestamente independientes. Los dos últimos cacerolazos tuvieron alcance nacional. No hubo una consigna unificadora; los reclamos fueron muy diversos: rechazo a la posible re-reelección de la presidente, seguridad,

independencia de los jueces, contra la corrupción y contra la inflación, entre otros, pero tendieron a predominar aquellos referidos a la libertad y a la seguridad, dos de los ejes en torno a los cuales giraron los intentos por reconstituir una fuerza social de carácter conservador neoliberal en la última década, y que, como dijimos más arriba, formaron parte del discurso instalado a través de los medios de comunicación opositores. Los protagonistas casi excluyentes fueron fracciones de la pequeña burguesía; si bien puede inferirse que la mayor parte de los participantes eran opositores al gobierno desde años antes, una porción habría votado por la presidente en las elecciones de 2007 y 2011. A pesar de que desde el kirchnerismo se englobó al conjunto de la protesta como parte de una maniobra destituyente y a los participantes como integrantes de la derecha, la masividad del 8N indica que, por primera vez en los últimos años, una parte de la pequeña burguesía que formaba parte de la alianza en el gobierno o que al menos estaba neutralizada mostró disposición a movilizarse contra algunos aspectos de la política llevada a cabo por el gobierno o contra un estilo de gobierno que provoca rechazo en esas fracciones sociales¹⁰. Sin embargo, el descontento expresado en la calle no fue canalizado por ningún partido político ni organización, más allá de que los cacerolazos fueran motorizados por sectores de derecha. Ningún dirigente de la oposición logró convertirse en un referente político destacado.

Las protestas de estos dos participantes –trabajadores asalariados y ciudadanos– constituyeron el 43,4% de los hechos registrados. Otro 46,5% correspondió a protestas de vecinos (la mayoría en reclamo de la restitución del servicio eléctrico y por seguridad); propietarios (contra aumentos impositivos, por mejores precios para sus productos o servicios); militantes de organizaciones políticas (a favor de los juicios a genocidas de la última dictadura cívico-militar y contra la contaminación provocada por la minería a cielo abierto); familiares de víctimas de crímenes (por justicia); pobres (protagonistas de saqueos a comercios en el mes de diciembre, y por mejores condiciones de vida); estudiantes (contra reformas curriculares en la ciudad de Buenos Aires) y policías y gendarmes (por problemas salariales). El 10% restante correspondió a protestas de desocupados, hinchas de fútbol, vendedores ambulantes, mujeres, homosexuales, ambientalistas, profesionales, artistas, veteranos de la guerra de Malvinas, indígenas, campesinos, jóvenes, presos y otros.

En síntesis, no se observan grandes cambios en los hechos de protesta con respecto a años anteriores. Los únicos cambios importantes fueron el aumento en la cantidad de hechos registrados, la activación de los ciudadanos, el aumento de los hechos de carácter político y, fundamentalmente, que una parte del movimiento obrero y de fracciones de la pequeña burguesía, que hasta 2011 apoyaban al gobierno, pasó a movilizarse contra el mismo, aunque no necesariamente contra el “modelo nacional y popular”.

¿Crisis en la fuerza social democrática, nacional y popular?

Volvamos a las preguntas iniciales: ¿estamos ante una crisis terminal del kirchnerismo, ante el principio del fin de un ciclo? ¿O se trata de una sensación instalada a partir de operaciones políticas de la oposición de derecha? Cualquier pronóstico resultaría aventurado, por lo que nos abstenemos de hacerlo. Lo que sí puede

afirmarse es que el proceso político se desarrolla por carriles institucionales, por lo que las próximas elecciones legislativas de 2013 serán un indicador de cuál es la relación de fuerzas actual. Los posibles intentos por generar un estado de movilización que recreara los hechos de diciembre de 2001, que llevaron a la caída del gobierno neoliberal de entonces, no han prosperado; las condiciones generales son muy diferentes. Por otra parte, no ha logrado constituirse hasta el momento una alternativa política a nivel nacional; el espacio de la oposición al régimen continúa fragmentado y sin posibilidad de presentar un programa de gobierno que concite el apoyo popular. Pero cabe hacerse otra pregunta: ¿estamos ante una crisis de la fuerza social democrática, nacional y popular, que fue la predominante en los hechos de diciembre de 2001 y que se realizó dentro del sistema institucional vigente a partir del cambio de la alianza social en el gobierno desde 2003?

Desde entonces, el proyecto dominante es el formulado en términos de un capitalismo serio, con inclusión social y redistribución de la riqueza, con una fuerte intervención del Estado fijando algunas reglas de juego al gran capital. Los embriones de construcción de nuevas relaciones y de lucha antisistémica, que muchos militantes sobredimensionaron en su momento, quedaron aislados socialmente, al tiempo que los intentos de recrear y dar un impulso renovado al “modelo neoliberal” de los años noventa no logran hasta el momento consolidarse. Sin embargo, en 2012 se hizo evidente que algunas fracciones integrantes de la fuerza social predominante parecen haber encontrado un límite para sus metas democráticas y populares; tal es el caso de algunas fracciones obreras. Su aspiración de alcanzar los mayores espacios posibles dentro del sistema, cuyo punto culminante sería llegar a conducir la alianza social que integran, no puede realizarse sin poner en cuestión el orden vigente. Lo mismo sucede con las metas nacionales, en un mundo dominado por las transnacionales. Se observan, pues, signos de crisis en la fuerza social democrática, nacional y popular, que empezó a encontrar límites en su desarrollo –aquellos que fija el sistema capitalista–. La superación de los mismos implicaría poner en cuestión la posibilidad y la conveniencia de un “capitalismo serio”, lo que, por el momento, parece estar lejos de constituir la meta popular predominante.

Bibliografía

- Bárbaro, Julio 2012 “Un ciclo histórico” en *Perfil* (Buenos Aires) 27 de mayo.
- Bonnet, Alberto 2010 “El lock-out agrario y la crisis política del kirchnerismo” en *Herramienta Web* (Buenos Aires: Ediciones Herramienta) N° 6, septiembre, disponible en <www.herramienta.com.ar>.
- Braun, Miguel 2013 “Fin de ciclo y participación ciudadana”, 14 de enero, en *Infobae* <opinion.infobae.com/miguel-braun>.
- Brienza, Hernán 2012 “Un clima de fin de ciclo” en *Tiempo Argentino* (Buenos Aires) 24 de noviembre.
- Grondona, Mariano 2012 “¿Estamos los argentinos al final de un ciclo?” en *La Nación* (Buenos Aires) 7 de octubre.
- Maiello, Matías y Romano, Manolo 2010, “El fin de ciclo kirchnerista y las tareas de los revolucionarios” en *Estrategia Internacional* (FTCI) N° 26, marzo.

Morales Solá, Joaquín 2008 “Los Kirchner y el final de un ciclo político” en *La Nación* (Buenos Aires) 28 de diciembre.

Moreira, Carlos y Barbosa, Sebastián 2010 “El kirchnerismo en Argentina: origen, apogeo y crisis, su construcción de poder y forma de gobernar” en *Sociedade e Cultura* (Goiânia: Universidade Federal de Goiás) Volumen 13, N° 2, julio-diciembre, pp.193-200.

Svampa, Maristella 2008 “The End of Kirchnerismo” en *New Left Review* N°53.

Notas

1 Miguel Braun es un economista graduado en la Universidad de San Andrés y doctorado en la Universidad de Harvard. Fue investigador visitante en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es co-fundador y director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) –think tank financiado, entre otros, por el National Endowment for Democracy, el Banco Mundial, Brookings, Tinker y numerosas empresas transnacionales– y director ejecutivo de la Fundación Pensar –dedicada a la formación de cuadros técnicos del partido de derecha neoliberal Propuesta Republicana (PRO), presidido por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. Ver <pro.com.ar/fpensar/quienes-somos>.

2 Julio Bárbaro fue secretario de Cultura entre 1989 y 1991 durante el gobierno de Carlos Menem y presidió el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) entre 2003 y 2008, durante el gobierno de Néstor Kirchner y a comienzos del de Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente es opositor al gobierno.

3 Mariano Grondona tiene una larga trayectoria como analista político en medios televisivos, radiales y gráficos, como el diario *La Nación*. Es un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en España. Ha sido profesor visitante e investigador asociado en la Universidad de Harvard. Ver, entre otros <www.ideared.org.ar/coloquio41>.

4 Cf. el diario *Ámbito Financiero* del 17 de diciembre de 2009.

5 En inglés en el original. Traducción de la autora.

6 Unidos y Organizados está integrada por La Cúmpora, Kolina, la Corriente Nacional de la Militancia, Nuevo Encuentro, el Frente Transversal Nacional y Popular, el Movimiento Evita, La Martín Fierro, la Corriente Peronista Descamisados, La Güemes, Mujeres K, Compromiso Peronista JP de los '70 y la Corriente Agraria Nacional y Popular.

7 Después del punto culminante en cuanto a la cantidad de hechos de rebelión durante la crisis de 2001-2002 (más de 3 mil hechos anuales), su número bajó en 2003, subió en los dos años siguientes (en 2005, superó los 2 mil 500 hechos), se mantuvo en

2006 y 2007, alcanzó un nuevo pico en 2008 (más de 2 mil 800 hechos) y desde entonces fue disminuyendo (menos de 2 mil hechos en 2010 y 2011) hasta 2012, en que volvió a alcanzar los niveles de 2005-2007 (2 mil 588 hechos). Fuente: Base de Datos del Programa de Investigación del Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA).

8 Otras tres fueron organizaciones gremiales empresarias de propietarios rurales –la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA)–. Y una organización estudiantil formada en el marco de un conflicto en algunas escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires –la Coordinadora de Estudiantes de Base–.

9 Esto iba más allá de lograr que se incluyera a dirigentes sindicales en las listas de legisladores, tal como suele sostenerse para explicar la ruptura de este sector sindical con el gobierno. Ya en octubre de 2010 Moyano declaraba que “el general Perón decía que el sindicalismo era la columna vertebral del movimiento. Eran tiempos en que el sindicalismo no estaba maduro. Ahora podemos aspirar a ser la cabeza del movimiento. Debe llegar el día en que un trabajador conduzca los destinos del país”, que “sabemos la fuerza que tenemos los trabajadores. Tenemos la gran responsabilidad de saber utilizar ese poder y esa fuerza. [...] A los trabajadores les pregunto por qué van a renunciar a los tres poderes, por qué vamos a renunciar a la política. Este acto es para concienciar a los trabajadores y poder tener a un trabajador en la Casa de Gobierno” (*Clarín* 2010, 16 de octubre), y que “el trabajador tiene que dejar de ser un instrumento de presión para pasar a ser un instrumento de poder” (*Página 12* 2010, 16 de octubre).

10 Entre algunos de esos aspectos se encuentran las restricciones a la compra de dólares, la negación de la existencia de altos índices de inflación, la negativa del gobierno a dialogar con algunos sectores, el silencio oficial acerca de la necesidad de actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias –que recae sobre un número importante de trabajadores–, la continua exaltación de la presidente de los logros de su gobierno sin hacer referencia al mismo tiempo a los problemas existentes, etc.

Bolivia

Informe de coyuntura y balance anual de 2012

DUNIA MOKRANI CHÁVEZ

Politóloga y maestrante en Filosofía y Ciencias Políticas del Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA). Investigadora de la democracia, el Estado y los movimientos sociales, el proceso constituyente boliviano, descolonización y la despatriarcalización. Activista del Colectivo de Mujeres “Samka Sawuri - Tejedoras de Sueños” y coordinadora del comité de Bolivia del OSAL.

PILAR URIONA CRESPO

Politóloga e investigadora asociada del CIDES-UMSA. Escritora y consultora en análisis de relaciones de poder y marginalidades. Actualmente trabaja para el Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam como representante en Bolivia. Presidenta del directorio de la Fundación Tierra, miembro del Colectivo de Mujeres “Samka Sawuri - Tejedoras de Sueños” y coordinadora del comité de Bolivia del OSAL.

Resumen

Tras haberse aprobado la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se vuelven a confrontar el modo propietario, de matriz colonial y capitalista, de explotación de las materias primas, con el uso comunitario de utilización para la subsistencia – aunque ya desde antes de la conquista permeado por el abuso imperial incaico–, que se mezcla con aquél también por la proletarianización y mestizaje de los originarios con los descendientes de los europeos. Por causa de la hegemonía capitalista mundial –en particular por las ramas metalmecánicas, informáticas, narcotraficantes y de gaseosas de coca– y por la ideología dominante en el gobierno de transición al socialismo, el Estado boliviano aplica una política desarrollista que impulsa la producción de coca y la extracción minera, lo que violenta las autonomías indígenas y el derecho de consulta previa plasmados en la reforma, al igual que las aspiraciones de reterritorialización y reinstalación de

Abstract

Following the adoption of the Political Constitution of the Plurinational State of Bolivia (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia), the proprietary, colonial-based and capitalist, and raw-materials farming modalities clash once more against the subsistence communal use –although even before the conquest permeated by Inca’s imperial abuse–, also related in terms of proletarianisation and racial mixing of original peoples with European descendants. As a result of the global hegemony of capitalism –in particular, the metal-mechanic, information, drug-dealing and coca-based fizzy drinks industries– and the dominant view of the socialism transition’s administration, the Bolivian state applies a developmental agenda which drives coca production and the mining industry, which in turn threatens indigenous autonomy and the right to previous consultation as reflected in the reform, as much as ambitions of reterritorialisation and of the reinstatement of ancestral

formas de autoridad ancestrales. A la vez que se relatan los conflictos por el TIPNIS y las delimitaciones distritales, y los de Mallku Khota y Colquiri, se señala la dificultad para discutir un proyecto transformador que solucione las contradicciones, se cuestiona la monopolización del MAS de la toma de decisiones gubernamentales y se plantea la solución de la democracia participativa, directa y comunitaria, de formas políticas que respondan a espacios de autoorganización social. A ésta se la propone para resolver las confrontaciones entre el republicanismo católico y la organización política originaria. Se aborda la cuestión del alcance distrital del usufructo de las materias primas, en particular de sus impuestos.

types of authority. The conflicts stemming from TIPNIS, district delimitation, and Mallku Khota and Colquiri are recounted, and at the same time the difficulty of holding a debate about a transforming project that can put an end to contradictions is discussed, Movement to Socialism (Movimiento al Socialismo) monopoly on governmental decision-making is questioned, and a participatory, direct and community-based democracy in which the political framework can respond to social self-organisation is suggested. This is advanced as a way of solving confrontations between Catholic Republicanism and indigenous political organisation. The question of district-based usufruct of raw materials, particularly tax-based, is also discussed.

Palabras clave

Estado Plurinacional, desarrollismo, extractivismo, explotación de la coca, TIPNIS, Mallku Khota, Colquiri.

Key words

Plurinational state, developmentalist processes, extractive industries, coca farming, TIPNIS, Mallku Khota, Colquiri.

Cómo citar este artículo

Mokrani Chávez, Dunia y Uriona Crespo, Pilar 2013 "Bolivia: Informe de coyuntura y balance anual de 2012" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 33, mayo.

Si en el contexto actual existiera la necesaria voluntad política para abrir un debate amplio y plural sobre los avances del denominado Proceso de Cambio y, en este marco, sobre la implementación del texto constitucional –aprobado por *referéndum* el 25 de enero de 2009– que lo hace viable, seguramente Bolivia tendría la posibilidad de entrar en una etapa de reflexión política creativa sobre la cual establecer cómo enfrentar las principales paradojas que aparecen al interior de dicho proceso y que hoy se muestran bajo la forma de conflictos que han ocasionando en el último tiempo las grandes rupturas entre los actores involucrados en éste, es decir, entre las propias organizaciones sociales, por un lado, y, por otro, entre el gobierno y los sectores que mediante la resistencia cotidiana, el activismo y la participación en las luchas sociales generaron las condiciones de posibilidad de la transformación política en la que actualmente estamos inmersos y cuya sostenibilidad, para algunos, hoy depende sobre todo de las acciones emprendidas por el gobierno de Evo Morales y, para otros, va mucho más allá de éste.

Un debate plural sobre el Proceso de Cambio, por tanto, debería impulsar un ejercicio dialógico orientado a definir qué entendemos por “desarrollo” y evaluar si es aún un paradigma al que pueden asignársele nuevos contenidos y sentidos, en la medida que hacerlo permitiría recoger los anhelos de reivindicación de los sujetos sociales protagonistas de la transformación política que se da en el país; o si insistir en emplear el concepto de “desarrollo” es más bien una manera de limitar la posibilidad de superar el horizonte de la modernidad capitalista, llevando más bien a profundizar el modelo extractivista primario exportador¹.

...insistir en emplear el concepto de “desarrollo” es más bien una manera de limitar la posibilidad de superar el horizonte de la modernidad capitalista...

A siete años de haber abierto el camino para ir instalando en lo institucional las condiciones que suscitarían una modificación en las relaciones de poder para hacer del tantas veces mencionado Proceso de Cambio un referente compartido, consideramos que la actual coyuntura demanda la instalación de una discusión pública en la que se examinen los alcances y límites del extractivismo, a la luz del hecho de que la nacionalización e industrialización son, desde hace más de una década, dos de los elementos clave de la agenda política de los movimientos sociales, cuya implementación lograría abrir el camino para promover la recuperación del excedente económico y de producción, y la redistribución de los recursos materiales, mejorando con ello las condiciones de vida de la población más desfavorecida.

Así pues, aunque el concepto *desarrollo* continúa asimilándose a la idea de *progreso* en el imaginario de amplios sectores de la población, la noción de nacionalización, recuperada como bandera de lucha en las movilizaciones sociales de 2000 a 2005, tanto en la denominada “Guerra del Gas” como en la “Guerra del Agua”, ha sido abordada desde múltiples interpretaciones respecto a sus alcances y modalidades de ejercicio práctico. Ello ha permitido que hoy pueda interpelarse la idea de que la misma únicamente constituye un simple ejercicio de estatización, pasando a avanzar en su comprensión y abordaje al vincularla a la idea de la gestión pública de los bienes comunes y a la autogestión.

Ahora bien, si consideramos que en el último tiempo posicionar una crítica y una lucha anti-extractivista ha sido una tarea difícil, porque tienden a prevalecer aquellas voces que, desde una posición jerárquica de poder, pretenden simplemente descalificarlas, no debería llamar la atención que no exista un avance palpable en la construcción colectiva de un horizonte de transformación que considere la complejidad del escenario político actual. En este contexto, se hace cada vez más difícil conseguir la instalación de un diálogo que no niegue la legitimidad de las demandas de mejora de las condiciones materiales de vida de las poblaciones más vulnerables, sin por ello desconocer que la opción de los pueblos indígenas de preservar sus territorios y fortalecer sus formas y sistemas propios de autoridad y toma de decisiones es también absolutamente válida. De ahí que sea urgente debatir sobre las consecuencias que para las luchas emancipatorias que produ-

jerón las posibilidades del cambio traerá el avance sobre territorios de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y que terminará desplazando a sus poblaciones y afectando de manera irreversible no sólo sus derechos en su condición de naciones, sino también los derechos de la Madre Tierra que se vulneran para promover la ganadería, la agroindustria y la expansión de la frontera agrícola para la producción de coca en nombre de un supuesto “desarrollo” que favorecería en teoría a las poblaciones que con ello se afecta. El conflicto sobre el Territorio Indígena Parque Nacional “Isiboro Securé” (TIPNIS) es paradigmático de lo que aquí se señala. Asimismo, al momento de poner en la mesa de discusión la problemática de las actividades extractivas, también es fundamental abordar los conflictos que han enfrentado a mineros asalariados, cooperativistas y comunidades insertas de diversas maneras en los circuitos de las actividades de explotación minera. Los antagonismos surgidos en ese campo nos dan muchos elementos para pensar en la necesidad de abrir un nuevo debate sobre los sentidos de la nacionalización y sus efectos, sobre todo porque a raíz de los diversos enfrentamientos entre colectivos de mineros se ha puesto en evidencia que los veinte años de implementación de un modelo económico neoliberal han terminado por provocar la reconfiguración y fragmentación de los mundos del trabajo en Bolivia, invisibilizando además, en el caso de la actividad minera, las precarias condiciones laborales que afectan a amplios sectores de trabajadores y trabajadoras que sólo pueden subsistir ofreciendo su mano de obra para que la misma, de manera velada, sea explotada por sectores empresariales emergentes y, en algunos casos, con grandes poderes económicos, que reproducen las lógicas de acumulación de capital, pero que discursivamente señalan que en realidad lo que hacen es apostar por el proyecto cooperativista.

En este confuso escenario parece fundamental preguntarse sobre los límites visibles de una política estatal que se teje desde acuerdos corporativos con organizaciones sociales, en los que se negocian lealtades a cambio de cuotas de poder y que no permiten dialogar, de manera plural y abierta, sobre problemas de fondo que suscitan dinámicas en las que se entremezclan intereses económicos empresariales con demandas laborales, debilitando la capacidad de las y los trabajadores mineros de actuar como un único sujeto político, frente a un modelo que vulnera sus derechos, y proponer cambios estructurales, no sólo a partir del despliegue de acciones creativas de negociación para dar solución a los conflictos entre partes, sino también proponiendo las bases de lo que debería erigirse como un proyecto político transformador. Si bien algunas de ellas ya fueron planteadas desde el año 2000, cuando se desplegaron acciones concretas contra la privatización de los bienes comunes, es preciso ir más allá todavía, cuestionando paralelamente la monopolización partidaria de la decisión política.

Así pues, otro tema fundamental de debate que se plantea, de manera continua, en muchos de los conflictos sociales de 2012, es el de la construcción del Estado Plurinacional, que se diferenciaría del Estado nacionalista mono-cultural en la medida que se asume a sí mismo como comunitario y autónomo y que, por lo tanto, no puede consolidarse dando la espalda o yendo en contra de los anhelos de las naciones indígenas de reconfigurar sus territorios ancestrales y sus sistemas de autoridad y justicia. De ahí que sea imprescindible insistir en fomentar reflexiones desde diferentes espacios y perspectivas emancipatorias respecto a

cómo se pretende implementar un sistema democrático que, desde la aprobación del texto constitucional de 2009, ya no se define únicamente como representativo, sino también como participativo, directo y comunitario, considerando el sentido que se le asigna a la noción de lo plurinacional y a su vínculo con las autonomías indígenas y con el derecho a la consulta previa.

1. La construcción del Estado Plurinacional y la disputa por el sentido y comprensión de la consulta previa, desde la perspectiva de los conflictos por el TIPNIS² y por límites territoriales

En este punto analizaremos el conflicto en torno a la consulta previa en el TIPNIS, pues este, al igual que en 2011, ha sido un tema central a lo largo de 2012, debido a que marca líneas fundamentales de debate y acción política sobre la construcción del Estado Plurinacional. Asimismo, en este marco examinaremos también los conflictos surgidos a raíz de los límites territoriales y que en los días previos a la realización del Censo Nacional de Población se exacerbaban, considerando ante todo su relación con las posibilidades de re-territorialización del país desde lo plurinacional y el hecho de que obliga a encarar el tema de la tierra y el territorio a la luz de la demanda de reconfiguración ancestral, así como de los efectos de las disputas surgidas en torno a la posesión y uso de los recursos económicos desde una lógica más bien municipalista.

Ahora bien, a lo largo de 2012 el conflicto del TIPNIS se articula en torno a dos estrategias de lucha: por un lado, la que se relaciona con la movilización y que se expresa en la organización y realización de la *IX Marcha por la Defensa de la Vida y la Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente y las Áreas Protegidas*, que se inicia a fines del mes de abril; y, por otro lado, la resistencia a la consulta de parte de algunas comunidades, en el propio territorio del TIPNIS, estrategia que se pone en práctica una vez que se comprueba la imposibilidad de entablar un diálogo con el gobierno. Ambas formas de manifestación de desacuerdo con las políticas del gobierno central aparecen como reacción a la promulgación de la Ley 222, llamada *Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore* y que ha sido definida –a nivel nacional y en foros internacionales– por la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la subcentral de pueblos indígenas del TIPNIS y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ), entre otras organizaciones de Tierras Bajas, como una consulta extemporánea y basada en la mala fe, y como una maniobra política para dejar sin efecto práctico la principal conquista de la VIII Marcha: la *Ley 180 de Protección del TIPNIS*.

En esta coyuntura, el Pacto de Unidad, un espacio de articulación de las fuerzas indígenas y campesinas, que surgió en el seno de la Asamblea Constituyente como modelo de unidad de la pluralidad y como el espacio de propuesta y acción política que permitió avanzar de manera más clara en la construcción del horizonte de lo plurinacional, la democracia participativa y comunitaria y las autonomías indígenas, termina desarticulándose internamente y dividiéndose. Esta ruptura enfrenta en una relación polar a las principales organizaciones indígenas del país, como lo son el CONAMAQ y la CIDOB, con las organizaciones cam-

pesinas más importantes, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Indígena Originario Campesinas “Bartolina Sisa” y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, ex colonizadores. Estas tres últimas, junto al Consejo Indígena del Sur, que aglutina a comunidades indígenas, campesinas y colonizadoras ya inscritas en la economía regional de la coca ubicadas en la zona sur del TIPNIS, acusan a las organizaciones indígenas de la IX Marcha de obstaculizar las posibilidades de “desarrollo” de las comunidades del TIPNIS y de frustrar los anhelos de vinculación de poblaciones del Oriente con Occidente. Así pues, en la misma línea del gobierno, las organizaciones campesinas e interculturales arguyen que la construcción de la carretera que atravesaría el corazón de *parque nacional y territorio indígena* tiene por objeto llevar mayor “desarrollo” a las comunidades indígenas del TIPNIS, vinculando a las poblaciones alejadas del Beni al eje central de desarrollo y posibilitando así un mayor control del Estado en áreas de explotación de madera y de caza de lagartos, actividades que estarían siendo realizadas por algunos indígenas de manera ilegal.

Por su parte, las organizaciones indígenas que resisten ante la construcción de una carretera que atravesase el corazón del TIPNIS argumentan que la misma beneficiaría únicamente a 19 de las 63 comunidades indígenas que habitan ese territorio, y que en realidad el proyecto carretero estaría encaminado a resolver demandas de grupos de poder como coccaleros, ganaderos o agroindustriales, interesados en expandir la frontera agrícola para ampliar sus intereses económicos. De ahí que estas organizaciones indígenas aclarasen que a lo que se oponen no es a la construcción de una carretera, sino al modo en que ésta pone en riesgo la preservación del área protegida. En este sentido, plantean que su lucha no es una lucha sectorial, sino una lucha por la defensa de sus formas de vida basadas en la recolección, la cacería, la pesca y la producción, las mismas que están ligadas a modos colectivos de manejo del bosque, y que a su vez defienden los derechos de todas y todos los bolivianos, puesto que apuntan a la preservación de las zonas mejor conservadas de toda la Amazonía y de las cuencas hídricas y nacientes de ríos, además de una diversidad de cientos de especies de fauna y flora.

Por otra parte, las organizaciones indígenas señalan que, además, buscan disputar de manera directa el sentido y la comprensión de lo que supone una consulta previa y el modo en que el derecho a solicitarla influye en la construcción del Estado Plurinacional, rechazando por tanto un tipo de consulta como la planteada por la Ley 222, pues consideran que la misma estaría creando un nefasto precedente para la construcción de la plurinacionalidad debido a que no respeta las formas propias de las naciones indígenas para tomar decisiones.

En consecuencia, su oposición a la Ley 222 se acompaña de una serie de argumentos que articulan un discurso de denuncia respecto al vaciamiento de la consulta previa de su sentido reivindicatorio, situación que estaría llevando a desvirtuar este mecanismo, que es considerado como uno de los principales instrumentos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno. Por esta vía no sólo se denuncia la mala aplicación del mecanismo democrático de la consulta previa, sino también la pervivencia de una serie de obstáculos de tipo normativo y financiero que limitan la implementación de las once autonomías

indígenas en proceso. Además, se denuncia el hecho de que los diputados de las siete circunscripciones especiales indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional no fueron electos por normas y procedimientos propios, impugnando además la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, por considerar que la misma se habría dado bajo una lógica monocultural, ignorando las normas y prácticas de la democracia comunitaria.

Por último, las organizaciones indígenas también denuncian acciones gubernamentales de intromisión, que han producido división interna en sus organizaciones al fomentar la implementación de prácticas clientelares. Cabe aquí mencionar que también existen voces críticas al interior de las organizaciones indígenas impulsoras de las tres Marchas de Defensa del TIPNIS que se han dado durante el gobierno de Evo Morales, que reclaman porque las dirigencias no habrían tenido el cuidado suficiente para no permitir que algunos grupos de derecha capitalicen a su favor este enfrentamiento con el gobierno.

En este punto, creemos necesario llamar la atención sobre el hecho de que la ruptura del Pacto de Unidad, como un espacio de articulación de propuesta política plural de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, ha limitado las posibilidades de entablar un diálogo político abierto sobre temas tales como el régimen de tenencia de la tierra, la reconstitución de territorios ancestrales y las formas de construcción política de un Estado Plurinacional. Queda también como tarea pendiente, en un proceso político que se define como emblemático en términos de implementación de transformaciones profundas, examinar de manera colectiva las razones de la ruptura entre las principales organizaciones sociales, campesinas e indígenas, yendo más allá de los argumentos que se limitan a señalar que esta ruptura únicamente respondería a las acciones de intromisión vía clientelar y a una simple división maniquea entre lo indígena y lo campesino.

En este sentido, parece importante preguntarse sobre los matices y complejidades en torno a las diferentes perspectivas de estos grupos campesinos e indígenas y sus visiones sobre el desarrollo, la propiedad de la tierra, la democracia y también sobre la condición de clase de sus actores, que en algunos casos evidencian algún tipo de acercamiento con actores e intereses empresariales por, quizás, ya haber experimentado importantes procesos de acumulación de capital. Probablemente así podría explicarse la realización de una cumbre organizada por el gobierno a principios de esta gestión en la que participaron las tres organizaciones campesinas afines al gobierno junto a los principales sectores agroindustriales representados por la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, que fuera uno de los principales opositores del gobierno a sus inicios y donde se evidenció una suerte de coincidencia sobre el discurso de desarrollo entre actores hasta hace poco claramente enfrentados.

Otro tema pendiente de debate en lo que debería ser una agenda mínima de reflexión en el marco del Proceso de Cambio es el de las condiciones de posibilidad para la re-territorialización del país, mediante la reconstitución de territorios ancestrales y la implementación de las autonomías indígenas. Al menos esta es la forma en la que las organizaciones indígenas han planteado construir una de las condiciones principales de un Estado Plurinacional. Así pues, las posibilidades de constitución de la condición plurinacional del Estado, ya sea por la vía de la

reconfiguración de los territorios y las formas de autoridad ancestrales que propone el CONAMAQ, o por el camino de la re-territorialización a través del reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que se propone desde las Tierras Bajas, comienzan a asumir un contenido aún más complejo cuando en el escenario político aparecen además otras demandas expresadas por actores sociales, en muchos casos también campesinos e indígenas, sobre la fijación de límites territoriales como estrategia de apropiación de recursos económicos desde una lógica más bien municipalista, lógica que, lejos de cuestionar la división política republicana, la refuerza.

...en el debate sobre la condición plurinacional del Estado no debe dejar de hacerse una reflexión necesaria de lo que en este proceso histórico entendemos por bien común

Asimismo, cabe mencionar que los conflictos sobre límites territoriales se exacerbaron aún más en los días previos a la realización del Censo Nacional de Población, pues las cifras que arroje serán determinantes para establecer la posterior distribución de recursos económicos y porque las diferentes poblaciones enfrentadas por límites entendían que esta encuesta nacional determinaría la futura delimitación territorial. Así, las disputas por límites territoriales entre municipios y departamentos estarían expresando una multiplicidad de demandas de posesión de un espacio geográfico determinado por altas potencialidades de explotación económica. En este sentido, los datos socializados por el Ministerio de Autonomías respecto a la problemática de límites dan una importante idea de la magnitud de la misma, cuando dan a conocer que actualmente en ese despacho se registran 84 procesos por conflicto de límites, que involucran a 164 municipios del país, señalándose además que de los 339 municipios que tiene Bolivia, 314 carecen de una delimitación definida. Y si bien el gobierno ha promulgado una Ley de Delimitación Territorial, orientada a facilitar la resolución de conflictos por la vía de la conciliación, cabe aquí preguntarse si las demandas expresadas en los conflictos de límites son o no contrarias a las aspiraciones de construcción de un nuevo tipo de Estado, que supere los límites republicanos de demarcación territorial y donde la condición de lo plurinacional remita a pensar los conflictos de límites no sólo desde la perspectiva de resolución por la vía de la conciliación, sino examinando sus posibilidades de promover una reconfiguración territorial más amplia.

Considerando lo anterior, en este análisis es preciso no dejar de lado otro tema de fondo que termina vinculando el conflicto del TIPNIS con los que surgen por los límites territoriales: el de la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas como un derecho político fundamental cuyo ejercicio no puede faltar en el horizonte de la construcción de un Estado Plurinacional. Dicho tema plantea grandes desafíos cuando se tiene en cuenta que existe un número importante de conflictos territoriales que no se vienen procesando desde la perspectiva de la reterritorialización indígena, sino que más bien se busca resolverlos intentando definir límites según un criterio que contribuya a garantizar a las partes involucradas que

las mismas podrán acceder a los recursos económicos presentes en el territorio en disputa. Sin embargo, esta modalidad de resolución termina repercutiendo en el proyecto político de reconfiguración territorial propuesto desde la visión indígena y que apunta a la dotación de tierras comunitarias y a la efectiva implementación de las autonomías indígenas, debido a que el mismo encuentra su principal obstáculo en el ordenamiento territorial colonial y sus continuidades republicanas, cuyos límites geográficos son defendidos por muchas de las poblaciones inmersas en la diversidad de conflictos por límites que en los últimos cinco años se han multiplicado en el país.

Por último, creemos que en el debate sobre la condición plurinacional del Estado no debe dejar de hacerse una reflexión necesaria de lo que en este proceso histórico entendemos por bien común. En las líneas precedentes, señalábamos que para el gobierno la carretera por el TIPNIS es presentada como la posibilidad de desarrollo para los habitantes del parque nacional y para el resto de las y los bolivianos, debiendo ser el Estado, por tanto, el actor llamado a definir dicho bien común, yendo más allá de disputas que supuestamente serían sectoriales y/o corporativas. Sin embargo, lo que no se explicita al plantear el bien común en esos términos es que, al privilegiar dicho enfoque, se estaría llevando a aumentar el nivel de centralización de poder en la toma de decisiones, cuando con la construcción de un Estado Plurinacional lo que se pretende es promover la articulación de diferentes horizontes emancipatorios, desde una comprensión compleja de los derechos individuales y colectivos y desde la profundización de un régimen democrático que trascienda los límites de la democracia representativa, asentada en la división de mayorías y minorías, hacia una democracia participativa, directa y comunitaria. Es decir, que vaya más allá de estas concepciones y prácticas que ubican lo democrático y lo político como elementos que tienen su lugar sólo en las instituciones liberales heredadas, a través del cuestionamiento de las ideas de que el Estado es el único llamado a definir el bien común y de que los diversos actores sociales lo único que hacen es plantear demandas circunscritas a sus intereses específicos. De ahí que sea importante destacar que el Estado Plurinacional no puede construirse desde una dinámica en la que un grupo de funcionarios interpreta de manera unilateral las demandas sociales para traducirlas en políticas públicas, definiendo el “bien común”, sino que para llegar a consolidar ese nuevo Estado se requiere avanzar en la creación de formas políticas orientadas a producir las condiciones para generar cambios desde diferentes espacios de auto-organización social.

2. Conflictos mineros y nacionalización

A lo largo de mayo y junio de 2012, dos conflictos vinculados con el control de yacimientos mineros acapararon la atención del gobierno boliviano debido al nivel de violencia que estos desataron en las regiones donde se desarrollaron. El primero de los conflictos tuvo como escenario la comunidad de Mallku Khota, situada al norte del departamento de Potosí, mientras que el segundo se desarrolló en La Paz, en la zona de Colquiri.

Si bien en ambos casos los antagonismos entre los distintos actores involucrados en la problemática³ se venían gestando desde hacía mucho tiempo atrás,

dando cuenta de la existencia de una tensión latente, su punto más álgido fue alcanzado cuando entre las estrategias de lucha empleadas por los protagonistas de cada conflicto se fue evolucionando de la protesta a la toma de rehenes, el enfrentamiento armado y la ocupación de las instalaciones mineras, en el caso de Mallku Khota, y el avasallamiento, el bloqueo de caminos y el ataque físico (con contenido simbólico también) a la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en el caso de Colquiri.

Asimismo, antes de pasar a la fase del diálogo, en ambos casos la violencia se radicalizó debido a que el gobierno ordenó la intervención policial, la cual, más que imponer la calma en ambas zonas, generó nuevas fricciones, involucrando esta vez a la ciudadanía y a las fuerzas del orden, a las cuales los diferentes sectores sociales denuncian además por haber cometido violaciones a los derechos civiles y políticos de algunos dirigentes, que fueron apresados sin considerar las garantías constitucionales que los protegen y sin que exista claridad respecto a las causas por las cuales se les iniciaron los procesos judiciales.

En este escenario, luego de varios meses de sucesivos enfrentamientos, los diversos actores sociales involucrados en la problemática terminaron accediendo a ingresar a una etapa de negociación, comprometiéndose entre sí, primero, y con el gobierno, después, para llegar a un acuerdo que frenara los antagonismos, habiéndose optado por ofrecer y aceptar como la mejor alternativa para superar la crisis la instauración de nuevos procesos de nacionalización.

Pero si bien el modo en que ambas situaciones críticas fueron evolucionando y las dinámicas de resolución trajeron a la memoria los hechos ocurridos en Huanuni en 2006, hay que destacar aquí que las problemáticas que salen a la luz tanto en Mallku Khota como en Colquiri poseen características particulares que requieren examinarse a la luz del proceso más amplio que constituye el hilo conductor del presente análisis y que tiene que ver con la consolidación del Estado Plurinacional, sobre todo porque lo que ambos casos sacan a la luz –como ocurre también en el caso del TIPNIS y los conflictos de límites– es que la conflictividad surgida no refleja simplemente la existencia de una pugna sectorial, sino más bien devela la existencia de problemáticas estructurales no resueltas que ponen en entredicho, además, los modos de gestionar la aplicación de los acuerdos logrados. Es decir que requieren ver no solamente el tema de la creación de fuentes de empleo sino también el del uso y explotación del territorio, así como el carácter de las relaciones que se dan entre las varias categorías de trabajadores y trabajadoras, a la luz de las diversas modalidades de explotación obrera y no obrera que se van configurando.

Si bien al hacerse un seguimiento de las últimas nacionalizaciones mineras queda claro que la administración de Evo Morales no se ha alejado de la línea discursiva que sobre el tema mantiene desde 2005, y que exhorta a la recuperación y uso exclusivo de los recursos naturales de Bolivia para consolidar la soberanía económica y beneficiar socialmente a la población instando a limitar cada vez más el poder de las transnacionales, aún queda por colocar y discutir a profundidad en la mesa del debate público los alcances de un proyecto económico que tiene en la explotación minera una de sus bases principales.

Es así que, además de tomar en cuenta las implicaciones de la reactivación del sector minero para la generación de empleo y para ampliar los recursos del

erario nacional, cabe examinar aspectos referidos a los alcances y los límites que debe tener la intervención estatal y los elementos cruciales que el gobierno debe considerar al momento de llevar adelante la gestión de los recursos naturales, siendo urgente preguntarse cómo se piensa involucrar a los actores sociales en esta dinámica.

Primero, porque al momento de definir un nuevo modelo de economía en el proceso constituyente una de las premisas básicas fue justamente apelar por lo plural y colectivo como elementos que, al aplicarse, incrementarían la calidad de vida promoviendo el vivir bien y el trabajo digno. Segundo, porque al asumir la inclusión de las reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios campesinos como un desafío central, el instrumento político que impulsó el proceso de cambio asumió el mandato de regirse según lo estipulado en la Constitución Política del Estado (CPE) respecto al tema de la consulta previa como condición necesaria para la explotación de los recursos naturales que se encontrasen en territorios de comunidades ancestrales (Art. 30, inc. 15).

Tomando en cuenta lo anterior, es preciso analizar la problemática minera sin perder de vista algunas preguntas cuya relevancia radica en que contribuyen a ir vislumbrando posibles vetas de análisis, rescatables al momento de alentar una reflexión respecto a si es factible o no lograr una reorganización económica conciliando prácticas comunitarias, estatales, privadas, sociales y cooperativistas. Dichas preguntas son las siguientes. Cuando se argumenta que una nacionalización se realiza a favor del Estado Plurinacional, ¿no es central y necesario clarificar qué sujetos sociales son los que integran dicho Estado y los que deberían beneficiarse con la medida? ¿Cómo es posible garantizar que las modalidades de explotación de los recursos estatizados sean aquellas que no afecten la calidad de vida de las poblaciones que habitan los territorios de donde se extraen tales recursos? ¿Cuál sería el nivel de apropiación social que los nuevos grupos de trabajadores mineros tienen respecto a lo que la CPE señala sobre el alcance y límite de los derechos que esta norma les reconoce? Y, yendo más lejos aún, ¿en qué nivel estos sujetos cumplen con los mandatos básicos de la ley suprema que pretende reorganizar horizontalmente los vínculos y el uso de los recursos económicos para superar las estructuras capitalistas y coloniales heredadas?

De modo directo o indirecto, los conflictos de Mallku Khota y de Colquiri invitan a plantearse las anteriores interrogantes, ya que ambos terminan mostrando que, en los últimos cincuenta años, la minería no sólo ha sido el terreno de la lucha que enfrentaba a la clase obrera con los grupos o élites que componían la oligarquía minera, sino que ha sido también un espacio de reconfiguración de relaciones laborales y de poder y de diversificación de percepciones sobre lo que se entiende por desarrollo económico. En el caso de Colquiri, dicha reconfiguración ha llegado incluso a albergar modalidades de subsistencia que se asemejan a las practicadas en épocas coloniales y formas de relación entre sujetos agrupados bajo una misma denominación (cooperativistas), pero que se vinculan entre sí de maneras jerárquicas y reproducen de manera velada la relación obrero-patronal⁴.

Así pues, lo que la aparición de conflictos como el de Mallku Khota y Colquiri quizá pone en cuestión es definir en qué medida las propias organizaciones sociales están interiorizando los alcances del concepto de lo colectivo aplicado al

trabajo, en tanto eje alrededor del cual se genera la estructuración social con base en el manejo de la integración de los recursos y los procesos productivos, del surgimiento y evolución de la legislación laboral y de la organización de las acciones y las relaciones de los diversos grupos y clases sociales; y que insta a considerar cómo la reconstrucción de la historia de las clases trabajadoras –así como de la transformación y cambios experimentados en el marco del sistema capitalista– influyen en el desarrollo de un proyecto político que proclama como principios guía la inclusión y la redistribución equitativa. De ahí que a continuación nos dediquemos a analizar el modo en que cada problemática se manifiesta, así como sus particularidades, para ver si a partir de ello es posible identificar algunas pautas que nos permitan ensayar una respuesta.

2.1 Mallku Khota: comunidades, proyectos de explotación y medio ambiente

A fines del mes de abril, en la zona donde se encuentran los municipios de Sacaca y de San Pedro de Buena Vista, al norte de Potosí, comenzaron a registrarse tensiones entre la empresa privada canadiense South American Silver Corporation (SASC) y algunos grupos de pobladores de las comunidades del lugar.

Las mismas aparecieron a raíz de que estos últimos consideraban que, debido a que en el proceso de pasar de la fase de exploración minera⁵ a la fase de explotación de los importantes yacimientos de plata e indio descubiertos allí bajo la modalidad de cielo abierto prevista por la SASC, se corría el riesgo de contaminar tres de los lagos mayores de la zona, cuyas aguas son empleadas por los campesinos y comunarios para dar de beber al ganado y para instalar criaderos de truchas.

Inicialmente, parecía que el conflicto tendía a presentarse como un desencuentro de posiciones a este respecto entre la comunidad de Mallku Khota, donde se encontraba la principal concesión otorgada a la transnacional minera, y esta última, el cual estaría motivado por la falta de información respecto a los futuros impactos al medio ambiente por los trabajos de extracción a realizarse. De hecho, antes de que el problema se agudizara, el gobierno del presidente Evo Morales dio a conocer un estudio en el que se revelaba que, en efecto, existía contaminación en dichos lagos, pero atribuía la misma no a los trabajos realizados por la SASC sino más bien al hecho de que en la zona se ubican familias que se dedican a la explotación ilegal del oro, empleando mercurio para sus actividades⁶.

Este argumento fue rechazado por las organizaciones sociales con presencia en la zona de conflicto, sobre todo por los dirigentes del CONAMAQ, quienes comenzaron a movilizarse para exigir la expulsión de la SASC, señalando no sólo que las operaciones de la compañía ponen en riesgo la calidad de vida de los comunarios, sino que además las mismas atentan contra sus derechos territoriales, ya que la SASC tendría la intención de desplazar de la zona a los pobladores de Mallku Khota para así poder aplicar la modalidad de explotación que más le favorezca.

A partir de ese momento empezaron a salir a la luz otros elementos que complejizan el conflicto. Entre ellos se cuentan: a) la demanda de los pobladores de Mallku Khota de que se respete el ejercicio del derecho a la consulta previa estipulado en el artículo 30 de la CPE, cuando lo que está en juego es la explotación

de los recursos naturales no renovables que se hallan en territorios indígena originarios campesinos; *b*) la exigencia de que el Estado permita que sean los propios comunarios quienes se dediquen a la tarea de explorar y explotar los recursos naturales de la zona; *c*) la necesidad de definir si las ganancias a obtenerse con la explotación de la plata y del indio deberían beneficiar a los habitantes de las TCO donde se encuentran los yacimientos, al departamento de Potosí, para paliar la pobreza en la que el mismo se encuentra, sobre todo en la región norte, o pasar a alimentar el erario nacional, bajo la lógica de que los mismos son recursos públicos que deben asignarse al desarrollo económico global del país; y *d*) la resistencia que manifiestan pobladores y autoridades de 44 comunidades que componen cinco de los ayllus del norte del departamento de Potosí frente a la expulsión de la compañía Mallku Khota, ya que la misma les habría garantizado la contratación de mano de obra por otros tres años más, medida que es vista por estos actores como una señal positiva en lo que al reforzamiento del empleo local se refiere.

La conjunción de los aspectos arriba mencionados poco a poco fue dando paso a la configuración de una modalidad de conflicto que terminó en la confrontación violenta entre los comunarios que exigían la nacionalización de la mina Mallku Khota y aquellos que pedían el respeto a la concesión obtenida por la SASC y, en consecuencia, a sus fuentes de trabajo como personal obrero de la mina, dando paso a ataques constantes por parte de los primeros a un campo minero de la compañía, al avasallamiento de tres comunidades que apoyaban la permanencia de la SASC en Bolivia y al secuestro de trabajadores de la empresa, que fueron acusados por los comunarios de haberse infiltrado en algunas asambleas disfrazados de campesinos.

Todo ello indujo a que el gobierno de Evo Morales ordenara el desplazamiento de un contingente policial para frenar la toma de los yacimientos, suscitando a partir de allí una serie de choques entre comunarios y las fuerzas del orden.

Luego de ello, varios representantes de los ayllus del norte de Potosí decidieron asumir medidas de presión, como la marcha, para presentar al gobierno central su pliego petitorio, siendo las siguientes las demandas principales: la promulgación de una ley destinada a erradicar la extrema pobreza en la zona, la expulsión de la empresa canadiense South American Silver, la anulación del contrato de concesión minera de Mallku Khota, la administración de los recursos naturales por parte de los ayllus originarios del norte de Potosí y la liberación del dirigente Cancio Rojas, detenido por haber sido acusado de ser uno de los principales instigadores de los enfrentamientos con la policía y a quien se le asignó un proceso legal poco claro.

Al analizar los contenidos de este pliego petitorio, salta a la vista que algunos de los puntos nodales alrededor de los cuales se articuló el conflicto y que hacen a la definición de una política económica que marque los alcances del extractivismo han desaparecido, para ser sustituidos por la exigencia unánime de los grupos mayoritarios de recurrir a la nacionalización.

Así pues, el tema de la consulta previa quedó en el aire, pues la discusión pasó a focalizarse en cómo garantizar la explotación local y colectiva de los yacimientos como un derecho exclusivo de las comunidades de la zona, dando por sentado que los derechos que predominan son los de éstas y los de sus organizaciones sociales, para las cuales la estatización termina siendo tan sólo un medio que

les permitirá erigirse como agentes autónomos capaces de generar para su zona ingresos sustanciales con la venta de minerales. Sin embargo, en medio de todo esto, aún queda sin discutirse cómo puede compatibilizarse la explotación minera con la preservación del medio ambiente, cuestión que, como veremos líneas más adelante, al iniciarse el 2013 continúa sin abordarse.

En ese marco, los acuerdos alcanzados se limitaron a hacer viable la reversión de todas las concesiones mineras registradas a nombre de la compañía minera Mallku Khota, determinando la suspensión de todas las actividades y formas de explotación de los minerales de ese yacimiento, así como la adjudicación al Estado de la responsabilidad de asumir el control de los modos de producción de esa mina.

Pero si bien al concluir el año 2012 el Estado anunciaba que tenía previsto invertir a lo largo del 2013 alrededor de 15 millones de bolivianos para llevar a cabo los trabajos de exploración y explotación en Mallku Khota⁷, al iniciarse el nuevo año reaparece la amenaza de conflicto, cuando se conoce la decisión de los ayllus del norte de Potosí de optar por la creación de cooperativas para explotar ese yacimiento. Este anuncio suscita una respuesta inmediata de parte de los sindicatos de obreros y de trabajadores mineros asalariados, quienes califican al sistema cooperativista como una modalidad de explotación de índole capitalista y depredadora del medio ambiente.

De ahí que argumentemos que el tema de la sostenibilidad medioambiental en este caso haya dejado de ser un elemento de movilización y aglutinación social central, como lo fue al inicio del conflicto, para convertirse en un tema marginal, como lo va siendo también la cuestión de a quién debería beneficiar la explotación de los recursos naturales, que ha quedado en la nebulosa y que, si se llega a imponer la cooperativización, pasaría a respaldar intereses concretos y grupales y no así a todos los habitantes del departamento de Potosí o del país.

2.2 El conflicto en Colquiri: cooperativistas y asalariados

En junio de 2012, el presidente Evo Morales anunció que el gobierno central tomaba la decisión de nacionalizar parcialmente la mina de plata, estaño y zinc de Colquiri, situada a 160 kilómetros al sur de la capital, también en el departamento de La Paz, la cual hasta ese momento estaba siendo explotada por la empresa suiza Glencore y que pasaría a ser administrada por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Al momento en que Morales tomaba esta determinación, la multinacional Glencore, con el fin de reducir costos, tenía subarrendada a la Cooperativa "26 de Febrero" la veta Rosario, teniendo el compromiso de comprar exclusivamente a dicha cooperativa el mineral extraído. Es así que el anuncio de la nacionalización terminó desatando un clima de incertidumbre entre los cooperativistas, que inicialmente pudo controlarse mediante la firma de un acuerdo entre los ministerios de Gobierno y Minas, la COMIBOL, la Cooperativa "26 de Febrero" y el Sindicato Laboral de Colquiri, el cual establecía que con la medida no se afectaría a las áreas de trabajo privadas de explotación minera concedidas a la cooperativa. Sin embargo, poco tiempo después, el sector de los mineros asalariados terminó entrando en conflicto con el de los cooperativistas, a raíz de que estos últimos, desconociendo el principio de delimitación establecido en el acuerdo, invadieron

el sector del polvorín de la mina dependiente de la Empresa Minera Colquiri.

A partir de ese episodio comenzó la disputa abierta entre estos grupos: así, mientras los mineros asalariados exigían la nacionalización total de Colquiri, los cooperativistas se opusieron a la misma, con el fin de conservar las concesiones que ellos poseían en los yacimientos. Paralelamente, ambos sectores comenzaron a demandar la asignación exclusiva de la explotación de la veta Rosario. Es así que entre junio y septiembre se fue sucediendo una serie de enfrentamientos y avasallamientos al interior de Colquiri, con la respectiva escalada de violencia que dejó heridos y muertos en ambos bandos, dando paso luego a la asunción de medidas de presión aplicadas por los cooperativistas y que terminaron aislando al departamento de La Paz del resto del país, pero también por los asalariados, que incluso llegan a ocupar las oficinas de la COMIBOL para exigir la nacionalización total de la veta Rosario.

El problema llegó a su punto más álgido cuando en agosto el ejecutivo emitió el Decreto Supremo 1.337, mediante el cual, además de delimitar las áreas de explotación de la veta, estableció que sólo los cooperativistas afiliados a la empresa 26 de Febrero podrían operar ese área de explotación. Esta decisión fue rechazada por los mineros asalariados, quienes no querían renunciar a la explotación de la veta Rosario porque esta actividad les permite ampliar el número de fuentes laborales. Sólo después de cinco meses de conflicto ambos sectores aceptaron explotar mancomunadamente la mina Colquiri y la veta Rosario, firmando un convenio que estipula que la misma será dividida, de forma tal que la parte sur de la misma pueda ser aprovechada por la estatal COMIBOL, y la parte norte por la Cooperativa "26 de Febrero".

La anterior síntesis del conflicto suscitado en Colquiri nos ayuda a vislumbrar cómo la reorganización de lo económico con base en el extractivismo y vinculada a la generación de empleo es también un tema que requiere analizarse en detalle al examinarse los alcances de lo plurinacional, sobre todo cuando el proyecto político-estatal que se impulsa tiene como asignatura pendiente definir cómo se puede hacer convivir dos lógicas o culturas laborales que siguen caminos dispares pero que dependen de la explotación de un mismo rubro.

Al respecto, hay que señalar en primer lugar que establecer la lógica extractiva y, en consecuencia, las nacionalizaciones de los yacimientos mineros como los elementos sobre los cuales se debe apoyar el desarrollo económico del Estado Plurinacional, obliga a volver a las preguntas (ya formuladas en el caso de Mallku Khota) que instan, en primer lugar, a reflexionar sobre quién debería ser el legítimo beneficiario de la recuperación de los recursos naturales y de su uso para impulsar el desarrollo laboral-productivo: la población nacional, los sectores sindicalizados, los socios cooperativistas o los trabajadores que dependen de ellos.

En segunda instancia, cabe preguntarse además cómo es posible conciliar las acciones de dos sujetos sociales que poseen un recorrido histórico importante en la esfera de las luchas sociales, como son los cooperativistas y los mineros asalariados, cuando sus prácticas han ido asumiendo características que provocan que las lógicas laborales que aplica un sector sean antagónicas a las que propugna el otro, sobre todo porque no manejan los mismos códigos en lo que respecta al manejo de horarios de trabajo, la remuneración, el respeto de las conquistas en términos

de derechos laborales y de sindicalización, la preservación del medio ambiente, la planificación laboral con visión a largo plazo y las políticas de contribución en términos impositivos⁸.

De igual manera, dado que la minería se desenvuelve sobre la base de recursos limitados, cuya valoración también viene dada desde los propios mercados internacionales de minerales que responden al sistema de acumulación capitalista, cabe preguntarse también si llegar a acuerdos que sólo demarquen áreas de trabajo es una solución suficiente para frenar los avasallamientos mineros, sobre todo si se tiene en cuenta que la lógica que rige el funcionamiento del cooperativismo en su aplicación práctica es la del trabajo a destajo. Ésta ha suscitado la asunción de medidas de sobrevivencia que incluyen el robo de mineral y la ocupación ilegal de espacios de explotación estatal o privada para seguir obteniendo recursos económicos cuya distribución al interior del propio sector cooperativista parece no ser suficientemente equitativa.

Finalmente, el conflicto en Colquiri debe instarnos a reflexionar sobre un último aspecto, que tiene que ver con cuestionar la tendencia a dibujar o representar el cooperativismo como un fenómeno homogéneo, tendencia que impide que se lo analice considerando su evolución histórica y el modo en que han ido transformándose las relaciones sociales de una diversidad de actores que se involucran en su seno, evidenciando además la pluralidad de los cambios en las estructuras del mercado de trabajo, la concepción del empleo y las diversas situaciones de trabajo, así como los impactos en la seguridad social y el carácter de las relaciones que se dan entre los trabajadores y trabajadoras, considerando el enfoque de género, entre ellos, ellas y sus familias, y el empleador o empleadora, tomando en cuenta la perspectiva económica e histórico-social.

En efecto, el desarrollo del cooperativismo debe examinarse tomando en cuenta que, como señala Jocelyn Michard (2008), no es el resultado de un deseo, sino de una necesidad: la de sobrevivir en momentos de crisis. No debemos olvidar por tanto que los primeros cooperativistas aparecen como tales en pleno auge del modelo neoliberal y tras la aplicación del Decreto Supremo 21.060. Al no encontrar fuentes de trabajo en otros campos, muchos de los mineros relocalizados decidieron volver a trabajar en las minas, asociándose unos con otros e intentando sobrevivir en esa difícil coyuntura de crisis de los precios de los minerales.

Con la apertura del sector minero a la inversión privada, el cooperativismo comenzó también a asumir las dinámicas de apropiación y explotación individual y particular de áreas de trabajo, en las que se fueron filtrando lógicas de explotación de carácter patronal que permitieron la aparición de la categoría de "socios", que poseen vetas en las minas pero no las trabajan personalmente y que tienen como obligación afiliarse y entregar parte de sus recursos a las federaciones nacionales de cooperativas. Dichos socios, sin embargo, no siempre tiene la misma jerarquía que otros, y a la vez se sitúan por encima de otras categorías de mano de obra que sirven en las cooperativas, los llamados peones y segundas manos, que son a quienes los socios contratan para que exploten el mineral con sus propios instrumentos y pagándoles montos fijos por cada turno de trabajo, pero exigiéndoles la entrega de todo el mineral extraído para su comercialización.

Lo anterior nos muestra que al no haber aparecido como un proyecto planificado y conquistado, con directrices políticas orientadas a promulgar la solidaridad y las relaciones democráticas y horizontales de quienes integrarían sus filas, el cooperativismo no ha podido sustraerse de la creación de jerarquías, pero que ya han comenzado a ser cuestionadas, como se ve en el conflicto de Colquiri, en el cual también las bases de la Cooperativa “26 de Febrero” consideraron emplearse como obreros regulares en la Empresa Minera Colquiri.

...posicionar una reflexión en términos de descolonización y plurinacionalidad insta a preguntarse cómo se pretende acomodar y reacomodar la institucionalidad y la acción público-estatal...

En suma, los desafíos que Mallku Khota y Colquiri plantean a futuro para la consolidación del Estado Plurinacional incluyen dos tendencias a tener en cuenta: a) aquella que insta a proceder a una reformulación normativa, que incluya el ajuste del Código de Minería considerando los derechos que la CPE reconoce a pueblos indígenas, originario campesinos, en el tema del derecho a la consulta, y a asalariados y cooperativistas como sujetos sociales que interactúan en el campo económico y que requieren clarificar sus horizontes de acción ajustándolos al modelo económico plural; y b) aquella otra que obliga a entablar un debate a nivel macro, para definir en qué medida el desconocimiento de la situación de los peones y segundas manos que desarrollan el trabajo en las cooperativas y su mantenimiento como fuerza de trabajo precaria y sin derechos no desdice los intentos de descolonización, puesto que reproduce una forma de explotación humana similar a la que se manejaba en la colonia con la mita.

Ambas tendencias deben considerarse en la mesa de discusión, haciendo que las nuevas acciones políticas tengan su anclaje en las experiencias históricas, culturales y en las condiciones materiales de vida de esa diversidad de sujetos sociales involucrados activamente en el cambio de rumbo que vive el país hace más de una década, y que tiene como telón de fondo debatir –como vemos en el caso del TIPNIS, de los conflictos de límites y de los enfrentamientos mineros–, en líneas generales, la cuestión del contenido que se le debe dar al poder y su ejercicio, pensando en la naturaleza de las relaciones que genera.

Así, posicionar una reflexión en términos de descolonización y plurinacionalidad insta a preguntarse cómo se pretende acomodar y reacomodar la institucionalidad y la acción público-estatal, considerando las pautas que al Estado le van marcando los sectores sociales organizados que, como fruto de las dinámicas de la Asamblea Constituyente, se han visibilizado y posicionado como agentes políticos e interlocutores legítimos. En síntesis, invita a analizar cómo se va definiendo un nuevo esquema de poder examinando al detalle cuáles son sus objetivos, qué sistemas de diferencias enfrenta, desarticula, refuerza o reproduce, con qué instrumentos cuenta, en qué estructuras se cristaliza, a qué actores promueve como protagonistas y qué resistencias se le aparecen.

Bibliografía

- Absi, Pascale 2005 *Los ministros del Diablo: el trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí* (La Paz: IFEA y PIEB).
- Anónimo 2013 "Estado inyectará más de 15 millones de Bs. en Mallku Khota" en *Jornadanet.com* (La Paz: Aurios) 11 de enero.
- Michard, Jocelyn 2008 *Cooperativas mineras en Bolivia: formas de organización, producción y comercialización* (Cochabamba: CEDIB).
- Quispe, Aline 2012 "Denuncian contaminación ambiental en Mallku Khota" en *La Razón* (La Paz) 26 de mayo.
- VVAA 2012 *Extractivismo y resistencia indígena en el TIPNIS* (La Paz: Autodeterminación) Colección "El horizonte interior".

Notas

1 Marx Chávez señala al respecto: «El "desarrollo", ese paradigma occidental de la modernidad capitalista, en el contexto de la historia colonial que nos atraviesa, está de nuevo en discusión y permea de diferentes maneras y con varios alcances los diferentes mundos de la vida. Carreteras, satélites, escuelas, canchas de fútbol, hidroeléctricas, celulares, automóviles y electrodomésticos forman parte de la fascinación del capital, donde el fetiche del desarrollo está identificado con la idea de bienestar o crecimiento económico propios del horizonte de dominio imperial de los países más poderosos y "desarrollados" del planeta. Paradójicamente este imaginario y estos proyectos, que alimentan y favorecen un sistema de desigualdades sociales, de expropiación de los recursos naturales y de amenaza de extinción de culturas indígenas enteras, es asumido por los gobiernos "progresistas" de Latinoamérica». Cf. VV. AA. 2012 *Extractivismo y resistencia indígena en el TIPNIS* (La Paz: Autodeterminación) Colección "El horizonte interior", pp. 95-96.

2 Para mayores detalles sobre el modo en que esta problemática se desarrolla a lo largo de 2012 y de las características que asume se pueden consultar los informes de coyuntura correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de 2012 en la sección del OSAL del sitio del CLACSO, en <www.clacso.org.ar>.

3 Empresas transnacionales, campesinos que trabajan eventualmente en las minas y comunarios de

ayllus, por un lado, y mineros asalariados de la empresa Minera Colquiri y cooperativistas, por el otro.

4 A un estudio importante que rastrea los orígenes del cooperativismo en la historia de Bolivia llegando a asociar al mismo con la modalidad de "kajcheo" o robo de mineral, practicada en la época colonial, lo podemos encontrar en el libro de Pascale Absi *Los ministros del Diablo: el trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí*, impreso en La Paz en 2005 por edición del IFEA y el PIEB.

5 En 2004 el gobierno boliviano otorgó a la empresa norteamericana General Minerals Corporation, a través de su subsidiaria, la Compañía Minera Mallku Khota, la concesión sobre los yacimientos en la mina del mismo nombre para fomentar en ella los trabajos de exploración y explotación con fines privados.

6 Ver el artículo de Aline Quispe "Denuncian contaminación ambiental en Mallku Khota" en *La Razón* (La Paz) 26 de mayo de 2012.

7 Cf. "Estado inyectará más de 15 millones de Bs. en Mallku Khota", anónimo, 11 de enero de 2013, en *Jornadanet.com* (La Paz: Aurios).

8 De acuerdo con lo que estipula el Código de Minería (1997), de los tres impuestos que deben pagar todos los sectores mineros que operan en el país, los cooperativistas sólo contribuyen con la regalía minera, mientras que el sector privado y estatal aportan además con el Impuesto a las Utilidades de las Empresas y su alícuota adicional.

Brasil

Agravamento da crise, coesão do bloco dominante e novos horizontes para as lutas sociais¹

ROBERTO LEHER

Professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq e coordenador do comitê brasileiro do OSAL.

Resumen

Los autores hacen un balance de la política de los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff en el que ponen en cuestión los planteos posneoliberales y neodesarrollistas al enfatizar la hegemonía del capital financiero y transnacional del agronegocio y la minería en el bloque de poder dominante en el Brasil, en cuya economía se producen fusiones y adquisiciones que la desnacionalizan de acuerdo al imperialismo en curso. Expresan que el Estado y el sindicalismo conciliador contienen las luchas sociales que los sacuden, que no traspasan el marco económico corporativo en el mundo del trabajo fabril y el defensivo ante el recorte presupuestario en la educación y la salud públicas, a la vez que aquél ralentiza la socialización de las tierras y promueve una reversión de la reforma agraria que favorece a los propietarios, al igual que impulsa la instalación de centrales hidroeléctricas y el Programa de Aceleración del Crecimiento, ante lo que se movilizan los campesinos y los pueblos indígenas en defensa de la tierra y la naturaleza. Asimismo, concluyen

Abstract

The authors take stock of the policies pursued throughout Lula Da Silva's and Dilma Rousseff's administrations and question post-neoliberal and neo-developmental concerns by underscoring the hegemony of the transnational and financial capital enjoyed by Brazil's powerful agribusinesses and mining interests, with a mergers-and-acquisitions-ruled economy which leads to denationalisation in accordance with current imperialism. They claim the state and conciliatory unions engender the very same social struggles that shake them, that they fail to transcend both the economic corporative framework of factory life and the defense line in terms of budget cuts in public health and education, while at the same time stemming land socialisation and promoting a return to agricultural reform which favours landowners, and promotes hydropower and strengthens the Growth Acceleration Program (Programa de Aceleración del Crecimiento), which in turn moves peasants and indigenous peoples to defend the land and its natural environment. To finish, they

que el polo de la clase obrera tendrá que reflexionar sobre la estrategia socialista en el marco de un bloque de poder cerrado a las brechas reformistas y presto a medidas reaccionarias y de un gobierno que no hará concesiones a los trabajadores, esto por el manejo de la crisis estructural mundial.

conclude that the working class will need to reflect upon the socialist strategy in view of a power bloc opposed to reform breaches and ready to follow reactionary measures, additionally supported by an administration averse to making concessions to workers, as emanated from its treatment of the world structural crisis.

Palabras clave

Conflicto social, luchas sociales, posneoliberalismo, neodesarrollismo.

Key words

Social conflict, social struggle, post-neoliberalism, neo-developmentalism.

Cómo citar este artículo

Leher, Roberto, *et al.* 2013 “Brasil: agravamento da crise, coesão do bloco dominante e novos horizontes para as lutas sociais” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, Nº 33, mayo.

Em um contexto mundial de fortes conflitos sociais –greves gerais, multitudinárias manifestações, crises políticas– que transtornam o cotidiano dos países industrializados como França e Itália e, também, nos elos mais frágeis da União Europeia, como Portugal, Espanha e Grécia, o Brasil difunde a imagem de um oásis de estabilidade: a despeito do medíocre crescimento econômico de 2012 (inferior a 1%) é como se o Brasil estivesse resguardado por um cinturão protetor contra a crise econômica mundial, em forte contraste com outras economias muito mais robustas, como a estadunidense.

Hegemonia dos setores dominantes

A aparência de estabilidade política deve-se ao fato de as mobilizações sociais –da burguesia e dos trabalhadores– não ultrapassarem o que Gramsci denominou de “momento econômico-corporativo”. Não há contestação relevante ao governo. A histórica popularidade do governo de Dilma Rousseff sequer foi abalada pelo fato de que os principais dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT) que conduziram o partido até o governo federal, em particular José Dirceu e José Genoino, foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção e formação de quadrilha no processo conhecido como “mensalão” (Ação penal Nº 470).

A vitória dos partidos da base do governo foi incontestada nas eleições municipais de 2012². Surgiram sinais tênues de maior apoio à esquerda, todos ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), como a eleição do prefeito de Macapá, capital do estado amazônico do Amapá, a expressiva votação da esquerda em Belém, estado do Pará, e no Rio de Janeiro, cuja votação se aproximou de um milhão de votos. Entretanto, as agremiações de esquerda –o PSOL, o Partido Socialista dos Trabalha-

dores Unificado (PSTU) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB)– ainda canalizam resistências e, ainda assim, localizadas e polissêmicas.

Os indicadores até aqui apontados sugerem uma consistente hegemonia do governo do PT. Contudo, não se trata propriamente de hegemonia do PT. Como argumenta Gramsci, a hegemonia de um grupo não pode envolver o que é fundamental (se envolve concessões fundamentais, a fração vive um processo de *transformismo*). E o PT fez concessões “no que é fundamental”: na macroeconomia, na questão agrária, no repasse de recursos públicos para as frações rentistas e na forma de inserção do país na economia-mundo. Projetos com maior potencial conflitivo com a supremacia estadunidense, como a União das Nações do Sul (UNASUR) e o Banco do Sul, não fazem parte do núcleo sólido das políticas em curso; ao contrário, no caso do banco é perceptível que a opção do governo de Dilma segue sendo o fortalecimento do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) que financia projetos no Brasil e na América Latina fortemente contestados pelos movimentos sociais. O fato de que o PT não é hegemônico não pode ser confundido com a irrelevância da gestão petista ou com ausência ou crise de hegemonia.

É o estado maior do capital, o comando do atual *bloco de poder*, que logra hegemonia: as principais frações burguesas estão contempladas, desigualmente, pelas políticas econômicas em curso. As frações organicamente vinculadas às finanças estão no topo do bloco e assumem funções organizadoras na sociedade, abrangendo desde a educação, por meio de uma coalizção por elas lideradas, o *Todos pela Educação*³, até a liderança no apoio burguês aos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff. Esta hegemonia incide sobre a classe trabalhadora: as centrais sindicais de maior representatividade defendem o modelo econômico em seus traços estruturais e sustentam o governo que, afinal, ajudaram a eleger.

Inexiste qualquer intento sério capaz de fraturar o bloco de poder. No plano político, o julgamento de parte da direção do PT (“mensalão”) tem sido denunciado pela imprensa alternativa, vinculada ao PT, como uma tentativa de golpe da direita. De fato, os últimos bastiões da direita ainda fora do governo, refugiados ideologicamente no seminário *Veja*, pressionaram os ministros do STF para que estes fossem rigorosos nas penalidades. E a Corte foi! José Dirceu, ex presidente do PT e ex ministro da Casa Civil de Lula, foi condenado a 10 anos de prisão. No entanto, a hipótese de que os ministros se dobraram às pressões dos meios de comunicação é implausível, pois este movimento não encontrou eco nos setores econômicos imperializados. A denúncia foi oferecida pelo procurador geral da República, nomeado por Lula e, dos 11 ministros que concluíram o julgamento, oito foram indicados por Lula ou Dilma, inclusive o relator, Joaquim Barbosa. Nem o PT incorporou a tese do golpe da direita, abstendo-se de convocar mobilizações em defesa de sua direção prestes a ser encarcerada. Nenhum setor econômico apoiou a desestabilização do governo, ao contrário. Quando as denúncias de corrupção pareciam alcançar a Lula da Silva, o principal banqueiro do país, Roberto Setúbal, CEO da *holding* Itaú-Unibanco, liderou, entre os setores dominantes, o apoio ao ex presidente. Caso os ministros fossem cooptados dificilmente optariam pelo lado mais débil e em franca decadência política (ver nota referida às eleições municipais 2012).

Composição do bloco de poder hegemônico

Suas mais proeminentes frações são os bancos (e as finanças em geral), o grande agronegócio e o setor mineral (*commodities*), as empreiteiras e o setor industrial refuncionalizado (montadoras). A narrativa que justifica o apoio do governo federal a esses setores é o neodesenvolvimentismo. É em seu nome que o BNDES aporta bilhões de reais nos grandes empreendimentos do setor de *commodities* e nas empreiteiras. Os ramos industrial e de serviços contam com grandes isenções tributárias que permitem manter elevada taxa de lucros. Em 2012, as novas desonerações tributárias foram da ordem de 45 bilhões de reais (1% do PIB), isenções que seguirão em 2013, acrescidas das reduções tarifárias na energia elétrica e pela ampliação das desonerações patronais previdenciárias para 42 setores industriais e de serviços⁴. Entre 2006 e 2012 a participação das instituições financeiras públicas no crédito total da economia cresceu de 36,8% para 46,6%, percentual que seria significativamente maior se fossem consideradas as isenções tributárias.

A recente e tectônica movimentação do capital monopolista no Brasil (aquisições, fusões, etc.) ainda não se fez sentir em toda a sua letalidade no mundo do trabalho

A elevada captação de juros pelos bancos exige volumosa transferência de mais-valia para o setor, em detrimento de sua apropriação pelos circuitos produtivos, provocando tensões distributivas. A despeito das críticas aos elevados juros, os bancos seguem no timão do bloco. Mesmo a redução relativa da taxa básica de juros em 2012 –de 12,5% em 2011 para 7,25%– manteve o país no topo dos maiores juros oficiais pagos no mundo. Ademais, o governo federal fez aprovar a Lei dos Fundos de Previdência dos Servidores Públicos em 2012, instaurando o regime de capitalização para a aposentadoria complementar dos servidores públicos, gerando novos negócios bilionários para os bancos e fundos de pensão.

Estranhamente, parte da esquerda incorpora como um dado da realidade o cerne da ideologia neoliberal, o livre mercado, caracterizando o redimensionamento do Estado na economia como expressão de um novo tempo, dito “pós-neoliberal”. A suposta descontinuidade seria justamente o retorno do Estado na economia, como se, em algum momento, o Estado estivesse de fato apartado das relações econômicas. O fato de que o atual governo aporta recursos nos setores produtivos (*commodities*) é utilizado como a base empírica que justificaria o uso do prefixo que exprime posterioridade.

A ideologia neodesenvolvimentista claramente opõe um bom capitalismo (produtivo, desenvolvimentista) e um capitalismo ruim, especulativo (finanças, neoliberal). As bases de tal ideologia, contudo, são muito frágeis. Os bancos seguem como setor líder em lucros, situação possibilitada pela cobrança abusiva de taxas de serviços, pelo manejo da dívida pública e pelos astronômicos juros cobrados aos tomadores de empréstimos, inclusive para os crediários populares.

Como resultado da supremacia dos bancos e fundos de investimentos, estes, sentados sobre montanhas de títulos, dólares e euros, estão indo às compras. O objetivo

é valorizar os seus títulos, reestruturando empresas por meio de fusões e aquisições. A lógica é toda financeira. Assim, a transferência de ativos produtivos para estes setores realimenta o circuito rentista, promovendo desemprego, esvaziamento da socialização da tecnologia e precarização generalizada dos postos de trabalho. Longe, portanto, de ser um fato positivo, quando bancos e fundos saem às compras é possível antever graves problemas a médio prazo: a concentração das empresas em monopólios promove a erosão dos fundamentos econômicos e produtivos do país que expõe as suas empresas às aquisições e fusões. Coerentemente com a lógica imperialista, muitas dessas aquisições predatórias são subsidiadas pelos empréstimos do BNDES e por generosas isenções fiscais. Os governos de Lula e Dilma são operadores de uma desnacionalização acelerada da economia. Conforme relatório da Organização das Nações Unidas, em 2012 o país se tornou o quarto maior destino de investimentos no mundo (Estados Unidos, China e Hong Kong são os três maiores): recebeu US\$ 65,3 bilhões neste ano e US\$ 66 bilhões em 2011. De janeiro de 2004 a novembro de 2012 entraram no Brasil US\$ 332,686 bilhões em “investimento direto estrangeiro”. Os valores são sumamente significativos, considerando que houve uma redução global de 18% nos níveis globais de investimentos, que alcançaram apenas US\$ 1,3 trilhão em 2012. Em 2009, o pior ano para a economia mundial desde 1929, os investimentos haviam somado apenas US\$ 1,2 trilhão⁵. Resulta, desse enorme deslocamento de capital, um extraordinário processo de aquisições de empresas nacionais, em especial por fundos e corporações dos Estados Unidos da América.

Conforme a empresa de consultoria KPMG, as desnacionalizações de empresas brasileiras atingiram um novo recorde em 2012 (296 empresas nacionais), suplantando os recordes de 2011 (208) e de 2010 (175). No segundo ano do primeiro governo de Lula (2004), foram vendidas 69 empresas; em 2005, 89; em 2006, 115; em 2007, 143; em 2008, 110; em 2009, 91 empresas. Em síntese, desde 2004 foram desnacionalizadas 1.296 empresas. Como consequência dessa enorme desnacionalização da economia, as remessas totais de lucros para fora do país passaram de US\$ 25,198 bilhões (2004) para US\$ 85,271 bilhões (2011), um aumento de 238,4%. De 2004 a 2011, as importações aumentaram, em valor, 260%: de US\$ 62,835 bilhões para US\$ 226,233 bilhões. As filiais de multinacionais são, sobretudo, empresas importadoras de bens intermediários –ou seja, de componentes para a montagem de produtos finais– e, cada vez mais, passam a importar o próprio produto final, transformando a empresa desnacionalizada em mero balcão de vendas⁶.

O bloco de poder, como é possível depreender, segue em reacomodação, mas sem perder o seu centro de gravidade, como pode ser verificado pelo ingresso dos novos bilionários na seleta lista dos 500 mais ricos do mundo da *Forbes*: todos os ingressantes que debutam no clube são banqueiros e operadores de *commodities*.

Lutas sociais: ainda econômico-corporativas, mas além do consenso social-liberal

A recente e tectônica movimentação do capital monopolista no Brasil (aquisições, fusões, etc.) ainda não se fez sentir em toda a sua letalidade no mundo do trabalho. As greves, mais numerosas em 2012, têm-se mantido, grosso modo, nos marcos econômico-corporativos. O problema da sociabilidade imposta pelas cor-

porações é objeto das lutas em setores como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) (crítica ao agronegócio, aos transgênicos e ao uso intensivo de agrotóxicos), a Via Campesina (soberania alimentar), os povos indígenas (expropriações de terras e dos territórios indígenas, bases da cosmovisão dos povos) e em escassos segmentos sindicais (mercantilização da educação, por exemplo). De fato, mesmo nessas lutas mais ásperas, tem prevalecido a agenda específica que motivou o conflito.

Isso não significa que a realidade das lutas tenha permanecido estática em 2012. Longe disso. Em 2010 aconteceram 446 greves e, em 2011, 554⁷ (os dados de 2012 ainda não foram sistematizados). Igualmente, os conflitos agrários aumentaram no mesmo período: 1.186 em 2010 para 1.363 em 2011⁸, agravado pela *judicialização* imposta pelo agronegócio, mas as ocupações de terras seguem em decréscimo. Nos oito anos do governo Cardoso (1995-2002) aconteceram 2.462 ocupações, número superior aos 10 anos de governo de Lula e Dilma (2.344 ocupações). É muito significativo –para pensar a correlação de forças e a luta de classes– que as ocupações seguem acentuado viés de baixa: em 2004, foram 327, em 2012, apenas 176⁹.

Um dos indicadores mais interessantes em 2012 foi o fato de que muitas categorias derrotaram as suas direções sindicais e aprovaram greves. Situações assim aconteceram na grande greve do serviço público brasileiro, em grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento e em setores privados localizados. Não é possível afirmar, *a priori*, que está ocorrendo um descolamento base-direção, possibilidade que terá de ser verificada em estudos qualitativos ao longo de 2013.

Para uma parcela significativa da força de trabalho, a situação econômica não sofreu queda relevante. As categorias com força para impor acordos coletivos conquistaram reajustes iguais ou acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE) em 94,3% das negociações coletivas do período¹⁰. No período 2003-2011, os indicadores do IBGE (2012) assinalam um crescimento real dos rendimentos do trabalho da ordem de 22%, e o salário mínimo teve um crescimento real de 63% no período 2002-2012¹¹. Os indicadores da situação salarial, ainda que ocultem a brutal desigualdade dos trabalhadores no mercado de trabalho, consubstanciam uma situação que pode ser considerada favorável para algumas categorias profissionais, beneficiando a ação do *sindicalismo de resultados*, pois as direções podem reivindicar para si os ganhos econômicos do período. Mas a tênue recuperação salarial não altera o fundamento da condição capitalista dependente do país: dada a forma de aliança da burguesia local com as frações burguesas internacionais, a exploração do trabalho tem de ser muito grande. De fato, a remuneração média mensal nas seis regiões metropolitanas mais importantes do país (em que os salários são maiores e mais formalizados) ainda é de R\$ 1.578 (valor em 2011), inferior ao do salário mínimo necessário para a sobrevivência digna de um trabalhador, conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) (R\$ 2.194 para o mesmo ano). De acordo com os índices oficiais do IBGE, o baixo desemprego configura uma situação próxima ao pleno emprego, o que motivaria os trabalhadores a lutar por melhores salários; contudo, pela meto-

dologia do DIEESE, o desemprego segue muito alto, o que explicaria o temor de lutas salariais mais ásperas: o desemprego aberto (IBGE, 2012) segue em patamar reduzido de 5,5%; porém, o mesmo cenário não é confirmado pela metodologia mais realista do DIEESE: 11,1% em 2012.

O discurso governamental de que, finalmente, o Brasil se tornou um país de classe média, realidade possibilitada pela emergência de uma “nova classe média”, foi assimilado por setores acadêmicos sem qualquer fundamentação científica sistemática. É imperioso destacar que o seu único “fundamento” é que o “neo-desenvolvimento” abriu a possibilidade de consumo de certos bens (o que contém uma positividade para as frações pauperizadas que podem ter acesso a produtos como geladeiras, fogões etc.). No entanto, é bom frisar, tal consumo resulta, sobretudo, da necessidade do setor financeiro de colocar o seu capital em circulação. É neste contexto que os bancos buscam incorporar as frações mais pauperizadas da classe trabalhadora em seus circuitos por meio do crédito popular. O governo de Lula da Silva possibilitou esse mercado ao garantir aos bancos a primazia de pagamento do crédito tomado por meio do “empréstimo consignado”. Por meio deste recurso, o banco tem acesso direto ao salário do trabalhador, desconta a sua fatura, e somente depois o trabalhador pode fazer uso do que sobrou de seu salário. O mercado de crédito popular é operado pelos bancos e financeiras nas compras à crédito de grandes redes distribuidoras. Em suma, o aumento do poder aquisitivo não decorre de uma melhor inserção no mundo do trabalho, regida por contratos de trabalho e carreiras que formalizam as relações de trabalho. A dita conceituação ignora, por completo, que o trabalho real dessa suposta classe média é constituído, em sua quase totalidade, por trabalhos flexíveis, inestáveis e desregulamentados e, pior, de escassa mediação simbólica.

Subjacente à realidade edulcorada do *país de classe média*, a análise empírica dos conflitos trabalhistas indica que muitas categorias profissionais seguem com baixos salários e em ásperas condições de trabalho, fato comprovado pela cronologia do comitê do OSAL em Brasil e pela referida discrepância entre os índices de desemprego oficiais (do IBGE) e do DIEESE (órgão mantido pelos sindicatos).

Cabe explorar outras dimensões sobre a situação do trabalho. Como consequência provável da desnacionalização anteriormente analisada é possível verificar um rápido crescimento da taxa de rotatividade do trabalho: em 2003, correspondia a elevados 43,6% e, em 2010, a 52,4%. Embora parte das demissões possa ter sido motivada pela busca de melhores empregos (o trabalhador é que se demite), mais de 70% dos trabalhadores foram sumariamente demitidos, aumentando o temor dos remanescentes da perda de seus postos de trabalho, evitando lutas pela elevação salarial. Outro fator a ser considerado é o contingente de trabalhadores do setor privado terceirizado e precário. Nos dias mas recentes (2011), 51,5% da força de trabalho se encontrava nesta situação de vulnerabilidade. De um lado, é preciso lembrar que muitos trabalhadores puderam encontrar postos de trabalho formalizados, visto que, no início da década de 2000, 60,3% (em 2003) eram precários (cf. indicadores do IBGE, 2012). Os novos formalizados possivelmente se mostram menos dispostos a exigir das direções sindicais maior protagonismo classista. De outro, desse ainda enorme contingente de trabalhadores precários, poucos são sindicalizados e, por isso, as centrais sindicais oficialistas também não sofrem pressão direta deste segmento

da classe trabalhadora, o que explica que, quando o conflito eclode, como em Jirau (caracterizado adiante), seus sujeitos sejam trabalhadores de base, sem que o conflito encontre canais sindicais.

Os trabalhadores, em luta, abalam o sindicalismo conciliador

O exame dos conflitos e lutas de 2012 confirma que essa situação de relativa contenção social começou a apresentar fraturas ainda mais visíveis do que as dos anos anteriores. Em 2011, a greve dos trabalhadores da construção civil, deflagrada sem mediação sindical na Usina de Jirau, exigindo condições dignas de trabalho, e a seguir na Usina de Santo Antônio, ambas em Rondônia, Região Norte, causaram enorme impacto pela impetuosidade dos atos políticos dos grevistas. O ciclo de greves na educação básica, deflagrado em mais de 19 estados da federação, e a greve dos metalúrgicos do Paraná (reunindo 15 mil trabalhadores durante 30 dias), indicaram que parte da classe trabalhadora passou a protagonizar lutas que envolvem confronto com os patrões.

Os conflitos dos povos indígenas com as mineradoras e empreiteiras que expropriam suas terras, os trabalhadores da construção civil que irromperam lutas a despeito de seus sindicatos, muitas vezes em situações de dramática semelhança com a vivida pelos marinheiros de *O Encouraçado Potemkin*; o mesmo acontecendo no protesto pela má qualidade da comida fornecida pela empresa “de ponta” de eletrônicos Foxconn, quando trabalhadores paralisaram a linha de produção do iPhone e do iPad em São Paulo; as ásperas e longas greves da educação básica, como a empreendida pelos trabalhadores da educação do estado da Bahia, e a greve nacional dos bancários que fechou 5.130 agências em 26 estados e no Distrito Federal, articulada por 137 sindicatos que integram o Comando Nacional dos Bancários, foram greves que, no conjunto, assumiram radicalidade há muito não vista no país. Categorias que não faziam greve há sete anos, como os professores das universidades federais, saíram as ruas. Em muitas categorias, com os professores da rede municipal de São Paulo, a direção sindical encaminhou-se contra a greve, mas a base atropelou as direções que julgavam que a greve era desnecessária.

Greve dos servidores federais: o maior movimento do ano

O ano de 2012 teve início com o anúncio do maior corte orçamentário da história recente do país, R\$ 55 bilhões (US\$ 28 bilhões). Somente nos ministérios da educação e da saúde, o corte foi de R\$ 7,4 bilhões. Em 2011, o corte, recorde até então, havia chegado perto de R\$ 50 bilhões. Em contraste com o pagamento de juros, as generosas isenções tributárias e os repasses de recursos para fins particularistas do capital, os cortes orçamentários incidiram sobre a dimensão social do Estado, afetando, evidentemente, seus servidores. Desde 2010, a perspectiva de reajuste salarial, de novos concursos e de reorganização das carreiras funcionais estava vetada da agenda do governo de Dilma. O mesmo quadro se repetia nos estados e municípios.

Em 2010 e 2011, os servidores (federais, estaduais e municipais) protagonizaram a maior parte das greves brasileiras. Embora os servidores representem apenas 22% dos trabalhadores com vínculo empregatício, realizaram 52,5% do total de

greves em 2010 e 53,4% em 2011. Dentre o conjunto dos servidores públicos brasileiros ativos, os municipais somam 4,9 milhões, os estaduais 3,5 milhões e os federais civis 600 mil. Os federais, 6,5% do total de servidores, protagonizaram 9,8% (2010) e 11,1% (2011) do total de greves dos servidores públicos. A participação dos servidores federais nas greves de 2012 cresceu, adquirindo maior extensão, radicalidade e visibilidade social.

Os cortes orçamentários anteriormente referidos interromperam a tímida recuperação salarial dos servidores (2004-2008). Assim, em 2012, não apenas o salário dos servidores estava arrojado, como os novos planos de carreira (que motivaram grande parte das greves de 2010 e 2011) estavam virtualmente abandonados. Diferente do período 1995-2002, anos em que os servidores combinavam lutas específicas por categoria e lutas unificadas na Coordenação Nacional dos Servidores Públicos Federais (CNESEF), um espaço de unidade de ação, objetivando política salarial, defesa da previdência social, enfrentamento às reformas neoliberais do Estado, após 2004 as lutas passaram a ser cada vez mais específicas e isoladas. O governo –com a conivência da Central Única dos Trabalhadores (CUT)– criou um mecanismo que esvaziou a unidade de ação (e a CNESEF), chamando cada categoria para negociar isoladamente, em geral sem resultados concretos para os trabalhadores. Os modestos reajustes, por orientação do governo, ocorriam na forma de gratificações de desempenho e subterfúgios afins.

Frente a categorias que haviam rompido com a CUT, por ocasião da (contra)reforma da previdência (2003), o governo de Lula estimulou a criação de sindicatos para-oficiais, objetivando enfraquecer os sindicatos autônomos. Nestes casos, as negociações específicas se prolongavam ainda mais, pois o governo podia manejar a “divisão da categoria” por ele mesmo incentivada, tornando as negociações sem resultados efetivos.

Os impasses se agravaram em 2010 e 2011. O governo se mostrou coeso na concepção de carreiras produtivistas, deslocando todas as mesas de negociação (educação, saúde, previdência, meio ambiente, agrária, etc.) para o Ministério do Planejamento, um guardião da política econômica do governo. Ressurgiram as greves, mas nada de efetivo foi negociado. Assim, quando os professores entraram em greve em maio de 2012 com grande adesão e forte impacto na sociedade, as demais categorias passaram a deflagrar, rapidamente, as suas. Após um pouco mais de um mês do início da greve dos docentes federais, foi possível somar 35 categorias em greve!

É importante salientar que as greves de 2012 foram coetâneas, mas não unificadas. Embora as pautas fossem semelhantes, cada categoria conduzia sua luta de modo específico (embora certas reivindicações fossem comuns a todos). O endurecimento do governo que se recusou a negociar e, ainda, empreendeu medidas repressivas, levou os sindicatos, inclusive os filiados à CUT, a criarem um Fórum das Entidades dos Servidores Públicos Federais que possibilitou atos, acampamentos e passeatas unificadas, especialmente em Brasília, mas também em outros estados da federação. A greve produziu resultados importantes, pois entrou na agenda política do país, forçando o governo a “ceder os anéis para não perder os dedos”. De 0% em 2012 e 2013, antes da greve, o governo cedeu reajustes variados, em geral de 15% parcelado até 2015. Ademais, teve de negociar ajustes nas carreiras

de algumas categorias, sem abrir mão de sua concepção gerencialista (avaliação de desempenho e ganho por produtividade). A greve das demais categorias de servidores fortaleceu a luta dos professores, pois todas as entidades reiteraram a legitimidade do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), em detrimento da entidade oficialista. Ademais, em vários estados, consolidou-se a articulação das entidades dos servidores públicos em fóruns estaduais, possibilitando futuras lutas mais unitárias. Sob o ponto de vista político, a greve permitiu evidenciar a profundidade da incorporação dos fundamentos da reforma do Estado iniciada por Cardoso em seu projeto de Estado. A *experiência* da greve, nesse sentido, foi educativa para uma nova geração que, tendo participado ativamente da greve, pode fortalecer as fileiras da militância sindical autônoma no serviço público.

Greve das universidades

A primeira categoria a iniciar a greve nacional foi a dos professores das universidades federais (que são servidores públicos federais) em 17 de maio. A adesão foi inédita: 33 das 59 universidades entraram na greve no primeiro dia! A pauta reivindicava uma nova carreira docente, salários dignos e melhores condições de trabalho. A força da greve não foi “um raio em céu azul”. Há sete anos a categoria não fazia uma greve relevante. Neste intervalo, foi criado, em 2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), a ser finalizado em 2012. O ANDES-SN denunciou os limites e inclusive a impossibilidade de garantir a expansão prevista no contrato de gestão, superior a 50% de matrículas, sem considerar a necessidade de reposição de docentes que se aposentaram na última década. Ademais, já havia uma demanda reprimida de concursos, em virtude do descumprimento do acordo de expansão de matrículas firmada pela Associação Nacional de Dirigentes das Universidades Federais com o governo Cardoso, em 1995, quando as universidades ampliaram as vagas, mas os concursos não vieram.

Entre 2007 e 2012, as vagas nas universidades federais passaram de 155 mil para mais de 300 mil e as matrículas totais cresceram de 590 mil para mais de 950 mil estudantes de graduação¹². Ademais, os novos *campi* e a expansão das matrículas nas federais não foram acompanhadas de recursos capazes de assegurar infraestrutura adequada, nem, tampouco, quantidade de docentes capazes de atender a um número crescente de estudantes. O corte de verbas executado em 2011-2012, de mais de 100 bilhões de reais, agravou o problema.

Assim, o ano de 2012 tem início com os docentes das instituições federais de ensino superior submetidos a brutal intensificação do trabalho, com a carreira docente estilhaçada pelas medidas de correções salariais arbitrárias e casuísticas e com significativa perda salarial. O impasse na reestruturação da carreira –prevista em acordo firmado em 2011 e descumprido pelo governo federal– foi o estopim da greve.

Após 120 dias de greve, a categoria suspendeu, de modo unificado, o movimento. Da greve resultou a compreensão da centralidade da carreira para o trabalho docente, em contraposição à lógica da remuneração por desempenho, ao empreendedorismo acadêmico e à (falsa) meritocracia. A luta pela carreira politi-

zou o projeto de universidade em curso, massificada, *fast delivery* diploma, mercantilizada. De outra parte, evidenciou a organicidade do projeto governamental para a universidade com a (contra)reforma do Estado. Socializou uma geração de docentes que nunca havia participado de uma greve nacional radicalizada e criativamente *protagônica*. O confronto com a entidade para-oficial nutrida nos gabinetes governamentais e na CUT/PT, por sua vez, foi amplamente favorável ao ANDES-SN. Afinal, as greves aconteceram nas bases da entidade oficialista, deflagradas em memoráveis assembleias. Embora o governo tivesse se valido da referida entidade para simular a negociação final, a grande maioria dos docentes recusou, em assembleia, frequentemente por inédita unanimidade, os termos da proposta, a rigor, a mesma que vinha sendo rejeitada desde 2010. Com a imposição da carreira e da malha salarial, a maior parte da categoria terá perda salarial diante da inflação prevista até 2015. Pior do que isso, a carreira imposta é ainda mais nefasta para o trabalho universitário do que a existente.

O governo de Dilma já pode ser caracterizado como o período de maior recuo no processo de socialização do acesso à terra da última década.

Após um mês de início da greve das universidades, os docentes das escolas técnicas federais irromperam uma greve, seguida de uma greve nacional dos servidores técnicos e administrativos das universidades e escolas técnicas federais. Diante de atos unificados dos servidores em Brasília, reunindo, em cada passeata, cerca de 15 mil trabalhadores, e de um sem número de atos nos estados, sempre com grande apoio popular, o primeiro movimento do governo foi empreender dura repressão à greve, cortando salários e impondo medidas legais para coibir as greves no serviço público e simplesmente se recusando a negociar, a despeito do caráter massivo das greves.

Questão Agrária

O governo de Dilma já pode ser caracterizado como o período de maior recuo no processo de socialização do acesso à terra da última década. Entre 1995 a 2002, a desapropriação de grandes propriedades alcançou 10,3 milhões de hectares contra 4,3 milhões nos oito anos seguintes, correspondente aos dois mandatos de Lula da Silva. Nos últimos dois anos, foram desapropriados apenas 130 mil hectares; desempenho tão pífio que, desde 1985, só rivaliza com o período Collor¹³.

Sem apoio de políticas para o assentamento e para o desenvolvimento da agricultura de alimentos populares, os assentamentos já estabelecidos encontram-se em situação de penúria, levando os filhos de assentados a buscarem alternativas nas cidades. Por iniciativa da Confederação Nacional da Agricultura, dirigida pela senadora Katia Abreu, agora na base do governo de Dilma, os grandes proprietários e o agronegócio em geral estão buscando viabilizar a reversão do pouco que foi feito em termos de reforma agrária no país. O objetivo é possibilitar que terras da União, sob o controle dos assentados, venham a ser transferidas para as grandes propriedades, por meio de uma mudança legal que permitiria comercializar a

terra disponibilizada para a reforma agrária. Kátia Abreu proclama que a nova lei possibilitará a “libertação dos assentados”¹⁴.

Ao mesmo tempo em que o setor ruralista atua no sentido de reverter a pífia reforma agrária, busca ampliar as expropriações para aumentar seu acesso às terras que possam servir de suporte à expansão de novas fronteiras para o agronegócio. Na frente Norte, correspondente a região amazônica, o maior obstáculo é a legislação ambiental. Daí sua ofensiva na defesa da reforma do Código Florestal, objetivando flexibilizar a proteção ambiental do entorno dos rios, lagos e encostas, promover a anistia de desmatamentos ilegais e modificar o conceito de proteção dos módulos rurais em prol dos interesses do grande agronegócio. A reforma do Código Florestal representou um momento central para os setores empresariais ligados à exploração agrária e da biodiversidade¹⁵.

Os trabalhadores do campo e camponeses vinculados ao MST, à Via Campesina, à Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG) e à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) empreenderam atos e mobilizações contra o novo código, assim como entidades científicas como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável realizou dois atos seguidos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília – Distrito Federal (região Centro-oeste), reunindo mais de 200 movimentos sociais, contando com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CUT e a Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras. Entretanto, a chamada bancada do agronegócio no parlamento logrou aprovar o projeto desejado pelo agronegócio, inclusive, em alguns aspectos menos axiais, indo contra a orientação do governo federal.

Após um movimento nacional que empolgou as redes sociais, promoveu manifestos, atos, *flash mobs* e seminários, o governo de Dilma não atendeu a reivindicação de veto total, vetando parcialmente o Código Florestal aprovado no Congresso Nacional em setembro. Entre os retrocessos mantidos no código, os mais destacados são: 1) anistia de multas; 2) redução da preservação das Áreas de Proteção Permanente; 3) possibilidade de que áreas degradadas sejam recompostas com plantas que não são nativas, e 4) redução das exigências legais para a recuperação de nascentes. Assim, o Código Florestal isenta de recuperação todas as Áreas de Preservação Permanente e a grande maioria das áreas de reserva legal que tenham sido desmatadas até 2008. Ou seja, desmatou, fica desmatado. Se havia multa, está anulada. Se a área havia sido embargada, está liberada. Isso é anistia¹⁶.

A seca nas regiões Sul e, principalmente, no Nordeste (sem chuvas regulares desde setembro de 2011), aumentou a insatisfação popular no campo, atingindo 8,3 milhões de pessoas em oito dos 9 estados nordestinos¹⁷. Frente ao silêncio dos grandes meios de comunicação e à omissão dos governos, cerca de mil trabalhadores rurais do MST realizaram uma série de mobilizações em todo o estado de Pernambuco (região Nordeste) para denunciar os impactos da seca em assentamentos e comunidades rurais do semiárido e exigir políticas concretas e eficientes de combate aos efeitos da seca no estado.

Ao longo do ano, o MST e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) realizaram importantes ações de caráter nacional, porém sem um caráter massivo. Entre as ações no campo, cabe destacar a Jornada Nacional de Lutas, sob o lema “Dia Internacional

da Mulher pela Reforma Agrária, contra os Agrotóxicos e a Violência contra a Mulher” e o “Abril Vermelho”. Estas mobilizações objetivaram pressionar o governo pela reforma agrária, frear a do Código Florestal, denunciar a criminalização dos movimentos sociais e cobrar políticas públicas no campo. Em 2012, o movimento buscou ampliar o arco de forças na luta por uma agenda mais articulada para enfrentar o modelo do agronegócio. Conforme João Pedro Stédile, aconteceu em agosto um encontro com 33 movimentos sociais que atuam no campo, desde a CONTAG, que é a mais antiga, o MST e a Via campesina, até o movimento dos pescadores, quilombolas, etc., e construiu uma plataforma unitária de propostas de mudanças.

Os latifundiários têm respondido às mobilizações com o avanço da violência no campo. Segundo a CPT, no ano de 2011, 172 pessoas estavam na lista de “marcadas para morrer”, contra as 83 de 2010, sendo que 29 foram mortas. Em 2012, um balanço preliminar confirma que, somente nos cinco primeiros meses, 14 pessoas foram mortas, aumento de 75% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme a CPT¹⁸. Entre 2001 e 2011, a violência no campo deixou um saldo trágico de 405 vítimas fatais.

Questão Indígena

Com o respaldo da ideologia do desenvolvimento sustentável as hidrelétricas são defendidas como a melhor alternativa para suprir as demandas de energia necessárias ao “desenvolvimento”. Segundo o projeto da Usina Belo Monte, “para alcançar as metas de crescimento anual de 5% do PIB nos próximos 10 anos, o país precisará instalar, a cada ano, cerca de 5.000 MW de capacidade adicional”. Implementadas pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável do Xingu, a construção da usina possui previsão de investimentos de 28 bilhões na região, conforme o BNDES¹⁹. Os indígenas *arara*, que dependem da água do Xingu para beber e cozinhar, denunciaram a situação ao Ministério Público Federal.

O Programa de Aceleração do Crescimento envolve corporações controladas por frações burguesas locais em associação com o grande capital internacional (que, a rigor, amplia seu controle dos grandes empreendimentos) que têm como negócios a exportação de *commodities*. Essa ofensiva do capital se dá sobre nova onda de expropriações das comunidades tradicionais que vêm sendo expulsas de seus territórios com extrema violência. O legislativo buscou flexibilizar ainda mais as leis em favor dos fazendeiros e grandes empresas, de modo a permitir a não demarcação de terra dos povos tradicionais²⁰, descumprindo o acordo firmado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária com os movimentos sociais em 2011. A proposta do Democratas (partido da direita) de acabar com o Decreto 4887/2003, que regulamenta a demarcação das áreas ocupadas pelas comunidades quilombolas no país e a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 215/00, que prevê que o congresso dê a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas e de conservação ambiental, foram duros ataques às comunidades tradicionais.

As comunidades indígena enfrentaram ataques diretos aos seus territórios. Indígenas da tribo Tupinambá, da etnia Guarani-Kaiowá, da Terra Indígena Laranjeira Nhanderu, da etnia Pataxó Hã-Hã-Hãe, empreenderam lutas por seus territórios,

sendo fortemente reprimidos. Os *guajajara* e *awá-guajá* bloquearam um trecho da estrada de Ferro Carajás, localizado no estado do Maranhão (região Nordeste). A violência foi denunciada pelo Conselho Indigenista Missionário, que confirmou o assassinato de uma criança indígena de 8 anos da tribo Awá Guajá, na Terra Indígena Araribóia, Maranhão. Em junho, a marcha unificada da Cúpula dos Povos reuniu cerca de 80 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro para criticar o encontro oficial Rio+20, colocando em relevo as hidrelétricas e a causa indígena. Um ato público marcou a entrega de mais de 20 mil assinaturas da campanha “Eu Apoio a Causa Indígena” à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Além da demarcação de terras indígenas, o movimento reivindica a rejeição da Proposta de Emenda Constitucional 215/00 (que transfere do Executivo para o Congresso Nacional a demarcação de terras indígenas).

Balanco geral das lutas

Finalmente, para compreender a correlação de forças, é importante ressaltar que a coesão do bloco de poder possibilitou a ofensiva contra o trabalho. Está em curso uma reforma trabalhista que objetiva permitir o “negociado sobre o legislado”, o que retira os direitos trabalhistas da legislação (Acordo Coletivo Especial). As centrais sindicais oficialistas que representam formalmente perto de 90% dos sindicalizados perderam capacidade de convocatória e de mobilização, como quer o bloco de poder, a ponto de ser uma voz desconsiderada no cálculo político das medidas que se referem ao mundo do trabalho. O governo de Dilma operou no sentido de desconsiderar os sindicatos como sujeitos relevantes. Durante todo ano de 2012, a direção da CUT, a maior central brasileira, com vínculos estreitos e orgânicos com o PT, sequer foi recebida pela presidência da República. O MST, por sua vez, perdeu capacidade de convocatória para atrair novos militantes para o movimento, pois, como a reforma agrária está estagnada, poucos se animam a permanecer anos a fio em acampamentos aguardando um improvável assentamento. Ademais, o MST apoiou a eleição de Dilma e procura se manter, ainda que com críticas, no campo governista, situação que deverá suscitar acalorados debates no próximo congresso. Na frente sindical classista, não houve avanço real na aglutinação das entidades sindicais que romperam com a CUT pela esquerda. A Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas) segue como a principal referência, tendo influência entre servidores públicos federais e em alguns sindicatos relevantes, como o dos metalúrgicos de São Jose dos Campos, São Paulo, mas sem lograr maior protagonismo. A outra iniciativa de organização dos trabalhadores, a Intersindical, encontra-se dividida e, também, com modesta capacidade de intervenção nos rumos da luta de classes.

Os dilemas estratégicos, por conseguinte, dizem respeito a avaliação sobre a existência ou não de brechas reformistas no atual bloco de poder e sobre a disposição do governo de fazer concessões relevantes aos trabalhadores. A empiria disponível sugere que essas vias estão fechadas e, por isso, a questão do socialismo terá de ser objeto das reflexões do polo classista da classe trabalhadora, em um contexto em que medidas contrarreformistas serão mais incisivas, em função do manejo da crise estrutural pelo bloco de poder.

Notas

1 O presente texto contou com a colaboração de Jacqueline Aline Botelho Lima (PPFH/UERJ) e Alice Coutinho da Trindade, coordenadora do levantamento da cronologia do comitê brasileiro do OSAL.

2 Relação do número de prefeitos eleitos pelos principais partidos em 2012 e 2008. Partidos de oposição com “*”: PMDB (1.024/1.201); PSDB (702/791*); PT (635/558); PSD (497); PP (469/551); PSB (442/310); PDT (311/352); PTB (295/413); DEM (278/496); PR (275/385); PPS (123/129*); PV (96/75); PSC (83/57); PC do B (56/41). Vale destacar o forte encolhimento das agremiações de direita que se opõem ao governo, como o DEM. A mesma tendência não aconteceu com o partido de direita que dele resultou, o PSD, que migrou para a base do governo.

3 Cf. Olinda Evangelista e Roberto Leher 2012 “Todos pela educação e o episódio Costin no MEC: a Pedagogia do capital em ação na política educacional brasileira”, in *Trabalho Necessário*, Ano 10, Nº 15, disponível em <www.uff.br/trabalhonecessario/images/TN1519%20Artigo%20Roberto%20Leher%20e%20Olinda%20Evangelista.pdf>.

4 Cf. Guido Mantega 2012 “Consolidando o crescimento de longo prazo”, em *O Estado de São Paulo*, 23 de dezembro, disponível em <<http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/12/23/consolidando-o-crescimento-de-longo-prazo>>.

5 Cf. Jamil Chade 2012 “Brasil se transforma no 4º maior destino de investimentos do mundo”, em *Estadão*, 23 de janeiro, disponível em <<http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+geral,brasil-se-transforma-no-4-maior-destino-de-investimentos-do-mundo-,141650,0.htm>>.

6 Cf. Carlos Lopes 2013 “Em 2012, 296 empresas nacionais passaram para controle estrangeiro”, em *Informa CUT* (São Paulo) 23 de janeiro, disponível em <<http://www.cut.org.br/acontece/22892/em-2012-296-empresas-nacionais-passaram-para-controle-estrangeiro>>.

7 Cf. DIEESE 2012 “Balanço das Greves em 2010 e 2011”, em *Estudos e Pesquisas*, Nº 96, novembro, disponível em <www.dieese.org.br/esp/estPesq63balGreves2010_2011.pdf>.

8 Cf. Vannildo Mendes 2012 “Conflitos agrários crescem 15% na gestão Dilma, aponta CPT”, em *Estadão*, 8 de maio, disponível em <www.estadao.com.br/noticias/impreso,conflitos-agrarios--crescem-15-na-gestao-dilma-aponta-cpt-,870002,0.htm>.

9 Cf. Evandro Éboli 2013 “Em 2012, país teve 176 invasões, o 2º menor número no governo do PT”, em *O Globo*, 22 de janeiro, disponível em <<http://oglobo.globo.com/pais/em-2012-pais-teve-176-invasoes-2-menor-numero-no-governo-do-pt-7372982#ixzz2JT89tFpz>>.

10 Cf. DIEESE, op. cit.

11 Cf. IBGE 2012 “Indicadores IBGE. Principais indicadores - Destaques da evolução do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas abrangidas pela

pesquisa (2003-2011)” (Rio de Janeiro).

12 Cf. “Censo da Educação Superior do INEP, 2012”. No governo de Lula as matrículas privadas cresceram em ritmo ainda maior, reduzindo, relativamente, a participação das públicas nas matrículas totais: em 2002, as públicas eram responsáveis por 25% das matrículas; em 2011 o percentual caiu para 22%.

13 Cf. Gerson Teixeira 2013 “Os rumos da ‘Reforma Agrária’”, em *Folha de São Paulo*, Opinião, 17 de janeiro, p. 3.

14 Idem.

15 Para Luiz Zarref, dirigente do MST e da Via Campesina, “a partir de agora, os rios acima de dez metros não precisarão mais ter Áreas de Preservação Permanente em suas margens. Nos rios abaixo de dez metros, a faixa de proteção será de 15 metros, mas antes era de 30 metros. Para os rios maiores, que precisavam de até 500 metros de floresta, agora não precisa mais nada. Isso é um crime histórico contra o meio-ambiente mundial e um retrocesso na legislação ambiental brasileira”. Cf. “Ambientalistas querem veto ao Código Florestal e preveem embate na Rio+20”, citado em <<http://cupuladospovos.org.br/imprensa/boletins>>.

16 Cf. “Código Florestal: o veto desenvolvimentista”, 6 de junho de 2012, em *Ecodebate. Cidadania & Meio Ambiente* <<http://www.ecodebate.com.br/2012/06/06/codigo-florestal-o-veto-desenvolvimentista>>.

17 Cf. Carlos Madeiro 2012 “Falta de chuvas em julho agrava seca no Nordeste, que já tem 8,3 milhões de afetados”, 29 de julho, em <<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/07/29/sem-chuvas-em-julho-nordeste-ja-tem-83-milhoes-de-afetados-pela-seca-no-semiarido.htm>>.

18 Cf. “CPT – Já chega de tanto sofrer: chacinas e massacres no campo em 2012”, em *União Campo, Cidade e Floresta*, 15 de maio de 2012, disponível em <<http://uniaocampocidadeefloresta.wordpress.com/2012/05/15/cpt-ja-chega-de-tanto-sofrer-chacinas-e-massacres-no-campo-em-2012>>.

19 Cf. “Investimento de Belo Monte já alcança 28 BI”, em *Plataforma BNDES*, 27 de outubro de 2011, disponível em <<http://www.plataformabndes.org.br/site/index.php/noticias/21-clipping/169-investimento-de-belo-monte-ja-alcanca-r-28-bi>>.

20 No dia 19 de abril o presidente da Fundação Nacional do Índio aprovou os estudos de identificação das terras indígenas *tenondé porã* em São Paulo (região Sudeste), *menku* no Mato grosso (região Centro-oeste) e *taego ãwa* no Tocantins (região Norte). No entanto, ocorreram desapropriações e medidas no legislativo que atacaram os direitos das comunidades tradicionais, como o julgamento da constitucionalidade das cotas para indígenas, no dia 26 de março, que acabou com a expulsão dos indígenas que protestavam no plenário.

En el tiempo del libre mercado

Conflictos y protesta social en Costa Rica durante el año 2012

ALEJANDRO ALVARADO ALCÁZAR

Bachiller en Sociología e integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Coordinador del comité de Costa Rica del OSAL.

GLORIANA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Licenciada en Ciencias Políticas e integrante del IIS-FCS-UCR. Asistente del comité de Costa Rica del OSAL.

Resumen

En Costa Rica, la protesta social escenificada durante el año 2012 se encuadra dentro de un proceso más amplio vinculado con la nueva realidad económica y social abierta con la entrada en vigencia del CAFTA-DR y la consolidación del momento del libre comercio. El proceso de re-estructuración normativa seguido por la economía costarricense como parte de su integración a la economía mundial capitalista, en tiempos del neoliberalismo, ha generado profundas tensiones sociales vinculadas con la defensa del anterior modelo económico, frente a los nuevos espacios de acumulación por desposesión abiertos por el nuevo modelo económico. Sumado a esto, el posicionamiento de actores colectivos y agendas de un conjunto de grupos sociales marginados históricamente, como las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos y la población sexualmente diversa, dibujan el complejo panorama de la protesta social en el país. En el presente artículo se recuperan los principales nudos de la conflictividad social desarrollada durante el año 2012, vinculándolos con los procesos anteriormente señalados.

Abstract

In Costa Rica, the social protest staged in 2012 fits into a broader process linked to the new economic and social reality open to the entry into force of the CAFTA-DR and the consolidation of the free trade moment. The process of re-structuring rules followed by Costa Rica's economy as part of its integration into the world capitalist economy, in times of neoliberalism, has created deep social tensions linked to the defense of the previous economic model, compared to the new spaces of accumulation by dispossession opened by the new economic model. Added to this, the positioning of collective actors and agendas of a set of historically marginalized social groups such as women, indigenous peoples, peasants and sexually diverse population, draw the complex picture of social protest in the country. In this paper, we retrieve the main knots of social conflict developed in 2012, linking the processes mentioned above.

Palabras clave

Libre comercio, neoliberalismo, protesta social, derechos, violencia.

Keywords

Free trade, neoliberalism, social protest, rights, violence.

Cómo citar este artículo

Alvarado Alcázar, Alejandro y Martínez Sánchez, Gloriana 2013 "En el tiempo del libre mercado: conflictos y protesta social en Costa Rica durante el año 2012" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 33, mayo.

A modo de introducción

En Costa Rica la conflictividad social en el año 2012 se desarrolla esencialmente como resultado del impacto social, ambiental, económico e institucional de una sostenida y permanente implementación de las agendas y políticas del proyecto neoliberal. La aprobación en 2007 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), la cual se dio en medio de una gran conflictividad y polarización social, se expresa como un hito en la historia política costarricense, en donde se consolida con mayor fuerza el proyecto neoliberal en el país, pero también se sienta un precedente de tejidos de organización social y política en todo el territorio nacional.

En este sentido, la conflictividad social durante 2012 se entiende a la luz de la profundización del modelo neoliberal en Costa Rica, la cual muestra como resultados la reestructuración normativa de un Estado Social de Derecho heredado de la década de los años cuarenta, la ampliación de nuevos espacios de acumulación por desposesión y el posicionamiento de las morales y éticas conservadoras religiosas en las políticas de gobierno, así como un fortalecimiento de los brazos represivos estatales en defensa de los valores de libre comercio y competencia, en detrimento de los derechos y libertades colectivas (Sagot, 2012: 77).

Cambios en el modelo de acumulación y protesta social: las disputas en torno al nuevo modelo económico

En Costa Rica, como en el resto de América Latina, la década de los años ochenta supuso el tránsito hacia un nuevo modelo económico basado en el neoliberalismo. De acuerdo con Vargas¹, la estrategia neoliberal en Costa Rica ha modificado de modo considerable el escenario económico y social, y sus logros se han centrado en un importante crecimiento y diversificación de las exportaciones, junto con un notable aumento en el turismo, lo cual se ha acompañado de un estancamiento en los niveles de pobreza y un crecimiento sostenido de la desigualdad (2011: 89)².

Robles (2011), señala que el proceso de acumulación por desposesión³ inmerso dentro de la lógica de la estrategia neoliberal encuentra, en el caso costarricense, dos momentos centrales: el del ajuste estructural y el del libre comercio⁴. El primero se centró en las re-estructuraciones económicas, políticas y jurídicas orientadas hacia beneficiar a los grupos de poder económico extranjeros y loca-

les (2011: 106). Sin embargo, este momento resultó en un proceso inacabado, entre otras cosas, pues no se completó la transnacionalización de las economías, ni se vendieron las principales empresas públicas (2011: 107)⁵. Esto hizo necesaria una segunda re-estructuración normativa, basada en la firma de acuerdos comerciales de carácter bilateral y multilateral, lo cual generó la ampliación de los espacios de acumulación por desposesión, como por ejemplo los seguros, las telecomunicaciones, las finanzas y la biodiversidad. Asimismo, los intereses de los grupos de poder económico regionales se han expandido bajo esta segunda re-estructuración económica, política y jurídica (2011: 106). Este segundo momento, el del libre comercio, iniciado en el año 2000, coincidió con uno de los momentos centrales de la protesta social en el país: el Combo ICE. Durante este año, se sucedieron un gran número de manifestaciones callejeras contra la intención de la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) de privatizar las telecomunicaciones y la electricidad. Sin embargo, este momento encuentra en la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR)⁶, conseguida en 2007, el punto culminante del libre comercio. Pese a un férreo proceso de lucha por parte de un gran número de organizaciones políticas y sociales de todo el país, los grupos de poder económico, implementando una política del miedo –patente en el conocido “memorándum del miedo”⁷– junto con una intensa campaña mediática, lograron la aprobación de este acuerdo comercial tras la celebración de un referéndum en octubre de ese año.

El momento del libre comercio, acumulación por desposesión y disputas por la institucionalidad pública

En este escenario económico y social se encuentra inmersa la protesta social durante el último quinquenio, en la cual se hacen notorias, entre otras, las disputas en torno a los procesos de acumulación por desposesión descritas anteriormente. Para entender lo sucedido en el último año, es necesario, entonces, enmarcarlo dentro de los amplios procesos de cambio operados en el país en la última década en tanto estos definieron, en términos generales, el ambiente de la protesta social.

Las disputas en torno a los procesos de acumulación por desposesión encuentran en las organizaciones sindicales y sociales sus principales actores colectivos. La defensa de la institucionalidad pública heredada del anterior modelo económico, gestado entre las décadas del cincuenta y del ochenta, constituye uno de los ejes de la protesta social de mayor número de acciones colectivas.

Entre estas, destacan, durante el año 2012, la lucha desarrollada por el sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, el cual se ha manifestado en contra de la privatización de los muelles de Limón y Moín, en la provincia de Limón. Desde el año 2008, esta organización sindical, apoyada por otros sindicatos y organizaciones sociales, ha opuesto resistencia a la política de los gobiernos de Óscar Arias (2006-2010) y de Laura Chinchilla (2010 a la fecha) de concesionar estos puertos, por los cuales pasan el 80% de las importaciones y exportaciones del país. Pese a que esta política fue derrotada en varias ocasiones, finalmente se logró, mediante la aprobación de la construcción de una nueva terminal de contenedores, permitir la entrada de una

de las principales empresas transnacionales en operación de terminales portuarias: la APM Terminals (Alvarado *et al.*, 2012a: 212)⁸.

Durante este año, los conflictos se situaron en relación con la decisión de la autoridad portuaria de otorgar el 60% de la carga y descarga de contenedores a la empresa de capital holandés, lo cual fue calificado por la dirigencia del sindicato como un monopolio debido a que ésta es la actividad central de los puertos. Ante esto, como protesta, se declaró una huelga, con una semana de duración, la cual fue finalmente reprimida en una acción coordinada por varias fuerzas policiales.

Otra de las instituciones públicas colocada en el centro de la protesta social durante este año fue el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que es la entidad encargada de los servicios de telecomunicaciones y electricidad en el país. Como se señaló anteriormente, una de las características centrales del momento del libre comercio fue la ampliación de los espacios de acumulación por desposesión, entre los cuales están estos servicios. Por su peso en el modelo económico costarricense, la electricidad ha sido uno de los servicios sobre el cual se ha ejercido mayor presión por parte de los grupos de poder económico nacionales, regionales y transnacionales para conseguir su apertura.

En relación con este eje, cabe señalar que ambos servicios han sido objeto de disputas a lo largo del año, aunque las tensiones vinculadas con los intentos de reforma del sector eléctrico fueron predominantes. Sobre todo, en el segundo cuatrimestre del año, cuando el Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE, en unidad con cuatro cooperativas de electrificación rural, mostraron su oposición a una serie de proyectos de ley tramitados en el congreso⁹, los cuales pretenden una reforma del modelo eléctrico costarricense para permitir un mayor grado de participación de empresas privadas en la generación eléctrica¹⁰ (Alvarado *et al.*, 2012b: 5).

En esta misma línea, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha sido otra de las instituciones en disputa debido a la situación de crisis financiera desatada desde el año 2011, la cual ha supuesto una reducción en la cantidad y calidad de la atención en salud brindada a los asegurados (Alvarado *et al.*, 2011: 5-10). En el año 2012, con una mayoritaria participación de organizaciones comunales, se registró un importante número de acciones colectivas, en su mayoría debido a la reducción de los servicios prestados por la institución, principalmente en clínicas y hospitales regionales, lo cual generó la defensa de la seguridad social.

Sobre este mismo eje, en el mes de noviembre, se registró uno de los momentos de mayor algidez en la protesta social del año 2012. Una manifestación en la que participaron organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y demás ciudadanía, como parte de las acciones colectivas en defensa de la seguridad social, fue reprimida en tres momentos distintos por parte de la Fuerza Pública y el cuerpo de antimotines. La situación se desencadenó luego de que una marcha convocada para ese día finalizara con una concentración frente al edificio de la CCSS ubicado sobre una de las principales avenidas de la capital, San José. La manifestación reclamaba, entre otras cosas, servicios de salud de calidad y la finalización de los recortes de presupuesto en hospitales y clínicas, y fue dispersada por la policía haciendo uso de la fuerza policial y resultando 36 personas detenidas y varias golpeadas, incluyendo a dos diputados del Partido Acción Ciudadana.

Tal como se señalaba en un trabajo anterior, sobre la situación de la CCSS y los conflictos sociales emanados de ella, los conflictos en el sector de la salud emergen de uno más amplio relacionado con el nuevo modelo económico. Asimismo,

como en otros países del mundo, [las élites, quienes también se han beneficiado de las instituciones públicas del anterior modelo de desarrollo, son quienes han promovido, en alianza con el capital transnacional, el debilitamiento de la institucionalidad pública y su utilización a favor de sus intereses en el marco del nuevo modelo neoliberal y su lógica de privatización (Alvarado *et al.*, 2011: 8).

Crisis fiscal, corrupción y disputas entre poderes

Las tensiones sociales dibujadas por las disputas sobre la institucionalidad pública y los bienes comunes, durante el año, son potenciadas por la crisis económica desatada desde el año 2008 y cuyas consecuencias en el país se han expresado, principalmente, en un gran debate nacional en torno a la situación de crisis fiscal que ha llevado a la administración de Laura Chinchilla a impulsar una política de austeridad económica que se ha traducido en un recorte del gasto público.

Asimismo, durante el año 2012 se conoció un importante número de denuncias sobre supuestos casos de corrupción que involucraron a funcionarios y funcionarias públicas, principalmente de alto rango, lo cual movilizó a varios actores colectivos hacia la denuncia de estos hechos y la demanda por respuestas. Por ejemplo, durante el primer cuatrimestre del año, en medio de la discusión de la crisis fiscal y la urgencia, planteada por la administración de Chinchilla Miranda, de un plan fiscal para mejorar la recaudación en el país, Fernando Herrero, ministro de Hacienda, fue denunciado por supuesta evasión por un monto cercano a los 50 millones de colones. La información, publicada por el diario *La Nación*, también denunciaba que el director de Tributación Directa, Francisco Villalobos, mantenía una deuda por 1.8 millones de colones por el pago del impuesto sobre la renta para el período fiscal del año 2008¹¹.

Meses después, varias organizaciones sindicales y sociales se manifestaron contra un posible tráfico de influencias cometido por el ministro de Educación, Leonardo Garnier, y el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, para beneficiar a la empresa Procesos, fundada por el ex ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y dirigida por su esposa y asesora de la Casa Presidencial, Florisabel Rodríguez. En este caso, ambos funcionarios habrían firmado cartas de recomendación dirigidas a la Refinadora Costarricense de Petróleo, que se tradujeron en una contratación por unos 18 millones de colones para la firma de Herrero y Rodríguez. Pese a que organizaciones sociales y sindicales solicitaron la destitución de los firmantes, la Procuraduría de la Ética se limitó a censurar la acción, mientras el gobierno los ratificó en sus cargos (Alvarado *et al.*, 2012b: 16).

Finalmente, durante el mes de noviembre, se presentó una situación inédita en la historia política costarricense, cuando la Asamblea Legislativa decidió no ratificar en su puesto al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz¹². La decisión de las y los diputados de la fracción del Partido Liberación Nacional, con el apoyo de otras fracciones, fue justificada como una "llamada de atención" para el poder judicial debido a que este se había "extralimitado en sus funciones". Esta situación generó un enfrentamiento abierto entre los tres poderes, causando

movilizaciones de funcionarios y funcionarias judiciales, apoyados por diversos sectores de la sociedad, los cuales interpretaron la decisión de no ratificar a Cruz como una violación de la independencia del poder judicial y una intromisión en sus funciones (Alvarado *et al.*, 2012c: 8).

Neoliberalismo, violencias y derechos

En una sociedad neoliberal con valores, comportamientos y formas de ciudadanía ya normadas y preestablecidas globalmente, existen relaciones de violencia estructurales inherentes a su naturaleza. Tal y como lo señalan diversos autores, entre ellos Pierre Bourdieu (1998), Pablo Dávalos (2010 y 2011) o Boaventura de Sousa Santos (2009), el sistema económico y social del neoliberalismo funciona desde la violencia, que es ejercida en las relaciones económicas de exclusión y despojo, así como en las políticas y brazos represivos de los Estados.

En este sentido, los grupos sociales marginados han sido sujetos receptores de las distintas formas de violencia ejercidas por la economía y sociedad neoliberal.

Aunado a lo anterior, pese a los avances de las agendas de las organizaciones feministas y de diversidad sexual, se visualiza una articulación cada vez más estrecha entre el modelo económico neoliberal y las morales conservadoras religiosas de carácter represivo (Sagot, 2012).

Asimismo, se denota la restricción de diversos espacios sociales, culturales y normativos que permitían la existencia y el reconocimiento de los actores marginados y desprotegidos en el establecido “orden democrático”. En relación con lo anterior Sagot señala que:

hay una contradicción entre un modelo económico que le da predominancia al mercado y la democracia; y para resolver esas contradicciones las democracias neoliberales generan altos niveles de violencia, formas renovadas de represión, individualismo y relaciones cercanas con los fundamentalismos religiosos [...] (p. 79).

Así, en el 2012 se presentan grandes nudos de conflictividad en relación con la agudización de los actos y políticas estatales de carácter represivos, así como el retraimiento de algunos derechos humanos. Dicha situación ha despertado procesos de organización y de resistencia de algunos actores colectivos.

Derechos sexuales y reproductivos y reconocimiento de la diversidad sexual

El año 2012 se caracterizó por una alta conflictividad en relación a los derechos sexuales y reproductivos, en particular por el desarrollo del juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la demanda internacional –interpuesta en 2001– por 17 personas afectadas ante la prohibición de la técnica de Fertilización In Vitro (FIV) en el país.

En este sentido, se visualizan diversas protestas reactivas por parte de los sectores conservadores, donde destaca una clara intervención de la Iglesia católica y de iglesias evangélicas. No obstante, por otro lado, el tema de la FIV se convirtió en un punto de las agendas de las movilizaciones de las organizaciones feministas y de las poblaciones sexualmente diversas (Alvarado *et al.*, 2012b)¹³.

Paralelamente a esta conflictividad, se presentan acciones colectivas por parte de la población sexualmente diversa en defensa del reconocimiento de sus derechos civiles y patrimoniales. En este sentido, se presentaron diversas movilizaciones, encuentros y comunicados, para presionar a las y los diputados para la aprobación del proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia¹⁴, el cual se encontraba en proceso de análisis en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, para luego ser votado en el pleno.

No obstante, con la renovación anual del directorio legislativo, se presenta un reacomodo de fuerzas a lo interno de la Asamblea Legislativa, resultando electo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos el diputado evangélico Justo Orozco, del Partido Renovación Costarricense, el cual se ha caracterizado por su conservadurismo radical¹⁵.

No obstante, a pesar de la presión ejercida por los grupos sociales, en la primera semana de trabajo de Orozco como presidente de la Comisión de Derechos Humanos se rechaza el proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia, por lo que sale de la corriente legislativa, eliminando casi totalmente la posibilidad de la aprobación del proyecto de ley.

En este sentido, se denota que durante el 2012 se ha gestado la articulación de diversos actores del espectro conservador. No obstante, por otro lado se fortalece la consolidación de un tejido de organización en defensa de los derechos de las poblaciones sexualmente diversas y de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, se denota la apertura en el debate público de la existencia de otras sexualidades, que se entienden más allá de los valores heteronormativos pre-establecidos por la sociedad hegemónica (Alvarado *et al.*, 2012b: 17).

Libertad de expresión y derecho a la educación

En el marco de un Estado que atraviesa un proceso de remodelación normativa en busca de la profundización de un modelo de acumulación por desposesión, y de una administración gubernamental inestable, se visualiza un retraimiento sostenido de algunas libertades consagradas como derechos humanos.

Así, mediante la aprobación de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, conocida como "Ley de Fotocopiado", surgen conflictividades en torno a la defensa del derecho a la educación, promovida por estudiantes y sectores académicos, *versus* el derecho de propiedad intelectual, defendido principalmente por grandes cámaras empresariales y casas editoriales.

Dicha ley planteaba despenalizar la reproducción de textos, libros, fonogramas y audiovisuales utilizados con fines académicos, lo cual generó la reacción negativa de diversas casas editoriales y autores privados adscritos a la Cámara Costarricense del Libro¹⁶, quienes solicitaban a la presidente Laura Chinchilla vetar dicha ley, alegando que esta legislación viola los derechos de autor consagrados y fortalecidos con la firma del CAFTA-DR.

Por otro lado, estudiantes universitarios, así como propietarios y propietarias de centros de fotocopiado se manifestaron a favor de la ley, y se articularon en el Movimiento Fotocopiando para Estudiar, desarrollando una serie de protestas en defensa del libre acceso al conocimiento y a la educación (Alvarado, *et al.*, 2012c: 4).

A pesar de esto, la presidente Chinchilla acudió al llamado de las grandes casas editoriales y vetó la ley. Por este motivo, el Movimiento Fotocopiando para Estudiar realizó una serie de protestas para exigir el “resello”¹⁷ de la ley por parte de las y los diputados. No obstante, la presidente, con la intención de dar fin al conflicto, emitió un decreto ejecutivo aclarando que no se penalizará la reproducción de materiales con fines académicos.

...durante 2012 se gestaron múltiples procesos de ocupación de tierras en todo el territorio nacional...

Bajo esta misma línea, surge un nudo de conflictividad en relación con la defensa de la libre expresión y del acceso a la información, debido a la aprobación de la reforma a la Ley de Delitos Informáticos, denominada por las organizaciones sociales y medios de comunicación como “Ley Mordaza”.

La conflictividad en torno a dicha ley se gesta en el mes de julio del 2012, cuando se aprueba en la Asamblea Legislativa una reforma al artículo 288 de la Ley de Delitos Informáticos, titulado “Espionaje”¹⁸. Ante dicha reforma de ley, diversos medios de comunicación masivos y sectores de la ciudadanía manifestaron su rechazo, debido a que representaba una violación al derecho de libre expresión y a la libertad de prensa, y una limitación al acceso a la información pública¹⁹.

En general, la aprobación y publicación de las reformas sobre la Ley de Delitos Informáticos generó una preocupación generalizada entre la población. En este sentido, sucedieron diversas manifestaciones y protestas sociales en donde la “Ley Mordaza” se ha convertido en parte de las agendas de lucha de distintos actores colectivos.

Lucha por la tierra, producción campesina y autonomía indígena

Con la profundización de los procesos de acumulación por desposesión, la problemática agraria en Costa Rica en los últimos años ha tomado más fuerza. Las unidades de producción campesinas e indígenas, que han sido histórica y sistemáticamente excluidas, viven con más fuerza el despojo de los recursos básicos para la producción, tales como tierra, agua, semillas y tecnologías. La apuesta por parte de los gobiernos en los últimos veinte años a la producción industrializada y transnacional ha conllevado una agudización de la conflictividad en la ruralidad costarricense (Quesada *et al.*, 2011: 1).

La concentración y transnacionalización de los recursos para la producción, y la acrecentada presión sobre las tierras de las comunidades campesinas e indígenas, han generado gran cantidad de procesos de resistencia. Así, durante 2012 se gestaron múltiples procesos de ocupación de tierras en todo el territorio nacional, en donde las respuestas inmediatas por parte de los grandes propietarios (terratenientes, empresas o el Estado) han sido los desalojos administrativos y judiciales²⁰, que han presentado altos grados de violencia y represión, tanto por parte de las fuerzas policiales nacionales así como de cuerpos de seguridad para-estatales (Chacón, 2013: 7).

En relación con las conflictividades en torno a la privatización y transnacionalización de los recursos para la producción, resalta el estado de alerta por parte

de organizaciones campesinas, así como de diversos grupos ambientalistas, ante la petición de las empresas Semillas del Trópico y Delta & Pine Land –subsidiarias de la transnacional Monsanto– a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad del Servicio Fitosanitario del Estado para sembrar cuatro variedades de maíz transgénico en la provincia de Guanacaste para la producción de dichas semillas²¹.

En relación con los procesos de lucha por la tierra, destaca, como un momento de inflexión en la escalada represiva neoliberal y la disputa por la tierra, la ocupación que iniciaron alrededor de 250 familias en mayo del 2011 de la finca Naranjales Holandeses, de 425 hectáreas, ubicada en la comunidad de Medio Queso, del cantón de Los Chiles en la provincia de Alajuela, conflicto en donde las familias han invadido alrededor de siete veces las fincas con el objetivo de demandar al Instituto de Desarrollo Rural la compra de la finca y la repartición de las tierras entre las familias que la ocupan para sembrarla²² (Alvarado, *et al.*, 2012e: 13).

Bajo esta misma línea, en 2012 se visualizan procesos de organización y recuperación de tierras en los territorios indígenas²³ de Cabagra, Salitre y Boruca, ubicados en el cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, y en el territorio indígena de Maleku, del cantón de Guatuso, provincia de Alajuela.

Es importante resaltar que las recuperaciones de tierras indígenas han sido acompañadas de procesos organizativos en defensa de la biodiversidad, la cultura y la autonomía de los pueblos. A pesar de que en la Ley Indígena de Costa Rica no se permite la titulación de tierras a personas no indígenas dentro de los territorios, en la práctica, empresarios, terratenientes, ganaderos y agricultores no indígenas se han adueñado de grandes fincas dentro de los territorios.

En este sentido, estas recuperaciones de tierras se han visto determinadas por conductas discriminatorias y racistas por parte de las personas que se las adueñaron, así como de las autoridades estatales²⁴, por lo que se han presentado agudos escenarios de violencia dirigidos hacia estos grupos.

A modo de cierre

Como se señaló en otro apartado, pensar la protesta social en Costa Rica durante el año 2012, no es posible si no se la enmarca dentro del proceso general de cambio en el modelo económico sucedido durante las últimas décadas. Bajo los designios de la estrategia neoliberal se han despertado nuevas tensiones sociales y actores colectivos, mientras otros han reemergido, articulando un complejo escenario de disputas en torno a problemas económicos, políticos, sociales y culturales.

La remodelación normativa operada bajo el momento del libre comercio implicó la ampliación de nuevos espacios de acumulación por desposesión, los cuales se han colocado en el centro de las luchas sociales y políticas. Cinco años después de la firma del CAFTA-DR pareciera que las consecuencias de dicho acuerdo comienzan a manifestarse con mayor fuerza en el país, sumadas al escenario de crisis económica global registrado desde el año 2008, y cuyos efectos sobre la economía costarricense han desencadenado procesos de resistencia.

En términos generales, las protestas sociales durante el año 2012 se concentraron en torno a las consecuencias generadas por el nuevo modelo económico y la consiguiente desestructuración del modelo anterior, disparando una variada diversidad de

actores sociales y políticos quienes salieron a las calles para manifestar su oposición a los efectos de la estrategia neoliberal y su agenda. Por otra parte, las luchas emprendidas por actores colectivos históricamente marginados como las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos, la población sexualmente diversa, entre otros, expresan, de un lado, el nuevo contexto social y político en que las demandas por el reconocimiento de derechos y un cambio en el modelo cultural hegemónico, orientado hacia luchar contra todas las formas de exclusión y marginación, continúan ganando terreno; y, del otro lado, el posicionamiento de otros actores cuyas agendas han ampliado y complejizado el campo de la protesta social en el país.

Bibliografía

- Alvarado, Alejandro y Mora, Sindy 2009 "Costa Rica. Informe de coyuntura. Enero a Diciembre de 2009" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO).
- Alvarado, Alejandro; Álvarez, Mercedes y Mora Sindy 2010 "Costa Rica. Informe de coyuntura. Enero a abril de 2010" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO).
- Alvarado, Alejandro y Álvarez, Mercedes 2011 "Costa Rica. Informe de coyuntura. Enero a diciembre de 2012" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO).
- Alvarado, Alejandro; Álvarez, Mercedes y Mora Sindy 2012a "Puertos, autoritarismos y resistencias: el conflicto por la concesión de los puertos de Limón" en *Reflexiones* (San José) Número especial de las Jornadas de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales.
- Alvarado, Alejandro; Martínez, Gloriana y Gutiérrez, Ana Lucía 2012b "Costa Rica. Informe de coyuntura. Mayo a agosto de 2012" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO).
- Alvarado, Alejandro; Martínez, Gloriana y Gutiérrez, Ana Lucía 2012c "Costa Rica. Cronología del conflicto social. Noviembre de 2012" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO).
- Alvarado, Alejandro; Martínez, Gloriana; Gutiérrez, Ana Lucía 2012d "Costa Rica. Cronología del conflicto social. Octubre de 2012" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO).
- Alvarado, Alejandro; Martínez, Gloriana y Gutiérrez, Ana Lucía 2012e "Costa Rica. Informe de coyuntura. Enero a abril de 2012" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO).
- Bourdieu, Pierre 1998 "La esencia del neoliberalismo" en <www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce35_11contro.pdf>.
- Cajiao, María Virginia 2002 "Derechos de los pueblos indígenas costarricenses sobre sus recursos naturales" en *Revista Ambientico* (Universidad Nacional: Heredia) N° 102.
- Chacón, Vinicio 2013 "Aumenta presión y violencia por la tenencia de la tierra" en *Semanario Universidad* (San José) N° 1972, enero, pp. 16-22.
- Dávalos, Pablo 2010 *La democracia disciplinaria: el proyecto posneoliberal para América Latina* (Quito: CODEU-PUCE).
- Dávalos, Pablo 2011 "Hacia un nuevo modelo de dominación política: Violencia y poder en el posneoliberalismo", en *Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)* (Quito).

- De Sousa Santos, Boaventura 2009 *Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el Derecho* (Madrid: Trotta).
- Estado de la Nación 2012 “XIII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible” (San José: Estado de la Nación).
- Molina, Xinia 2012 “Delitos informáticos y el espionaje político” en *Campus* (Heredia) N° 233, agosto.
- Mora, Henry 2005 “Los Acuerdos de Inversión en los Tratados de Libre Comercio: de vuelta al AML. El caso del TLC entre Estados Unidos y los países de Centroamérica” en Estay, Jaime (comp.) *La economía mundial y América Latina. Tendencias, problemas y desafíos* (Buenos Aires: CLACSO).
- Muñiz, Elsa 2011 “Los puntos conflictivos en la relación entre los Estados y las políticas sexuales” en Corrêa, S. y Parker, R. (comps.) *Sexualidade e política na América Latina: histórias, interseções e paradoxos* (Rio de Janeiro: ABIA).
- Quesada, Jorge; Martínez, Gloriana y Morales, María Paula 2011 “La organización campesina en Costa Rica: un recuento histórico” en *La Jornada del campo* (México) N° 42, marzo.
- Robles, Francisco 2011 “Los de entonces ya no son los mismos. Acumulación por desposesión en la última década en El Salvador y Costa Rica” en *Anuario de Estudios Centroamericanos* (San José) N° 37.
- Sagot, Montserrat 2012 “¿Un paso adelante y dos atrás? La tortuosa marcha del movimiento feminista en la era del neointegrismo y del «fascismo social» en Centroamérica” en Valdivieso, Magdalena et al. (comps.) *Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe* (Buenos Aires: CLACSO).
- Vargas, Luis Paulino 2011 “Costa Rica: Tercera fase de la estrategia neoliberal. Contradicciones y desafíos (2005-2010)” en *Rupturas* (San José) Vol. 1, N° 1, julio.

Notas

1 La crisis extendida durante los años de 1980-1982 generó un diagnóstico de la economía costarricense según el cual el papel estatal en su orientación introducía distorsiones en el mercado relacionadas, sobre todo, con su proteccionismo hacia el sector primario y secundario. Combinado con esto, una economía ineficiente, explicada en parte por lo anterior, precipitó el escenario de recesión con inflación sufrido durante esta década (Vargas, 2011: 86).

2 Asimismo, según señala el XVIII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible, durante el año 2011 la ciudadanía costarricense mostró su menor nivel de apoyo al sistema político, registrando un 56% de apoyo a la democracia y sus instituciones, el porcentaje más bajo desde la primera medición hecha en el año 1978 (2012: 256). Esta situación se ha visto reflejada en una profunda parálisis del Estado costarricense, patente en la incapacidad para procesar el malestar de la población, la tendencia hacia la represión de la protesta social y de los actores colectivos y las tensas relaciones entre los tres poderes de la República, entre otras.

3 El concepto de acumulación por desposesión es desarrollado David Harvey, para quien, desde el

golpe de Estado en Chile uno de los rasgos característicos del neoliberalismo es el cercamiento de los bienes públicos en beneficio de los capitales privados. Según Harvey, “los bienes públicos en manos del Estado fueron lanzados al mercado para que el capital sobre-acumulado pudiera invertir en ellos, reformarlos y especular con ellos” (citado en Robles, 2011: 106).

4 Para una periodización distinta de la fase neoliberal en el país, ver, por ejemplo, Vargas, 2011.

5 De acuerdo con Vargas, el proceso de re-estructuración generó, entre otras cosas, una redefinición del papel del Estado, como de las políticas públicas, frente a los mecanismos del libre comercio. También, cambió el papel del mercado nacional y centroamericano frente a los terceros mercados, en particular el estadounidense y el europeo, junto con un cambio en la naturaleza de las relaciones con el mercado mundial capitalista, especialmente en cuanto a los grados de apertura respecto de las importaciones y el capital extranjero (2011: 86).

6 Mora, señala que en este tratado los Estados Unidos imponen a los países de la región centroamericana una liberalización extrema de las reglas de inver-

sión, junto con un fortalecimiento de los derechos de los inversionistas extranjeros bajo el argumento de la atracción de Inversión Extranjera Directa (2005: 283).

7 El “memorándum del miedo” fue un documento elaborado por el vicepresidente de la República, Kevin Casas, junto con el diputado del Partido Liberación Nacional, Fernando Sánchez, en el cual se delineaba la estrategia que debía seguir el gobierno para conseguir la aprobación del TLC. Dicho memorándum fue publicado por el *Semanario Universidad* de la Universidad de Costa Rica, despertando el malestar entre la ciudadanía costarricense.

8 Para más detalle sobre este proceso de resistencia, ver Alvarado *et al.* 2009, 2010, 2012a, 2012b.

9 Se trata de los proyectos de ley de Contingencia Eléctrica, expediente N° 18.903; de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Subsector Eléctrico, N° 17.496; y otros tres presentados bajo el nombre de proyecto de Ley General de Electricidad.

10 En el mes de julio, durante un almuerzo entre representantes de la principal cámara empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del ICE, Claudio Volio, representante de las generadoras eléctricas, expresó al ministro Castro la urgencia de una reforma del sector eléctrico para, entre otras cosas, eliminar el tope de generación (ver Alvarado *et al.*, 2012b: 5).

11 Estas denuncias llevarían a ambos funcionarios públicos a renunciar a sus cargos.

12 El magistrado Fernando Cruz integra la Sala Constitucional, y se le conoce por su posición crítica hacia proyectos como el CAFTA-DR y la minería a cielo abierto.

13 En el mes de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en una sentencia inaplicable y de acatamiento obligatorio a favor de las parejas demandantes, en donde se señala a la prohibición de la FIV por parte del Estado costarricense como una violación a los derechos humanos.

14 Dicho proyecto plantea otorgar una figura legal a las uniones de las personas del mismo sexo, con el objetivo de que se les reconozca legalmente como parejas y puedan acceder a los derechos patrimoniales y civiles con que cuentan las parejas heterosexuales.

15 Dicha coyuntura generó la creación de un nuevo espacio de articulación entre diversas organizaciones feministas, sectores de la población sexualmente diversa y grupos progresistas, llamado Movimiento Invisibles.

16 Además, varias cámaras empresariales se manifestaron contra esta ley, entre ellas la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, la Asociación de Profesionales en Propiedad Intelectual de Costa Rica y la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio.

17 “Este consiste en que las y los diputados desestimen las observaciones del poder ejecutivo, con

una votación de al menos dos tercios del total de sus miembros, sancionando el proyecto y enviándolo a publicación para convertirse en ley de la República” (Alvarado *et al.*, 2012d: 3).

18 En su nueva redacción, el artículo número 288 dispone que: “Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado” (Molina, 2012: 1).

19 En este sentido, diversos medios de comunicación, organizaciones de defensa de los derechos humanos, grupos estudiantiles, así como el Colegio de Periodistas de Costa Rica, entre otros, iniciaron campañas de presión en contra de dicha ley. Jorge Blanco, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional señala que “esta ley forma parte de un proceso más amplio vinculado con el debilitamiento del orden democrático en el país” (Alvarado *et al.*, 2012c: 9).

20 En estos desalojos se realiza la destrucción de los cultivos y de los ranchos donde habitan las y los ocupantes, la contaminación de las fuentes de agua y en algunos casos la quema de las pertenencias de las personas, e incluso de animales domésticos.

21 En este marco se han desarrollado múltiples acciones colectivas con el fin de ejercer presión a las y los integrantes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad para la no aprobación de esta solicitud. Entre ellas se encuentra una caminata interprovincial, que partió de la provincia de Guanacaste y finalizó en la de San José.

22 La lucha por la tierra en la comunidad de Medio Queso se ha convertido en un hito de la lucha campesina actual debido a los niveles de violencia que han vivido las familias campesinas, la cual ha dejado como resultado varios campesinos heridos de arma de fuego, así como decenas de personas detenidas y con encauzamientos legales.

23 “La Ley Indígena de Costa Rica (de 1977) establece (artículo 2°) la propiedad de las reservas indígenas -delimitadas por la misma ley- a favor de las comunidades indígenas que habitan en ellas. Tratase, pues, de una propiedad privada colectiva diferenciada de la propiedad estatal y de la netamente privada e individual. La titularidad de la propiedad corresponde a una colectividad, la comunidad indígena” (Cajiao, 2002: 1).

24 En este sentido, resalta el caso del territorio indígena de Salitre, en donde se ha iniciado un Plan Territorial de Recuperación de Tierras, en donde se enmarca la toma de fincas en tres comunidades del territorio (Cebror, Puente de Salitre y Río Azul). Estos procesos han desatado altos grados de violencia física y patrimonial hacia dirigentes comunitarios y a las familias indígenas que se encuentran en las tierras ocupadas.

Ecuador en 2012

Un largo año electoral¹

MARIO UNDA

Sociólogo, politólogo y docente en la Universidad Central del Ecuador. Investigador en el Centro de Investigaciones “Ciudad” y profesor en la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Coordinador del comité del OSAL en dicho país.

Resumen

Para Mario Unda, el 2012 en Ecuador fue un año peculiarmente largo, que arrancó a finales de 2011 y que recién terminó en febrero de 2013, tras las elecciones que mantuvieron a Rafael Correa en la presidencia del país. Este artículo es una revisión de las circunstancias que marcaron el proceso electoral ecuatoriano, que de acuerdo con el autor tienen que ver con un ambiente poco democrático y de despolitización, esto último en relación a la participación que acompañó al proceso constituyente hace unos años. Los motivos de la despolitización son de distintos tipos, según el autor: por un lado los que se basan en el temor, tanto a la represión política como a la pobreza socioeconómica, y por otro los que se basan en el acomodamiento y la prosperidad de los sectores de ingresos medios. Desde esta perspectiva, el autor expone cuáles fueron los actores e intereses que estuvieron en juego durante los últimos comicios. Además, apunta una serie de coordenadas para caracterizar el modelo económico ecuatoriano y sus vínculos con el proyecto correísta.

Abstract

To Mario Unda, 2012 in Ecuador was a peculiarly long year, which began towards the end of 2011 and came to an end only in February 2013, following elections which confirmed Rafael Correa in power. This article is a review of the circumstances that marked the Ecuadorian electoral process, which according to the author are connected with a weak democratic environment and depoliticisation, the latter as regards the participation which followed the constitutional process for a number of years. In the author's view, the reasons for depoliticisation are two-fold, stemming from fear on the one hand, both of political repression and socioeconomic poverty, and on the other hand from complacency and prosperity enjoyed by middle-income sectors. From this viewpoint, the author presents the actors and interests at play at the elections. Furthermore, he offers some starting points to characterise the Ecuadorian economic model and its links to Correa's project.

Palabras clave

Campaña electoral, democracia, despolitización, correísmo.

Key words

Ecuadorian electoral campaign, democracy, depoliticisation, Correa's support.

Cómo citar este artículo

Unda, Mario 2013 "2012 en Ecuador: un largo año electoral" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 33, mayo.

1. Un largo año electoral

El de 2012 fue un año electoral. En cierto modo, atípico: la campaña se instaló en la vida política con mucha anticipación, dado que las elecciones se realizarán el 17 de febrero de 2013, y la campaña arrancó el 4 de enero; pero en octubre ya había dado inicio oficialmente el período electoral, con la convocatoria a elecciones realizada por el Consejo Nacional Electoral. En la víspera del día de inocentes, la entonces ministra Coordinadora de la Política, Betty Tola, dijo que "con toda seguridad" Correa sería candidato a la reelección. El propio Correa pretendía ponerle un poco más de suspenso al anuncio: un par de semanas antes, como quien solamente reflexiona sobre el asunto, había dicho que "nuestra principal responsabilidad es darle continuidad al proyecto político. No puede detenerse la revolución ciudadana y si perdemos las elecciones se detendría esa revolución. [...] Si alguien más lo puede hacer, en buena hora, si no tendré que ir yo"². Una obligación buscada e inevitable se diría. Año atípico, pues empezó en diciembre de 2011 y culminará el 17 de febrero, con la realización de las elecciones.

Pero por otro lado, no tan atípico después de todo: si bien se mira, hemos estado en campaña electoral permanente desde las elecciones de 2006, cuando en dos vueltas –el 15 de octubre y el 26 de noviembre–, Correa fue elegido presidente de la república. En seguida, el 15 de abril de 2007, se realizó un plebiscito en el cual la población se pronunció a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. A continuación, el 30 de septiembre del mismo año, se eligieron los asambleístas encargados de redactar la nueva Constitución, y Alianza PAIS (AP) obtuvo una amplia victoria. Un año después, el 28 de septiembre de 2008, se realizó el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. Más tarde, el 26 de abril de 2009, se llevaron a cabo nuevas elecciones generales, con un nuevo triunfo de Correa y de AP. Por último, el 7 de mayo de 2011, el pueblo respondió a una consulta popular, con diez preguntas, cuyo núcleo central, según dijo el propio Correa, se dirigía a permitirle "meter las manos en la justicia". Aunque triunfó en todas las preguntas, Correa vio reducirse su margen de ganancia y perdió prácticamente en la mitad de las provincias. ¿Marca eso una tendencia? ¿Las elecciones de 2013 mostrarán una recuperación de su capacidad hegemónica? ¿Sobre qué bases? Dado que, a fin de cuentas, el correísmo ha ganado todas esas elecciones, puede decirse que los procesos electorales han sido su principal medio de legitimación.

Año electoral típico y atípico al mismo tiempo. Pero no es la única paradoja. Otra, quizás más decidora para las transformaciones que se están produciendo en

el Ecuador, es el ambiente poco democrático y despolitizado del proceso electoral. ¿Cómo puede ser esto posible?

2. Despolitización y ambiente poco democrático

Se trata de unas elecciones que se realizarán en condiciones muy difíciles, sobre todo para la oposición de izquierdas. Más allá de la existencia de una Corte Nacional Electoral controlada por el oficialismo, el diseño mismo del proceso no favorece ciertamente una contienda democrática. La campaña resulta muy corta, sobre todo para las candidaturas que cuentan con pocos recursos, y beneficia a los candidatos con recursos y “posicionamiento” previo; y el tiempo disponible –42 días– no se presta para debates serios y profundos con el pueblo, en sus espacios de socialización y organización, más aún cuando la profusión de propaganda oficial, de un carácter poco disimulado electoralmente, genera una disparidad de partida muy notoria. Además, las reformas recientemente aprobadas para la distribución de escaños –método D’Hont y distritalización de las provincias de mayor población– significan un claro retroceso, porque favorecen excesivamente a las opciones más votadas y reducen de modo significativo las posibilidades de representación de las minorías, generando una distorsión en la representación política.

Esto ocurre teniendo como piso y telón de fondo un notorio proceso de despolitización que se extiende en la conciencia social. El ambiente participativo que acompañó al proceso constituyente es ya cosa del pasado, y no parece que pueda revivirse. Las acciones gubernamentales han contribuido a acentuar, si es que no a crear, ese ambiente: desde el paternalismo que expropia toda actuación a la población y a sus organizaciones hasta el autoritarismo que limita desde arriba las posibilidades de participación decisoria y, sobre todo, la criminalización de la protesta social; todo apunta a una población con presencia pasiva en la política. En los primeros meses del año, a las puertas de la *Marcha por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos*, la policía realizó un operativo en el que detuvo a diez jóvenes a los que acusó, como a otras decenas de luchadores sociales, de terrorismo. Las indagaciones y el juicio se extenderían durante todo el año, y quedarían para resolverse luego de las elecciones: un amedrentamiento persistente. Pero también hay otro elemento de temor: el temor a perder el empleo, a perder contratos. Temor político y judicial, por un lado, temor socioeconómico por otro: un extraño ambiente planea sobre las condiciones en que se desenvuelve la acción social, inhibiendo las ya limitadas condiciones de participación.

Pero aún un elemento adicional debilita la participación de la sociedad: el acomodamiento al crecimiento económico, cierta prosperidad de sectores de ingresos medios, la ampliación del consumo en capas populares de la población. Todo esto se combina con el claro desplazamiento del discurso correísta a los tópicos y énfasis conservadores: el orden, la majestad del poder, la concentración de las decisiones en pocas manos, la inseguridad y la deslegitimación de la organización y de la lucha.

Así, una nueva paradoja, que se viene incubando desde antes, se perfila con mayor claridad. Es probable, casi seguro, que Correa será reelegido, pero el respaldo numérico no significará un fortalecimiento de su capacidad de movilización, pues se trata de un respaldo cada vez más construido sobre la base de un espíritu conservador y pasivo. De manera que, contrariamente a lo que pudiera pensarse,

serán unas elecciones que ocurrirán en un ambiente de despolitización. Pero en un ambiente así, ¿qué es lo que está en juego?

3. ¿Qué está en juego?

a) Está en juego desde la formación del nuevo “mapa político” hasta la reconstrucción del sistema de partidos. Al final del período anterior, el viejo sistema de partidos hizo agua y se desplomó. De allí surgió Alianza PAIS como fuerza dominante, como aquella que sería capaz de rehacer el dominio político en beneficio de los intereses generales de las clases dominantes, como veremos luego. Si la comparamos con la situación anterior, diríamos que AP ocupa un lugar mixto: en parte, reemplaza al antiguo “centro izquierda” –básicamente, la Izquierda Democrática–; pero también reemplaza a ciertas expresiones populistas que en su momento se presentaron como progresistas –la Concentración de Fuerzas Populares (CFP) de Roldós, la primera fase del roldosismo de Bucaram–; de igual manera, recoge a un sector de la izquierda, aquella que siempre estuvo presta a sumarse a proyectos de apariencia “progresista”; y, por último, ocupa una porción del espacio de la política conservadora. Esta imagen variopinta ha llevado a la confusión a mucha gente, que se ha dejado llevar por las características secundarias –las obras–, olvidando y negando el contenido profundo del nuevo proyecto de dominación, es decir, su carácter modernizador del capitalismo.

Por otro lado, el juego de las encuestas deja entrever un interés compartido por el gobierno y por la derecha: crear un escenario político más proclive para la gobernabilidad, el bipartidismo, un viejo sueño de las mentalidades conservadoras esclarecidas que pudiera convertirse en realidad, superando la fragmentación de las expresiones políticas sobre la base del reconocimiento de la continuidad de la modernización capitalista. En este marco, ¿qué espacio quedará para las izquierdas?

b) Para la derecha, está en juego el “nuevo rostro” que presentará a la sociedad. Las derechas han tardado un buen tiempo en la búsqueda de una expresión que se corresponda con la nueva situación. Sus partidos tradicionales, centrados en la defensa del programa neoliberal, no han logrado levantar cabeza y parecen estar de retirada, tanto su principal formación política tradicional, el partido socialcristiano, cada vez más reducido en sus posibilidades de representación nacional, cuanto las expresiones más “populistas” y clientelares, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) que, por distintas razones, no llenan las expectativas de este sector. El PRIAN porque es poco más que una extensión política de los intereses particulares de Álvaro Noboa, el PSP porque representa el aventurerismo político que quiere presentarse como el mejor defensor posible de los intereses de los grupos dominantes, en la medida en que, por lo menos hasta las elecciones de 2009, había logrado mantener un peso electoral significativo³. Por eso han intentado, primero con poco éxito, presentar caras más “modernas”, menos ligadas aparentemente con el pasado. Primero fueron Futuro Ya –de Pablo Lucio Paredes– y Uno –de Maruri y Montaño–, pero fracasaron. Más adelante lo han intentado con la Concertación, que tampoco logró cuajar plenamente pese a la buena prensa con que ha gozado, e incluso quedó por fuera de la inscripción electoral, y ahora lo intentan con dos nuevos movimientos: CREO y

SUMA, con los cuales parecen estar mejor encaminados. Representan una derecha “moderna”, es decir, que también tiene como horizonte la modernización capitalista y que, desde ese punto de vista, no es más que la otra cara del proyecto correísta. Por eso es coincidente con la nueva posición de los gremios empresariales frente al gobierno, centrada más en el diálogo y en la negociación que en la confrontación, dado que, sobre lo fundamental, existe un acuerdo entre ellos.

El proyecto correísta aceleró la crisis de la antigua izquierda porque atrapó en sus redes a una de sus partes

c) También para las izquierdas se juega la posibilidad de una reconstitución. El proyecto correísta aceleró la crisis de la antigua izquierda porque atrapó en sus redes a una de sus partes, rompiendo la unidad que difícilmente se había ido construyendo al calor de la resistencia social contra el neoliberalismo. La izquierda, como posibilidad de un proyecto independiente de las diversas opciones de modernización capitalista, ha quedado seriamente debilitada, como debilitadas están las expresiones políticas de izquierda que se han mantenido al margen del embelesamiento correísta, y las organizaciones sociales, duramente golpeadas por los afanes oficiales de cortar de raíz cualquier posibilidad de movimiento popular autónomo; pero un proyecto de modernización capitalista como el que impulsa el correísmo genera también conflictos y contradicciones: alrededor del manejo y del control de los recursos, alrededor de la participación, alrededor de la defensa de la independencia y de la autonomía de las organizaciones sociales y en contra de un proyecto de disciplinamiento autoritario de la sociedad. Por eso han vuelto a ponerse en marcha las movilizaciones sociales, y estas han alentado el reencuentro de las izquierdas. La Unidad Plurinacional es ahora esa posibilidad, que empieza a recorrer un camino escarpado y difícil. Se juega, incluso, la posibilidad de su propia continuidad.

d) Desde la perspectiva del gobierno, lo que estará en juego, obviamente, es la afirmación del proyecto de dominación que construye el correísmo, una afirmación que, en las actuales condiciones únicamente puede ser conservadora. Básicamente, se verá si logra mantener controlada la mentalidad y la conciencia de la mayoría de la población detrás de su proyecto de modernización capitalista, un proyecto que, en su discurso, pone el énfasis en la recuperación del Estado como proveedor de las condiciones generales de la producción y de la reproducción del sistema: las grandes obras de infraestructura, el dinero barato, la suficiente circulante en el mercado, la fuerza de trabajo disciplinada y la sociedad gobernable. En este punto, la diferencia central respecto al modelo neoliberal anterior parece ser *i)* el papel motor de la economía: por el impacto de las inversiones de las inversiones públicas, que pueden “jalar hacia adelante” la producción y la circulación de capitales –el mejor ejemplo ahora es el acelerado crecimiento de la industria de la construcción–; y *ii)* la imposición, desde el Estado, de condiciones “normales” de explotación del trabajo y de relación con el capital. De este modo, el Estado parece regir la economía.

Con esta cobertura, el gobierno les ofrece a los grandes capitalistas un Estado que sea capaz de responder a las necesidades estratégicas que se desprenden del momento particular de desarrollo del capital. En primer lugar, un gobierno “moderno” en un Estado “moderno”, es decir, un Estado que vele por los intereses generales de la clase dominante, y no sólo por los intereses de un puñado de familias, como ocurrió en el período anterior. Para cumplir este cometido puede tener que enfrentarse –como lo ha hecho– con ciertos sectores de la burguesía –por ejemplo, con la banca, que, de cualquier modo, ha acumulado ingentes ganancias–. En segundo lugar, un Estado que desarrolle las condiciones generales que requieren los capitales para desarrollar sus negocios. Estas condiciones generales están relacionadas generalmente con grandes obras de infraestructura –carreteras, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y refinerías–, necesarias para todos los empresarios, pero demasiado costosas como para que cada uno las resuelva por sí mismo. En tercer lugar, un Estado que facilite la expansión de los mercados, tanto hacia el exterior como el interno. Para ampliar las posibilidades de mercado externo, el gobierno ha definido que el comercio es su prioridad en las relaciones diplomáticas, y ha abierto o acercado relaciones con otros mercados distintos a Estados Unidos y Europa. Esto resulta de importancia ahora, cuando la crisis del capitalismo mundial golpea con particular fuerza justamente a Estados Unidos y a Europa. Y, sobre todo, el gobierno apuesta a la conformación de un bloque regional que, en líneas generales, sigue los movimientos reales del capital que, en estos últimos veinte años, se ha regionalizado de modo acelerado. De este modo, se da continuidad, en la política del Estado, al movimiento objetivo de los capitales, que se han regionalizado y transnacionalizado en el último período. En cuarto lugar, la generación de incentivos para el desarrollo de nuevos campos de negocios para el capital, sobre todo tomando en cuenta los cambios que se producen en el orden capitalista mundial. Esto puede apreciarse claramente en el Código de la Producción, en el Plan Nacional de Desarrollo o en la propuesta de la creación de las Zonas Económicas de Desarrollo Especial (ZEDES). En quinto lugar, la disposición de fuerza de trabajo disciplinada. Eso se consigue desde las políticas laborales del régimen, que combinan varios elementos: la fragmentación de los trabajadores en públicos y privados, para evitar su constitución en sujeto; el enfrentamiento de los trabajadores públicos de cara a los “ciudadanos”, debilitando sus posibilidades de organización y de acción reivindicativa; pero también dando satisfacción a ciertas aspiraciones de los trabajadores represadas en el período anterior, como mejores salarios y posibilidades organizativas –para los trabajadores del sector privado–, es decir, desactivando ciertas inconformidades sociales. Al mismo tiempo, se mantienen espacios de trabajo flexibilizado: en el sector privado disfrazado ahora de encadenamientos productivos y de negocios inclusivos, y en el sector público disfrazado de contratos por tiempo fijo. En sexto lugar, la subordinación de las economías familiares, de las pequeñas e incluso medianas economías a la lógica de la acumulación de los grandes capitales, a través de los encadenamientos productivos, negocios inclusivos, etc. Y, por último, pero no lo menos importante, el disciplinamiento autoritario del pueblo. Este se consigue a través de dos mecanismos, aparentemente contradictorios, pero en realidad complementarios: por una parte, la atención de algunas demandas sociales, negadas en la época neoliberal; a esto se suma una acción claramente clientelar, que permite hacer pie en un conjunto

de sectores sociales generalmente desarticulados, con poca capacidad de organización y casi ninguna posibilidad de representarse políticamente por sí mismos. Todo ello permite legitimar el accionar con una imagen progresista y “popular”. Pero, por otra parte, a través del conjunto de mecanismos que se conoce como “criminalización de la protesta social”; es decir, su deslegitimación, las reformas administrativas para asegurar su sometimiento al Estado y a los dictados del gobierno, las reformas legales para penalizar las acciones de protesta, la represión policial y militar y el enjuiciamiento. La criminalización de la lucha social le es necesaria al régimen para desarticular las posibilidades de encuentro del movimiento popular.

e) Desde la perspectiva de las organizaciones y movimientos populares, por lo tanto, se juega el derecho a organizarnos, a defender nuestros derechos, a protestar y a resistir. El proyecto del gobierno, como hemos visto, incluye el control de las organizaciones populares desde el Estado, someterlos a la voluntad del gobernante. El ansia de controlar a las organizaciones llega al extremo de darle al presidente de la República el derecho de desaparecerlas.

En consecuencia, para los movimientos sociales, en estas elecciones estarán en juego las posibilidades de recomponer un movimiento popular independiente y autónomo, es decir, con capacidad de organizarse por sus propios intereses, de representarse por sí mismo. Como ya vimos, el proyecto del gobierno no tolera la presencia de organizaciones y movimientos con propuestas propias, con voz propia. Es una cuestión central que, atravesada por la contienda electoral, va más allá de ella.

Post scriptum. Las elecciones de 2013. Un pequeño balance inicial

¿Qué pasó finalmente en las elecciones del 17 de febrero?

Cuadro 1 - Elecciones presidenciales

Partido	Candidato	% de votos
Partido Sociedad Patriótica (PSP)	Lucio Gutiérrez	6,73
Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN)	Álvaro Noboa	3,72
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)	Nelson Zavala	1,23
Unidad Plurinacional de las Izquierdas	Alberto Acosta	3,26
Creando Oportunidades (CREO)	Guillermo Lasso	22,68
Sociedad Unida Más Acción (SUMA)	Mauricio Rodas	3,90
Ruptura	Norman Wray	1,31
Patria Altiva I Soberana (PAIS)	Rafael Correa	57,17
Votos en blanco		1,53
Votos nulos		5,86
Abstencionismo		19,04

Fuente: <<http://resultados.cne.gob.ec/Results.html?RaceID=1&UnitID=1&IsPS=0&LangID=0>>.

Fecha de consulta: 28 de febrero de 2013.

Nota: El porcentaje de votos de cada candidato se calcula sobre el total de votos válidos, excluidos los votos nulos y en blanco. El porcentaje de votos nulos y en blanco se calcula sobre el total de votos emitidos. El abstencionismo se calcula sobre el total del padrón electoral.

Al parecer, se afirma la tendencia a la reconstrucción de un nuevo mapa político, tras la debacle de los partidos tradicionales entre 2006 y 2007. Correa y Alianza País obtuvieron una victoria holgada, mayor que la de 2009. Correa, que había obtenido un 52% de la votación en 2009, sube ahora a 57%. Ahora ganó en casi todas las provincias del país, pero con porcentajes muy diferentes, que se mueven entre el 40 y el 70%. Se consolida como su nueva plaza fuerte la costa, especialmente las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas, donde obtuvo más del 60% de los votos. Su aceptación sigue siendo alta en el campo de la costa y de la sierra (a excepción de las provincias mencionadas) y en los barrios populares de las ciudades; pero ha logrado recobrar el favor de sectores medios urbanos que le habían dado la espalda en 2009 y en la consulta popular de 2010, e incluso ha comenzado a tener votación significativa en sectores de altos ingresos. En general, se muestra que ha heredado el tipo de voto que antes sostuvo la presencia política de partidos como el PRIAN, el PRE, la Sociedad Patriótica e incluso el partido socialcristiano. Su menor votación se encuentra en la sierra central y en la Amazonía centro sur, lugares de concentración indígena y de conflictos socioambientales alrededor de las concesiones mineras y petroleras. Por otro lado, la votación de sus listas para assembleístas nacionales baja a 52%.

Guillermo Lasso, del movimiento CREO, la derecha renovada, quedó en segundo lugar con el 22%. Se reafirmaría la tendencia, si no a un "bipartidismo", por lo menos a un "bicampismo", compartido por el populismo correísta y la derecha. Si se suman los votos de todos los candidatos de derecha se llega al 37%, muy similar al 39% que alcanzó en 2009. Pero hay una diferencia significativa: hace cuatro años, la derecha se presentó con una representación política "prestada": no habiendo podido superar la crisis de sus partidos, tuvo que amoldarse a Gutiérrez, un aventurero de la política, y a Noboa, para quien la política no es más que la extensión de los intereses particulares de sus negocios. En este 2013, en cambio, la representación electoral de la derecha fue más orgánica e ideológica, a través de CREO y de SUMA. Habrá que esperar un poco más para ver si esta es una tendencia en firme o si sólo responde a los vaivenes del voto anti-Correa, como ocurrió antes con Gutiérrez. Si la votación presidencial pareciera indicar que la nueva derecha lleva las de ganar frente a la vieja, los votos para assembleístas nacionales muestran que el tránsito no está cerrado. En conjunto, CREO y SUMA sólo obtienen el 14,8% (11% y 3% respectivamente), mientras que las listas de la vieja derecha acumulan aún un 18%, gracias al 8% del PSC y al 6% del PSP. Es verdad que la votación del PSP va a la baja desde 2009 y que el PSC ha quedado reducido a un partido local, con presencia más o menos fuerte sólo en Guayas (más propiamente, en Guayaquil) y, en mucha menor medida, en El Oro, mientras que CREO sacó una votación consistente en casi todo el país, excepto en Guayas, Los Ríos y El Oro. En cualquier caso, las posiciones más moderadas de la nueva derecha son consonantes con la posición asumida por los gremios empresariales, que han abandonado el discurso beligerante en contra del gobierno, para centrarse en la negociación. Ambos, finalmente, expresan dos caras del mismo modelo de modernización capitalista.

Cuadro 2 - Elección de asambleístas nacionales

Partido	% de votos
Partido Sociedad Patriótica	6,41
Partido Socialcristiano	8,73
Partido Renovador Institucional Acción Nacional	2,99
Avanza	2,96
Partido Roldosista Ecuatoriano	4,44
Unidad Plurinacional de las Izquierdas	4,80
Partido Socialista - Frente Amplio	0,80
Creando Oportunidades	11,55
Sociedad Unida Más Acción	3,26
Ruptura	2,52
Patria Altiva I Soberana	52,24
Votos nulos	6,96
Votos en blanco	10,5

Fuente: <<http://resultados.cne.gob.ec/Results.html?RaceID=1&UnitID=1&IsPS=0&LangID=0>>. Fecha de consulta: 1 de marzo de 2013.

Nota: El porcentaje de votos de cada candidato se calcula sobre el total de votos válidos, excluidos los votos nulos y en blanco. El porcentaje de votos nulos y en blanco se calcula sobre el total de votos emitidos. El abstencionismo se calcula sobre el total del padrón electoral.

El antiguo centro izquierda, en sus dos variantes, que se autodefinían como demócrata cristiano y socialdemócrata, está prácticamente desaparecido⁴. Hay que anotar que su crisis venía de mucho atrás, a medida que fueron tocados por el ejercicio gubernamental. Fue un gobierno demócratacristiano el que inició la firma de las “cartas de intención” con el Fondo Monetario Internacional e inauguró la implementación del neoliberalismo; fue un gobierno socialdemócrata el que coronó una de las piezas claves de ese modelo: la flexibilización laboral y la neutralización de la organización sindical⁵. A partir de esas experiencias, el pragmatismo parlamentario las orientó a las componendas con la derecha socialcristiana que, en su calidad de minoría más grande, resultaba determinante para la configuración de las instancias estatales que entonces se dirimían en el Parlamento (lo que popularmente se conoció como el “reparto de la troncha”⁶. Fueron parte de la crisis de los partidos “tradicionales”, y acentuaron su crisis propia tras el triunfo de Correa. Los demócratacristianos simplemente se sumaron a la oposición de la derecha neoliberal; los socialdemócratas terminaron fragmentados en tres partes: una, subsumida en el populismo correísta; otra, intentado crear una suerte de “partido libre asociado” al oficialismo, presentó sus propias candidaturas para la Asamblea y respaldó la reelección de Correa; y una tercera se juntó a la derecha moderna y participó en las listas de CREO. Probablemente, los votos de la democracia cristiana se dividieron entre Lasso y Rodas; la votación socialdemócrata fluyó mayoritariamente a Alianza País. Ni la Unión Demócratacristiana (su nombre más reciente) ni la Izquierda Democrática lograron inscribir sus partidos para estas elecciones de 2013.

La votación de los Unidad Plurinacional muestra, sobre todo, que los movimientos sociales y políticos de izquierda se encuentran debilitados, pero esto debe ser matizado. La candidatura presidencial obtuvo un poco más de 3%, pero mostró a la conciencia social la existencia de un programa a la izquierda del gobierno, que se diferencia de él en al menos dos aspectos claves: el modelo de desarrollo y la concepción de la democracia. Aunque no se logró conectar con la mentalidad de la mayoría, dejó establecido un campo que habrá de ser trabajado, ciertamente en condiciones cada vez más complejas. Por otra parte, la lista de asambleístas nacionales llegó al 4,8%, y seguramente la votación de las listas provinciales superará esa cifra.

Parece ser que la modernización capitalista y su gestión correísta han obtenido un triunfo no solamente electoral, sino cultural

Cuando se analiza la votación de las izquierdas se observa que los mejores registros están en zonas andinas de presencia indígena, donde, con muchas dificultades, las organizaciones sociales han seguido resistiendo los intentos de desarticulación que provienen del gobierno (acentuación del clientelismo, cooptación de dirigentes, división de organizaciones), o en zonas indígenas amazónicas donde se presentan fuertes conflictos socioambientales. En varias parroquias la votación subió al 20%, 30% o 40%, e incluso más.

En general, las izquierdas viven una situación paradójica. No lograron convertir las luchas y resistencias locales en vías para una expresión política nacional; ni, al mismo tiempo, la presencia social en caudal político que se exprese electoralmente. No obstante, su mayor votación se concentró en territorios que de un modo u otro resisten la acción disgregadora de la modernización capitalista y de la política gubernamental.

Podrían resumirse todos estos resultados diciendo que expresan la consolidación de la hegemonía del modelo de modernización capitalista y, dentro de él, la hegemonía del correísmo. Parece ser que la modernización capitalista y su gestión correísta han obtenido un triunfo no solamente electoral, sino cultural. ¿Por qué se produjo una situación así, cuáles son las causas centrales?

El “secreto” de la nueva hegemonía está en la combinación de varios factores:

- a. Un período relativamente largo de estabilidad y crecimiento económico que sustenta una importante expansión capitalista. Esta se ha expresado en una mejor situación de empleo y de ingresos que ha permitido incrementar notablemente el consumo de amplios sectores sociales, y de las generaciones jóvenes; es decir, la integración social por la vía del mercado, que prometió y no pudo cumplir el neoliberalismo.
- b. Una importante expansión de las políticas públicas, tanto las sociales cuanto las generadoras de condiciones generales para la acumulación capitalista (presentadas como de “interés nacional”); es decir, integración por la vía del Estado, de su acción clientelar y de la atención a ciertas demandas sociales represadas durante la era neoliberal.

- c. Una política de desactivación y desarticulación de las organizaciones sociales autónomas que combina dos caras de la acción estatal frente a la sociedad: por un lado, la atención, así sea clientelar, de demandas reales; por otro lado, la criminalización de la protesta social. Desde este ángulo se observa con mayor nitidez, incluso desde el mismo día de la reelección, cómo la consolidación del proyecto hegemónico sólo puede ser una afirmación conservadora. Unos botones de muestra. En pocas horas los “10 de Luluncoto”, un grupo de jóvenes activistas detenidos mientras hacían una reunión para discutir la situación política previa a la marcha por el agua en febrero de 2011, fueron condenados a un año de prisión por “terrorismo” y decenas de estudiantes de un colegio quiteño fueron detenidos y acusados de “rebelión” por organizar y participar en una protesta contra la política educativa del gobierno.

Todo ello es, en conjunto, el proyecto correísta.

Bibliografía

El Universo 2011 (Guayaquil) “Ministra Betty Tola dice que Rafael Correa se presentará a la reelección”, 27 de diciembre.

Notas

1 Este artículo fue escrito con anterioridad a las elecciones del 17 de febrero. Pero, evidentemente, la reflexión quedaría incompleta si no incluyera así sea un somero balance no tanto de los resultados cuanto de su significación. Para el efecto, añadimos un apartado al final del artículo terminado el 2 de marzo.

2 Cf. “Ministra Betty Tola dice que Rafael Correa se presentará a la reelección”, en *El Universo* (Guayaquil) 27 de diciembre de 2011.

3 Pero en este caso debe hacerse una salvedad: la votación de Lucio Gutiérrez, candidato del PSP en las elecciones de 2009 estuvo “inflada” por la carencia de expresiones políticas orgánicas, propias de las clases dominantes. La situación ahora es distinta por la presencia de Lasso –Creando Oportunidades (CREO)– y Rodas –Sociedad Unida Más Acción (SUMA)–.

4 La rama demócrata cristiana tomó, a inicios del período (1978-79) el nombre de Unión Demócrata Cristiana - Democracia Popular. Posteriormente lo modificó, quedando sólo como Democracia Popular. Tras la debacle del antiguo sistema de partidos volvió a Unión Demócrata Cristiana. La rama socialdemócrata asumió el nombre de Izquierda Democrática.

5 Oswaldo Hurtado, que había sido elegido vicepresidente de Jaime Roldós al inicio del “retorno a la constitucionalidad”, asumió el gobierno en 1981 tras la muerte de Roldós en un accidente de aviación nunca suficientemente aclarado. Gobernó hasta 1984. Rodrigo Borja gobernó entre 1988 y 1982.

6 Es decir, tomaban el Estado como un botín a repartirse.

Guatemala en 2012

Reconfiguración autoritaria, movilización popular y criminalización de las luchas

SIMONA VIOLETTA YAGENOVA

Politóloga especialista en movimientos sociales. Coordinadora del área de estudios de movimientos sociales de la sede guatemalteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y del comité de Guatemala del OSAL.

Resumen

La autora hace un balance de la conflictividad sociopolítica guatemalteca de 2012, en que el régimen oligárquico-militar conducido por el presidente Otto Perez Molina, del Partido Patriota, ejecuta la acumulación por despojo en alianza con el capital transnacional minero, petrolero e hidroeléctrico, y también con su derivación narcotraficante, en desmedro de las comunidades indígenas y campesinas y de la Tierra y la naturaleza, además de implementar un modelo que atenta contra y criminaliza al proletariado, cuyas fuerzas sociales y democráticas no se organizan lo que debieran para obtener el gobierno del Estado y refundarlo. Caracteriza a la estrategia dominante y al ciclo de lucha, aparte de resumir las de 2012, alertar de la restauración autoritaria y convocar a la unidad de acción para enfrentar la represión.

Abstract

The author takes stock of the Guatemalan sociopolitical conflict background in 2012, when the oligarchic-military régime, led by President Otto Perez Molina, a member of the Patriotic Party (Partido Patriota), fostered accumulation through asset stripping in alliance with transnational mining, oil, and hydropower capitals, together with its drug-dealing derivation, at the expense of indigenous and peasant communities and the land and its natural environment, additionally enforcing a model that both threatens and criminalises the proletariat, whose social and democratic forces are not sufficiently organised to control and thus refund the state. The author characterises the dominant strategy and the struggle cycle, apart from summarising those for 2012, and warns about the return of authoritarianism and calls for unified action to face repression.

Palabras clave

Guatemala, conflicto social, luchas sociales, desarrollismo, acumulación por despojo.

Key words

Guatemala, social conflict, social struggle, development movement, accumulation through asset stripping.

Cómo citar este artículo

Yagenova, Simona V. 2013 "Guatemala 2012: Reconfiguración autoritaria, movilización popular y criminalización de las luchas" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 33, mayo.

Cuando despertó, el dinosaurio estaba todavía allí.
Augusto Monterroso

Introducción

Desde hace varios años se advertía que el proceso de democratización del país se encontraba en una fase de estancamiento, con riesgos de retrocesos hacia una restauración autoritaria. A un año de haber tomado posesión el gobierno del Partido Patriota, encabezado por el ex general Otto Pérez Molina, se constata una regresión en el respeto a los derechos humanos derivado de una recomposición del proyecto oligárquico-militar que confluye en torno a un proyecto de acumulación por despojo, que afecta especialmente a los pueblos originarios y comunidades campesinas. Ante las crecientes protestas y novedosas formas de resistencia se ha desatado una compleja y tácticamente diversa estrategia de criminalización, dirigida especialmente a aquellas organizaciones o instancias de articulación que revisten mayor beligerancia y criticidad. Las fuerzas políticas de izquierda institucionalizada en partidos políticos, si bien representan las buenas intenciones y constituyen una voz crítica frente al sistema, no logran irrumpir en el escenario político con propuestas y acciones que nutren el debate en torno a la necesaria refundación del Estado. Podría decirse que la crisis del sistema político es a su vez reflejo de una crisis societaria y de las fuerzas políticas que de ella emanan, crisis que surge de la contradicción y que ofrece la oportunidad de trascender.

1. Rasgos del ciclo actual de lucha

Los ciclos de lucha se pueden definir por cómo, durante un periodo de la historia, las fuerzas sociales y democráticas conciben la transformación, libran sus luchas, construyen sus demandas, se articulan entre sí y enfrentan al capital y a las estructuras de poder sintetizadas en la institucionalidad estatal y jurídica.

El nuevo ciclo de lucha se construye y desarrolla en un contexto global de crisis sistémica. No se trata solamente de una crisis económica, sino de una crisis civilizatoria, sustentada en imaginarios y modos de vida y de consumo que no son sustentables a largo plazo, encaminando al planeta hacia procesos de autodestrucción cada vez más visibles. Las alternativas frente a este proyecto civilizatorio marcado por la lógica del capital, que sigue siendo hegemónico a nivel planetario, están todavía en estado embrionario, aunque se han intensificado los debates sobre este tema.

Es en América Latina, subcontinente gobernado mayoritariamente por gobiernos de izquierda y centro-izquierda, donde se están construyendo propuestas concretas, tales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que

aspiran a convertirse en un motor de construcción de alternativas y de integración horizontal y solidaria en el sur planetario. No obstante los avances del proyecto de ALBA, no existe en este momento una correlación mundial de fuerzas políticas y sociales que tenga la posibilidad de revertir o modificar el contenido del modelo sustancialmente. Esto implica, a corto plazo, que se asiste a un escenario mundial cuyos rasgos sobresalientes son la competencia y la inestabilidad, acompañadas por un renovado ciclo de militarización y ofensiva imperialista que tiene como sujeto principal al imperialismo estadounidense.

En Guatemala el actual ciclo de lucha inició aproximadamente en el año 2003, dejando atrás el tiempo de la paz, una coyuntura particular de interciclos generada por el intenso periodo de lucha revolucionaria y popular de las décadas del sesenta, setenta y ochenta, caracterizado por cierta apertura política y ciertos diálogo y debate sobre las necesarias reformas requeridas por el sistema político y económico. Si se hubieran cumplido de manera integral los aspectos más estructurales contenidos en los Acuerdos de Paz, esta coyuntura era la oportunidad de modificar el destino del país, pero dicho pacto político fue traicionado por las elites económicas y políticas. Además, este ciclo de lucha se desarrolla en un contexto económico nacional marcado por la globalización neoliberal, de profundo impacto, que ha modificado la matriz productiva en la que el sector de servicios y comercio tienen cada vez mayor preponderancia en el producto interno bruto, en desmedro del sector agrícola. Por otro lado, se constata un proceso de reconcentración de la tierra en manos de capitales nacionales y transnacionales, incluyendo al capital narcotraficante, factores que en conjunto marcan una tendencia de despojo de las comunidades campesinas e indígenas y un deterioro en la tradicional economía campesina. La construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, los proyectos de explotación petrolera y de minería, la aprobación del de la Franja Transversal del Norte¹ y del corredor tecnológico², obedecen en su conjunto a una reorganización territorial sustentada en los intereses de acumulación del capital nacional e internacional, con sus respectivas secuelas: daños ecológicos, desplazamiento poblacional y conflictividad social.

Las elevadas ganancias del sector bancario, el incremento de las exportaciones de la caña, la palma africana y otros productos no tradicionales se contraponen a los datos estadísticos del aumento del desempleo, la extensión de la hambruna y el crecimiento de la pobreza, impactando profundamente a una población históricamente empobrecida que, hoy por hoy, es mayoritariamente joven y carece de mayores perspectivas de ascenso social, a pesar de sus esfuerzos por concluir los estudios básicos, técnicos o universitarios. El hecho de que se sume más o menos un millón de habitantes cada cuatro años a la población ya existente, sin que el Estado cuente con una base tributaria adecuada que le permita atender a sus ciudadanos, complejiza aún más la situación. Cuando un modelo económico es incapaz de brindar a los habitantes dignas condiciones de vida, incapaz de garantizar perspectivas de futuro a la generación naciente, cuando más del 78% de la fuerza laboral sobrevive en la economía informal y cuando se expulsa a decenas de miles de connacionales hacia los Estados Unidos para encontrar otros medios de ingresos, ciertamente debe reconocerse que el modelo vigente ha fracasado en garantizar los derechos humanos y constitucionales básicos.

Un segundo aspecto que engloba el actual ciclo de lucha es el estancamiento y retroceso del proceso de democratización. Los pactos políticos que se suscribieron al crearse la Constitución de la República en 1985, y los que posibilitaron la firma de la paz en diciembre de 1996, se han desvanecido y no existe una nueva plataforma y agenda nacional consensuada que permita redireccionar el destino de la nación hacia un futuro distinto. El deterioro de las prácticas políticas, carentes de ética y de bases filosóficas o ideológicas, responde a la lógica del capital en su sentido más perverso. En tiempos recientes, no se han creado nuevos espacios de participación política que trasciendan la lógica de la democracia liberal y representativa, en tanto que la estructura política formal demuestra una creciente incapacidad para canalizar o responder a los anhelos transformadores de las fuerzas democráticas y sociales. Los escasos cambios institucionales y jurídicos que se han implementado en la época de posguerra, si bien pueden considerarse logros de los movimientos sociales, no modifican las relaciones del poder, como tampoco han propiciado mejores condiciones para que se profundice el proceso de democratización. El cierre del “tiempo de la paz” sin que se lograra transformar significativamente el modelo político-económico existente, constituye a su vez el punto de partida de una nueva etapa de lucha cuyo piso político es cualitativamente distinto al anterior en cuanto a las fuerzas, demandas y aspiraciones de cambio.

Una característica de la actual fase del ciclo de lucha es que aún persisten las secuelas del último ciclo represivo estatal, expresadas en el no traspaso de la praxis acumulada en el seno de fuerzas populares, y que ha tenido como consecuencia el desdibujamiento de la perspectiva estratégica del cambio; también expresadas en el insuficiente desarrollo del pensamiento crítico y en la debilidad para enfrentarse a las ideas, imaginarios y prácticas sociales hegemónicas y conservadores, propios del sistema de dominación existente.

No obstante, se constata la existencia de un lento proceso de “acumulación” de fuerzas sociales críticas frente al sistema, que se expresa en el incipiente resurgimiento del debate en torno a los modelos alternativos del Estado-nación, en un accionar beligerante de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que para defender su territorio se enfrentan a las empresas transnacionales y sus aliados locales y en el reconocimiento tácito de que es necesario sumar fuerzas, poderes y saberes populares para romper el cerco que impide transformaciones sociales más audaces. El monitoreo de la protesta social y el accionar de los movimientos sociales en los últimos años dejan entrever que se asiste a un proceso de intensificación de la protesta social y a su ampliación territorial, que tiene como protagonistas a una multiplicidad de actores y fuerzas sociales.

Tres son los factores que están determinando la dinámica de lucha de las diversas fuerzas populares en la actualidad: a) un reforzamiento de las alianzas entre capitales nacionales y transnacionales, que incluye a los capitales mafiosos, quienes aspiran apropiarse de los recursos naturales, los territorios y la madre tierra: a pesar de las contradicciones que le son implícitas cuentan con un marco político y jurídico-institucional favorable, que buscan profundizar y afinar; b) una recomposición de la alianza entre las expresiones políticas de derecha neoliberal con los estamentos militares, y sus aliados civiles ultraconservadores, neofascistas y anticomunistas, que se ha consolidado durante el primer año de gestión gubernamental.

mental del Partido Patriota; c) la decisión política de estas fuerzas (a y b) de impulsar una estrategia con un amplio repertorio táctico que tiene el propósito de influir sobre el ciclo actual de lucha, con la manifiesta intención de debilitar a aquellas que han adquirido mayor beligerancia, que contribuyen a la articulación, abonan a los debates estratégicos y desnudan la naturaleza del régimen.

...han ingresado a los ámbitos gubernamentales militares y civiles expertos en inteligencia y contrainsurgencia que participaron durante la guerra sucia

2. Oligarcas, militares y profundización de la estrategia de acumulación por despojo

Desde el inicio de la transición política de un Estado contrainsurgente y autoritario hacia uno que cumpliera mínimamente con las reglas de la democracia representativa han pasado ocho procesos electorales, pero las elecciones de 2011 fueron las primeras en las que se eligió a un ex militar que participó como oficial del ejército durante la guerra, lo que ha representado un cambio relevante en la coyuntura política guatemalteca.

Pérez Molina inició su carrera militar en 1966, y durante la guerra estuvo en el área Ixil, una de las regiones donde se registraron masacres y masivas violaciones a los derechos humanos. Fue jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial, así como jefe de la Dirección de Inteligencia Militar. Según un artículo publicado por *El Periódico* y una publicación de *El Observador*, con el mandatario han ingresado a los ámbitos gubernamentales militares y civiles expertos en inteligencia y contra-insurgencia que participaron durante la *guerra sucia*.

Ciertamente, el regreso de ex militares y militares activos a esferas de la institucionalidad pública, especialmente la relacionada con la política de seguridad³, parecería estar impregnando un sello particular a cómo desde el gobierno actual se abordan y enfrentan las múltiples protestas y conflictos sociales. Más allá del desmedido uso de la fuerza y la re-militarización⁴, se constata el resurgir de un discurso que, de manera reiterada, responsabiliza de las protestas a “manipuladores” y hasta a “extranjeros”, discurso que se empleaba comúnmente durante la última fase de la guerra, y que refleja la influencia de los asesores de inteligencia quienes desde su propia formación y lógica interpretativa de los acontecimientos reviven la teoría de la conspiración y desestabilización. Más allá de evidenciar una profunda perspectiva racista y clasista, al cuestionar la autenticidad de las causas generadoras de las protestas, desmerece la capacidad de organización y de accionar autónomo de quienes se lanzan a las calles para expresar su inconformidad.

La “reinención” del enemigo interno, plasmado en el concepto de seguridad hemisférica impulsado por los Estados Unidos, ratificado por la Organización de los Estados Americanos en el 2003 y nombrado como “amenaza terrorista” se introdujo sutilmente en la política de seguridad publicada recientemente por el gobierno actual. En otras palabras, este término se refiere a la conflictividad social, que apa-

rece como una de las principales amenazas vigentes para el Estado guatemalteco y para las élites políticas y económicas, cuyos intereses se encuentran incrustados en su andamiaje institucional y jurídico. Las categorías de soberanía nacional y territorio, en cuya defensa se pretende accionar esta política, se esgrimen a partir de una lógica de absoluto respaldo a los proyectos empresariales a cuyos intereses se parece plegar nuevamente la institución armada y su intrincada red de colaboradores.

En la relación con Estados Unidos y su política hemisférica, se observa un renovado compromiso para fortalecer los lazos relativos al intercambio de inteligencia, la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de la cooperación con las fuerzas de seguridad, a pesar de aparentes diferencias en torno a la estrategia del combate al narcotráfico.

Los capitales oligárquicos y los emergentes, incluyendo el derivado del narcotráfico, además de los transnacionales, a pesar de sus evidentes contradicciones y disputas, impulsan un modelo de acumulación sustentado en el despojo, que abarca tanto a las tierras como a los recursos naturales renovables y no renovables, agudiza la histórica y no resuelta problemática agraria, pone en riesgo los territorios que le dan sustento material y espiritual a los pueblos originarios e impacta recientemente a comunidades campesinas mestizas cuyos recursos de agua y bosque están amenazados por los grandes proyectos.

3. La resistencia popular y la criminalización de las luchas

El número total de protestas realizadas durante el año 2012 fue de 493, cuya expresión territorial abarcó los 22 departamentos y 167 de 333 municipios del país. Las más comunes fueron las manifestaciones (225), los bloqueos de ruta (90), la toma de edificios (63), los plantones (47) y las huelgas (28). Esto representa una reducción en comparación con el año 2011, en el cual se registraron 522 protestas, un número elevado debido a las múltiples acciones de inconformidad que surgieron a raíz del proceso electoral. Aparte, parece tener impacto la creciente respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad, quienes mediante gases lacrimógenos, golpes y una masacre desalojaron vías públicas bloqueadas por diferentes movimientos sociales.

La expresión territorial de la protesta social confirma la tendencia registrada en los últimos años que ubica a la ciudad capital, a la región occidental y al oriente del país como los lugares donde ésta adquiere mayor relevancia numérica. En el primero de los casos, esto obedece a que la ciudad de Guatemala es el centro neurálgico del poder político, donde tienden a converger diversas fuerzas sociales para patentizar sus demandas e inconformidades, y el segundo a la relevancia de los procesos de resistencia de los pueblos originarios frente a las nuevas políticas de despojo. No obstante, la región oriental (Zacapa, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa), que apenas hace unos años no registraba protestas significativas, se ha situado en tercer lugar, producto de los procesos de resistencia comunitaria ante la autorización de licencias de exploración y explotación minera.

Es de hacer notar que durante este año, a pesar de la autoritaria y violenta actuación estatal, se registraron protestas prolongadas⁵ y recurrentes⁶. Al iniciarse 2013, ninguna de estas demandas fue resuelta, ni atendida satisfactoriamente por el gobierno de turno.

Cuadro N° 1 - Demandas y casos de protesta social en 2012

Tipo de Demanda	Casos
Rechazo a la implementación de proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros, y defensa del medio ambiente y del territorio de los pueblos originarios.	Comunidades de la Montaña Las Granadillas, Zacapa; comunidades maya-mam de Cantel y de Palestina de los Altos, Quetzaltenango; y de Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango; comunidades maya mam y sipakapence de San Marcos; comunidades q'eqchies de Río Dolores, Cobán, Alta Verapaz; comunidades quichés de Chinique, Quiché; comunidades quichés y q'eqchies del Ixcán, Quiché; comunidades quichés de los Regadillos, Uspantán Quiché; ixiles de Cotzal, Chajul, y Nebaj, Quiché; comunidades kaq'chiqueles de Sololá, Sololá; comunidades kaq'chiqueles de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, y de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Rechazo a la implementación de proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros, y defensa del medio ambiente en territorios de comunidades mestizas.	Comunidades de San Rafael Las Flores, Santa Rosa; de San José El Golfo y San Pedro Ayampuc, y de San Raymundo, Guatemala; y de Champerico, Retalhuleu.
Conflictividad agraria.	Comunidades q'eqchies del Valle del Polochic, Alta Verapaz; y de la Sierra de Santa Cruz, Izabal; comunidades quichés de Los Regadillos, Uspantán, Quiché; comunidades xincas de Santa María Xalapán, Jalapa; comunidades de aldea Centro I Coatepeque, Livingston, Izabal.
Aprobación de la ley de desarrollo rural.	Movilizaciones nacionales de organizaciones campesinas y de la Marcha Indígena, Campesina y Popular.
Política pública de salud y respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.	Trabajadores de Baja Verapaz, Chimaltenango, Santa Rosa, Quetzaltenango, Jutiapa, El Progreso, Chiquimula, Poptún, Petén, Suchitepéquez, Retalhuleu, Guatemala y Huehuetenango protestan por políticas sanitarias, despidos, atraso en los pagos de salarios y abastecimiento del sistema nacional de salud. Médicos del Hospital Roosevelt efectúan una asamblea permanente por falta de insumos médicos.
Violación a los derechos laborales en diversas municipalidades del país.	Atrasos en el pago de salarios de trabajadores de las municipalidades de Chimaltenango y San Andrés Itzapa, Chimaltenango; y de los de la de Puerto Barrios, Izabal. Despidos de los trabajadores de las municipalidades de San Benito, Petén; San José El Rodeo, San Marcos; Cuilapa, Santa Rosa; y Esquipulas, Chiquimula.
Derechos laborales en las fincas.	Paro de labores de tres días por parte de 10 mil trabajadores de fincas de cultivo de palma africana en el departamento del Petén.
Derechos laborales de los trabajadores de la economía informal.	Desalojo de vendedores ambulantes de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en la ciudad de Guatemala. Rechazo a medidas administrativas de la municipalidad de Chiquimula, que afectan negativamente a los vendedores ambulantes.
Política de educación y respeto a los derechos laborales del magisterio.	Rechazo al nombramiento de la directora departamental de educación de Retalhuleu. Demanda de recontractación de maestros en el municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala, Zacapa y Quetzaltenango. Despidos de maestros de preprimaria y primaria del municipio de El Asintal, Retalhuleu. Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física de Sololá demandan la destitución de un maestro por malos tratos. Contratación de maestros para el Instituto Normal Bilingüe Intercultural de Quetzaltenango. Maestros de las telesecundarias de Jutiapa y Huehuetenango demandan la recontractación y el pago de cinco meses de salarios atrasados. Demanda de contratación de maestros para el ciclo básico de Salamá, Baja Verapaz. Maestros de la Escuela de Arte de Escuintla protestan por el atraso del pago de salarios. Rechazo de los estudiantes de las escuelas normales a la modificación de la carrera docente, con protestas recurrentes a nivel nacional que han durado a lo largo de 2012 y que continúan vigentes a principios de 2013.

Tipo de Demanda	Casos
Derechos de las mujeres.	Rechazo a la violación del procedimiento de elección de la secretaria presidencial de la Mujer y de la defensora de la Mujer Indígena; y a los despidos injustificados en las instituciones estatales encargadas de velar y promover los derechos de las mujeres.
Nacionalización de la energía eléctrica en cuanto a la generación, la distribución y la prestación de servicios a cargo de Actis, de capital británico, y anteriormente de Unión Fenosa, de capital español.	Movilizaciones en la ciudad capital, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, San Marcos y Jalapa. Comunidades del Petén protestan por arbitrariedades de la empresa eléctrica y por los altos costos del servicio.
Derechos de las personas de la tercera edad.	Asignación de fondos del presupuesto nacional para hogares de personas de tercera edad sin cobertura de seguridad social. Plantón prolongado en la ciudad capital, manifestaciones y toma del aeropuerto en Petén.
Asesinatos o atentados contra dirigentes comunitarios.	Asesinato de la secretaria del Consejo de Administración de Tierras y Recursos Naturales de la Alcaldía Indígena de Esquipulitas, Unión Zacapa. Asesinato de dirigente comunitario en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Asesinato del sindicalista Miguel Ángel González Ramírez, del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal, quien fue abatido en la aldea El Cedro, Morales. Atentado contra Yolanda Oqueli, dirigente de la resistencia en La Puya, San José el Golfo y San Pedro Ayampuc. Asesinato de José Tavico Tzunun, activista del Consejo de Pueblos K'iches, por dos hombres que, de manera violenta, ingresaron a su casa en la comunidad de Sibacá III, en Santa Cruz del Quiché. Asesinato de Enrique Linares, dirigente comunitario de Río Chiquitito, Zacapa, y parte de la dirigencia del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Asesinato del dirigente sindical del ingenio Palo Gordo, Suchitepéquez, afiliado a la UNSITRAGUA. Asesinato de Hector Girón, dirigente comunitario de Zacapa, integrante del CODECA. Masacre de siete campesinos maya-quichés de Totonicapán por parte del ejército durante una movilización y bloqueo de carretera.
Memoria y justicia de las víctimas de la política contra-insurgente.	Desmontaje y despidos masivos de la Secretaría de la Paz. Juicios contra los responsables del genocidio y las violaciones masivas a los derechos humanos durante la guerra.

Fuente: Elaboración propia en base a noticias periodísticas y comunicados de los movimientos sociales.

La marcha indígena, campesina y popular

El 19 de marzo dio inicio la *Marcha Indígena, Campesina y Popular por la Vida, la Madre Tierra y la Defensa del Territorio*, que recorrió durante nueve días 214 kilómetros desde Cobán, Alta Verapaz, hacia la ciudad capital. La fecha conmemoró el violento desalojo de las comunidades del Valle del Polochic ocurrido un año antes. La marcha fue convocada por el Comité de Unidad Campesina, el Comité Campesino del Altiplano, la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya "Waquib Kej" y las comunidades del Valle del Polochic, y participaron delegaciones campesinas e indígenas de Cahabón, Alta Verapaz, Santa María Xalapán y Jalapa, y comunidades del norte del Quiché, Huehuetenango, la costa y la boca-costa del país. A lo largo del camino recibieron muestras de apoyo y solidaridad. El día 27 de marzo la marcha arribó a la ciudad de Guatemala. Decenas de miles

de personas, procedentes de diferentes pueblos, comunidades y organizaciones populares se unieron a la manifestación. Durante el recorrido, los estudiantes, maestros, trabajadores, vendedores de los mercados, religiosos, las organizaciones de mujeres, las personas de tercera edad, integrantes de organizaciones no gubernamentales y personas procedentes de las universidades y de sectores académicos progresistas, entre otros ciudadanos, recibieron a los marchantes con cohetes, aplausos, consignas y mantas expresando su solidaridad y respaldo. El centro de la ciudad vibraba al coro de voces gritando las consignas: “El pueblo unido jamás será vencido” y “¡Porque cuando los de abajo nos movilizamos... los de arriba tiemblan!”. La marcha se enfiló hacia la Corte de Constitucionalidad, donde fue recibida por los magistrados, a quienes se les entregó un pliego de peticiones, para luego continuar su recorrido hacia el organismo legislativo. Allí los jefes de las bancadas de los partidos políticos suscribieron el compromiso de aprobar la Ley de Desarrollo Rural, iniciativa que el movimiento campesino viene exigiendo desde hace años. A las 15hs la delegación integrada por las diferentes organizaciones convocadas a la marcha entró al Palacio Nacional. El presidente de la República y su gabinete la recibiría hasta pasadas las 17:30hs. Las demandas de esta marcha campesina consistieron en: a) resolver el problema de la tierra en Alta Verapaz, en particular en el Valle del Polochic, Cobán, Chisec y Carcha, en el Norte de El Quiché y Zacualpa y en Santa María Xalapán, Jalapa, Petén, Sierra de Santa Cruz, Izabal, etc.; b) la anulación de la deuda agraria que afecta a miles de comunidades campesinas producto de préstamos otorgados por el Fondo de Tierra; c) el cese a los desalojos y a la criminalización de las luchas sociales, la remilitarización y la respectiva persecución de dirigentes campesinos e indígenas; d) la cancelación de las licencias mineras y petroleras, de la construcción de hidroeléctricas y del impulso a los monocultivos, así como el absoluto respeto a las consultas comunitarias realizadas por los pueblos originarios quienes han rechazado la explotación de los recursos naturales en sus territorios; e) la aprobación inmediata de la ley de desarrollo rural y la creación de una nueva política agraria; y f) la aprobación de la Ley de Radios Comunitarias. Como resultado de la reunión el gobierno asumió algunos compromisos específicos y otros que los dejó “en reserva”, para darles respuesta el 19 de abril.

La Marcha Indígena, Campesina y Popular irrumpió en una coyuntura en que las nuevas autoridades parecían adquirir importantes victorias políticas en el organismo legislativo y contar con la absoluta complacencia de los medios de comunicación, aliados importantes durante su campaña electoral. En este sentido, las organizaciones lograron tomar la iniciativa política y situar en la agenda nacional una problemática conocida pero permanentemente invisibilizada por parte del Estado. La insólita y masiva solidaridad que recibió la marcha a lo largo de su camino y en la ciudad capital sorprendió a las elites económicas y políticas y a las autoridades gubernamentales. No se conocía en la historia reciente semejante muestra de solidaridad y apoyo con alguna causa, reflejo de un cambio en la subjetividad de los ciudadanos, que tienden a ser cuidadosos y cautos en expresar públicamente su simpatía hacia las movilizaciones sociales. La marcha indígena, campesina y popular aglutina a diversas fuerzas sociales con experiencias, historias de lucha y formatos organizativos muy diferentes, que se han ido consolidando a lo largo de

2012. A pesar de reiteradas reuniones y mesas, las demandas planteadas no han sido resueltas.

El conflicto en Santa Cruz Barrillas: estado de sitio, militarización y asesinato de dirigentes comunitarios

A partir del mes mayo, el foco de la atención pública se dirigió hacia Santa Cruz Barrillas, ubicado en el departamento de Huehuetenango, que colinda con el vecino México. El gobierno del general Otto Pérez Molina decretó el estado de sitio⁷ y militarizó el municipio tras los disturbios generados por el asesinato y el ataque armado contra dirigentes comunitarios, quienes desde tiempo atrás se habían opuesto a la construcción de una hidroeléctrica. El atentado es atribuido a la seguridad privada de la empresa Hidro Santa Cruz, de capital español. Organizaciones de los pueblos originarios, como la Asamblea Departamental por la Defensa del Territorio de Huehuetenango (ADH, 2012) ubicaron las causas de este acontecimiento en que ni el Estado ni la empresa han respetado los derechos colectivos de los pueblos indígenas del municipio de Santa Cruz Barrillas, al hacer caso omiso de los resultados de la consulta realizada el 23 de junio del 2007, en la cual 46 mil 479 personas rechazaron rotundamente la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas en el territorio y únicamente nueve votaron a favor. Las comunidades⁸ recibieron una importante muestra de solidaridad por centenares de personas nacionales e internacionales quienes demandaron al Estado de Guatemala anular el estado de sitio y reintegrar las garantías constitucionales a todos los habitantes de este municipio. Dentro del repertorio de demandas planteadas al gobierno de Otto Pérez Molina, destacaron: a) liberar a todas las personas detenidas por las fuerzas de seguridad; b) que se iniciara una investigación real y exhaustiva para dar con los responsables del asesinato de don Andrés Francisco Miguel y del ataque a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé; c) que se garantizara la seguridad de todos los líderes, hombres, mujeres y gente movilizada que hubo sido denunciada y/o amenazada por la empresa Hidro Santa Cruz y se asegurara el respeto a la vida y los derechos humanos de todas las personas que eran dirigentes y activistas comunitarios amenazados o encarcelados por defender sus territorios; d) que se garantizara la propiedad privada de las familias comunitarias por parte del Estado guatemalteco ante las amenazas y presiones de la empresa Hidro Santa Cruz, la cual violentaba los derechos de las personas guatemaltecas e invadía las tierras campesinas; e) que se reconociera la validez y los resultados de las consultas comunitarias llevadas a cabo en Barrillas en relación a la central hidroeléctrica y se suspendiera el proyecto de la misma.

Debido a las múltiples y diversas críticas que surgieron por la forma en que el gobierno había manejado la problemática de Santa Cruz Barrillas, el presidente Otto Pérez anunció el levantamiento del estado de sitio el 18 de mayo, aunque ratificó su respaldo para que la empresa continúe funcionando en el lugar. La eventual captura de los policías de seguridad privada, la libertad de algunos de los presos políticos, una amplia solidaridad nacional e internacional con el pueblo de Santa Cruz Barrillas y la ratificación del rechazo a este proyecto hidroeléctrico a pesar de una intensa presión, una estrategia de cooptación y la guerra psicológica son los logros más visibles hasta la fecha. El conflicto perdura y podría volver a estallar en 2013.

El conflicto de la Puya

Las comunidades de San José el Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, se enteraron a principios del 2011 que en su territorio estaba operando una empresa minera de oro denominada El Tambor, propiedad de la estadounidense *Kappes, Cassidy & Associates*, con sus subsidiarias locales, Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. y Servicios Mineros del Centro de América S.A. La licencia de explotación para este proyecto fue autorizada el 24 de noviembre de 2011 sin consulta previa a la población afectada⁹. En el mes de marzo de 2012, los pobladores deciden bloquear la entrada a la mina y se instala el plantón de La Puya, donde los vecinos se turnan las 24 horas para evitar el ingreso de maquinaria al proyecto. En vista que el 24 de noviembre se cumple un año de haber sido autorizada la licencia de explotación, la empresa enfrenta el riesgo de que ésta sea cancelada, pues eso señala la ley de minería si en el transcurso de un año no se inicia la explotación. En este contexto, se intensificó la presión de la empresa contra las comunidades.

El 13 de junio de 2012, Yolanda Oquelí, integrante del movimiento de resistencia del municipio San José del Golfo, recibió numerosos impactos de bala cuando se dirigía hacia su casa en su vehículo, proveniente del plantón que decenas de vecinos mantenían en el portón del proyecto minero Progreso VII Derivada. El 13 de noviembre¹⁰, diversas organizaciones¹¹ denunciaron que trabajadores de la empresa *Kappes Cassidy & Associates* y *Exmingua S.A.* arribaron al lugar donde comunitarios de San Pedro Ayampuc y San José El Golfo mantenían un plantón pacífico desde hacía meses, lo que conllevó a una situación de hostilidad y tensión que duró hasta fin de año. A pesar de la presencia policiaca, y los supuestos intentos de diálogo, la resistencia comunitaria se mantiene en pie, sin que se atienda su demanda de cierre del proyecto minero¹².

El conflicto de San Rafael las Flores

El proyecto minero de explotación de plata autorizado a la empresa canadiense *Tahoe Resources*¹³ ubicado en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, afectaría ambiental y socialmente a los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa. Desde ya hace unos años se comenzó a registrar un proceso de resistencia comunitaria que, debido a la negativa gubernamental de clausurar el proyecto, conllevó a la realización de consultas a vecinos en la mayoría de los municipios de Santa Rosa, en las que han ratificado su rechazo a este proyecto¹⁴. La reiterada solicitud de los vecinos para que esta consulta se realizara en su municipio se ha enfrentado con la negación del alcalde de San Rafael, quien parece estar comprometido con el proyecto minero. El 17 de septiembre¹⁵ por la mañana, empleados de la empresa minera San Rafael, reforzados por elementos de la empresa de seguridad privada, equipados con armamento antimotines, perros, lanzagranadas lacrimógenas y fusiles dotados de balas de hule y escoltados por personal de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes en la aldea Morales, Mataquescuintla, para conectar una línea de alto voltaje al servicio de las instalaciones de la mina San Rafael. La movilización de los vecinos, quienes demandaron su retiro inmediato, obligó a suspender la instalación eléctrica. Con la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la

jueza de Paz, los alcaldes municipales de Nueva Santa Rosa y Casillas, el párroco de Mataquescuintla, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social y el Consejo Diocesano para la Defensa de la Naturaleza de Santa Rosa se levantó un acta de lo sucedido. Sin embargo, al momento de la firma, aprovechando la oscuridad de la tarde, personas desconocidas comenzaron a lanzar piedras sobre los vecinos y autoridades, causando la destrucción parcial de dos vehículos de la compañía minera. Los vecinos indignados decidieron marchar desde la aldea Morales de Mataquescuintla, en Jalapa, hacia la entrada principal de la mina, ubicada en el territorio de San Rafael y donde montaron un plantón. El inicio del fuego al interior de la mina, con lo cual las comunidades indicaron no tener ninguna relación, motivó que elementos de la seguridad privada de la mina, de la Policía Nacional Civil y del ejército se abalanzaran sobre los comunitarios, usando gases lacrimógenos, armas de fuego y balas de goma. Más de 30 personas, incluyendo mujeres, fueron capturadas, y algunas aún se encuentran encarceladas. Este hecho mereció el rechazo de organizaciones de derechos humanos, la iglesia católica, los movimientos ambiental y campesino y las organizaciones de los pueblos indígenas, quienes han demandado que se realizara una investigación profunda sobre los hechos acaecidos, que no se criminalizara a los vecinos de Santa Rosa y Jalapa y que se cancelara definitivamente la licencia de exploración otorgada. El conflicto sigue latente sin que se hayan atendido las demandas de las comunidades.

En un periodo de doce meses se han multiplicado e intensificado los ataques contra defensores de derechos humanos, ex integrantes del movimiento revolucionario

Criminalización y violación a los derechos humanos

En un periodo de doce meses se han multiplicado e intensificado los ataques contra defensores de derechos humanos, ex integrantes del movimiento revolucionario¹⁶, dirigentes del movimiento campesino, pueblos originarios, comunidades e instituciones académicas comprometidas¹⁷. Está en marcha una compleja e intrincada estrategia con un amplio repertorio táctico, que involucra tanto a funcionarios públicos, ex militares, políticos de extrema derecha, medios de comunicación radial, televisiva y escrita, columnistas y empresarios que tiene la manifiesta intención de debilitar y “aislar” a aquellas fuerzas que han adquirido mayor beligerancia, contribuyen a la articulación, abonan a los debates estratégicos y desnudan la naturaleza del régimen.

En una sociedad que ha vivido reiterados ciclos represivos y en la que los poderes fácticos han recurrido hasta al genocidio para acallar la rebelión popular, crear condiciones subjetivas en que resurge “el miedo” no requiere de muchos avisos previos.

La estrategia tiene distintas aristas, algunas de las cuales son: a) una intensa y permanente campaña de desprestigio mediático (radio, televisión) por medio de campos pagados y columnas, dirigida expresamente al movimiento campesino

y de los pueblos originarios; *b*) se ejerce presión y una campaña de desprestigio en contra de agencias de cooperación solidarias; *c*) se ha incrementado el abordaje violento de las protestas sociales por parte de las fuerzas de seguridad; *d*) se han incrementado las capturas y encarcelamientos de dirigentes comunitarios que se han enfrentado a proyectos mineros, hidroeléctricos o abusos de empresas de distribución de la energía eléctrica; *e*) persisten los asesinatos selectivos en contra de dirigentes comunitarios; *f*) se han multiplicado las denuncias y demandas judiciales; *g*) se cometió una masacre por una patrulla del ejército en contra de una manifestación pacífica el 4 de octubre, que tuvo como saldo ocho hombres maya-quichés asesinados y treinta personas gravemente heridas.

El uso creciente de la fuerza se impone sobre la voluntad de diálogo, reflejo de la configuración de un proyecto político autoritario que amenaza los escasos y frágiles espacios democráticos existentes. La sistemática descalificación de las protestas y de la dirigencia popular más beligerante (a quienes se acusa de ser delincuentes, perezosos, obstaculizadores del desarrollo, violadores de la libre locomoción, terroristas, vividores de la cooperación), sin que se informe sobre las causas o génesis de estas protestas, se convierte en la “excusa” perfecta para quienes utilizan métodos violentos para neutralizar a los nuevos “enemigos” del orden y del desarrollo, andamiaje discursivo que sirve perfectamente para reforzar las tendencias fascistoides que históricamente han estado ancladas en la sociedad y que podrían ser la antesala de una peligrosa y conocida estrategia represiva.

Perspectivas futuras

Es imprescindible avanzar en la unidad de acción para detener la ola de intimidaciones y violaciones a los derechos humanos de los líderes y lideresas más beligerantes del movimiento popular guatemalteco. Esto implica la construcción de acuerdos políticos para evitar aún mayores retrocesos en el proceso de democratización y evitar que este proyecto político autoritario se consolide.

Tras las bambalinas del quehacer político del actual gobierno parece ocultarse un juego de ajedrez, cuyas piezas, aún invisibles, se mueven en dirección de un enroque que podría tirar a bordo los escombros de la democracia liberal y representativa aún existente en el país. La restauración autoritaria, anhelada y respaldada por los poderes fácticos, podría adquirir diversas formas, incluyendo la modalidad del autogolpe de Estado. Hay que estar vigilantes y atentos a los acontecimientos.

Bibliografía

ADH 2012 Comunicado público del 2 de mayo.

Colectivo Madre Selva 2012 Comunicados públicos del 13 de junio, el 27 de agosto y el 23 de noviembre.

Comité de Unidad Campesina 2012 Comunicados públicos del 5 de enero y del 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo.

Comunicado público *Todos somos Barillas*, 10 de mayo de 2012.

Consejo de los Pueblos de Occidente 2012 Comunicados públicos del 14 y 29 de mayo; “Reportaje de la marcha”, 15 de mayo.

Coordinación y Convergencia Maya «Waquib Kej» 2012 Comunicados públicos del 11, 13 y 29 de mayo; “La anulación del Estado de Sitio es el resultado de la lucha de los pueblos”, 18 de mayo.

Decreto Legislativo 01-2012

Diócesis de Huehuetenango 2012 Comunicado público del 16 de mayo.

El Observador 2012 (Guatemala) Año 7, N° 34 y 35, enero-junio.

El Periódico 2013 (Guatemala) “El retorno de los gramajistas”, 22 de enero.

Prensa Libre 2012 (Guatemala) 19 y 28 de enero, 1, 12 y 18 de febrero, 29 de marzo y 7, 10 y 26 de mayo.

Revista Enfoque 2011 “Análisis de los resultados electorales del 11 de septiembre de 2011” (Guatemala: Tribunal Superior Electoral) Año 1, N° 4, 4 de octubre.

Siglo XXI 2012 (Guatemala) 18, 27 y 28 de enero, 2 y 21 de febrero.

Yagenova, Simona Violetta 2012 “En Defensa de la Protesta Social” en *Albedrío*, 5 de octubre, en <albedrio.org>.

Notas

1 El proyecto de la Franja Transversal del Norte está respaldado por el decreto gubernativo 22-2009. Consiste en la construcción de una carretera de 330 kilómetros que atravesaría los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal, situados en la parte noroccidental del país. La constructora de capital israelita Solel Boneh fue seleccionada para ejecutar la obra. Según autoridades gubernamentales, al proyecto de la carretera se sumarían el eventual impulso de proyectos de inversión económica y social.

2 El proyecto del Corredor Tecnológico de Guatemala (CTG) comenzó a tomar forma en el año 2010. Consiste en la construcción de un canal terrestre entre los océanos Pacífico y Atlántico. Atraviesa 42 municipios ubicados en la región nororiental del país, se extendería a lo largo de 308 kilómetros y contempla la construcción de autopistas, líneas de ferrocarril y un poliducto interoceánico. Su costo calculado se sitúa en alrededor de 12 millardos de dólares y su finalización está programada para 2015. Hasta ahora cuenta con financiadores españoles, japoneses, suizos y guatemaltecos. El poliducto es para el transporte de gas natural o derivados de petróleo.

3 El presidente Otto Pérez Molina informó que el Consejo Nacional de Seguridad estará integrado por la vicepresidenta, Roxana Baldetti, el ministro de la Defensa, Ulisés Noé Anzueto, el titular de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el canciller, Harold Caballeros, el secretario de Inteligencia del Estado, José María Argueta, y el procurador general de la Nación, Larry Mark Robles. El general retirado Ricardo Bustamante fue nombrado coordinador de la Secretaría Técnica de este consejo. Véase *Prensa Libre*, 19 de enero de 2012.

4 Según medios de prensa nacionales del 28 de enero de 2012, el Ministerio de Defensa anunció

el aumento de las tropas del ejército y la creación de dos brigadas, supuestamente destinadas para la lucha contra el narcotráfico en el norteño departamento del Petén y la otra en el municipio de San Juan Sacatepéquez, en apoyo “a la seguridad ciudadana de la ciudad capital”. Con estas dos brigadas operarían un total de doce a nivel nacional.

5 La movilización de los estudiantes normalistas dio inicio cuando el Ministerio de Educación oficializó una propuesta, consensuada en una mesa técnica con el magisterio, que implicaría prolongar por tres años más la carrera magisterial, lo que según los estudiantes y padres de familia perjudicaría el acceso a los jóvenes de las áreas rurales y a las familias empobrecidas. Las movilizaciones de los estudiantes normalistas se iniciaron en el mes de mayo de 2012 y se interrumpieron a fines del año para continuarse en febrero de 2013. Se efectuaron manifestaciones, bloqueos de ruta, toma de establecimientos educativos, plantones y acciones de protesta que fueron respaldadas por los padres de familia, líderes comunitarios rurales y algunos grupos magisteriales. Es de hacer notar que el gremio magisterial organizado en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala no apoyó ni respaldó la demanda de los estudiantes, bajo el argumento de que esta propuesta había sido consensuada en el gobierno anterior como parte de la negociación del Pacto Colectivo. Algunos sectores han criticado a la dirigencia magisterial por su supuesta cercanía con el gobierno del Partido Patriota.

6 Otro tema que motivó recurrentes protestas fue la demanda para que el congreso aprobara la Ley de Desarrollo Rural, una iniciativa que el movimiento campesino y las organizaciones dedicadas a promoverlo consensuaron desde hace más de diez años. El principal obstáculo para su aprobación ha provenido

del sector empresarial y de sus aliados en el Congreso de la República. Es otra demanda que no fue atendida durante 2012.

7 El Decreto Gubernativo Número 1-2012 fue publicado el viernes 4 de mayo, con vigencia de 30 días. Su ratificación en el Congreso de la República fue programada para el 8 de mayo y después de un largo debate contó con 103 votos a favor y 24 en contra. Según el artículo 3 del decreto, la medida cesó la plena vigencia de la libertad de acción, autorizó la detención legal y el interrogatorio a detenidos o presos y restringió la libertad de locomoción y los derechos de reunión y manifestación y portación de armas.

8 Véase el Comunicado público *Todos somos Barillas*, del 10 de mayo 2012, en <aapguatemala.blogspot.mx>.

9 Para más información sobre este conflicto, léanse los comunicados públicos del Colectivo Madre Selva del 7 de agosto, el 13 de junio y el 23 de noviembre de 2012, en <madreselva.org.gt>.

10 Las organizaciones acompañantes de las comunidades como Colectivo Madre Selva emitieron pronunciamientos diarios desde el día 13 hasta finales de noviembre, en los que denunciaron la provocación de los trabajadores mineros en contra de los líderes y lideresas comunitarias, consistentes en amenazas e intimidaciones que abarcan a su vez a periodistas independientes asociados al Centro de Medios Independientes y que denunciaron amenazas de muerte el 21 de noviembre. Véase el comunicado público del colectivo del 13 de noviembre.

11 Algunas de las organizaciones quienes se han pronunciado y solidarizado con la lucha son Plataforma Urbana, FUNDESCO, el Movimiento de Mujeres Indígenas «Tzu'nunija'», el Colectivo Ecologista «Madre Selva», el Proyecto de Salud «Sangre de Cristo», la Asociación Feminista «La Cuerda», la Alianza Política Sector de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, el Consejo de Mujeres Cristianas, la Marcha Mundial de Mujeres, la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, H.I.J.O.S. Guatemala, el Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS), Clavel Rojo, el Comité de Unidad Campesina, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya «Waqib' Kej», la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad «CEIBA», la Conferencia de Religiosos de Guatemala, el Centro de Medios Independientes, monseñor Rome-

ro y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC).

12 Según el comunicado de Madre Selva del 13 de noviembre, «como líder de los supuestos trabajadores se encuentra el coronel Mario Ricardo Figueroa Archila, gerente de Exmingua, y Selvin Morales, quien fungió como director general de minería del Ministerio de Energía y Minas hasta finales de 2010, durante el gobierno de Alvaro Colom, y ahora es presidente de servicios mineros de Exmingua».

13 La mina subterránea tiene proyecciones de producción de 19 años y dos de cierre técnico, según el gerente de la compañía, Carlos Morales. El yacimiento contiene un aproximado de 315 millones de onzas del metal (8.9 millones de kilos). Véase el número de *Siglo XXI* del 3 de mayo de 2012.

14 El 7 de noviembre de 2012 se efectuó la primera consulta en uno de los municipios de Jalapa, Matquescuintla. Nuevamente predominó mayoritariamente el rechazo de los vecinos a este proyecto minero. El alcalde, Hugo Manfredo Loy, destacó que de 10 mil 375 votos, 10 mil 22 lo hicieron por el «no».

15 Léase el comunicado público del 19 de septiembre del Comité por la Vida y contra la Minería de San Rafael Las Flores, el Consejo Diocesano para la Defensa de la Naturaleza de Santa Rosa, el Parlamento Xinca, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social y el Colectivo Ecologista «Madre Selva».

16 Un grupo de ex militares y personas de extrema derecha organizados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y la Fundación contra el Terrorismo inició una persecución penal contra hombres y mujeres que participaron en las diferentes organizaciones revolucionarias durante la guerra. La Fundación «Guillermo Toriello», organización no gubernamental fundada para disponer y facilitar la reinserción de los ex combatientes, sufrió un allanamiento y el robo de sus computadoras a principios de 2012.

17 Por un lado la sede en Guatemala de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sufrió el allanamiento de sus instalaciones en marzo de 2012 y en mayo fue objeto de una estrategia que pretendía intervenirla por parte de personas vinculadas al gobierno actual. Por otro, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala sufrió una irrupción violenta con el correspondiente robo de su información y de todas sus computadoras a escasa distancia de la casa presidencial en el mes de enero de 2013.

Entrevista

**Compromiso político, tarea
teórica y movimientos sociales.
Entrevista a Enrique Dussel**
Luz Estrello y Massimo Modonesi

Compromiso político, tarea teórica y movimientos sociales

Entrevista a Enrique Dussel

LUZ ESTRELLLO

Profesora adjunta del Centro de Estudios Sociológicos, FCPyS. Secretaria de redacción de la revista del OSAL.

MASSIMO MODONESI

Historiador y sociólogo. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM y director de la revista del OSAL.

Resumen

Desde Argentina hasta la India, pasando por Europa e instalándose en México, Enrique Dussel ha combinado su labor como filósofo con una amplia experiencia militante. En esta entrevista, realizada por Luz Estrello y Massimo Modonesi, el estimado profesor de filosofía e interlocutor clave de distintos movimientos sociales hace un recorrido por su historia de compromiso y trabajo intelectual. Además, ofrece sus opiniones respecto a algunos movimientos sociales mexicanos de las últimas dos décadas, con los cuales ha tenido un diálogo permanente y hasta una participación estrecha. Entre ellos está el zapatismo, el obradorismo y, más recientemente, el #YoSoy132 y el movimiento democrático en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Dussel, en la primera mitad del 2013, se reivindica como referente de la filosofía política latinoamericana y como intelectual comprometido con los procesos sociales, no sólo desde el cubículo o el aula, sino también en la asamblea y desde la tribuna.

Abstract

From Argentina to India, across Europe to finally settle down in Mexico, Enrique Dussel has combined his work as a philosopher and his extensive experience as a militant. In this interview, carried out by Luz Estrello and Massimo Modonesi, the highly esteemed Philosophy professor recounts his history of commitment and intellectual work. In addition, he offers his opinion about some Mexican social movements, with which he has engaged in a permanent dialogue and as a close participant over the past two decades. Among these, he tackles Zapatism, Obradorism, and more recently, the #YoSoy132 and the democratic movement at the Autonomous University of Mexico City (Universidad Autónoma de México). Dussel, during the first half of 2013, asserts himself as a Latin American political philosophy referent an as an intellectual committed to social processes, not just from the classroom or the academic setting, but also as part of the assembly and from the podium.

Palabras clave

Compromiso intelectual, militancia, filosofía de la liberación, pensamiento crítico, movimientos sociales.

Key words

Intellectual commitment, militation, philosophy of liberation, critical thinking, social movements.

Cómo citar este artículo

Estrello, Luz y Modonesi, Massimo 2013 "Compromiso político, tarea teórica y movimientos sociales. Entrevista a Enrique Dussel" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, Nº 33, mayo.

Filósofo de alto vuelo y amplio reconocimiento, Enrique Dussel reivindica orgullosamente su trayectoria militante. En las últimas décadas ha acompañado experiencias como la del zapatismo y el movimiento obradorista en México, además de tener interlocución con diversos movimientos latinoamericanos y mundiales. Entre sus últimas publicaciones se encuentra Carta a los indignados, un ejercicio de diálogo con uno de los movimientos emergentes de nuestro tiempo. Siempre en México, ya en fechas más recientes, ha participado en el debate político que abrieron movimientos como la policía comunitaria en Guerrero, el #YoSoy132 y el movimiento democrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta última experiencia resultó en una rotunda victoria de un movimiento de estudiantes, profesores y trabajadores en contra del autoritarismo y el patrimonialismo de la rectora Esther Orozco y, pocos días después de que realizamos la entrevista, Enrique Dussel fue elegido por los distintos sectores del movimiento como rector interino de esta universidad capitalina.

Nuestra revista, desde su fundación en el año 2000, justo en medio del ascenso de los movimientos populares en América Latina, ha sido un espacio de cruce entre el análisis y el rigor académico y el compromiso militante. ¿Podría contarnos cómo ha conciliado el compromiso político con su labor como filósofo?

Creo que el compromiso fue desde siempre. Desde mis ocho años fui miembro de los "niños de Acción Católica", que era un movimiento militante democrático, diría yo, que en Italia fue el movimiento que se antepuso al fascismo. Era un movimiento democrático antifascista que existió en Argentina. Yo iba con la bicicleta a buscar a otros niños para reunirlos, después hacíamos exposiciones. Por ahí me tocó ser tesorero, secretario, hacer actas ¡pero eso antes de los diez años! Entonces eso creció en mí toda la vida, es decir, desde muy chico estuve como responsable de organizaciones, que después desaparecieron, ya en los años setenta. En el caso de mis hijos, ya nunca encontré este tipo de organizaciones juveniles donde la gente se hace responsable y militante. Fui dirigente de esas cosas pero a nivel provincial, y tenía que movilizarme, hablar a quinientos niños. Era una cosa tremenda realmente, cuando pienso que con quince años fuimos a la montaña casi trescientos jóvenes y uno era el responsable. Era increíble. Después fui dirigente estudiantil, secretario general de la federación de mi universidad, presidente del centro de

estudiantes, organizador de la democracia cristiana en los cincuenta... pecados de juventud digo yo. Mucha militancia. Y eso siguió hasta mis 23 años, cuando terminé la universidad. Y ahí sí hubo un corte, porque saqué una beca y me fui a Europa. Antes había pensado ser ingeniero agrícola, después arquitecto, pero terminé por ser filósofo porque pensé que me aclaraba justamente esas luchas. Elegí filosofía para clarificar la ideología del militante. Mejor dicho, lo que tengo es una enfermedad, una militantitis. En Europa no tenía posibilidad de militar, pero sí de articularme con movimientos. Me tocó primero España, en 1957, durante el franquismo. Pero después –por cuestiones que he explicado muchas veces, pero que no valdría la pena hacerlo ahora–, me fui dos años a Israel, que fueron muy cruciales, porque me fui de obrero. Trabajaba nueve horas al día con palestinos, en un pueblito que se llama Nazareth. Fui carpintero de la construcción. Y era buen obrero, aprendí rápido el oficio y me estimaban, y fue una experiencia de trabajo manual muy interesante. Y muy de romper todos los esquemas. Porque era salir de occidente, salir de medios intelectuales. Ahí estudié el hebreo.

Al volver a Europa, me vinculé con grupos mucho más de izquierda, en la época del diálogo marxismo-cristianismo, y estudié cuatro años en La Sorbona, en París, y dos años en Alemania. Ahí estuve en relación con el Partido Comunista, pero también con sacerdotes obreros. Pura militancia, pero como observador, porque era extranjero. Esos años contuvieron una experiencia muy grande: saqué dos doctorados, otra licencia, y ya empecé a escribir cosas.

Volví a Argentina en 1967, durante la dictadura militar. Entonces empezó una militancia más intensa. Había movimientos sociales, muchas conferencias que dar, surgía todo el movimiento de liberación: filosofía de liberación y teología de liberación. Entonces uno hablaba, a veces, a multitudes. Y los movimientos populares contra la dictadura de Onganía y después de Lanusse. Fue un tiempo de compromiso fuerte, a tal punto que me pusieron una bomba en mi casa y me expulsaron de la universidad en 1975. Fueron ocho años de fuerte militancia: movimientos estudiantiles, movimientos populares contra la dictadura, peronismo de izquierda. Algunos me criticaban de peronista. Nunca fui del partido, pero la juventud peronista era lo mejor que había en Argentina. Aunque después tuvo distintos avatares, Montoneros y todo esto. No fui montonero, pero por ejemplo escribí un libro que se llamó *Dependencia y Liberación*, en 1968. Y esta frase casi fue el lema del FRE-JULI –Frente Justicialista de Liberación– en todo el país: dependencia o liberación. Cámpora era el candidato a la presidencia. Yo estaba más bien con el camporismo –ahora en Argentina existe el movimiento “juventud camporista”, y con mucho gusto he sabido que ahí en los barrios me leen, es lo más semejante a lo que yo hacía–, entonces hubo una militancia fuerte. Al mismo tiempo, entre 1968 y 1975, empecé a viajar por América Latina con distintas organizaciones. Me di cuenta de todo el fermento que se estaba activando en aquellos años, desde México a todo Centroamérica, el Caribe, Brasil, todos los países latinoamericanos. Hice filosofía de la liberación, y también historia de la iglesia. Hay una colección de ocho tomos –que ahora ni muestro, pero que no son cualquier cosa–, de cuando era el presidente de una comisión de estudios de historia, con una visión de la iglesia desde los pobres, algo completamente distinto a lo que se podría pensar. Esa investigación me permitió viajar por todos lados. He dado conferencias en los lugares

más recónditos. Me acuerdo de San Miguelito, en Panamá, dando una conferencia donde después bombardearon los norteamericanos. Era bajo un techo de palma, había como quinientas personas, todos afro, ni un blanco. O hablando con indígenas en Los Andes. En esa época también viajé mucho con latinos, por todo Estados Unidos hablando español, dando cursos en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Florida. En puro español, todavía no hablaba el inglés. También escribí mucho, siempre procurando articular la experiencia que ya tenía sobre los movimientos contra las dictaduras. Por ejemplo, un libro que se llama *De Medellín a Puebla*, que lo hice como con cuatro mil fichas, relaté qué pasaba con los movimientos contra la dictadura de origen cristiano, en este caso, en cada país latinoamericano. Además, empecé a desarrollar filosofía de la liberación a partir de eso, hablaba mucho, coordinaba reuniones. Fue una época que, pensaba, era como un volcán.

Cuando vino la expulsión, me fui a Estados Unidos a estudiar inglés, y a comenzar a dar cursos con latinos ya en ese idioma. Y seguí rotando, pues el aterrizaje en México no era fácil, ya que el pensamiento de la filosofía de la liberación era rechazado. A Leopoldo Zea, por ejemplo, le mostré mi librito sobre filosofía de la liberación y dijo “ah, qué bonito”, pero nunca lo publicó. Es más, le puso un prólogo al libro de Cerutti donde la crítica, diciéndole filosofía pequeño-burguesa, populista –por el peronismo–. Entonces, aunque era una lucha interna muy dura, yo tenía muchos contactos externos con quienes debatir en Europa, en Estados Unidos, en el resto de América Latina. Así, flotaba gracias a los contactos externos, más que a los internos, porque no era todavía un pensamiento muy aceptado. Ni siquiera por el marxismo tradicional, que lo veía como una alternativa, y yo todavía no había clarificado el tema del marxismo. Además, este pensamiento tenía un origen no fácilmente clasificable. Justamente en aquellos años participé en la fundación de un organismo de diálogo entre militantes del tercer mundo, y comenzó otra etapa, de 1975 a 1980. Me tocó ir mucho al África y al Asia. Estuve en la India, sobre todo, pero también en Filipinas, Tailandia, en Nairobi y en distintas partes del África. Entonces se me amplió completamente la visión del movimiento en todo el tercer mundo. Por ejemplo, tengo fotos de un seminario sobre el tema de la religión en Marx, en Sri Lanka. Hay que ver las caras de la gente, porque eran todos hindúes, y del Partido Comunista. Otros eran budistas. Hablar de Marx, el tema de la religión. ¡En la India! Era una cosa increíble. Y lo que yo demostraba ahí era que Marx no criticaba a la religión en general sino a la de dominación; y la cuestión es una religión de liberación. En fin, era trabajar con grupos sociales en la India, en Filipinas, o en pueblitos africanos. Entonces sí, tengo mucha experiencia militante, no sólo en América Latina. Ahora, también he escrito mucho, a veces sumamente abstracto, pero siempre pensando en las experiencias.

¿Como ha podido transitar como intelectual militante por épocas y experiencias distintas y, de paso, por las derrotas y las decepciones de los periodos negros de la historia latinoamericana?

Hay algunos teóricos que no tienen nada que ver con lo concreto, pero otros que son más sensibles. Yo me doy cuenta de que también soy bastante sensible a lo que pasa. Pero lo único es que no tengo tantas caídas, porque parecería que tengo esa virtud de Bloch, de esperanza, que va más allá del pesimismo. Entonces,

cuando se cae la cosa, yo continúo. Luego uno dice, “no ahora ya no va a pasar más”, como cuando luchamos contra las dictaduras y dijimos “esto se acabó para siempre”, y después llegaron peores.

...he escrito mucho, a veces sumamente abstracto, pero siempre pensando en las experiencias

Yo siempre he sido un militante en distintos niveles, y eso es lo que ha animado mi tarea teórica. Pero mi tarea teórica ha llegado a veces a las últimas instancias de fundamentación. Cuando me puse a trabajar a Marx, el asunto era aclarar el populismo, y me hicieron ataques sobre la clase social y demás, pero lo necesario era ir al fondo. Y sí tengo la disciplina de dedicarme, con tiempo, para llegar al fondo. Pero, siempre surge el entusiasmo, luego la claridad y, más que todo, el saber qué estudiar y de qué manera solucionar el problema teórico, que parte de la praxis.

Hablando de una experiencia concreta que combina la simpatía política con la necesidad de reflexión y de crítica, ¿cómo describiría su vínculo con el zapatismo?

Yo siempre apoyé al zapatismo con un sentido crítico. En el Primer Coloquio Internacional “Andrés Aubry”, en San Cristóbal de las Casas, con la presencia del Sup Marcos, di toda una conferencia sobre el poder. Algunos seguidores del zapatismo me quisieron hacer una crítica, pero no soy de los que aplaude rápidamente. Personalmente, cuando escribo, siempre hablo bien del zapatismo. Ya después el que me lee, se da cuenta que estamos discutiendo un punto. Los intelectuales que dicen “yo soy zapatista y no voy a ser otra cosa”, no ayudan a que se avance críticamente.

En los últimos meses, el tema de las policías comunitarias ha ganado visibilidad en México. Se trata de experiencias organizativas que transitan por un camino similar al de los procesos de autonomía impulsados por el EZLN, pero con sus peculiaridades. ¿Cuál es su opinión al respecto?

En este momento, a mí me resulta muy interesante la experiencia de las policías de la comunidad, porque no son un ejército. Yo creo que, el haber formado un ejército, como el EZLN, pertenece a la última etapa de la época guerrillera: hacer un ejército y luchar contra el Ejército. Es decir, al constituirse como tal, en el fondo se es un proto-estado contra el Estado vigente, para hacer un nuevo Estado. Cuando se constituye una policía, es algo mucho más humilde. No es poner en jaque la soberanía del Estado, pero la gente se puede proteger, puede empezar a crecer comunitariamente y eso es muy fácil de generalizar. En cambio, hacer ejército es ya una cosa más grave. Entonces, yo creo que al zapatismo le tocó la última etapa guerrillera, y en el mismo proceso de lanzamiento tuvieron que, en las primeras semanas, redefinir todo, y lo hicieron muy bien. Han llegado a un *modus vivendi* con el Estado que les permite seguir existiendo y generar conciencia, profundidad y todo. Pero el modelo no es generalizable. En cambio, las policías comunitarias sí lo son, y podrían hacerse en toda comunidad campesina de América Latina. Y eso va a dar resultados muy fuertes, porque permite a la comunidad empezar a or-

ganizarse. Entonces, son distintas concepciones, una más radical, que cree que al Estado habrá que disolverlo –y por eso la *Otra campaña* va a largo plazo y no entra en el nivel electoral–, y donde el zapatismo ha ido navegando. Ahora, entre las distintas experiencias de autodefensa comunitaria, yo creo que lo mejor que hay es la CRAC –Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias– desde 1995, que primero luchó contra la policía oficial, que estaba toda corrompida. Han podido tener autonomía, empezaron a juzgar desde hace ocho años, y a reeducar. Porque en su sistema de justicia el sentido no es castigar, sino reeducar. Ya vieron que entregar los reos a los jueces del Estado es un espanto, porque apenas los entregan, aquellos se amparan, y quien acusa tiene que pagar un abogado. Empieza el proceso debido, pero no presentan pruebas porque no saben cómo hacerlo, y no tienen notario. Entonces aquellos que entregaron en poco tiempo salen libres, y a los agraviados no les quedan ganas de volverles a entregar un reo más, pues dirán “lo vamos a juzgar nosotros”. Aquí hay un problema teórico muy interesante: ¿Quién es el soberano? ¿Cuál es la autoridad de la Constitución, la ley y las instituciones judiciales con respecto a una comunidad indígena que es anterior al Estado de Indias y al Estado nacional? Este tipo de cosas están al fondo de lo que estoy escribiendo, y de alguna manera también es una forma de militancia, porque esa gente me consulta, yo voy para allá, hacemos un curso. Pienso que es necesario repensar el poder político, las instituciones políticas, y qué pasa con el Estado.

...el movimiento #YoSoy132 va a tener efectos, porque hay gente que ahí descubrió la política en concreto. Y no hay otra manera de hacerlo

Ahora, considerando el interés y el apoyo que ha manifestado hacia personajes de la política institucional, tales como Andrés Manuel López Obrador, siendo usted uno de los impulsores del Movimiento de Regeneración Nacional y hasta con el propio Hugo Chávez, ¿cómo se acerca teóricamente a ellos?

Eso también viene de una militancia: leo lo que están haciendo, lo pienso y trato de clarificarlo, y entonces se vuelve un intercambio. En mi *Carta a los indignados* hay un trabajo sobre democracia participativa, disolución del Estado y el liderazgo, que leí a Hugo Chávez –y después agarró y explicó dos horas el tema, muy buena su reacción–, pero que también escribí con respecto a López Obrador. La izquierda a veces no sabe situar el tema del liderazgo y el hecho es que no ha habido ninguna revolución que no haya tenido liderazgo: Mao, Lenin, todos. Y sin embargo no se sabe articular el tema.

Mi libro *Veinte tesis de política* fue un curso que en 2006 di como a cuatrocientos miembros del PRD –Partido de la Revolución Democrática–, aquí en el Distrito Federal, veinte clases. Teníamos un grupo de reflexión y todo. Pero al PRD no había manera de salvarlo con “los chuchos”, todo un desastre. Yo siempre empujé para que hubiera un partido limpio y que empezara la cosa a largo plazo. Ya veremos.

Entonces, en la actual coyuntura mexicana, pensando que nada es perfecto y

que no es un partido revolucionario, lo que hay es MORENA, no hay otra cosa. La *Otra campaña* ha dicho no perder el tiempo en las elecciones, y en México eso ha sido muy importante. Entonces habría que mediar entre Andrés Manuel López Obrador y el zapatismo, y eso intento. Claro, está el problema de las instituciones, del Estado, el problema de la política como tal, pero López Obrador no intenta ser un revolucionario, es un nacionalista que quiere trabajar con limpieza y no se le puede pedir una revolución, pero tampoco la ofrece. Pero lo que sí ofrece es, al menos, entrar al clima nacionalista de defensa de lo propio latinoamericano, lo cual sería un avance gigantesco.

Y sobre la coyuntura electoral y el surgimiento del #YoSoy132 ¿Cuáles son, a su parecer, los alcances y límites de esa experiencia?

El tema de la juventud, mundialmente es un tema que va a largo plazo. Creo que con mi *Carta a los indignados* reaccioné rápido ante los egipcios, Grecia, y sobre todo los españoles e Israel. Pero el #YoSoy132 aquí fue excelente, hizo de todo. Pienso que lo que cambió la fisonomía tradicional de la protesta es que fue la pequeña burguesía de la Ibero la primera que reaccionó. Entonces fue un movimiento distinto, porque no comenzó en las universidades públicas y eso le dio un espectro más grande. Hizo entrar a gente que no hubiera entrado nunca. Y yo creo que el 132 va a seguir siendo un movimiento que actúa por reacción. Yo quise insistir –escribí algunos artículos– en que se organizara, pero no, se ve que es un movimiento que actuará por reacción, veremos hasta cuándo. Es un movimiento muy importante.

Suele decirse que los partidos garantizan ciertas mediaciones y permiten la permanencia de algún nivel de participación política, pero también poseen un componente de desmovilización, de control y de contención, en el caso de las experiencias más movimientistas, porque de alguna manera las institucionaliza. En este sentido, ¿es siempre necesaria la institucionalización?

Parte de lo que estudia Antonio Negri es eso, la política del *événement*, de los acontecimientos. Eso también es válido, pero pienso que sin armar un partido político que pueda llegar a asumir, delegadamente y de manera obedencial, el poder del Estado, esto no anda. Es decir, es Bolivia, es Ecuador, es Venezuela en donde las cosas están cambiando. Y aún en Argentina, en Brasil y en casi todos los países del sur, menos Chile. Pero claro que es bueno que el 132 siga siendo un movimiento y que las policías comunitarias también lo sigan siendo, pero al mismo tiempo tiene que haber un partido que pueda, en el momento electoral, elegir gente capaz de cambiar las cosas de otra manera. Si no, vamos a estar en situación de gran desventaja. Sin duda, el movimiento #YoSoy132 va a tener efectos, porque hay gente que ahí descubrió la política en concreto. Y no hay otra manera de hacerlo.

Acerca de los enfrentamientos del primero de diciembre, en ocasión de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, en un movimiento como el #YoSoy132, sin liderazgo claro, hubo quienes ejercieron cierto nivel de violencia como manifestación política de enojo. Al respecto, se puede pensar también en la experiencia de Grecia

o de Italia, donde hay una violencia infiltrada pero también una que es expresión del movimiento, de la rabia y la frustración acumulada. Es delicado el tema, porque dichos sectores también son una parte del movimiento juvenil y estudiantil, y se les puede criticar, así como reconocer la parte infiltrada, las provocaciones y los excesos policíacos, sin perder de vista que existen contradicciones al interior del mismo movimiento.

Claro, pero en ese caso yo creo que hay que llamar en auxilio a Freud, más que a Marx. Porque como dices, es enojo, es frustración, es ya no soportar más la situación, pero también es una falta de disciplina política a largo plazo. Entonces esos movimientos son difíciles de controlar porque se transforman, al fin, en contra del movimiento, y no lo advierten y no pueden aceptarlo. Eso es lo interesante del proceso de la UACM, donde los grupos más duros se lograron disciplinar muy bien, y ahí están todavía.

Hablando de la UACM, estamos frente a un movimiento exitoso y lamentablemente no contamos muchos movimientos que consiguen lo que se propone en la historia reciente de México. Es decir, se trata de un movimiento crítico que nace pequeño, crece y logra frenar un proceso regresivo en esa universidad y en nuestra ciudad.

Sí, una victoria concreta. Mi participación nace por casualidad porque yo estaba en casa Lamm a la hora de unas negociaciones sentado entre otros colegas y ahí sobre la marcha dijeron "necesitamos a alguien". Estaba Héctor Díaz Polanco y otros, y dije "bueno, si son tres días". Y sí, fueron 72 horas de estar de cabeza, pero me enteré de las cosas desde dentro, y sé perfectamente cómo aconteció la injusticia y todo, y entonces me doy cuenta de dónde viene el conflicto y he podido seguir el hilo de lo que ha ido pasando con claridad. Ya veremos cómo termina esto.

Experiencias latinoamericanas

**De la generación zapatista
al #YoSoy132.
Identidades y culturas
políticas juveniles en México**

Massimo Modonesi

De la generación zapatista al #YoSoy132

Identidades y culturas políticas juveniles en México

MASSIMO MODONESI

Historiador y sociólogo. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM. Director de la revista del OSAL.

Resumen

A menos de un año de la emergencia del movimiento juvenil denominado #YoSoy132, y una vez pasada la primera gran ola de movilización, Massimo Modonesi aporta una dosis de leña al fuego del debate, académico y político, que actualmente se está preguntando acerca de los rasgos, retos y alcances de este fenómeno sociopolítico. Así, este artículo es un breve análisis sobre las identidades y las culturas políticas que actualmente definen a la juventud mexicana, tomando en cuenta las continuidades y transformaciones que se han dado entre la generación zapatista y la aparición del #YoSoy132. La hipótesis de trabajo que utiliza Modonesi plantea que la militancia juvenil y particularmente universitaria ha entrado en una nueva etapa histórica, en la que el zapatismo ya no es el principal referente en términos de formación de identidades políticas. Los fundamentos y matices que le dan forma a dicha hipótesis quedan expuestos tomando en cuenta análisis recientes hechos por estudiosos mexicanos, así como los comunicados del EZLN a los inicios del año.

Abstract

Less than a year into the appearance of youth movement #YoSoy132, and after the first wave of demonstrations, Massimo Modonesi throws another log in the fire of the academic and political debate which is currently wondering about the characteristics, the challenges and the extent of this sociopolitical movement. This article presents a brief analysis of the identities and political cultures which define the Mexican youth today, taking into account continuity and transformation from the beginning of the Zapatist movement and the emergence of #YoSoy132. Modonesi's hypothesis proposes that youth militation, particularly at university level, has moved to a new historical stage, in which the Zapatist movement is no longer the main referent in terms of the creation of political identities. The underpinnings and nuances which give shape to this hypothesis are laid bare when taking into account in a recent analysis carried out by Mexican thinkers, and also through Zapatista National Liberation Army's communiqués at the beginning of the year.

Palabras clave

Zapatismo, cambio de época, movimiento estudiantil, cultura política, identidades juveniles.

Key words

Zapatist movement, change of time, student movement, political culture, youth identity.

Cómo citar este artículo

Modonesi, Massimo 2013 "De la generación zapatista al #YoSoy132. Identidades y culturas políticas juveniles en México" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 33, mayo.

Entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, a través de una masiva manifestación en San Cristóbal de las Casas y por medio de una serie de comunicados que definen, confirman y precisan su postura y proyecto político, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional volvió a asomarse a la escena política nacional cuando, desde 2006, parecía haberse colocado al margen de ella, atrincherado silenciosamente en la defensa de las experiencias autónomas de las comunidades zapatistas en Chiapas.

En efecto, hace ya seis años, el fracaso y la disolución de hecho de la recién nacida *Otra campaña* –y con ella del proyecto de expansión y arraigo del zapatismo civil– dejaron un vacío en la izquierda mexicana y provocaron la dispersión/generación de militantes y simpatizantes surgidos en el ciclo expansivo e intensivo del zapatismo civil entre 1994 y 2001.

Este acontecimiento histórico se vuelve más visible en tanto que, en 2012, la emergencia del movimiento #YoSoy132 sancionó un pasaje epocal y generacional en culturas políticas juveniles. En esta nueva experiencia de movilización y politización estudiantil se desvaneció definitivamente la centralidad del referente zapatista, abriendo una etapa que –amén de otras posibles definiciones que enfatizen sus rasgos novedosos– podemos llamar *postzapatista*. Si bien, como siempre ocurre en la articulación entre continuidad y ruptura de todo proceso histórico, algunos principios y formas inaugurados por el zapatismo se mantienen y prolongan, hay que registrar que se diluyeron y volatilizaron la identidad y la referencia directa al EZLN, que había sido una constante entre 1994 y 2001 y, aunque en forma menos extendida y profunda, hasta 2006.

A lo largo de las siguientes páginas desagregaremos esta hipótesis de la crisis histórica del zapatismo juvenil y estudiantil y su correlato, el hecho de que el #YoSoy132 se coloca como parteaguas entre distintos momentos de la historia de los movimientos sociales y de las culturas políticas antisistémicas en México.

I

Entre 1994 y 2001 con gran intensidad y amplitud, y hasta 2005 de forma más esporádica y laxa, los procesos de participación y politización juveniles, estudiantiles y, en particular, universitarios, estuvieron marcados por el sello de

la estrella roja zapatista e inspirados por los comunicados y las palabras del Subcomandante Insurgente Marcos. Desde las primeras movilizaciones posteriores al levantamiento de 1994, toda una generación de estudiantes y jóvenes mexicanos se formó y forjó políticamente en el contexto de las iniciativas del EZLN o de acciones de solidaridad con las comunidades zapatistas, menos espectaculares que las primeras pero constantes en el tiempo. Haciendo un sumario recuento de los espacios y momentos de participación más destacados, recordemos en 1994 las marchas en contra de la guerra y las primeras caravanas hacia la zona de conflicto en Chiapas –en particular las Caravanas Universitarias Isabel y Ricardo Pozas–, posteriormente la Convención Nacional Democrática; en 1995 las movilizaciones contra la ofensiva militar ordenada por Ernesto Zedillo y la Consulta por la Paz y la Democracia; en 1996 el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo y la Llegada a la ciudad de México de la comandante Ramona; en 1997 la fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y de los comités civiles de diálogo, el segundo intercontinental en España y la marcha de los 1111 zapatistas al DF; en 1999 la consulta por los derechos y cultura indígenas y, finalmente, en 2001 la marcha del color de la tierra. Momentos álgidos de ocho años de intensa y permanente movilización, acompañada de dinámicas de politización, de educación política e ideologización inspiradas y cobijadas por la palabra y la práctica zapatista. Habría que llamarla la *década zapatista*, una década corta o larga si incluimos o no los años 2001-2005, un periodo de transición marcado por el reflujo de las luchas y el ensimismamiento del EZLN, que empezó a modificar su relación con el escenario político nacional y su capacidad y voluntad de convocatoria e influencia social y política. Como es sabido, después de la marcha del color de la tierra, a la luz del desconocimiento por parte de los principales partidos políticos –la mayoría del Partido de la Revolución Democrática incluida– de los Acuerdos de San Andrés, el EZLN dio por cerrada la vía del diálogo institucional –y con ella la apertura hacia la “sociedad civil” y la táctica de las iniciativas y las movilizaciones públicas y de alcance mediático–, se replegó, volteó hacia adentro y optó por el silencio. Los *Caracoles* y las Juntas de Buen Gobierno serán las expresiones del repliegue y de una laboriosa y exitosa construcción de la autonomía en los hechos. Antes de la reaparición en la escena con la VI Declaración de la Selva Lacandona y el arranque de la *Otra campaña* en 2005, sólo habrá espacio para una salida pública que no dejaba de ser autoreferente, la campaña *20 y 10, el fuego y la palabra*, en 2003, que conmemoraba los diez años del levantamiento y los 20 de la fundación del EZLN.

A lo largo de estos años, con las altas y bajas propias de las coyunturas pero con la persistencia de la sedimentación en la cultura política, en la juventud urbana y particularmente en la universitaria las referencias al EZLN eran constantes y directas, las formas de ser zapatistas variadas pero todas identitarias, constitutivas de culturas políticas que se ramificaban alrededor de un tronco común. No sólo existía aquel núcleo duro que alguna vez se aglutinó en el FZLN o de agrupaciones claramente zapatistas y estudiantiles como Jóvenes en Resistencia Alternativa o el Colectivo Estudiantil Metropolitano¹, sino también en grupos que asumían o mantenían denominaciones distintas (sociales, culturales o polí-

ticas, por ejemplo anarquistas, socialistas, comunistas e inclusive perredistas), el zapatismo constituía un referente cultural y una identidad política que podía ser primaria o secundaria pero raras veces estaba ausente. En un movimiento emblemático de esta década zapatista, la huelga de 1999², se expresó plenamente la presencia del zapatismo ya que, aun cuando sólo algunos grupos de activistas eran militantes del FZLN, la influencia del zapatismo difuso permeaba a todo el movimiento, aun cuando era interpretada y vivida de diversas maneras, y varios fueron los contactos directos de los huelguistas con el EZLN, así como en varias ocasiones el subcomandante insurgente Marcos asumió posturas a lo largo del conflicto³.

Es sabido que, en medio de la aridez antisistémica y la re-subalternización provocada por el neoliberalismo, en los imaginarios juveniles, tanto mexicano como mundial, el zapatismo volvió a despertar ideales de rebeldía que se sumaban y, a veces, sustituían los símbolos del izquierdismo revolucionario clásico y contemporáneo. El radicalismo antisistémico de los años noventa, que volvió a cobijar la emergencia de subjetividades políticas antagonistas, forjadas en el conflicto y proyectadas hacia horizontes emancipatorios, se moldeó en los marcos del zapatismo, adquiriendo una serie de características cuyos ecos, como lo mencionaremos más adelante, siguen resonando en la actualidad.

En estos años en los cuales el zapatismo era un sustantivo ideológico difuso y un ámbito privilegiado de formación militante, cinco adjetivos lo acompañaban, entrecruzando y sobreponiéndose: se habla tanto de zapatismo civil como de zapatismo urbano, juvenil, estudiantil y universitario. Si bien no se distinguían en los discursos que circulaban en los ambientes militantes, se podía inferir que cada uno de los niveles contenía al siguiente y los últimos dos, el estudiantil y el universitario, fueron una expresión particularmente viva y densa del zapatismo como nueva cultura política y nuevo cauce de formación y educación militante. Entonces, podemos hablar de *generación zapatista* en tanto una generación entera de activistas y militantes se forjó al calor de las movilizaciones convocadas o inspiradas por el EZLN asumiendo, de distintas maneras, una forma de ser zapatista.

La noción de *zapatismo civil* circuló ampliamente para diferenciar el carácter armado del EZLN de las movilizaciones pacíficas de sus simpatizantes. La expresión surgió de la boca del propio subcomandante Marcos quien, en una célebre entrevista con Yvon Le Bot, planteó la idea del zapatismo como pretexto, indicando como, al lado del zapatismo armado, surgía lo que llamó zapatismo civil y un zapatismo social, además de un zapatismo internacional⁴. La distinción entre *armado* y *civil* fue una fórmula de los primeros años en los cuales el subcomandante Marcos y el EZLN abrieron el diálogo con la “señora sociedad civil”, asumiendo con optimismo el apoyo de diversos sectores, respetando este pluralismo y confiando en las mediaciones hacia la esfera institucional, en particular en el PRD. Por otro lado, la organización interna del FZLN, la expresión más orgánica del zapatismo civil, se estructuró en función de “comités civiles de diálogo”⁵.

La fórmula *zapatismo urbano*, que circulaba en ambientes militantes, figura explícitamente en un breve texto de John Holloway en el cual, por medio de

la idea de resonancia –retomada de un discurso del subcomandante Marcos–, plantea la extensión de una forma zapatista de hacer política, polarmente anti-tética a la del izquierdismo clásico, antipartidaria, antivanguardista y contraria a la toma del poder, sino comunitaria y consejista cuyo desafío central es “el desafío de la autonomía” (Holloway, 2005: 168-179)⁶. Y, además de los colectivos zapatistas europeos, inspirados por el autonomismo italiano, no casualmente será en la Argentina rebelde e insurrecta de los piqueteros y las asambleas barriales del 19 y 20 de diciembre de 2001 y de las fábricas recuperadas, donde la irradiación del referente zapatista fue acompañada de una reflexión más profunda sobre el ser zapatista en las selvas metropolitanas⁷.

...resulta sorprendente la ausencia casi total de estudios relativos a toda expresión de zapatismo civil o urbano y, menos aún, a su dimensión juvenil, estudiantil y universitaria

A pesar de su indiscutible importancia histórica, resulta sorprendente la ausencia casi total de estudios relativos a toda expresión de zapatismo civil o urbano y, menos aún, a su dimensión juvenil, estudiantil y universitaria⁸. En México existe solamente un estudio a profundidad sobre el zapatismo urbano, restringido a la experiencia de Guadalajara, que sin dejar de ser interesante y revelador de alcances y límites, tiene sólo una alusión a la dimensión juvenil en relación a la presencia de colectivos anarcopunks (Sandoval, 2009). A la vertiente anarcopunk refiere también un trabajo sobre neozapatismo y rock, el cual, además de ofrecer un ilustrativo panorama de la solidaridad y movilización de rockeros mexicanos y de otras partes de mundo, no aporta elementos substanciales para entender el impacto del zapatismo sobre la juventud mexicana (Anaya, 1999).

Sobre el zapatismo internacional –que también está profundamente marcado y recortado generacionalmente– contamos con el importante y pionero estudio de Guiomar Rovira (2009). Rovira –quien lo llama zapatismo transnacional– muestra la emergencia de un ciberactivismo y de una forma red que serán pioneras y que marcaran un pasaje de continuidad y de herencia del zapatismo al altermundismo (p. 237). Particularmente interesante resulta el registro de un repertorio de acción específico (p. 106) el cual, dicho sea de paso, da cuenta fundamentalmente de acciones de defensa de las comunidades zapatistas en Chiapas más que de acciones proactivas de ampliación de las demandas o las luchas (lo mismo que se observó en México con el FZLN), aunque hay que señalar que los comités pro zapatistas a nivel mundial reunían a militantes que participaban activamente de movimientos sociales activos en sus respectivos países. Al mismo tiempo, aún en medio de estas aportaciones, hay que señalar que tampoco Guiomar Rovira dedica una atención especial al tema generacional y no se refiere explícitamente a los jóvenes, a los estudiantes ni a los universitarios.

Ahora bien, estas aproximaciones de indiscutible valor no sólo aparecen insuficientes para dar cuenta de un fenómeno fundamental en la conformación de una cultura política mexicana de izquierda sino que no reflejan el impacto so-

bre el universo simbólico y las prácticas políticas juveniles y universitarias. No hay una historia del FZLN, no hay estudios a profundidad, ni siquiera un conjunto de referencias autobiográficas o testimoniales relevantes y significativas, aún cuando es obvio que las más diversas trayectorias biográficas pasaron por la militancia zapatista⁹. Sorprendentemente y lamentablemente en la historia del EZLN, que se está escribiendo copiosamente en términos de movimiento armado y de movimiento indígena, no está escribiéndose el capítulo del zapatismo civil y menos aún el del zapatismo juvenil, estudiantil y universitario. En efecto, si bajo la forma de guerrilla conquistó la atención de México y del mundo y bajo la forma de movimiento indígena se dieron y se dan los grandes logros del zapatismo como experiencias comunitarias de autogobierno y autonomía de inestimable valor, a nivel civil y urbano la proyección anunciada, ensayada y esbozada en varios intentos y diversas formas quedó frustrada. A lo mejor vendrán más adelante estudios que relaten esta dimensión, de la mano de estudios históricos que suelen registrar los fenómenos con una distancia temporal. Sin embargo, no deja de ser lamentable que no esté ocurriendo –en medio de coyunturas álgidas y problemáticas que requieren ser retroalimentadas con debates y análisis profundos– en el terreno más inmediato de los estudios políticos, sociológicos y antropológicos.

II

Un punto de partida desde el cual es posible y pertinente observar y analizar al zapatismo juvenil y universitario puede ser el fin de su ciclo, el momento en que se cierra un periodo o una época de trascendencia y de visibilidad e inicia otra etapa –de desaparición, de latencia o de puesta en espera–.

Como decíamos, la aparición del movimiento #YoSoy132 alrededor de las elecciones presidenciales de 2012 marca una ruptura y una discontinuidad con el pasado.

La anterior coyuntura electoral fue el contexto de la parábola rápidamente descendiente de la *Otra campaña*, cuando no prosperó el intento de federar, detrás del liderazgo del subcomandante Marcos, a distintas experiencias de luchas a lo largo y ancho de México. Así como el Congreso Nacional Indígena en el mundo *campesindio*, la *Otra campaña* trataba de vertebrar y articular las numerosas expresiones de resistencia que sostenían, inspirados en el zapatismo, los más diversos colectivos urbanos, generalmente y tendencialmente universitarios o en los cuales la presencia juvenil era significativa. En este sentido, la propuesta de la Sexta Declaración venía a sustituir y rebasar al FZLN –que en efecto fue disuelto inmediatamente– tratando de ampliar y consolidar el campo del zapatismo civil, no sólo como brazo político del EZLN sino como una organización con fuerza y empuje propio, cualidades que el FZLN nunca tuvo por decisión del mismo EZLN que, además de querer ampliar sus horizontes políticos conforme a la idea de liberación nacional, necesitaba contar con una retaguardia urbana.

El resultado de esta iniciativa es de sobra conocido. Después de un arranque prometedor en el cual la *Otra campaña* logró abrir un diálogo entre múltiples y

diversas experiencias de lucha¹⁰, el cálculo equivocado y la intempestividad de una campaña simultánea y declaradamente contrapuesta a la de López Obrador y la coalición que lo apoyaba condujeron primero al aislamiento, posteriormente a la marginalidad y finalmente a la disolución de prácticamente toda forma de zapatismo civil organizado. Si bien esto no significó la desaparición de una herencia cultural del zapatismo de la cual subsisten expresiones difusas, en 2006 se cierra un ciclo histórico. El vacío que la *Otra campaña* quería llenar quedó desocupado. El proyecto de una federación post-grupuscular de las izquierdas anticapitalistas mexicanas se quedó sólo en las letras de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

La emergencia del #YoSoy132 puede explicarse, entre otras cosas, a partir de la caracterización de la coyuntura de 2012 en comparación con la de 2006. En 2006 el escenario político estaba en ebullición y el campo opositor ofrecía dos opciones reales de militancia –el movimiento obradorista y la *Otra campaña* zapatista–, que sostenían e impulsaban, con apuestas estratégicas distintas y con diversos alcances de masa, una embestida anti-neoliberal en sintonía con los empujes que, en otras partes de América Latina, había alcanzado a producir un cambio de época, modificando substancialmente la correlación de fuerzas a favor del campo popular. La candidatura progresista de Andrés Manuel López Obrador era el centro de todo el proceso al punto que, desafortunadamente, la misma *Otra campaña* se adelantó a los tiempos y, asumiendo que ya había ganado, lo declaró prematuramente el enemigo principal, apostando a diferenciarse hacia la izquierda, empecinándose en denunciar las miserias de AMLO y sus aliados antes de asegurarse que fueran derrotadas las derechas neoliberales y conservadoras.

Después vino el fraude electoral, y de la supuesta victoria progresista que abriera el camino institucional, con todas sus aristas conservadoras, se pasó a la movilización democrática en defensa del voto que la *Otra campaña*, aún reconociendo el fraude, descalificó, no queriendo ver, entre las mediaciones y los intereses partidarios, genuinos procesos de indignación popular que se agrupaban detrás del liderazgo carismático de AMLO, amén de sus alianzas y de los círculos partidarios que lo rodeaban.

Desde su agitada toma de posesión, el gobierno de Calderón, para atrincherarse en búsqueda de la legitimidad perdida, lanzó la tristemente famosa *guerra contra el narco*, que no sólo le proporcionó una plataforma defensiva sino que le permitió desplazar totalmente el debate neoliberalismo-antineoliberalismo-postneoliberalismo, ahogándolo en la sangre de una guerra civil que se constituyó en el tema y el problema central y reconfiguró totalmente el escenario nacional y la correlación de fuerzas que lo define. En este contexto de luchas defensivas, no sólo de derechos humanos sino también socio-ambientales y laborales¹¹, a pesar de mantenerse en pie e inclusive de avanzar en la organización de su movimiento, AMLO no alcanzó a constituirse como una alternativa susceptible de alcanzar la mayoría relativa necesaria para ganar las elecciones. El obradorismo no despertaba ni despierta grandes entusiasmos en el sector juvenil y universitario (aún cuando existen sectores que se adhirieron y se mantienen en o alrededor del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA).

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia en defensa de las víctimas de la violencia armada, aun cuando contó en sus inicios con una significativa y entusiasta participación juvenil y universitaria, no alcanzó a ser una alternativa para activar y politizar una generación que, a diferencia de la del CEU y del cardenismo, entre 1986 y 1988, y la del zapatismo y la huelga de la UNAM entre 1994 y 1999, no había vivido experiencias propias o que sintiera como tales. Ya desde 2001, después de la marcha del color de la tierra, pero sobre todo por el contragolpe anímico de la agrídulce huelga de la UNAM de 1999-2000, la militancia y la participación de los jóvenes universitarios había tendido a disminuir.

el #YoSoy132 se presentó repentinamente, como un acontecimiento espectacular incrustado en una coyuntura crucial, se legitimó y se presentó como políticamente correcto

Así que el movimiento #YoSoy132 nació insertándose en este *impasse* histórico y en el espacio político dejado por el movimiento obradorista y la *Otra campaña*, con la diferencia de que el primero nunca fue ni pretendió ser una opción política para la juventud universitaria radical y antisistémica, el núcleo duro del activismo y del recambio de la militancia de la izquierda mexicana, sino que apostó a ser un vasto movimiento nacional-popular con aspiraciones definidas de poder, alianzas sociales y estructuras partidarias, con un pie en las instituciones y otro en la calle.

III

Al calor de su irrupción en la escena política nacional, han proliferado los comentarios y las opiniones sobre el movimiento #YoSoy132, tratando de entender e interpretar este fenómeno de movilización estudiantil. Seguramente están cocinándose estudios y análisis de mayor alcance y profundidad, ya que se trató de un fenómeno sobresaliente de acción colectiva que, además, cumplió con los requisitos de las modas que difunden los medios de comunicación y que también se reproducen en el medio intelectual y académico, permanentemente en busca de novedades para justificarse y alimentarse¹². En efecto, el #YoSoy132 se presentó repentinamente, como un acontecimiento espectacular incrustado en una coyuntura crucial, se legitimó y se presentó como políticamente correcto por ser juvenil, espontáneo, desinteresado en el poder, con un tinte educado y “clasesmediero” y, más aún, apartidista en una república partidocrática en pleno proceso electoral. Además puso en el centro de su dinámica y su capacidad de convocatoria a las redes sociales y fue inmediatamente asociado a una serie de movimientos recientes –la primavera árabe, los *indignados* españoles, el llamado *Occupy Wall Street*– colocándolo en la cresta de una oleada mundial.

En otro artículo sintetizamos la trayectoria del surgimiento del movimiento #YoSoy132 y esbozamos algunos elementos para su caracterización (Estrella y

Modonesi, 2012). Ahora, como lo venimos anunciando, en esta oportunidad vamos a concentrar la atención en un aspecto específico: el #YoSoy132 como manifestación explícita del fin del ciclo de la generación zapatista y como inicio de un ciclo post-zapatista de movilización y politización juvenil y universitaria.

En efecto, un cierre de época, como cualquier corte histórico, puede reconocerse y apreciarse plenamente sólo a partir de la apertura de otro ciclo, evidenciando la discontinuidad sin perder de vista la continuidad. El ciclo inaugurado por el movimiento #YoSoy132 supera, incorpora y volatiliza la experiencia del zapatismo universitario. Las nociones de *volatilización* o *sublimación* –prestadas de la química– son las que mejor expresan el pasaje de una forma concreta y sólida de la identidad zapatista a una forma evanescente, gaseosa y difusa. Argumentaré brevemente, a modo de demostración, dos tesis contrapuestas que articulan la idea anterior. La primera es que el #YoSoy132 no es zapatista. La segunda es que, de alguna manera, secundariamente, lo es.

El #YoSoy132 no es zapatista en tanto no hay una filiación, una herencia ni una referencia directa al EZLN ni al zapatismo en general. Sin duda hay simpatía y profundo respeto por las comunidades autónomas en territorio zapatista. Se le considera parte importante de las resistencias actualmente en curso en México. Tampoco se niega la relevancia del levantamiento de 1994 y la trascendencia del EZLN a nivel nacional e internacional como un acontecimiento fundamental de la historia de los movimientos antisistémicos posteriores a la caída del muro de Berlín. Al mismo tiempo, justamente en este tipo de reconocimientos, se nota que una de las dimensiones relevantes de la irrupción del zapatismo –su versión civil, urbana y juvenil– no tiene continuidad histórica directa ni aparece en el escenario en el que se mueve y piensa el #YoSoy132. Ya mencionamos el pasaje problemático de la *Otra campaña* y su desdibujamiento y, sobre este aspecto, es sintomático el relato de un integrante del movimiento quien contó que en una asamblea: «Yo estaba pasando la lista y veía a cada uno. Lo veo –a otro– y me dice, “yo soy de la *Otra campaña*”. Yo de ingenuo le dije, ¿cuál es la otra campaña? ¿Candidaturas independientes? ¿Clouthier? ¿De qué me estás hablando? Dijo “EZLN” y todos nos quedamos así, de “¿eh?”. Pues aplausos» (Muñoz, 2012: 122).

En los documentos elaborados por el #YoSoy132 no aparecen en efecto rastros de un vínculo ni real ni idealmente fuerte con el EZLN. Confirma esta distancia, que parece ser más histórica que política, la percepción y la imagen de los zapatistas que se trasluce en las entrevistas realizadas por Gloria Muñoz y el equipo de *Desinformémonos* –quienes vienen directamente de y siguen adscribiéndose a la *Otra campaña*–, donde los estudiantes mencionan sólo una vez a los zapatistas en relación con las luchas autonómicas, junto a las de Cherán y Ostula (p. 140), y la única alusión a la *Otra campaña* figura en un listado de grupos potencialmente cercanos, junto a grupos anarquistas, socialistas y comunistas (p. 159). Estas menciones enumeran luchas próximas y posibles aliados, es decir, marcan una cercanía pero establecen una distancia, una diferencia: el #YoSoy132 no es ni se define como zapatista, reconoce y respeta al EZLN, al que visualiza como un movimiento indígena y comunitario y una referencia histórica, pero ni siquiera lo coloca jerárquicamente en la cima de un listado de aliados naturales o de ejemplos de lucha.

Otro botón de muestra, puntual pero significativo, de esta diferenciación, son las declaraciones de Neftalí Granados, de la asamblea de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de Magaly Barreto, integrante de la asamblea de posgrado del #YoSoy132 en la UNAM, quienes plantearon la posibilidad de una alianza con el EZLN (Camacho y Olivares, 2013), aunque al día siguiente el propio Neftalí, en el “correo ilustrado” del día 4 de enero en el diario *La Jornada*, aclaró: “no implica que exista un particular interés por alianzas con organizaciones políticas específicas, en este caso el EZLN”. Más allá de lo anecdótico, se repite la lógica de asumir no sólo una diferencia sino además el hecho de considerar al EZLN una organización más y al zapatismo un movimiento y una lucha histórica. Ni más, ni menos.

Tampoco en las reuniones y asambleas posteriores a los comunicados del EZLN de enero y febrero de 2013, donde el propio Marcos aludió en forma positiva y elogiosa en una postdata al movimiento #YoSoy132 y posteriormente volvió a mencionarlo en otro texto titulado “Ellos y nosotros”¹³, se notó un giro que implicara un reconocimiento o acercamiento mayor hacia el zapatismo o un interés en la anunciada reactivación de la *Otra campaña*, ahora bajo el nombre de la Sexta.

Asistimos por lo tanto a un redimensionamiento del zapatismo que da cuenta de su reducción a la dimensión indígena comunitaria y su repliegue de los vastos ámbitos urbanos, y particularmente estudiantiles, en los cuales estaba firmemente plantado en el pasado.

Y además, en el punto central de nuestra argumentación, los integrantes del #YoSoy132 no reconocen la existencia en el México actual de un zapatismo juvenil, urbano y civil, ya que éste desapareció o se redujo a expresiones mínimas, políticamente imperceptibles, sin aparente capacidad expansiva ni de renovación generacional¹⁴.

En la fisonomía múltiple y pluralista del #YoSoy132 no aparece una vertiente explícitamente o declaradamente zapatista. En un interesante ejercicio analítico sobre la configuración interna del movimiento, Enrique Pineda (2012) –quien por cierto viene de una larga trayectoria de militancia en el zapatismo urbano y juvenil siendo fundador y dirigente de los JRA– distingue ocho posiciones políticas, entre las cuales figuran la liberal-progresista, la obradorista, los grupos de orientación socialista revolucionaria, “indignados” y otros más. Señala con acierto que “aunque en el ambiente se percibe una amplia simpatía con los pueblos indios y sus luchas, lo cierto es que las posiciones autonomistas y libertarias son reducidas o minoritarias” y no influyen en la orientación del movimiento, lo cual contrasta con el pasado reciente. La mayoría de los jóvenes del movimiento parece adscribirse en efecto a esta macro identidad, desde hace unos años, que se define como *indignados*, un conjunto variado de expresiones de resistencia y protesta frente al estado actual de las sociedades capitalistas contemporáneas, sin referentes ideológicos y organizacionales claros, a veces contradictorios, en general desconfiados frente a toda mediación política o liderazgo¹⁵.

Por otra parte, el mismo autor, quien fue activista del movimiento, formula una crítica al extremo horizontalismo y asamblearismo, no sólo por la vertigi-

nosa rotatividad de los portavoces sino por un pluralismo radical que asumía un archipiélago de grupos y corrientes, ninguno capaz de volverse hegemónico ni de plantearse alianzas estables en esta dirección. En efecto, la fragmentación interna fue y es vicio y virtud del #YoSoy132, pues la autonomía de las asambleas permitió operar con libertad mostrando un dinamismo impresionante que hubiera sido frenado por la construcción de consenso y unanimidad¹⁶, que al mismo tiempo, como señala Pineda, se transformó en “descoordinada polifonía de la pluralidad de asambleas” y “pulverización del mensaje público”.

En este contexto se pueden entender los enfrentamientos del 1 de diciembre, en ocasión de la toma de posesión de Peña Nieto, en los cuales, además de la desmedida represión policiaca y de las evidentes provocaciones de los infiltrados, hubo un relativamente inédito desborde de violencia por parte de algunos grupos de jóvenes estudiantes. Más allá de la reivindicación anarquizante de algunos, otros simplemente manifestaron su rabia e indignación por medio de la confrontación con la policía, además de la destrucción y el saqueo de algunas tiendas. En este episodio se notó claramente la falta de coordinación y de contención política al interior del movimiento, y la espontaneidad que suele ser virtuosa también cobijó actos censurables y contraproducentes.

En el pasado reciente esto no solía ocurrir, o era contenido y limitado a su mínima expresión. En el campo de la politización juvenil y estudiantil, la disolución del referente zapatista y la falta de presencia de la izquierda institucional no se compensan con una difusión de la cultura política y la disciplina de la cual son portadores los grupúsculos de izquierda revolucionaria, los cuales aprovecharon el vacío pero no pudieron ocupar un espacio tan amplio¹⁷.

Así que los códigos de comportamiento político están en plena reconfiguración y redefinición y apenas se pueden percibir algunas tendencias, las cuales parecen apuntar hacia una diáspora en la cual pueden proliferar, en medio de muchas manifestaciones creativas, varias derivas, entre las cuales están los excesos de violencia callejera y una falta de elementos de coordinación política necesarios.

IV

El diagnóstico duro de la desaparición de la identidad y la cultura política zapatista juvenil y universitaria remite a la ausencia de formas explícitas y organizadas mientras que, al mismo tiempo, como se anunciaba, hay que matizar el argumento, reconociendo que la volatilización de este zapatismo no implica una simple desaparición sino una difusión y desidentificación de su legado histórico que abre la posibilidad de traducirlo o prolongarlo bajo otras formas y denominaciones.

En efecto como ya se observaba en el vínculo con el altermundismo, en la difusión de formas que el EZLN inauguró y de las cuales fue pionero, en el #YoSoy132 aparecen expresiones zapatistas no nominales ni identitarias, resonancias que evocan al zapatismo sin remitirlo explícitamente.

El #YoSoy132 es parte de un proceso mundial, de un ciclo de movimientos inaugurado simbólicamente por el propio levantamiento en Chiapas en 1994,

con su capacidad de irradiación simbólica y por la creación de una tupida red de apoyo, que pasó por el altermundismo y sigue, en tiempos más recientes, con los llamados *indignados* en diversas partes del globo.

En este sentido podemos afirmar que el #YoSoy132 es zapatista sin serlo, en la medida que responde a un patrón que se gesta como intento de superación de formas históricas de los movimientos sociopolíticos del siglo XX. Podríamos decir, en forma sintética, que se trata de una dinámica difusa que tiende a repolitizar a los llamados nuevos movimientos sociales posteriores al '68, reactivar el antagonismo a contrapelo de la subalternidad sembrada y cosechada por el neoliberalismo, agregar alcance y proyección antisistémica y global a las demandas identitarias y culturales, combinar reivindicaciones materiales y post-materiales, alzar la mira de la crítica social, asumir a la globalización como marco político e innovar en las formas discursivas y organizativas rebasando los moldes clásicos de las izquierdas mundiales y recurriendo a modalidades horizontales e incluyentes, exaltando la espontaneidad, la creatividad y el pluralismo. A este marco general que abarca los últimos veinte años, en forma esporádica pero recurrente y tendencialmente creciente, hay que agregar la novedad de la internet y de la difusión de formas de comunicación horizontales –de las cuales el zapatismo fue pionero– y de las redes sociales en los últimos años.

Si la pretensión de dar cuenta de estas transformaciones ocurridas y que siguen su curso en el terreno de las formas de la acción colectiva y en particular de los movimientos sociales, que son y serán objeto de un vasto debate político y académico, hay que reconocer que el #YoSoy132 es parte de este amplio proceso, en continuidad más que en ruptura respecto del zapatismo.

Y, para abonar a la tesis de la prolongación, hay que subrayar que tanto los límites como los alcances del movimiento #YoSoy132 pueden leerse en esta clave, es decir valorando o mostrando las contradicciones propias de la forma *multitud*, para usar esta fórmula polémica que evoca el autonomismo, una de las traducciones teóricas más acabadas del zapatismo urbano. Por ejemplo, en el tema del horizontalismo y el asamblearismo, ya vimos aparecer las aristas en la crítica formulada por Pineda, o la exaltación de lo mediático y el sobredimensionamiento de la capacidad de convocatoria por medio de las redes sociales. O, para poner otro ejemplo, la capacidad de convocatoria amplia y transversal, aunque coyuntural, que va de la mano del carácter apartidista del movimiento, que le confiere un valor ético vinculado a la explícita negación de la voluntad de ocupar espacios y ámbitos de poder institucional.

Si bien decíamos anteriormente que no se encontraban, en los documentos elaborados por el #YoSoy132, referencias textuales o explícitas al zapatismo, al mismo tiempo resultan notables las evocaciones y resonancias literarias. En su documento más elaborado, presentado el 26 de julio en uno de los actos más relevantes del movimiento, el llamado cerco a la cadena Televisa, y titulado “Por la democratización de los medios de comunicación”, se puede observar una inequívoca inspiración zapatista:

Quando llegamos estaba el mundo y éramos un pueblo con hambre y con siglos de opresión. Éramos cúmulo de descontento, éramos fraudes electorales sin revolución, éramos Chiapas y 500

años sin nombre levantados en armas, éramos Aguas Blancas y el pueblo en la tierra asesinado, éramos crisis y deudas ajenas, manos sin trabajo, éramos huelga, barricadas aplastadas, Atenco y Oaxaca, mujeres violadas y asesinadas, víctimas de la represión. Éramos trabajo de esclavos, familias migrantes, infancia calcinada, cuerpos en puentes colgados, víctimas del terrorismo de Estado, moneda de cambio en una campaña, asesinato como libre mercado. Éramos silencio, éramos dolor, éramos opresión. Quisieron quitárnoslo todo y sólo perdimos el miedo. Ya no seremos más una voz silenciada. Venimos aquí con nuestros cuerpos que gritan: ¡Ya basta!

...el #YoSoy132 es zapatista sin serlo, en la medida que responde a un patrón que se gesta como intento de superación de formas históricas de los movimientos sociopolíticos del siglo XX

V

En el marco de este proceso, la reciente reaparición pública del zapatismo, entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, abre nuevos y relativamente inciertos escenarios de reconfiguración de las identidades políticas antisistémicas en México. La marcha en San Cristóbal de las Casas el 21 de diciembre y la serie de comunicados que la siguieron marcan una nueva etapa particularmente en relación con el zapatismo civil¹⁸. Al firmar el acta de defunción de la *Otra campaña*, el EZLN quiere resucitar el sentido profundo de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona bajo modalidades todavía por definirse, salvo que nominalmente lo que nacerá será *La Sexta*. Al mismo tiempo, además de confirmarse el compromiso en defensa de los pueblos indígenas y de sus experiencias de autodeterminación, su oposición a todo gobierno –panista o priísta que fuera– se reitera la aversión y la hostilidad hacía AMLO y a su recién nacido partido, el MORENA. El cierre identitario y la raya de demarcación son claramente anunciadas en el título del extenso comunicado “Ellos y nosotros”, en donde el *nosotros* aparece restrictivo y el *ellos* muy amplio, aún cuando el énfasis crítico está claramente dirigido al campo progresista y en particular a su principal dirigente¹⁹.

Probablemente volverán a cerrarse algunas filas de lo que quedó disuelto en la *Otra campaña*, surgirán algunos colectivos de la Sexta y otros volverán a manifestar su adhesión. Pero habrá que ver cuáles y cuántos jóvenes mexicanos voltearán a ver al zapatismo y encontrarán allí, sea militando orgánicamente en la Sexta, sea acompañándola con mayor o menor cercanía, un cauce y una senda para proyectar sus visiones alternativas del mundo y sus esfuerzos para cambiarlo.

Sin duda, desde la diáspora del zapatismo juvenil y universitario, hacen falta referentes políticos que articulen y proyecten a la energía y la creatividad que se manifestó en la experiencia del #YoSoy132.

Postdata

Terminando de escribir estas líneas apareció una encuesta realizada a finales de enero de 2013, después de la reaparición del EZLN, que trata de dar cuenta de

la percepción de la opinión pública sobre este movimiento²⁰. Revisemos algunos datos significativos. No se enteró de la marcha de zapatistas de base del 21 de diciembre en San Cristóbal el 67%, y el 56 % dice no saber el porqué de las manifestaciones.

Teniendo en cuenta este punto de partida que indica una falta de información de los encuestados, se vuelven resbalosos los datos siguientes, pero no dejan de ser interesantes. El 37% considera que el EZLN es un movimiento que “se ha quedado en el pasado”, mientras el 44% lo considera vigente y el 19% no sabe. En realidad, vistas las circunstancias, parece elevado el número de quienes lo consideran vigente. Al mismo tiempo, está claro que, como lo estuvimos argumentando, el EZLN tiende a ser identificado más como un movimiento indígena (22%)²¹ –no lo sabe el 56%– y sólo el 16% lo relaciona con demandas de alcance general o político²², y apenas el 2% le atribuye intenciones reprobables (el 1% por ser revoltosos y el 1% por buscar dinero)²³.

Finalmente, es revelador que entre tres cortes históricos, los de 2003, 2005 y 2013, aumentó el número de los que no saben cómo definir al movimiento (9-11-17%), osciló sensiblemente el de los que lo definen como movimiento indígena (35-21-29%), guerrillero (29-44-23%) y político (26-23-31%). Lo indígena era más evidente en los años posteriores a la marcha del color de la tierra, el debate sobre los Acuerdos de San Andrés y la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas; pero volvió a subir en los últimos tiempos, posiblemente por lo que hemos venido señalando en cuanto a la disminución de su vertiente urbana y vinculada con la política nacional. En 2005, junto con la Sexta Declaración, aumentó la definición como guerrillero y disminuía la que lo caracterizaba como indígena, mientras que en 2013 aumenta la idea de que se trata de un movimiento político, posiblemente porque se trata de una definición imprecisa, que corresponde más a la respuesta “no sabe” que a una caracterización, lo cual confirmaría la idea de una pérdida de visibilidad del EZLN, en gran parte debido a un cambio de contexto histórico y un recambio generacional en los cuales el protagonismo zapatista se fue diluyendo, lo que, retomando el hilo de la argumentación relacionada con la juventud universitaria y los cortes generacionales de formación y educación política, es lo que estuvimos sosteniendo.

Bibliografía

- Anaya, Benjamín 1999 *Neozapatismo y rock mexicano* (México: La Cuadrilla de la Langosta).
- Camacho, Fernando y Olivares, Emir 2013 “Abierto el #YoSoy132 a aliarse con otros grupos sociales, como el EZLN” en *La Jornada* (México) 3 de enero.
- Estrello, Luz y Modonesi, Massimo 2012 “El #YoSoy132 y las elecciones en México. Instantáneas de una imposición anunciada y del movimiento que la desafió” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.
- Fernández, Alberto 2013 “Ciclos zapatistas (1 y 2)” en *Letras Libres* (México) en <www.letraslibres.com/blogs/volante-izquierdo>.
- Holloway, John 2005 “Zapatismo Urbano” en *Humboldt Journal of Social Relations* (California: Arcata) Vol. 29, N° 1, pp. 168-179.

- Muñoz, Gloria *et al.* 2012 *#YoSoy132. Voces del movimiento* (México: Bola de Cristal/Desinformémonos).
- Pineda, César Enrique 2012 “#yosoy132: corte de caja (De la Ibero al 2 de octubre)” en *Rebelión*, octubre.
- Rovira, Guiomar 2009 *Zapatistas sin fronteras. Las redes de solidaridad con Chiapas y el altermundismo* (México: Era).
- Sandoval Álvarez, Rafael 2009 *El zapatismo urbano en Guadalajara. Contradicciones y ambigüedades en el que quehacer político* (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia).

Notas

- 1 La agrupación JRA surgió en 2001 a partir de la fusión de diversos colectivos universitarios, el CEM acentuó su vínculo con el zapatismo a partir de la *Otra Campaña*. Cabe señalar que, en un inicio, la participación juvenil y el primer acercamiento al EZLN fue protagonizado por estudiantes ligados al Consejo Estudiantil Universitario (CEU) o llamados “históricos”, muchos de los cuales también eran cercanos al cardenismo y al PRD, y que se alejaron del zapatismo en coincidencia con la llegada del PRD al gobierno del DF en 1997 y la paralela decisión del FZLN —en su fundación— de no aceptar la doble militancia.
- 2 Sobre la huelga existen varios textos pero en ninguno se aborda explícitamente el papel y el lugar del zapatismo. Léanse Moreno, Hortensia y Amador, Carlos 1999 *Unam: la huelga del fin del mundo* (México: Planeta); Rosas, María 2001 *Plebeyas batallas* (México: Era); González Ruiz, José Enrique *et al.* 2008 *Enseñanzas de la juventud rebelde del movimiento estudiantil popular, 1999-2005* (México). Más recientemente, salió VV. AA. 2011 *Huelga: la rebelión de los paristas* (México: La Guillotina).
- 3 En efecto, los militantes del FZLN en la primera etapa de la huelga actuaron por separado vinculados con distintos grupos y posturas y sólo posteriormente, a convocatoria explícita del subcomandante Marcos, se reagruparon, cuando ya la polarización entre “moderados” y “ultras” había perjudicado las dinámicas asamblearias, el proceso de toma de decisiones y, con ello, la imagen del Consejo General de Huelga.
- 4 Yvon Le Bot 1997 *Subcomandante Marcos: el sueño zapatista* (México: Plaza y Janés). Desde la página 239 se habla de zapatismo civil, en la 247 se refiere explícitamente a su surgimiento en ocasión del cinturón de paz en el diálogo en la catedral de San Cristóbal de las Casas en febrero de 1994 y en la página 259 de formula la distinción mencionada.
- 5 Todavía en noviembre de 2005, en el “Comunicado del CCRI sobre la disolución del FZLN” se dice que se abre una nueva etapa del zapatismo civil, confirmando el uso “oficial” de esta denominación.
- 6 Del mismo autor, aunque no tenga referencias explícitas al zapatismo urbano, ver también el trabajo conjunto con Fernando Matamoros y Sergio Tischler *Zapatismo. Reflexión teórica y subjetividades emergente* (Buenos Aires BUAP-Herramienta) 2008.
- 7 Una reflexión emblemática y ejemplar sobre el zapatismo urbano puede encontrarse en Colectivo Situaciones 2003 “El Silencio de los Caracoles” en *Rebelión* (México) N° 13, noviembre.
- 8 Además de obras públicas, es sintomático que en una búsqueda de tesis en toda la UNAM no apareció ninguna que relacionara el término *zapatismo* con los de *civil* o *urbano*.
- 9 Ver, por ejemplo, el caso y la evocación, en clave generacional, que hace Alberto Fernández (2013) de su paso juvenil por el zapatismo en una revista liberal y francamente antiizquierdista como *Letras Libres*: “Ciclos zapatistas (1 y 2)” en: <www.letraslibres.com/blogs/volante-izquierdo>.
- 10 Sobre este periodo, consúltense las relatorías de los encuentros en la selva en la colección de la revista *Rebelión* de este periodo.
- 11 Léanse los balances de los años 2010 y 2011 en números anteriores de la *Revista del OSAL*: los trabajos en conjunto con Lucio Oliver, Fernando Munguía y Mariana López “Balance de la conflictualidad en México en 2010”, en el N° 29, de mayo de 2011, y “México 2011: violencia y resistencia”, en el N° 31, de mayo de 2012.
- 12 Una contribución importante en esta dirección es el libro coordinado por Gloria Muñoz *et al.* 2012 *#YoSoy132. Voces del movimiento* (México: Bola de Cristal/Desinformémonos), que tiene la virtud de dejar hablar a los protagonistas, por medio de entrevistas muy interesantes y reveladoras, y sólo enmarcar su voz con las opiniones de Luis Hernández Navarro y Adolfo Gilly.
- 13 Véase el texto firmado por Marcos: “Apagando el fuego con gasolina (posdatas a la carta gráfica)” en *Enlace Zapatista*, 12 de enero de 2013, en <enlacezapatista.ezln.org.mx>.
- 14 Es notable cómo inclusive en un balance optimista y favorable al EZLN, formulado por Luis Her-

nández Navarro, no aparece el zapatismo civil como una vertiente viva del movimiento, aunque mencione su presencia difusa en varias luchas. Escribe Hernández Navarro: “El EZLN nunca abandonó la escena nacional. Guiado por su propio calendario político, fiel a su congruencia poética y con la fuerza del Estado en su contra, fortaleció sus formas de gobierno autonómicas, mantuvo viva su autoridad política entre los pueblos indígenas del país y activas las redes de solidaridad internacional. El hecho de no haya aparecido públicamente no significa que no esté presente en muchas luchas significativas del país”. Léase “Derumbe y renacimiento del mundo maya zapatista” en *La Jornada*, 22 de diciembre de 2012, p. 4.

15 Como contraparte, Pineda señala que, en los momentos álgidos del #YoSoy132, este sector amplio y difuso sobredimensionó el papel de las redes sociales y la mediatización del movimiento.

16 Dicho sea de paso, legados de la cultura política zapatista, extraídos de las prácticas comunitarias que sirvieron para democratizar las formas de organización política en los años noventa, pero que también mostraron muchos límites al trasladarse a otros ámbitos urbanos.

17 En medio del reflujó, como expresión de un deseo fisiológico de militancia de cierta franja universitaria, se reprodujeron e inclusive crecieron varias expresiones ultraizquierdistas, grupusculares y “cubiculares” –con sus vicios y virtudes– en diversos espacios universitarios, empezando por la UNAM, corazón pulsante del activismo estudiantil nacional.

18 Véanse los comunicados en *Enlace Zapatista*.

19 Que contiene partes accesibles sólo con una clave, para marcar expresamente una diferencia entre los interlocutores deseables y los que no los son, seleccionados previamente. Así se anuncia en el mismo documento.

20 La encuesta realizada por *Parametría* fue dada a conocer a finales de febrero de 2013. Está disponible en <www.parametria.com.mx>. Se trató de una encuesta a nivel nacional de 400 cuestionarios realizados a personas de 18 años en adelante en los días del 20 al 24 de enero de 2013.

21 Compuesto del 10% de los encuestados más el 6% que asume que exige que se les haga caso, el 4% que busca demostrar que está vigente y el 2% contrario a la discriminación.

22 El 5% contestó que por buscar un mejor país, el 4% que por estar contra el PRI, el 3% que por la crisis económica/pobreza, el 2% que por estar contra el gobierno, el 1% respectivamente que por estar contra la inseguridad, por cuestiones políticas y por buscar un mejor gobierno.

23 Otro dato resultante de la encuesta muestra una ligera mejor aceptación del EZLN respecto a su portavoz, el subcomandante Marcos, quien también es levemente más conocido. Sería fácil traducirlo en una crítica política cuando probablemente se trate de una expresión de formas de representaciones, culturas e imaginarios sociales, además de manejos y manipulaciones mediáticas y publicitarias.

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

Incitaciones a pensar.
**Apuntes en torno a la trayectoria
política e intelectual de
Fernando Martínez Heredia**
Alejandra González Bazúa

**Pensamiento social
y política de la Revolución**
Fernando Martínez Heredia

Incitaciones a pensar

Apuntes en torno a la trayectoria política e intelectual de Fernando Martínez Heredia

ALEJANDRA GONZÁLEZ BAZÚA

Doctora en Estudios Latinoamericanos y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Resumen

Con la descripción de una célebre fotografía, Alejandra González Bazúa comienza un recorrido por la historia intelectual y militante de Fernando Martínez Heredia, uno de los pensadores cubanos más importantes de nuestros tiempos. El artículo, concebido como una introducción al texto de Martínez Heredia que aparece en esta edición de la Revista del OSAL, aborda los rasgos más característicos de su obra, así como algunas de las vicisitudes que el autor ha tenido que sortear a lo largo de su vida, al asumirse no únicamente como un estudioso de la historia y actualidad de Cuba, sino como uno de sus protagonistas. Así, Alejandra González Bazúa esboza la caracterización que el autor cubano ha propuesto para estudiar el proceso revolucionario de su país. Además, explica porqué dicho análisis puede arrojar muchas luces para la comprensión de la Cuba actual. Por último, cumple con invitar al lector a conocer más de Martínez Heredia, cuyo compromiso intelectual lo ha convertido en un referente importante del pensamiento crítico latinoamericano.

Abstract

By describing a famous photograph, Alejandra González Bazúa starts a journey which narrates the intellectual and militant history of Fernando Martínez Heredia, one of the most celebrated Cuban thinkers of our time. The article, conceived as an introduction to Martínez Heredia's text which appears in this OSAL number, focusses on the most characteristic features of his work, explores some of the vicissitudes of his life as part of his desire to become not just an expert in Cuban history and current affairs but also one of its protagonists. Thus, Alejandra González Bazúa outlines the perspective that the Cuban writer has proposed to study the revolutionary process in his country. Additionally, she explains the reasons why such analysis can throw light on our understanding of today's Cuba. Finally, she does not fail to invite the reader to learn more about Martínez Heredia, a man who, by embracing his intellectual pursuits, has become a favourite read among Latin American thinkers.

Palabras clave

Cuba, socialismo, análisis histórico, pensamiento crítico.

Key words

Cuba, socialism, historical analysis, critical thinking.

Cómo citar este artículo

González Bazúa, Alejandra 2013 "Incitaciones a pensar. Apuntes en torno a la trayectoria política e intelectual de Fernando Martínez Heredia" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 33, mayo.

Los tiempos largos y la revolución del 59

Son varias las fotografías en las que se plasmaron escenas del encuentro que a inicios de 1960 mantuvieron el Che Guevara, Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir. La que ha quedado consignada en el tiempo como emblema de un momento histórico es la imagen del Che acercando el fuego a Sartre para que él pudiera encender su puro. En muchos de los reencuadres posteriores de la imagen se excluye a Simone de Beauvoir, que estaba sentada en el mismo sillón que Sartre. En esta imagen icónica queda fuera también la presencia del capitán Antonio Núñez Jiménez, que en un momento inicial de la serie fotográfica aparece sentado al costado del sillón en el que estaban los invitados franceses y frente a la silla en la que se encontraba el Che. Quien apretó el obturador de la cámara fue el gran fotógrafo cubano Alberto Korda.

El transcurrir del tiempo nos obliga a pensar críticamente en torno a las imágenes y documentos del pasado que han triunfado sobre otros como testimonios de época, no para imponer miradas sobre ellos, sino para preguntarse por lo que no alumbran, que está oculto, empolvado, olvidado, o que hay que volver a ver, una y otra vez, para hallar aquello en lo que no habíamos reparado.

En su ensayo "El mundo ideológico cubano de 1959 a marzo de 1960", Fernando Martínez Heredia, justo a propósito de la visita de Sartre a Cuba, dice que había que atender por un lado a "la diferencia que existe entre el complejo que forman los eventos cuando están sucediendo y las percepciones y apreciaciones que tienen de ellos los que están viviéndolos" y, por otro, a "las interpretaciones y los juicios que hacen los estudiosos de aquel complejo de hechos en momentos diferentes o en épocas posteriores" (Martínez Heredia, 2009a: 193).

Martínez Heredia propone ese camino para acercarse a los procesos históricos. Así es como ha mirado a la *revolución cubana*, entendiéndola desde la complejidad de tiempos, espacios, vivencias; encontrando los ríos que conectan hechos y fenómenos dispersos, heterogéneos y contradictorios; dando espacio a la actualización incesante de las interpretaciones, manteniendo una politicidad libertaria y socialista en cada uno de sus escritos.

Fernando Martínez Heredia es hoy uno de los pensadores cubanos más importantes y leídos en su propio país y en el continente. Su experiencia política e intelectual están separadas en el título del presente texto sólo con fines metodológicos. Como ha apuntado Julio César Guanche a propósito de la obra

de Martínez Heredia: más que un pensamiento político se trata de una política hecha desde el pensamiento (Guanche, 2007).

“Soy un hijo de la Revolución”. Así se define Martínez Heredia (2010a: 9), quien se incorporó al Movimiento “26 de Julio” en 1955 siendo un joven de dieciséis años. El 30 de julio de 1957, el asesinato de Frank País a manos de la dictadura de Fulgencio Batista provocó una serie de protestas a lo largo de Cuba. Unos días después de este hecho, a golpe de estencil, se publicaría el primer texto de Martínez Heredia. *Al pueblo y a las fuerzas armadas* era “un manifiesto que llamaba a combatir la tiranía con los argumentos de entonces, pero además se dirigía a los militares de fila, les explicaba que ellos eran carne de cañón mientras sus jefes eran ricos y ladrones, y los incitaba a abandonar ese campo” (2010a: 10). Cuando él y sus compañeros de lucha comenzaron a pensar sobre aquellas medidas que tendrían que tomar al triunfar la revolución, lo que se les ocurrió en un primer momento fue hacer una gran reforma agraria y fundar una biblioteca en el pueblo.

Estas intuiciones compartidas sobre el devenir revolucionario y los anhelos de la gente tenían una matriz histórica que se alarga en el tiempo más allá de la mitad del siglo XX. El pueblo natal de Martínez Heredia es Yaguajay, que fue fundado en 1847 en el contexto de la expansión capitalista de la producción azucarera. Los trabajadores de los ingenios eran esclavos, culíes chinos (trabajadores provenientes de China u otros lugares de Asia cuya contratación aumentó en las colonias después de la abolición del comercio de esclavos) y asalariados (2009a: 83). A pesar de ser un pueblo joven, la población de Yaguajay tuvo una importante participación en las guerras por la independencia libradas entre 1868 y 1895. Cuenta Martínez Heredia que fue precisamente cuando se alejó de su lugar natal que constató el peso que el pasado remoto tenía en la memoria de la comunidad. En particular se conservaban recuerdos de la Guerra del 1895, principalmente anécdotas sobre las personas que participaron, sobre tácticas y prácticas militares o sobre la vida cotidiana de los mambises, guerrilleros independentistas (2011a: 55).

La memoria de las luchas por la independencia (en particular las de 1895) fue fundamental para forjar la identidad nacional, la pertenencia a una comunidad y la constatación de que el cambio era posible. En sus vastos análisis sobre el tema de la nación, Martínez Heredia escogerá el camino de la historia para explicar cómo es que se generan sentimientos de unión entre la diversidad. Al final de los años cincuenta, en Yaguajay no sólo se conservaba la memoria heroica y triunfante de la independencia y de la Primera y Segunda repúblicas (categorías que forman parte de las propuestas de conceptualización histórica del propio Martínez Heredia), también existían deudas con la historia manifestadas como

frustraciones, tensiones y contradicciones existentes entre la idea nacional y las prácticas republicanas, que se consideraban muy inferiores al proyecto y el ideal patriótico del 95; y entre la unión nacional proclamada y la situación, las necesidades, las identidades y la conciencia de grupos sociales como eran los de trabajadores, los de negros, mulatos y los de la población rural en condiciones precarias o en la miseria. También distinguía a esa memoria la noción de que se trataba de un legado no realizado, y la del compromiso con el futuro, una invitación permanente a realizar cambios que cumplieran lo iniciado por la Revolución del 95 (2011a: 60-61).

La rebeldía alargada en el tiempo rindió sus frutos al final de enero de 1959, cuando varios rebeldes, incluyendo a Martínez Heredia, ocuparon las tierras de latifundistas para dárselas a campesinos, ello bajo el respaldo de la primera ley de Reforma Agraria, firmada en la Sierra Maestra. Novecientas treinta y dos familias quedaron inscritas en el programa de reparto de tierras.

...evidenciar el disenso no significó para muchos un signo de debilidad o error, sino parte fundamental del camino que la revolución tenía que transitar

Con la experiencia que da el haber participado en un movimiento revolucionario desde la posición del rebelde, Martínez Heredia llegó a la capital en mayo de 1959 para inscribirse en la Universidad de La Habana en la carrera de Derecho. Es decir que cuando Sartre visitó Cuba, Martínez Heredia era un joven recién llegado a la ciudad que estaba mirando y actuando en un universo de acontecimientos que rebasaban lo aparecido en las notas periodísticas o lo captado por las películas fotográficas.

Incendiar el océano y tomar el cielo por asalto

Son varias las etapas que Martínez Heredia distingue en el proceso de la revolución cubana, la cual formaría parte del largo siglo XX cubano iniciado en 1895. La primera de estas etapas iría de 1959 a inicios de los años setenta y estaría caracterizada por un gran dinamismo cultural no carente de conflictos, una inquietante imaginación política y una absorción de conocimientos relacionados creativamente con el proceso revolucionario y con el sentido colectivo de justicia y liberación. Desde finales de los sesenta sucedieron hechos que daban cuenta de un viraje en la política económica y cultural de la revolución, pero será hasta inicios de los setenta cuando claramente se percibirá una nueva etapa.

La campaña por llegar a la cifra de 10 millones de toneladas de azúcar dejó agotados al territorio y a la población. El Che había sido asesinado en Bolivia en 1967 y el panorama de la rebeldía latinoamericana no era tan alentador con respecto a los años anteriores. Además, había sucedido una gran fractura en la intelectualidad del mundo, principalmente la latinoamericana, ocasionada por el caso Padilla. En ese contexto, Cuba reformuló y fortaleció las relaciones con el campo socialista, en especial con la URSS. Ello provocó cambios no sólo en la política económica e institucional, sino en la cultura, porque se impuso el modelo del socialismo soviético.

En esos tiempos se institucionalizó la censura, la cultura se parametró, fortaleciendo en la cotidianidad la idea de que la unanimidad de criterios era fundamental para enfrentar al enemigo y que el disenso mostraba debilidad. Aunque en los años ochenta comenzó a ser visible un viraje en varios ámbitos de lo social, no será sino hasta los noventa que se distinga claramente una nueva etapa, caracterizada por una cruda situación económica provocada por

el derrumbe del campo socialista, la resistencia colectiva y la latencia de contradicciones diversas.

En la introducción a uno de sus libros más sugerentes, *El ejercicio de pensar*, Martínez Heredia decía, tentativamente, que Cuba estaba atravesando por el cierre de aquella etapa iniciada en los noventa: el momento está caracterizado por una combinación de fortalezas extraordinarias y debilidades graves (2008a: 9).

Cuando Martínez Heredia ha hablado desde diversos presentes y coyunturas, siempre se remite al pasado para encontrar indicios que alumbren el camino y desenreden los nudos formados por la contradicción. Con respecto a los primeros años del proceso revolucionario, pone el énfasis en las relaciones que explicaron la abolición de las relaciones de dominación, en el cambio en la vida de las personas a nivel social e institucional y en la creación y reorganización incesante del mundo revolucionario (2008a: 15).

“Incendiar el océano” era una exigencia para aquellos que desde las aulas universitarias participaban de la revolución (2006: 104). La difusión del marxismo potenció las transformaciones que venían ocurriendo en Cuba. Pronto se asumió masivamente “y se consideró que debía guiar al pensamiento, con la legitimidad que daba la Revolución” (2008a: 23). Sin embargo, Fernando Martínez Heredia apunta que casi de inmediato surgieron cuestionamientos en torno al marxismo: ¿vendría a participar, a ayudar a la revolución, o sería solo un certificado que le expedía y una doctrina que ella aceptaba? ¿Y cuál marxismo asumiría la revolución cubana? (2008a: 23).

No es preciso decir que el proceso revolucionario cubano se inspiró en su totalidad en el marxismo, tal como reproducen algunas lecturas sobre el mismo. “Sería un error creer que porque nos hicimos marxistas sucedió todo, cuando la verdad es que nos hicimos marxistas por todo lo que sucedió” (2001: 92), dice el autor al explicar la multiplicidad de direcciones en las que se movía el pensamiento y la acción social. Fue a partir de 1961 que el conocimiento del marxismo comenzó a sistematizarse. Su legitimidad como teoría explicativa y transformadora la obtuvo por la sintonía encontrada con el propio proceso revolucionario.

La herejía colectiva se puso en práctica. Era necesario dudar, disentir, cuestionar, proponer, indagar y confrontar con aquellos que se encontraban en la misma trinchera. Escuchar a las diversas voces, participar de las polémicas, evidenciar el disenso no significó para muchos un signo de debilidad o error, sino parte fundamental del camino que la revolución tenía que transitar. Si en 1961 Fidel Castro dijo en sus *Palabras a los intelectuales* la frase “dentro de la revolución todo”, Fernando Martínez Heredia y otros jóvenes universitarios asumieron que ese “todo” implicaba el derecho a pensar, a leer con libertad y a expresar el criterio (2011b).

Con ese espíritu nació la revista *Pensamiento Crítico*, en cuya concepción y hechura Martínez Heredia fue uno de los protagonistas fundamentales. Esta revista forma parte de la copiosa memoria revistera de nuestro continente en el siglo XX. Los profesores del Departamento de Filosofía de la Universidad de la Habana que hicieron posible su producción y difusión pensaban que si las prácticas sociales iniciadas en 1959 eran extraordinarias, el pensamiento en,

sobre y desde ellas también tenía que serlo. En cada una de las entregas de *Pensamiento Crítico* se sumaban reflexiones para atizar la herejía de la revolución cubana. Martínez Heredia fue el director de esta publicación durante sus cincuenta y tres números, publicados entre 1967 y 1971, año en que *Pensamiento Crítico* fue una de las creaciones señaladas por los dedos censurantes a los que les incomodaba tanto el pensamiento como la crítica, y mucho más si estaban juntos. Esta publicación fue fundamental en la construcción de un marxismo no ortodoxo, vinculado a las realidades de aquellos a los que Fanon llamó “los condenados de la tierra”.

En 2010 se publicó una antología de *Pensamiento Crítico* con una parte mínima de los textos totales de la revista (2010b). En este presente urgido de pensamiento crítico, valdría la pena reencontrarse con aquellos documentos nacidos en un momento de efervescencia social, de ampliación del horizonte de posibilidades, en donde la relación dinámica, creativa y conflictiva entre el ejercicio del pensar y el hacer se encontraba en la vida cotidiana rompiendo incluso con los planteos dicotómicos.

Obedecer y clasificar: los años grises

Se le llama “Quinquenio Gris” a un periodo en el que fue evidente un cambio en la política cultural de la revolución cubana. El término acuñado por Ambrosio Fornet hace referencia al periodo comprendido entre 1971 y 1975, años en los que, desde el Consejo Nacional de Cultura, se implementó una política cultural cuyo signo fue la censura y la cerrazón contrastantes con el dinamismo sucedido en la década anterior. La censura y el acallamiento de *Pensamiento Crítico* forman parte de lo que definió la grisura de aquel quinquenio, cuyas fronteras temporales en el ejercicio práctico de la creación artística e intelectual se extendieron un tanto más que cinco años.

El texto “Pensamiento social y política de la Revolución”, que se reproduce en este número de la *Revista del OSAL*, formó parte de un ciclo de conferencias organizado en Cuba en 2007 por el Centro Teórico-Cultural “Criterios”, el cual tuvo como uno de sus objetivos el ejercicio del diálogo entre aquellos que desde el socialismo se posicionaban críticamente ante la institucionalización de la censura y la parametrización cultural. Las ponencias presentadas en este ciclo son un cúmulo de puntos de vista que volvieron la mirada sobre un pasado con el fin de recrear creativamente el presente, además de transmitirle a generaciones más jóvenes la experiencia no sólo de los aciertos revolucionarios, sino de los errores.

Fernando Martínez Heredia ha publicado copiosamente en Latinoamérica. Son conocidas varias de sus ponencias presentadas en eventos políticos y académicos del continente. Es un pensador socialista que defiende la experiencia histórica de la revolución cubana y no ha cejado en su empeño por convertir dicha experiencia en una suma de conocimiento que debe ser apropiado por aquellos deseosos de construir sociedades emancipadas. El texto que se publica a continuación tiene la particularidad de haberse escrito a propósito de un diálogo entre cubanos, cuya naturaleza crítica es importante recalcar dados los

estereotipos vigentes sobre la cultura cubana, los cuales reproducen la idea de que existe una especie de estancamiento en la reflexión y el debate sobre la cultura, la historia y el pensamiento social, estereotipos falsos que muestran el desconocimiento sistemático de una realidad compleja, contradictoria, en la cual los estancamientos, sin duda existentes, son constantemente confrontados por un dinamismo cultural que apunta a las direcciones más diversas, liberadoras algunas, peligrosas otras.

El 5 de enero de 2007, en el programa "Impronta", del canal televisivo *Cubavisión*, apareció Luis Pavón Tamayo, quien presidió el Consejo Nacional de Cultura entre 1971 y 1975. Dicho programa tenía como objeto transmitir breves cápsulas sobre personalidades que hubiesen dejado una marca en la cultura cubana. En el programa de aquel día se entrevistó a Pavón Tamayo, quien indudablemente había dejado una profunda huella en la cultura; pero, a diferencia de la trayectoria de otros personajes, la de él fue una "impronta" dolorosa, cuya naturaleza y profundidad quedó demostrada al aparecer muestras de indignación y cuestionamiento inmediatamente después de haber concluido el programa televisivo.

Muchos son los testimonios que circularon vía *internet* alrededor del tema. Opiniones al interior y fuera de Cuba iban y venían con tanta velocidad que poco tiempo daban a la elaboración de un pensamiento meditado. En un esfuerzo por discutir con mayor profundidad sobre el tema, entre enero y junio de 2007 se llevó a cabo el ciclo "La política cultural del periodo revolucionario: memoria y reflexión", organizado por el Centro Teórico-Cultural "Criterios" y su director, Desiderio Navarro. A partir de entonces se inició un fructífero intercambio reflexivo, en el que han participado diversas voces, en torno a la censura, la represión y el acallamiento en el pasado reciente cubano. Este no es un debate concluido, ni agotado: poniéndolo en la sintonía de los tiempos largos de la transformación cultural, apenas estamos presenciando el inicio de un ejercicio crítico al que le faltan caminos intrincados que recorrer, rutas nuevas que descubrir o brechas ya andadas que será necesario desmalezar.

Esta conferencia de Martínez Heredia, en la que habló de la posición en la que quedó el pensamiento social en relación con el poder y con la sociedad a partir de aquellos años, no sólo es una fuente para conocer una determinada postura en un debate coyuntural, es también un material de reflexión en torno a las dificultades y contradicciones que necesariamente surgen en cualquier proceso revolucionario. Quien se acostumbre a mirar sólo las gestas heroicas de las revoluciones, quien en sus reflexiones sólo alumbré los aciertos y acalle los errores, quien en su memoria sólo retenga lo alumbrado y no se cuestione por lo oculto y contradictorio, le pondrá obstáculos al pensamiento crítico y a la práctica política libertaria. Martínez Heredia es un pensador que ha enunciado al error no para regodearse en él haciendo más profundo el escollo, sino para asimilarlo como aprendizaje colectivo y fuente de experiencia histórica desde los cuales los límites de la posibilidad emancipadora se ensanchen.

De rectificaciones y errores al *periodo especial*

Como una revolución socialista de liberación nacional ha definido Martínez Heredia a la cubana. Ninguno de los conceptos que engloban esta definición son gratuitos o usados sin rigor. No es la teoría quien les da contenido en primera instancia, sino la historia propia de Cuba la que encuentra sintonía explicativa con el hilvane de conceptos como revolución, socialismo, liberación y nacional.

Cuando Martínez Heredia habla de Cuba y la transición al socialismo, lo que le interesa apuntalar no es el vocabulario de moda que ha convertido el concepto de “transición” en una herramienta eficaz para nombrar la permanencia o el acomodamiento. “Transición” en los ensayos de Martínez Heredia es un concepto que explicaría el carácter incompleto de la revolución, el paso entre lo que se es y lo que se aspira a ser y la necesidad de crítica permanente encaminada a construir un modo de reproducción de la vida radicalmente diferente al capitalismo.

En 1986 se inició el “Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas”, el cual significó la implementación de medidas económicas y políticas que cambiasen la relación de Cuba con los países socialistas, en especial con la URSS, dados los signos de desmoronamiento del bloque socialista. En 1991, Martínez Heredia dictó la conferencia “Cuba: problemas de la liberación, el socialismo, la democracia”, que después sería publicada en la revista cubana *Cuadernos de Nuestra América* y posteriormente en otros medios latinoamericanos. En este texto se hace uno de los primeros análisis sobre el proceso de rectificación desde la perspectiva crítica del pensamiento social. Martínez Heredia entendió ese momento no sólo desde la necesidad de rectificación económica, sino política y cultural.

El proceso de rectificación iniciado en 1986 es un proceso político que promueve la participación de la masa del pueblo en acciones dirigidas contra las consecuencias de los desaciertos, deformaciones y retrocesos, a la vez que una concientización masiva que permita precisar y atacar las causas de aquellos y recuperar la autoidentidad específica del socialismo cubano, y también una campaña contra las insuficiencias y peligros que amenazan hoy la continuidad del sistema y de la independencia nacional (Martínez Heredia, 2006: 113).

La rectificación, al igual que la transición, tienen el peso de la historia tras de sí en la obra de Martínez Heredia. Rectificar era posible porque la cultura revolucionaria cubana habría sembrado la posibilidad de hacerlo, de la misma forma que había puesto los cimientos para transitar dignamente por uno de los momentos más difíciles de la historia cubana: el *periodo especial*. Ambos procesos demostraron que el determinismo económico no podía explicar la resistencia y la organización (2006: 143). A la luz de los años es claro que lo que sucedió en Cuba a finales de la década de los ochenta y en los noventa fue la constatación de que la realidad rebasó lo que a la prospectiva le parecía imposible.

En el horno de los noventa. Identidad y sociedad en la Cuba actual es el título de uno de los ensayos más conocidos de Fernando Martínez Heredia. Publicado originalmente de *La Gaceta de Cuba*, este texto sintetiza una serie de latencias, reflexiones, advertencias y propuestas que el autor amasó durante varios años

de observación profunda de la sociedad cubana y el mundo. Podríamos robarle el título de *En el horno de los noventa* para hablar no sólo de Cuba, sino del mundo entero bajo el signo de la hegemonía neoliberal: esos años fueron un horno en donde se cocinaron muchas de las prácticas políticas que padecemos en la actualidad. Los noventa también fueron años en los que la rebeldía y la resistencia florecieron, evidenciando las profundas grietas de un sistema que se creía infranqueable, invencible, omnipotente.

“Transición” en los ensayos de Martínez Heredia es un concepto que explicaría el carácter incompleto de la revolución, el paso entre lo que se es y lo que se aspira a ser

El *periodo especial* en tiempos de paz (el apellido en la memoria se ha olvidado, dejando solo al nombre) fue el camino tomado por el gobierno cubano en una coyuntura sumamente difícil para su pueblo. Algunos jóvenes cubanos que vivieron este periodo en la infancia o nacieron en él están comenzando a releer ese pasado inmediato para encontrar indicios que expliquen su presente convulso. En esta búsqueda será indispensable que se remitan a las ideas que se estaban planteando en esos años, en los que a la par de la carestía caminaron la creatividad y la resistencia.

Sin riesgo de equívoco, la visión de Fernando Martínez Heredia en torno a los cambios culturales ocurridos en los años noventa y a sus contradicciones es una de las más lúcidas. Sus ensayos sobre esta época contienen una densidad política muy profunda. Es perceptible que fueron escritos desde el calor de la polémica con diversos actores, desde la pasión esperanzada de quien ve el futuro imaginado peligrar, sin por ello doblegar el espíritu crítico.

Incitador del pensamiento

Se puede ser crítico y mantenerse inmóvil en una posición funcional a la hegemonía del capital (incluso estando en Cuba), o se puede ser crítico para incitar al pensamiento y a la práctica política libertaria, sin ser condicionante el lugar geográfico desde donde se piensa.

El pensamiento crítico desde el cual será posible ensanchar los límites de lo posible, incendiar nuevamente el océano o tomar el cielo por asalto, tiene que atender incesantemente a la práctica política en un presente cuyo desencantamiento ha tenido a una de sus más graves víctimas en la política misma. Muchos son los nombres propios que han llamado la atención en las reflexiones de Fernando Martínez Heredia. De ellos no retiene las anécdotas épicas o sus construcciones conceptuales despojadas de historicidad, sino la politicidad de sus planteamientos teóricos, la posibilidad contenida en los conceptos de dar cuenta, de la manera más precisa y útil, de las contradicciones y complejidades de sus respectivas realidades.

De Gramsci recupera la cualidad de ser un autor que incita al lector a la actividad, “a conversar con él, a poner a trabajar la mente, a apoderarse de su

multitud de preguntas, sugerencias, sutilezas y caminos” (2009b). Del teórico y luchador italiano también recalcará la capacidad que tuvo para entreabrir puertas desde las cuales el mundo no se entendiera como algo simplificable y la revolución pudiese comprenderse desde la maravilla y angustia que contiene, desde la combinación de grandezas y miserias que en ella se ponen en juego. Con Gramsci también hablará de la necesidad de ser superiores al mundo que estamos obligados a parir y de la relación que existe entre esta obligación y el conocimiento social.

Yendo más allá de debates como el relativo a la izquierda teórica, quisiera resaltar que la grandiosa obra de Gramsci ratifica la relativa autonomía del pensamiento social. Es una comprobación fehaciente de lo que pueden producir subjetividades formadas y conscientes cuando se ponen a trabajar sin miedo a violentar lo que se considera posible producir dentro de los límites de la reproducción de la vida vigente, cuando llegan a comprender que ese es el único camino para la liberación de las personas y las sociedades, y continúan con tenacidad y entrega su labor de subvertir lo existente, abrir puertas al futuro y contribuir a adelantarlo (2009b).

Para Martínez Heredia, el Che será otro importante incitador de la práctica y el pensamiento revolucionarios. En *Las ideas y la batalla del Che*, Martínez Heredia propone itinerarios para acercarse a algunas de las ideas del Che en las que está presente una filosofía de la praxis y la dialéctica, en la que al ser humano se le da centralidad como sujeto histórico y político constructor de sus posibilidades futuras (2010c).

Como prologuista del libro *Sartre-Cuba-Sartre. Huracán, surco, semillas* (2009a: 192-221), retoma de Sartre la característica de haber sido un hombre que puso “su pluma, su actuación pública y su fama del lado izquierdo en el campo de las luchas sociales, y de lado de los pueblos colonizados en el apoyo a sus combates por la liberación”. Advierte también que al pensador francés le ha tocado su cuota de olvido al enfrentar las condiciones de ser un hombre que se opuso a la dominación.

La serie fotográfica en donde aparecen el Che, Sartre, Beauvoir y Núñez Jiménez es sólo una de muchas que Korda capturó durante la primera década de la revolución cubana. El siglo XX latinoamericano y sus luchas de liberación ha sido, en algunos casos, convenientemente reducido a íconos, imágenes inmóviles sin poder explicativo que no le hacen honor ni a los autores de las imágenes, ni a los sujetos presentes más allá de lo visible. A la fotografía hay que *entenderla*, como propone John Berger; colocarla entre las disputas políticas que hicieron que el obturador se apretara en ese instante y recortara la realidad de tal o cual manera, extender la imaginación más allá de lo evidente (Berger, 2010). En el proceso del entendimiento complejo de la confrontación ideológica del siglo XX latinoamericano, Martínez Heredia ha contribuido no sólo con el análisis riguroso de la revolución cubana, sino al de este proceso en relación con las luchas latinoamericanas.

En 1979, al triunfo de la *revolución sandinista* en Nicaragua, fue enviado a trabajar allí como parte de la misión diplomática cubana. Vivió en aquel país latinoamericano hasta 1984, cuando regresó a Cuba. Estos años de práctica política dejaron en Martínez Heredia una profunda huella que es notoria hasta la

actualidad; es la marca de quien participa activa y apasionadamente en procesos políticos fuera de su país natal y que siente como propios. América Latina en el siglo XX no será para él una fotografía colocada en un museo, sino un espacio con un gran potencial histórico, político y cultural cuya densidad no puede ser olvidada en la construcción de los caminos actuales.

Al desplazamiento de la radiación electromagnética hacia los tonos rojizos se le llama “corrimiento hacia el rojo”. Este proceso explica el incremento en la longitud de las ondas que emite la fuente. En una apropiación histórica y social del rojo, Fernando Martínez Heredia tituló *El corrimiento hacia el rojo* a uno de sus libros en los que se compilan diversos ensayos, en su mayoría escritos en los años noventa. Basta con mirar el índice para sentirnos interpelados con los temas planteados. Más de diez años después, el debate sobre el dificultoso corrimiento hacia el rojo en términos sociales y políticos sigue abierto.

En el año 2006, el Premio Nacional de Ciencias Sociales le fue otorgado a Fernando Martínez Heredia. A partir de entonces se ha reeditado o publicado parte de su obra con tirajes amplios. Los ejemplares de sus libros pueden encontrarse en la librería más escondida de Sancti Spiritus o en la calle Obispo, en una de las librerías más importantes de La Habana cuyo nombre homenajea al poeta Fayad Jamis. Es invitado, dentro y fuera de Cuba, a impartir conferencias, formar docentes, conmemorar aniversarios, presentar libros, etc. Es pues un referente intelectual y político en estos tiempos en los que en América Latina hay quienes se empeñan en que el *corrimiento hacia el rojo* sea posible en todas las latitudes y luchan por frenar el *corrimiento al azul*. Apropiándonos de la metáfora sobre el corrimiento hacia el rojo en términos sociales, podemos hablar de proceso inverso que supone el decrecimiento en la longitud de onda de radiación electromagnética: corrimiento al azul se llama a este proceso cuya definición puede servirnos de pretexto para remitirnos a la crisis política actual.

En sus textos más recientes, así como en los primeros, se percibirá que Martínez Heredia apela a la pregunta como herramienta en el proceso de conocimiento. Interrogantes diversas palpitarán en su obra, y ellas serán un método para no tecnificar la teoría ni la práctica política. La pregunta, como presencia constante en sus textos, será un punto de partida para incitar al pensamiento. De los lectores o escuchas dependerá que estas preguntas sean verdaderos detonantes de la reflexión y no cuestionamientos de resolución predeterminedada. “Dos cabezas piensan mejor que una”, dice un dicho popular. Roque Dalton con su decir poético y político, escribió:

Pensar a solas duele. No hay nadie a quien golpear. No hay nadie a quien dejar piadosamente perdonado.
Está uno y su cara.
Uno y su cara de santón farsante (Dalton 1995: 17)

Detrás de muchos de los textos de Fernando Martínez Heredia lo que subyace es el aprendizaje y la escucha de otros pensamientos que se sintetizan en uno nuevo que está dispuesto a reformularse incesantemente en la articulación con otros. Desde los primeros hasta sus más recientes trabajos, hay un rasgo común latente: la búsqueda por incitar al pensamiento crítico colectivo que supone una

práctica política. En mundo en el que caben muchos mundos será posible si articulamos el pensamiento y el hacer de unos con el de otros dispuestos también a construir ese mundo.

La forma en que Martínez Heredia aborda grandes temas como el Estado, el poder, la nación y la práctica política incita al pensamiento, estimula al movimiento, a la crítica, e incluso al sano y necesario disenso. Pero sobre todo es un pensamiento que potencia al sujeto, que hace del futuro no un tiempo dado, pero tampoco un inmenso vacío por llenar, si no el tiempo que tiene que contener críticamente al pasado y al presente, característica que radicalizará y ensanchará los límites de lo posible.

Bibliografía

- Berger, John 2010 "Entender una fotografía" en *Seikilos* <<http://seikilos.com.ar>>.
Dalton, Roque 1995 *Antología* (Navarra: Txalaparta).
Guanche, Julio César 2007 "Fernando Martínez Heredia: la revolución en el pensamiento" en *Rebelión* (Madrid: Iepala).
Martínez Heredia, Fernando 2001 *Corrimiento hacia el rojo* (La Habana: Letras cubanas).
Martínez Heredia, Fernando 2006 *Socialismo, liberación y democracia. En el horno de los noventa* (Ocean Sur).
Martínez Heredia, Fernando 2008a *El ejercicio de pensar* (La Habana: ICIC Juan Marinello/Ruth Casa editorial).
Martínez Heredia, Fernando 2008b "El mundo ideológico cubano de 1959 a marzo de 1960" en *La Jiribilla* (La Habana) 7 de enero.
Martínez Heredia, Fernando 2009a *Andando en la Historia* (La Habana: ICIC Juan Marinello/Ruth Casa Editorial).
Martínez Heredia, Fernando 2009b "Gramsci con nosotros" en *Rebelión* (Madrid: Iepala).
Martínez Heredia, Fernando 2010a *Si breve...*, (La Habana: Editorial Letras Cubanas).
Martínez Heredia, Fernando 2010b *La crítica en tiempo de revolución* (Santiago de Cuba: Editorial Oriente).
Martínez Heredia, Fernando 2010c *Las ideas y la batalla del Che* (Ruth: La Habana).
Martínez Heredia, Fernando 2011a *Historias cubanas* (La Habana: Ediciones Luminaria/Sancti Spíritus).
Martínez Heredia, Fernando 2011b "A cincuenta años de palabras a los intelectuales" en *Rebelión* (Madrid: Iepala).
Martínez, Liliana 2006 *Los hijos de Saturno: intelectuales y revolución en Cuba* (México: FLACSO).

Pensamiento social y política de la Revolución¹

FERNANDO MARTÍNEZ HEREDIA²

Este tema se integra perfectamente en los objetivos del ciclo del cual forma parte, aunque por su contenido resulta diferente de los anteriores. Hemos visto cómo las más disímiles actividades literarias y artísticas mantienen siempre relaciones con el orden vigente, con los conflictos y con los proyectos de la sociedad en que se practican. En el caso del pensamiento social y las ciencias y profesiones dedicadas a ese campo, las relaciones son mucho más estrechas y tienen implicaciones mucho mayores. Esto ha podido apreciarse en el curso del período revolucionario cubano, tanto en los hechos mismos como en sus consecuencias a mediano y largo plazos.

En el período transcurrido entre 1959 y hoy distingo tres etapas, lo que he argumentado en mis escritos. Dado el espíritu de estos encuentros y el tiempo limitado que debo utilizar, he escogido referirme sobre todo a la primera etapa –que va de 1959 a inicios de los años setenta– y a la gran ruptura que significó para el pensamiento social el comienzo de la segunda etapa. Aquellos hechos constituyen una acumulación cultural que influye mucho en la situación actual, acerca de la cual haré también algunos comentarios que me parecen atinentes. En los encuentros anteriores de este ciclo hemos vivido la combinación entre el interés por la recuperación de la memoria y el planteo de problemas más cercanos en el tiempo y problemas de hoy. Lo primero viene a combatir una ausencia de consecuencias graves, y su recuperación es una exigencia vital para los cubanos en la actualidad. Lo segundo revela la necesidad y la urgencia de que nuestra sociedad enfrente el conocimiento y el debate de sus problemas fundamentales, y de que lo haga con una participación muy amplia y creciente. Me llena de esperanza que esto último suceda aquí, y que se alcen voces de jóvenes que están realmente involucrados, preguntando o reclamando. Pero estamos sometiendo nuestra ansiedad y nuestra premura al estudio, la profundización y los análisis de colectivos como este, apoderándonos de la época precedente, precisamente para que nos ayude a entender

a fondo las cuestiones actuales y lanzarnos a resolverlas, y para formular nuevos problemas, desafíos y proyectos.

Una precisión más: mi exposición intentará ser analítica, no anecdótica, y las referencias indispensables a sucesos, criterios y posiciones que viví o conocí tratarán de servir siempre al análisis y los juicios, los cuales expongo, naturalmente, desde mi perspectiva personal. Con ese fin he tomado también elementos de textos míos acerca del tema que abordo, aunque no pretendo –porque sería imposible– sintetizar aquí lo que ha sido un trabajo de varias décadas. Me referiré solamente al pensamiento social en general y no a disciplinas sociales específicas, mencionaré al pasar temas que exigirían cada uno su desarrollo y, además, estaré obligado a ser telegráfico y más de una vez omiso, por lo que pido excusas desde ahora.

Mediante una gran revolución, Cuba se liberó a partir de enero de 1959 de las dominaciones que la aprisionaban, promovió cambios muy profundos de la vida de las personas, las relaciones sociales y las instituciones, y creó o reorganizó de manera incesante su propio mundo revolucionario. La sociedad hacía entonces esfuerzos extraordinarios por pensarse a sí misma, comprender sus cambios y sus permanencias, sus conflictos y sus proyectos, sus modos de transformarse, en medio de acciones colectivas, luchas violentas, enfrentamientos ideológicos, cambios en las creencias, conflictos desgarradores y tensiones muy abarcadoras. Los propios tiempos se transformaron. El presente se llenó de acontecimientos y las relaciones interpersonales y la cotidianidad se llenaron de revolución. El futuro se hizo mucho más dilatado en el tiempo pensable y fue convertido en proyecto, y el pasado fue reapropiado, descubierto o reformulado, y puesto en relación con el gran evento en curso. Un hecho decisivo de la etapa de 1959 a los primeros años setenta es que se multiplicó súbitamente el número de los que pensaban sobre las cuestiones sociales y políticas, así como su interés y entusiasmo por conocer más acerca de ellas. Así fue desde el inicio, y ese proceso se profundizó y se organizó una y otra vez durante toda la etapa. Eso afectó profundamente el consumo del pensamiento social, su producción, el papel que jugaba en la sociedad y sus relaciones con el poder revolucionario.

Sin embargo, nada surge de la nada. En el caso del pensamiento social, existían corrientes principales previas de consumo masivo, que iban desde el sentido común, las adecuaciones al dominio burgués neocolonial y las demás dominaciones sociales, las formas de resistencia a ellas, la formación de opinión pública y otras. Debo limitarme al pensamiento social más o menos elaborado, pero éste no se entendería si no tuviéramos en cuenta que las enormes transformaciones en tantos campos exigieron al pensamiento elaborado tener relaciones muy fuertes con las realidades y necesidades sociales, así como funciones eficaces respecto a ellas. Insisto en esto, además, porque opino que a partir de los primeros años setenta el pensamiento social quedó en una posición muy diferente respecto al poder y la sociedad, y ha desempeñado desde entonces funciones distintas.

En el pensamiento social elaborado que existía quiero distinguir el liberalismo, el patriotismo, el antimperialismo, el democratismo, las ideas de justicia social y el socialismo. El pensamiento liberal había tenido una trayectoria muy larga en Cuba y hecho aportes muy valiosos, pero terminó fracasando en toda la línea, porque nunca fue capaz de trascender el horizonte burgués y el reflejo colonizado. Este

juicio mío es de tipo histórico, pero no desconoce que el consumo de pensamiento liberal seguía siendo notable en aquel momento.

El patriotismo radical, que desarrolló y arraigó sus ideas y sus ideales en el último tercio del siglo XIX, se convirtió en parte inseparable de la vida espiritual y en cemento de la nación a través de la gesta nacional de la revolución del '95, y se sostuvo durante el medio siglo republicano. El nacionalismo tuvo un peso ideológico principal en todo ese período y la clase dominante burguesa siempre lo utilizó para su hegemonía, y hasta cierto punto lo vivió; pero el patriotismo popular nunca se rindió a esos límites y funcionó paralelamente o en conflicto con ellos. El patriotismo radical vio llegar el fin de sus frustraciones y realizarse sus anhelos con el triunfo de 1959, con la obtención de la liberación nacional y la soberanía plena, y el establecimiento de un Estado puesto al servicio del bienestar de la sociedad. La revolución socialista cubana asumió ese patriotismo y se apropió de todos sus símbolos y referencias. Éste es uno de los hechos fundamentales para entender la legitimidad de la revolución y la fuerza de su mundo espiritual. También forma parte del aporte extraordinario del socialismo cubano a las ideas y experiencias revolucionarias a escala mundial, aunque como tantos otros aspectos, no forma parte del conocimiento actual de la mayoría de los cubanos.

El antimperialismo, que floreció durante la revolución del '30 y se ligó a las posiciones políticas más avanzadas, tuvo una historia muy accidentada durante la *segunda república* –la que existió después de 1935 hasta 1959–, pero era una corriente latente de muy profundo arraigo. Se activó con la revolución de fines de los '50 y ha ocupado desde entonces hasta hoy un lugar privilegiado en la ideología revolucionaria, en el pensamiento social y en los juicios y las creencias acerca de un número enorme de cuestiones. Se dirige sobre todo contra la política sistemática anticubana de los dirigentes de los Estados Unidos, pero en aquella primera etapa de la que hablo se afirmó mucho como una posición sentida y fundamentada contra todos los imperialismos, como parte de la comprensión del mundo desde Cuba y como fuerza ideológica del internacionalismo cubano.

Con el término *democratismo* quiero expresar la situación creada en los veinte años anteriores a 1959, cuando predominó un pensamiento social que fue mucho más allá del liberalismo y en gran medida lo cuestionó. Ese pensamiento entendía a la democracia como un valor político y de convivencia social fundamental, y a la acción política electoral como un vehículo idóneo para mejorar o cambiar el gobierno del Estado, la administración y los asuntos públicos en general, las relaciones entre los sectores económicos sociales, y el bienestar del pueblo. Durante la segunda república, estuvo en la base ideal del orden constitucional de 1940, de la legalidad, el sistema de partidos políticos, las características principales del sistema de gobierno, la notable libertad de expresión que se alcanzó y una sociedad civil desarrollada y compleja. Les daba importancia a los papeles del Estado como regulador social y de la economía. Esas ideas democráticas gozaban de bastante consenso entre los que, por otra parte, sostenían diversas posiciones. Fueron funcionales para la reformulación de la hegemonía burguesa neocolonial de la segunda república, y para evitar una nueva revolución, no porque fueran ideas despreciables, sino por lo contrario: expresaban verdaderos avances republicanos, y parecían darle espacio y vías a las frustraciones que dejaron la independencia de 1902 y los

resultados de la revolución del '30. El golpe del 10 de marzo negó esos avances y, por eso, desde el inicio, la dictadura careció de legitimidad y fue repudiada.

La cultura cubana había llegado a una altura tal a inicios de los años sesenta que estaba obligada a elaborar una concepción del mundo y de la vida para representarse sus realidades y su proyecto...

La justicia social era otra corriente de pensamiento social preexistente. Heredera de las luchas contra la esclavitud, el racismo, la explotación de los trabajadores y las jornadas revolucionarias independentistas y del '30, la justicia social era aceptada como un principio formal, aunque no se convertía en realidad. Las ideas políticas y sociales avanzadas siempre la incluían, entendiéndola desde distintas posiciones. Después de que las ideas socialistas se arraigaron en Cuba durante los primeros años treinta, la justicia social era asumida como demanda, tanto por democráticos como por marxistas independientes o del partido comunista. El socialismo más cercano a 1959 tenía dos vertientes: la de los adherentes al partido comunista y al pensamiento marxista de la época —el llamado estalinismo—, y la de pensadores y activistas ajenos a ese partido. La insurrección y el nuevo poder rebelde echaron abajo el sistema represivo y político del Estado burgués neocolonial y rompieron los límites de lo posible en Cuba. Enseguida las formas de participación popular masiva, las medidas que abolían el sistema capitalista y la dominación imperialista, y el armamento general del pueblo en revolución dieron lugar, por primera vez en Occidente, al triunfo práctico de una revolución autóctona anticapitalista de liberación nacional. Entonces todas las corrientes de pensamiento social fueron desafiadas y sometidas a examen por la revolución, porque conceptos, relaciones e instituciones que se creían eternos o parecían naturales eran abolidos o desaparecían, mientras se asomaban otros nuevos. La emergencia victoriosa de la praxis, el nuevo poder y la participación masiva y organizada le brindaron al pensamiento una inapreciable oportunidad para su desarrollo, pero a la vez le hicieron muy fuertes exigencias de nuevas ideas, instrumentos para conocer y actuar, y proyectos.

De inicio, la revolución se comprendía a sí misma como la realización de los ideales acumulados y de su propio cuerpo ideológico, pero las nuevas realidades, necesidades y objetivos superaban esa comprensión. La asunción del socialismo —y de la ideología marxista— fue, entonces, la opción acertada y necesaria. El socialismo debía estar en el centro de la liberación nacional. No es posible exponer aquí la real complejidad de lo que sucedió. Hasta ahora han sido productos artísticos los que más se han acercado a lograrlo. En 1959 muchos calificaban a la revolución de humanista. En la víspera de Playa Girón se proclamó socialista. Ese año 1961 pasó por una escuela para formar profesores emergentes de secundaria, en la que un alto funcionario de Educación nos dijo en una conferencia: “la pequeña propiedad es la gloria de Francia”, mientras una profesora nos enseñaba que había un concepto, la materia, que era el más general e importante de todos.

Para Cuba fue vital entablar lazos demasiado fuertes con la URSS, y el socialismo y el marxismo soviéticos parecieron en un primer momento como los únicos,

o los mejores. A eso ayudaron las urgencias ideológicas en medio de una lucha de clases y una defensa nacional muy intensas, la presencia e importancia de la URSS para la defensa y la economía, y también que entre 1961-1962 se vivió el predominio del sectarismo en la organización política, y éste tenía a la URSS por modelo del socialismo. A pesar de los enormes lazos y la aparente pertenencia común al socialismo, las relaciones entre Cuba y la URSS durante la primera etapa de la revolución en el poder tuvieron momentos de agudos conflictos y muchas veces fueron discrepantes o tensas. Esas relaciones tuvieron una gran importancia para la historia del pensamiento social cubano en los treinta años que duraron, pero ese tema está fuera del contenido de mi exposición.

Ciñéndome a mi tema, sintetizo los rasgos principales de aquel cuerpo teórico de origen soviético: a) sus textos contenían una mezcla nada orgánica del viejo estalinismo del DIAMAT de 1938, autoritario, clasificador y excluyente, con una prosa modernizante posterior al Congreso del PCUS de 1956. Sus objetivos seguían siendo servir de cemento ideológico general del sistema, de vehículo de exigencia a los seguidores en cuanto a acatar la línea y las orientaciones, y de influencia en los medios afines. Pero ahora incluían “ponerse al día” y participar en los discursos y en la lucha de ideas del inicio de los años sesenta, aunque sin recuperar el marxismo revolucionario ni abordar los problemas fundamentales; b) trataba de fundamentar la política soviética y del movimiento comunista bajo su influencia, ciertas reformas en la URSS y Europa oriental y, en lo internacional, la llamada “emulación pacífica” entre el capitalismo y el socialismo en la que el segundo triunfaría. Cuestiones centrales de la política nacional e internacional cubana no cabían o eran inaceptables para esta doctrina; c) preconizaba para el Tercer Mundo en general el reformismo y la colaboración con sectores burgueses dominantes, en vez de la lucha revolucionaria, lo que amparaba en conceptos como el de “democracia nacional” y declaraciones solemnes como la de que “el contenido general de nuestra época es el paso del capitalismo al socialismo”; d) sus modelos teóricos “generales” solían ser esquemas simplificados o inconsistentes, en los cuales hechos y procesos seleccionados se convertían en “leyes”. Eran inútiles para la comprensión y para ayudar a la acción. En cuanto a las situaciones, los problemas y la historia del Tercer Mundo, eran eurocéntricos y podían llevar a creencias absurdas y formas de colonización mental “de izquierda”; e) en su actitud teórica, la metafísica y el dogmatismo se combinaban curiosamente con el positivismo. Esta suma teórica presentada como concepción del mundo y ciencia de las ciencias podía tener aspectos atractivos para lectores noveles, quizá porque la razón parecía confirmar a la fe. Para los convencidos, incluidos algunos muy cultos, era un dogma intangible y, por tanto, no discutible.

Entre aquella ideología teorizada y el fervor cubano por el socialismo y el marxismo pronto se levantó una contradicción que era difícil resolver. Los productos intelectuales de esa ideología constituían un polo atractivo para muchos, porque existía una conciencia muy amplia de la necesidad de explicaciones y propuestas trascendentes. A veces me angustia pensar que esa conciencia no sea amplia en la actualidad, porque ella es cuestión de vida o muerte para la sociedad que queremos defender y desarrollar. La cultura cubana había llegado a una altura tal a inicios de los años sesenta que estaba obligada a elaborar una concepción del

mundo y de la vida para representarse sus realidades y su proyecto, y trabajar en consecuencia. Esa necesidad llevaba a estudiar con entusiasmo los materiales que caían en nuestras manos, y los de aquella corriente de origen soviético eran los más abundantes. Además, fueron acogidos y divulgados por las escuelas políticas del partido en formación.

El marxismo fue asumido masivamente y se consideró que debía guiar al pensamiento, con la legitimidad que daba la revolución. Pero dos preguntas aparecieron enseguida: el marxismo, ¿vendría a participar, a ayudar a la revolución, o sería sólo un certificado que le expedían y una doctrina que ella aceptaba? ¿Y cuál marxismo asumiría la revolución cubana? Es imprescindible que todos conozcamos la historia viva de cómo el pensamiento social cubano dio un enorme salto hacia adelante al asumir el marxismo, que tuvo consecuencias decisivas para su desarrollo; y también la historia viva de las dificultades y los conflictos, de los estudios y las polémicas, de las corrientes diferentes dentro del marxismo, a través de los cuales ese pensamiento social encontró su vitalidad y su forma y sus funciones cubanas. Y que conozcamos también las insuficiencias que portaba, los errores que se cometieron en relación con el marxismo y su utilización, y los aspectos negativos que a mediano plazo lo han perjudicado tanto, hasta hoy.

Desde el inicio chocaron las manías de clasificar, disciplinar, hacer obedecer, atribuir segundas intenciones, frente a la saludable combinación de espíritu libertario y poder que lograba tener la revolución. La tendencia a empequeñecer la liberación social y humana mediante nuevas dominaciones levantadas en nombre del socialismo afectó a la revolución, y llevó a debates y confrontaciones en su seno. A mi juicio, el saldo de esa actividad durante la primera etapa del proceso fue muy positivo en cuanto a sus resultados, y sobre todo en cuanto a que nos formó, nos hizo más conscientes, más militantes y más libres. No había separación entonces entre una cultura referida a las bellas artes y el pensamiento por un lado, y la política general del país por otro, que por consiguiente debería "atender a la cultura". Con razón recordamos siempre las palabras de Fidel a los intelectuales de junio de 1961, pero también es muy necesario recordar y estudiar sus discursos contra el sectarismo, del 13 y el 26 de marzo de 1962, porque están muy relacionados con aquel. Con ellos se combatía por una cultura política de la revolución, frente a las limitaciones y obstáculos que nacían dentro de ella misma. Numerosos intelectuales y artistas comprendían esa verdadera relación, y participaban al mismo tiempo con su actividad como tales y con sus ideas políticas y teóricas. Graziella Pogolotti acaba de publicar un libro muy valioso, *Polémicas culturales de los 60*, que nos muestra la riqueza extraordinaria contenida en aquel manejo de ideas, las combinaciones reales de asuntos específicos literarios y artísticos con puntos centrales políticos, ideológicos y teóricos, y las posiciones diferentes que contendían. Apuntaré brevemente algunos rasgos generales de lo que sucedió, que me parecen fundamentales.

Ante todo, el fondo de la cuestión no era una pugna intelectual, ni se limitaba a un duelo de ideas. Era una polémica acerca del alcance de la revolución, su rumbo, sus objetivos, los medios y vías que utilizaría. En algunos momentos y situaciones llegó a ser incluso una polémica por el poder. Fidel reafirmó, amplió y profundizó su liderazgo dirigiendo y conduciendo la opción radical revolucio-

naria, demostró que era la única factible y la llevó al triunfo. Segundo, entre otros numerosos aciertos y virtudes, se atuvo a la política de no utilizar la inmensa fuerza material y moral con que contaba para imponer su línea. Todavía en marzo de 1964, dijo en el juicio contra el delator de los mártires de Humboldt 7 que la revolución no sería como Saturno, que se comió a sus propios hijos. La unidad política de los revolucionarios y la unidad política del pueblo fueron objetivos centrales de la revolución, y está claro que en ello se jugaba incluso la supervivencia. Sin embargo, no se eliminó el debate interno por esa razón. Dirigentes políticos y culturales, personalidades intelectuales, instituciones diversas, contraponían sus criterios en público, con mayor o menor profundidad y buenas maneras. En 1963-1964, el Che y otros dirigentes del partido y el Estado debatieron sobre cuestiones fundamentales del rumbo de la creación de la nueva sociedad en revistas habaneras, sin que peligraran por eso la estabilidad y la seguridad de la revolución.

No hay que olvidar que aquellos años se caracterizaron por la magnitud de los enfrentamientos violentos y la agresividad imperialista, la lucha de clases interna y los desgarramientos que aportaron ella y la emigración, la escasez de capacidades o lo incipiente de las instituciones cubanas. ¿Cómo fue posible que en esa situación existiera un amplio campo para el debate entre los revolucionarios? ¿Qué condiciones lo facilitaron y, quizás, lo exigieron? Lo cierto es que el poder revolucionario y la sociedad reconocieron espacios de producción y de debate al pensamiento social que permaneciera o surgiera dentro del campo revolucionario, aunque fuera de corrientes diversas, y aunque expresaran unos sus discordancias con otros. Pienso que, si analizamos aquella situación en su conjunto, los factores positivos y negativos que contenía y los rasgos y problemas de la política que predominó, nos brindará algunas experiencias y lecciones respecto a la necesidad actual de volver a construir entre todos una cultura de debate.

Aunque no existió una declaración para el pensamiento social que fuera equivalente a lo que significó *Palabras a los intelectuales* para aquel medio, de hecho el pensamiento social operó con parámetros análogos. Por cierto, en aquel tiempo nos referíamos al famoso discurso de Fidel en la Biblioteca Nacional como un alegato contra los que pretendían amordazar el pensamiento de revolucionarios. Habría que hacer varias precisiones. Primero, los jóvenes como yo estábamos de acuerdo en que la revolución se defendiera de sus enemigos con los medios que estimara necesarios. La condicionante de no actuar contra la revolución nos parecía muy legítima. Segundo, nos parecía lo más natural que intelectuales de ideas diferentes de las nuestras trabajaran como tales, y admirábamos la obra de Ortiz, Lezama, Ramiro Guerra, y de otros ya fallecidos, como Varona, Mañach o Loveira. Tercero, nos oponíamos al sectarismo, el dogmatismo, el autoritarismo y el llamado realismo socialista. Cuarto, no creíamos que el poder político nos estaba concediendo nada, porque sentíamos que compartíamos los mismos ideales, y a la vez nos parecía que quien tratara de obtener algo para sí por su actividad intelectual a favor de la revolución era un oportunista.

Durante los años sesenta mantuvimos esas convicciones, pero desarrollamos un pensamiento sobre los rasgos, las obligaciones y las funciones de la actividad intelectual en la sociedad en transición socialista, así como acerca de sus relaciones con las estructuras y las políticas del poder revolucionario, incluidas las ten-

siones y las contradicciones. A eso nos llevaron las experiencias y dificultades del propio proceso que estábamos viviendo, los debates con otras posiciones cubanas y el estudio de nuestra historia y la de otros procesos revolucionarios, incluido el soviético, así como la historia de la URSS. Las relaciones entre el poder y el pensamiento social se convirtieron en uno de los temas sensibles para las prácticas de los intelectuales y de los políticos, y para el proyecto socialista. En la segunda mitad de los años sesenta, el tema enunciado como “el compromiso del intelectual” tuvo un enorme arraigo y resonancia, en Cuba y en innumerables medios del mundo. El gran Congreso Cultural de La Habana de enero de 1968 –que ha sido concienzudamente olvidado– le dedicó a ese tema buena parte de sus tareas.

Una cuestión crucial quedó planteada después de las primeras experiencias del proceso, y ha mantenido siempre su carácter de problema central. Dentro de la revolución, el pensamiento social sólo puede existir, desarrollarse y servir de algo a la sociedad y sus tareas principales si tiene autonomía, mantiene su específica identidad y normas, goza de libertad de investigación y sabe ir más allá de lo que piden la reproducción de la vida social y las necesidades visibles. Al mismo tiempo, y sin perder las características anteriores, el pensamiento social debe existir dentro del orden revolucionario y regirse en lo esencial por el proyecto de liberación y, por ese orden, respetar su estrategia, atender sus prioridades y ponerse límites cuando resulte imprescindible para la causa general. Bien, pero en esa dialéctica de libertad y militancia, ¿cómo se determinan el alcance y la protección del pensamiento, y su sujeción a normas y su disciplina? ¿Quién determina todo esto, qué mecanismos y garantías habrá para evitar errores o abusos?

En esta primera etapa de la revolución no se elaboraron reglas expresas en este campo, pero en general funcionó aquella dialéctica, en mi opinión por razones más amplias que su propio contenido: el espíritu libertario y el poder revolucionario convivían bien, el poder y el proyecto estaban íntimamente ligados, todos los implicados combatíamos juntos en las situaciones límite y las grandes jornadas de la revolución, y, además, nos sentíamos históricos.

En los hechos, desde muy temprano había dos concepciones y posiciones distinguibles dentro del campo revolucionario referidas al alcance que podía permitirse el proceso, su rumbo, sus vías y medios, y los objetivos del socialismo. Una estaba influida por la ideología soviética y del movimiento comunista. Creía que Cuba debía organizar su economía, su vida social, su sistema político y su estrategia de acuerdo con la etapa de desarrollo que le asignara aquella ideología, y reproducir aquí rasgos del tipo de dominación en nombre del socialismo que existía en la URSS y en los países de su campo. Buscaba sus fundamentos en el llamado marxismo-leninismo, y sin duda no se sentía extranjerizante, sino el vehículo del paso de Cuba a lo que consideraban un régimen social superior y su incorporación al socialismo, la corriente en ascenso en el mundo. La otra provenía del proceso insurreccional, de su ideología de liberación y su triunfo práctico, que había creado el poder y el terreno real para que se desarrollara la gran revolución popular. Entendía el socialismo como el medio idóneo para conseguir la liberación nacional y la verdadera justicia social, impulsó y condujo un conjunto profundamente radical de acciones y una participación masiva que transformó a los cubanos y al país, y enfrentó victoriosamente a los Estados Uni-

dos. Esta segunda concepción y posición se consideraba heredera de todas las luchas revolucionarias del pueblo cubano desde el siglo XIX. Sus líderes conocían al marxismo, lo utilizaban de manera independiente y actuaban a favor de que la población cubana asumiera esa concepción.

El patriotismo radical ha sido un baluarte para la segunda posición, desde el inicio, en circunstancias tan diferentes como la fundación de la UNEAC, la crisis de octubre o el centenario del 10 de octubre, en 1968. En las nuevas condiciones creadas por la segunda etapa que comenzó a inicios de los años setenta, el patriotismo radical –ahora sintetizado en la consigna “cien años de lucha”– fue una línea de defensa del carácter autóctono de la revolución frente a la ideología que se hizo, entonces sí, preponderante. Por cierto, a pesar de que la bancarrota de las ideas previas a 1959 terminó por incluir a la democracia –identificada ahora con las acusaciones contra Cuba y con los modos de dominación existentes en países capitalistas–, el democratismo no desapareció. La revolución proclamó sus nuevos sentidos y combinó instituciones de tradición, como el poder local, con nuevas formas directas como las enormes concentraciones. Entre los revolucionarios permanecieron con mucha fuerza las representaciones positivas de los derechos individuales, y no sólo los sociales, la gran valoración del individuo que tiene y sostiene sus criterios, y el orgullo por la historia cubana en el terreno democrático. Recuerdo la expresión de que los soviéticos no podían entender ciertas cosas porque nunca habían tenido democracia, mientras que los cubanos nos dimos constituciones desde Guáimaro, al iniciar la primera revolución; contábamos con el maravilloso legado democrático de Martí y tuvimos una democracia representativa desarrollada antes de la revolución.

Las contraposiciones y los debates entre las dos concepciones y posiciones referidas son muy importantes para comprender el pensamiento social de la primera etapa del proceso revolucionario en el poder. En lo político, el liderazgo de Fidel –secundado por el Che y los máximos dirigentes del país– fue decisivo para llevar al triunfo, de manera unitaria y pacífica, a la segunda concepción, que rigió prácticamente durante la segunda mitad de los años sesenta. Uno de los rasgos del fin de la primera etapa y del inicio de la segunda fue el quebranto de esta posición y el retorno de la primera posición en terrenos sumamente importantes. Sin embargo, simplificar las cosas de este modo impediría advertir cuestiones decisivas. La revolución mantuvo su liderazgo máximo y rasgos básicos de sus políticas y sus logros, y el país de inicios de los '70 tenía enormes diferencias con el de una década antes en cuanto a desarrollos de su población, vivencias y experiencias revolucionarias, y expectativas. La primera posición, por su parte, también había ganado experiencias, comprensión de la especificidad y el carácter del proceso cubano, y moderación, y su composición interna era ya otra. Apunto apenas esos comentarios sobre lo político, y me extendo más sobre el centro de mi tema, el pensamiento social.

Alrededor del marxismo se manifestaban las necesidades y las concepciones, y, por tanto, él tenía que ser un protagonista en el pensamiento de la época. La generación que llevó el peso entonces incluía a nacidos desde 1926 o 1928 – como Fidel y el Che– hasta los nacidos a mediados de los años cuarenta. A los protagonistas del proceso nos sumamos los que como yo comenzamos siendo

revolucionarios y después nos hicimos marxistas, y los que llegaron a ambas cosas al mismo tiempo. Desde el 1 de febrero de 1963 hasta fines de 1971 pertencí a un grupo intelectual organizado, el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, que se vio envuelto en la pugna por un marxismo de la revolución que contribuyera realmente a su desarrollo, y llegó a estar en el centro de esa pugna.

Un ejemplo de la complejidad de la tarea y del carácter que tenían entonces las relaciones entre los revolucionarios es la visita del presidente Osvaldo Dorticós al Departamento de Filosofía a inicios de 1964. Pocos meses antes había salido de la rectoría de la universidad el compañero Juan Marinello, y también fue sustituido el primer director nuestro, el hispanosoviético Luis Arana, a quien estimábamos mucho y no tenía relación con Marinello. Se designó para sustituir a Arana a un profesor y activista ligado a la primera posición que referí antes, y aunque éramos muy jóvenes y no teníamos aún notoriedad, se suponía, con razón, que no nos gustaría el sustituto. El presidente vino a traerlo, acompañado del nuevo rector, y con su prestigio decidió nuestra aceptación. Pero lo más interesante fue que nos hizo un discurso que jamás olvidamos, en el cual afirmó que los manuales de marxismo soviético que entonces se utilizaban en la docencia y en los estudios políticos no servían para la revolución cubana, y nos pidió que, como marxistas, "incendiáramos el océano", aunque aclaró enseguida que él no sabía cómo podríamos hacerlo.

En el centro mismo del Occidente burgués, la revolución cubana realizó en los años sesenta inmensos esfuerzos en el campo del pensamiento e hizo contribuciones relevantes al desarrollo del marxismo. Fidel y el Che pusieron definitivamente al marxismo en español, inspiraron la formación de una nueva vertiente marxista latinoamericana y se dirigieron al mundo entero desde un comunismo de liberación nacional, occidental, igualitarista, insurreccional y realmente internacionalista. He descrito algunos aspectos de la actuación de Fidel, el máximo representante del pensamiento más revolucionario. El Che desempeñó un papel fundamental en la elaboración de un pensamiento social que sirviera, más que como fundamentación, como instrumento para una política comunista eficaz en la transición socialista cubana. Haber pensado y haber intentado tal política es uno de los aportes notables de Cuba a los movimientos de liberación del mundo. En esa dirección, el opúsculo del Che, *El socialismo y el hombre en Cuba*, es uno de los documentos políticos más trascendentes del siglo XX.

Ernesto Guevara pasó del estudio del pensamiento a la guerra revolucionaria, que lo transformó y lo hizo dirigente. Compartió las responsabilidades del poder revolucionario e impulsó los cambios más profundos de las personas y la sociedad, y otra vez se fue a la guerra revolucionaria. En ese corto período, su pensamiento logró comprender los problemas fundamentales, plantearlos y hasta cierto punto elaborar una concepción teórica que fuera un instrumento capaz de restituir al pensamiento revolucionario su función, indispensable para guiar los cambios sociales y humanos y proyectar e imaginar el futuro, al mismo tiempo que servir a las prácticas. Pero su filosofía de la praxis fue más allá, e iba ampliando su campo y su profundidad cuando lo interrumpieron la batalla final y la muerte. Con una aguda conciencia del papel del pensamiento en la creación de una sociedad que debía ser diferente del capitalismo –y no sólo opuesta a él–, entre 1963 y 1965

el Che libró en Cuba una batalla intelectual que entendía indispensable para la política, la práctica en general y también para la teoría. La segunda etapa no podía admitir su pensamiento. Hubo que esperar al proceso de rectificación de errores de la segunda mitad de los años ochenta para que comenzara el difícil regreso al pensamiento del Che, reapropiación que no ha sido completada todavía.

...reivindicamos la libertad de cátedra y de investigación dentro de la militancia revolucionaria –es decir, pensar por ser un militante, y no a pesar de serlo–...

Las ideas propias fueron tomando cada vez más fuerza en los primeros '60, y pronto se abrió una fase de búsqueda y creación en el terreno teórico, a la vez que se hacían cada vez más investigaciones de problemas concretos. Diferentes grupos en instituciones estudiaban, discutían, elaboraban y publicaban sus criterios. En el Departamento de Filosofía emprendimos una labor muy tenaz y sistemática con el fin de formarnos sin exclusiones ni prejuicios, participar en las investigaciones de los problemas concretos y tratar de asumir el marxismo y trabajar con él. Ya en 1965 habíamos sustituido los manuales soviéticos por una bibliografía variada y representativa del pensamiento y los problemas. En la *Presentación de Lecturas de Filosofía*, nuestro primer libro con ese tipo de textos, publicado en enero de 1966, escribí:

El conjunto de problemas que la realidad le presenta a una ciencia constituye su fe de vida, el tratamiento de ellos es condición de su desarrollo. Una divulgación sin problemas es mera declamación. [...] Los manuales existentes para nuestra disciplina son resultado de una apreciación deformada y teologizante del marxismo.

Meses después, en el II Encuentro Nacional de Profesores de Filosofía, el departamento identificaba el desafío: "Tenemos que lograr que el marxismo leninismo se ponga a la altura de la revolución cubana". Ya estábamos discutiendo un contenido y estructura nuevos que debían sustituir al materialismo dialéctico e histórico, que desde septiembre pusimos en práctica en la universidad: la *historia del pensamiento marxista*. Ella respondía a otra concepción del marxismo. Las universidades de Oriente y Central de Las Villas también la impartieron, y muchos miles de alumnos la estudiaron hasta 1971.

No me extenderé aquí acerca de nuestra actividad en el campo teórico, en las polémicas de la época, las investigaciones de realidades cubanas, la creación de Edición Revolucionaria y el Instituto del Libro, y la participación en otras tareas nacionales e internacionales, aunque en realidad ese conjunto es casi desconocido. Lo interesante para el tema que abordamos hoy es que partimos de que era imprescindible pensar con cabeza propia, reivindicamos la libertad de cátedra y de investigación dentro de la militancia revolucionaria –es decir, pensar por ser un militante, y no a pesar de serlo–, e hicimos publicaciones que se atenían a esas reglas. La experiencia funcionó durante varios años, y mi opinión es que su saldo fue positivo.

¿Por qué pudieron existir experiencias como ésta? En la segunda mitad de los sesenta la revolución se profundizó en todas las direcciones que pudo. Con una coyuntura política e ideológica internacional realmente favorable, trató de violentar aún más lo que se consideraba posible en materia de organización estatal y de economía, de crecimiento de la conciencia, transformaciones de las personas y de las relaciones sociales y el esfuerzo internacionalista. A mi juicio, fue una decisión acertada, aunque se cometieron errores –algunos de ellos realmente graves–, como ha sucedido históricamente en todos los casos en que se ha forzado la reproducción esperada de la vida social.

El poder y la sociedad se pusieron en tensión y marcharon juntos, y hubo una verdadera fiebre de investigaciones sociales; ellas y el pensamiento social estuvieron a la altura del esfuerzo con su incesante labor y su entusiasmo, y gozaron de un reconocimiento social y político enorme, que evidenciaba una comprensión del papel crucial del conocimiento y la intencionalidad para lograr los objetivos tan ambiciosos que se tenían. Sería muy conveniente que se elaborara al menos una relación de la masa de investigaciones realizadas –ofreciendo unos pocos datos básicos de cada una–, no sólo por sacarlas del injusto olvido en que yacen, sino sobre todo para que pueda rescatarse una gigantesca cantidad de asuntos, datos, análisis, dictámenes, sugerencias, que serían sumamente útiles para los trabajos de conocimiento social actuales.

El apoyo oficial en unos casos, y en otros un espacio que permitía niveles sustanciales de autonomía, fueron factores principales para aquel florecimiento del pensamiento y las ciencias sociales, pero también quiero destacar, por su gran importancia, que coexistían perspectivas y posiciones diferentes, que podían enfrentarse o no, pero tenían espacio para trabajar. La ausencia de una “línea” de cumplimiento obligatorio para el trabajo intelectual fue una condición básica de su desarrollo. La casualidad hizo que el partido cubano decidiera el cese de la publicación de su revista oficial, *Cuba socialista*, muy poco antes de la aparición de la revista *Pensamiento crítico*, y algunos comentaristas extranjeros confundidos dijeron que ésta venía a desempeñar el papel de la anterior. Nosotros rechazamos esa creencia: no queríamos, de ningún modo, ser considerados una revista oficial. Lo interesante es que en Cuba, que yo sepa, a nadie se le ocurrió esa idea.

Quisiera referirme brevemente a esa revista mensual de pensamiento social, cuyo colectivo de trabajo me tocó dirigir. *Pensamiento crítico* nació en el último trimestre de 1966, como parte de la expansión de actividades emprendida por el Departamento de Filosofía desde fines de 1965; publicó 53 números entre febrero de 1967 y el verano de 1971. Para ahorrar tiempo aquí, les sugiero leer el ensayo de Néstor Kohan “Pensamiento crítico y el debate por las ciencias sociales en el seno de la revolución cubana”, que está siendo divulgado por la revista *Criterios*. El autor ofrece cuantiosos datos y análisis profundos y muy acertados, a mi juicio, sobre la revista y el conjunto del tema que su título anuncia. Completo este tema leyendo fragmentos de una valoración reciente que hice de aquella publicación, en la entrevista que me hizo Julio César Guanche para *La Jiribilla*, con motivo del premio de ciencias sociales.

Formábamos parte de la gran herejía que fue la revolución cubana de los años sesenta. Una de las ventajas de la revista fue la de deberse a la revolución, pero sin

convertirse en una oficina determinada de una instancia específica. Eso le daba la posibilidad de expresarse como revolucionaria, pero sin otra sujeción que la del compromiso libre y abiertamente asumido con la revolución.

Opino hasta hoy que sin esa condición el pensamiento revolucionario no logra aportar, y no puede satisfacer, por tanto, la necesidad inexorable de pensamiento que tiene la política revolucionaria. En América Latina los compañeros que luchaban y los partidarios de cambios revolucionarios veían a la revista como expresión militante de la revolución cubana y del internacionalismo. Esa percepción era compartida por los que conocían nuestra publicación en las demás regiones del mundo, con las consecuencias de cada caso.

La revista era polémica, y más de una vez sumamente polémica. De no ser así, no hubiera valido la pena.

Después de tantos años he entendido mejor el significado de *Pensamiento crítico*. Fue un hecho intelectual protagonizado por jóvenes de la nueva revolución, que tenía como contenido los problemas principales de su tiempo, desde una militancia revolucionaria del trabajo intelectual. Combatí con ideas, con la elección de sus temas y con la presentación de hechos, problemas e interrogantes que las estructuras de dominación suelen ocultar o deformar, sin temor a la crítica de las ideas y del propio movimiento al que entregábamos nuestras vidas, en busca de la creación de un futuro de liberaciones y bienandanzas. Pensó por ser militante, no a pesar de serlo, y fue una de las escuelas de ese ejercicio indeclinable. Contribuyó a la formación de numerosos revolucionarios y su práctica significó un pequeño paso hacia adelante en la difícil construcción de una nueva cultura. El pensamiento revolucionario carecía de desarrollo suficiente para enfrentar estas novedades, porque el marxismo había sufrido demasiado... y otras ideas que también eran revolucionarias resultaban insuficientes ante los retos de unir nacionalismos y luchas socialistas, civilización moderna con negación liberadora de la modernidad, diversidades culturales con unidad de proyectos. Sin embargo, entre todos los involucrados conseguimos hacer retroceder la colonización mental. Y *Pensamiento crítico* fue uno más entre los escenarios de aquel combate de ideas.

Alrededor de 1970 las limitaciones del proceso revolucionario se hicieron visibles. El plan de desarrollo económico socialista acelerado del país se vio constreñido a apelar a la mayor capacidad de producción instalada que poseía y poner todo el esfuerzo en la producción masiva de azúcar para obtener recursos y nivelar el comercio exterior, pero la gran zafra no alcanzó los diez millones de toneladas proyectados y el esfuerzo dislocó y agotó la economía nacional. Por otra parte, no hubo victorias revolucionarias en América Latina –y sí la dramática pérdida de la vida del Che en 1967–, ni espacio para alianzas con países que fueran realmente soberanos y autónomos frente a los Estados Unidos. Atenazado por una coyuntura muy desfavorable, y después de maniobrar dentro de la posición que había sostenido, el proceso cubano inició cambios profundos en numerosos aspectos, y su proyecto fue recortado.

En ese marco, el pensamiento social sufrió una sujeción a cambios que provocaron la detención de su desarrollo, y un gran empobrecimiento y dogmatización. Mis recuerdos del último año en que trabajé en ese campo, más precisamente entre septiembre de 1970 y noviembre de 1971, son los de una tragedia en la que

las necesidades del Estado parecían más decisivas que los criterios ideológicos o teóricos. Después de reuniones y discusiones entre revolucionarios que duraron meses, la dirección del país decidió el cierre de la revista *Pensamiento crítico* en agosto de 1971, y el cese del Departamento de Filosofía en noviembre. Siempre recordaré, entre otras demostraciones de numerosos compañeros, la actitud fraternal de Jesús Montané, entonces secretario organizador del PCC, y la forma en que el presidente Dorticós cumplió su papel en aquel proceso. Atuve mi conducta durante aquel último año a lo que consideré mi deber, corrí las consecuencias de mis actos y nunca me he arrepentido de lo que hice.

Después he intentado valorar algunas veces cómo pudo perderse tanto en ese campo. Para explicar los cambios iniciales, un factor, sin duda, fue el insuficiente desarrollo en el tiempo de aquella actividad, tan fructífera como novedosa en nuestro país, que estaba lejos de sedimentarse y tornarse algo natural, y carecía de normas que la protegieran. Otro factor, a mi juicio principal, fue la percepción de la necesidad de conservar a todo trance la unidad política en una situación difícil, ante la posibilidad de divergencias entre revolucionarios por ideas radicales que formaban parte del acervo de la propia revolución. Recuerdo a un dirigente de sólida formación intelectual e ideas muy avanzadas que dijo de nuestro caso: "Había que cortar por lo sano, y eso siempre significa cortar una parte sana". Otro factor de las decisiones puede haber sido que no se creyó estar cediendo en un terreno vital, mientras se conservaba el control de otros que obviamente sí lo eran. En esto pueden haberse reunido el error de cálculo ante la coyuntura con la incompreensión de que el pensamiento social ha sido sujetado y han disminuido sus funciones críticas durante el desarrollo del capitalismo en el siglo XX; de que se vuelve, incluso, frágil y poco eficaz. Los poderes socialistas están obligados a no asumir ese rasgo cultural del capitalismo que –como tantos otros– trata de introducirse en el curso de las modernizaciones de sus países; por el contrario, deben combatirlo abiertamente.

Por último, no fue posible evitar –por la combinación de las medidas tomadas con el quebranto de las funciones y rasgos que había tenido el pensamiento social– la emergencia de una forma autoritaria de especial virulencia, el dogmatismo. Aunque asociado al sectarismo en los primeros tiempos del proceso revolucionario, el dogmatismo demostró ser capaz de sobrevivir a la bancarrota de aquella política, volverse importante como medio de control social en la segunda etapa del proceso y coexistir hasta el día de hoy con otros modos de comportamiento social. Sería muy positivo que su análisis formara parte de las investigaciones sociales actuales, que encontráramos las causas de su pervivencia y su pertinacia, a qué fenómenos y aspectos de la vida social responde, para combatirlo mejor. Sintetizo aquí diez rasgos suyos, por si puede ayudar para nuestras tareas actuales: 1) la pretensión de poseer todas las preguntas permitidas y todas las respuestas infalibles, que tiene un fundamento extraintelectual y es funesta para la política revolucionaria; 2) servir de fundamento a la legitimación de lo existente y la obediencia a su orden, con lo que se fomenta el inmovilismo y actitudes individuales perjudiciales; 3) privar de capacidad para enfrentar los problemas, y mucho menos para buscar sus fundamentos y sus raíces y plantearlos bien; 4) ser inútil, entonces, dentro del mundo del pensamiento, pero crear confusión o resignación con su so-

berbia y su capacidad de neutralizar o atacar lo que es útil; 5) ser ajeno y opuesto a la actitud y el contenido del pensamiento revolucionario, y, sin embargo, erigirse en su supuesto defensor y representante; 6) atribuir corrección o maldad a todo pensamiento, fijar posiciones incuestionables respecto a lo que existe, lo que se debe comunicar, investigar, debatir o estudiar, y orientar las opiniones generales que deben sostenerse en la política, la economía, la educación, la divulgación, la historia y la apreciación de las artes; 7) sustituir los exámenes, los debates y los juicios sobre las materias que considera sensibles por la atribución arbitraria y fija de denominaciones y valoraciones sobre ellas, o de lugares comunes que las dejan fuera del campo del conocimiento; 8) satanizar y tratar de prohibir el conocimiento o la simple información de todo lo que considere perjudicial o maligno, que suele ser todo lo que no califique de bueno; esto se complementa con la acusación a compañeros de estar influidos o “desviados” por aquellas posiciones perversas y erróneas, imputación que puede ser abierta o tortuosa, como cuando se les “reconoce” que quizás no se desvían intencionalmente, pero que se desvían; 9) conspirar, por consiguiente, contra la ampliación y profundización del socialismo, y favorecer la permanencia de las relaciones sociales y la moral de la sociedad que queremos abolir y superar; y 10) desarmarnos frente a las reformulaciones de la hegemonía cultural del capitalismo, a la cual ignora o desprecia, y fomentar situaciones y conductas esquizofrénicas, en las que se abomina el capitalismo y se consumen sus productos espirituales.

Lo cierto es que el empobrecimiento y la dogmatización del pensamiento social se agravaron y se consolidaron en el curso de aquella década del setenta, y los cambios positivos en el campo cultural y la fundación del Ministerio de Cultura no cambiaron su situación. El primer golpe real que recibieron fue el inicio del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas en 1986. A pesar de la rica historia de avances de los últimos veinte años, que en algunos aspectos es notable, y de que una parte de aquellos rasgos negativos desapareció, otra parte permanece y se ha vuelto crónica, mucho después de desaparecida la situación que la creó. Ha faltado un proceso amplio de análisis crítico de lo que sucedió, que tuviera como único objetivo la formación a través de la información y del debate, para que todos se beneficiaran de nuestra experiencia cubana y se volvieran más capaces de enfrentar los nuevos retos que estos veinte años nos han deparado. Creo que este es un factor importante entre los que llevan a algunos hoy a la idea errónea de convertir los hechos y situaciones de inicios de los años setenta en un ejemplo agudo de una característica inherente al socialismo, lo que llevaría, consecuentemente, a descalificarlo como sistema y como aspiración de la sociedad. En mi opinión, ha sido muy positiva la reciente condena pública de los dolorosos episodios de cacerías de brujas o las prácticas infames en el trato entre compañeros, y tendremos que insistir en ella y sacar provecho de la lección de que lo sano es ventilarlos de ese modo y no dejar que el mal se pudra en lo oscuro y nos pudra lo hermoso. El joven Carlos Marx escribió, con razón, que la vergüenza es un sentimiento revolucionario. También será fructífero, y sin duda trascendente, que nos apoderemos de toda nuestra historia, que investiguemos sus logros, sus errores y sus insuficiencias, sus aciertos y sus caídas, sus grandezas y sus mezquindades, y convirtamos el conjunto en una fuerza más para enfrentar los problemas actuales

de la revolución y la transición socialista, y para reformular y hacer más ambicioso nuestro proyecto de liberación.

no podemos repetir la división entre las elites y la mayoría de la población en la producción y el consumo de los productos intelectuales y culturales valiosos

El pensamiento social cubano es uno de los temas que me ha llenado de labores y afares a lo largo de toda mi vida de adulto. Termino con unos pocos comentarios muy generales acerca de sus problemas actuales con el fin de que contribuyan en algo a lo que es para todos nosotros prioritario: el presente y el futuro de Cuba.

Sin dudas, nuestro país venció a la tremenda crisis de la primera mitad de los años noventa. Pero, ¿cómo salió? ¿Qué secuelas le quedaron? ¿En qué medida y en qué formas ellas pueden afectar su rumbo actual? ¿Qué nuevas dificultades se levantan? ¿Cómo identificar los problemas de fondo, y cómo enfrentarlos eficazmente? La movilización de recursos humanos y materiales para acciones sistemáticas dirigidas contra las desigualdades que se crearon y a favor de aumentar las oportunidades de los grupos sociales más afectados es fundamental para la reconstrucción y defensa del socialismo como línea rectora del esfuerzo social. También lo son las medidas que permitan que el polo socialista sea el más fuerte. Pero es imprescindible congeniar esa movilización y esas medidas con las necesidades y las expectativas de una población que ha multiplicado sus capacidades. Y eso deberá pasar por complejos procesos que de manera organizada y hasta algún punto planeada desarrollen la conciencia, la creación de riquezas y el buen gobierno. Por si lo anterior fuera poco, todo debe conseguirse en medio de una pugna de vida o muerte con el capitalismo, que va desde la sistemática agresión del imperialismo hasta la siempre renovada persistencia de rasgos del capitalismo entre nosotros, y dentro de cada uno. El capitalismo conduce una formidable guerra cultural mundial, en la que pretende triunfar desde la vida cotidiana y los procesos civilizatorios, y a través de un gran movimiento de privatización ideal y material. Con armas anticuadas no se puede combatir en esta guerra, y mucho menos con las que nunca sirvieron.

Si algo es seguro para el pensamiento y las ciencias sociales cubanas es que la sociedad los necesita para que la ayuden a enfrentar sus problemas centrales y mantener y formular mejor su proyecto, pero ni las condiciones en que estas disciplinas trabajan hoy, ni ellas mismas, tienen suficiente desarrollo frente a los retos del presente y del futuro que alcanzamos a entrever. Varios rasgos negativos del mundo espiritual actual pesan sobre ellas. El apoliticismo y la conservadorización de ideas y sentimientos no es nada desdeñable. Afecta a la perspectiva, el contenido y la autovaloración del trabajo del pensamiento y del científico social, pero también al tratamiento y la orientación que se le da por parte de órganos de la sociedad. Las influencias externas también suelen proponer paradigmas y asuntos ajenos a nuestras necesidades.

Quiero repetir que contamos con una masa muy numerosa de profesionales capacitados y concientes, y de trabajos investigativos que tienen real calidad, que contamos con instituciones de investigación y de docencia, pero tenemos un déficit notable en cuanto a formación teórica. Urge superar el medio teórico existente y, sin embargo, carecemos de información al día al alcance de los interesados –también en cuanto a las ciencias sociales–, y en muchos planteles se sigue enseñando a los adolescentes y jóvenes versiones inaceptables del marxismo. Si no se priorizan los problemas principales del país como temas principales de las investigaciones sociales, se dañarían las relaciones de nuestro campo con las necesidades del país, tanto en identificar, plantear bien y ayudar a solucionar problemas como en temas culturales e ideológicos muy importantes. Son muy perjudiciales los límites que se ponen a los investigadores y al conocimiento de los resultados de investigación. Llega a ser habitual para muchos limitarse –o limitar a otros– en unos campos en los cuales para ser militante hay que ser inquisitivo, crítico, audaz, honesto y no temer equivocarse.

Insisto en que el trabajo intelectual en disciplinas sociales en una sociedad de transición socialista está obligado a ser muy superior a las condiciones de existencia vigentes: no sirve de mucho si sólo se “corresponde” con ellas. Y el consumo de los productos que una sociedad cultísima elabora acerca de sí misma no puede ser dosificado u ocultado, como si las mayorías no fueran capaces de hacer buen uso de ellos, como si no tuvieran la extraordinaria cultura política de los cubanos, que es la mayor riqueza humana con que contamos. En una sociedad como la nuestra, que ha hecho una apuesta tan colosal hacia el futuro y ha logrado sobrevivir, resistir y avanzar tanto, no podemos repetir la división entre las élites y la mayoría de la población en la producción y el consumo de los productos intelectuales y culturales valiosos. Esa es una característica del capitalismo, aun en sus formas democráticas. Nosotros estamos obligados a trabajar por eliminarla.

Opino que hoy estamos en una coyuntura muy positiva para que se produzcan recuperaciones y avances en el pensamiento y las ciencias sociales cubanas, que hoy están reuniéndose la conciencia, la necesidad y la voluntad. Como en todos los momentos cruciales de las sociedades, los intelectuales –como dijo una vez Raúl Roa–, por estar dotados para ver más lejos y más hondo que los demás, están obligados a hacer política. Y en este caso hacer política es hacer pensamiento y ciencias sociales con calidad, libertad y militancia socialista. Soy optimista respecto a nuestras posibilidades actuales y del futuro inmediato, pero no me refiero a un logro conseguido, sino a una lucha y un propósito que puede unirnos mejor a los cubanos en nuestra diversidad, darnos más fuerzas que las palpables y constituir la mejor defensa del socialismo, que es profundizarlo.

¿Cómo podrán el pensamiento y las ciencias sociales cubanas trabajar eficazmente y a favor de la alternativa socialista? La pregunta nos asoma a un tema crucial, que requerirá grandes esfuerzos y debates. Seguramente tendrán que avanzar mucho para lograrlo, pero es indispensable también que sean reconocidas y apoyadas en su autonomía militante, que se tenga por buena su especificidad y su ejercicio irrestricto del criterio, que no sean un adorno ni una actividad permitida. Y aunque siempre dependerá de sus labores y sus aciertos el contenido de su éxito, este será posible sobre todo en la medida en que triunfe la alternativa de

liberación, la de la solidaridad humana, socialista e internacionalista, no la del individualismo, el egoísmo, el afán de lucro, la soberbia y el poder de unos pocos. Es decir, que triunfe el socialismo sobre el capitalismo, y también que triunfe el socialismo dentro de la transición socialista. Muchas gracias.

Referencias bibliográficas

Guanche, Julio César 2007 "El poder debe estar siempre al servicio del proyecto", en *La Jiribilla de papel* (La Habana: Instituto Cubano del Libro) N° 66.

Kohan, Néstor 2006 "Pensamiento crítico y el debate por las ciencias sociales en el seno de la revolución cubana" en *Criterios* (Buenos Aires: CLACSO). En <www.criterios.es>.

Pogolotti, Graziella 2006 *Polémicas culturales de los 60* (La Habana: Letras Cubanas).

Notas

1 Palabras leídas por el autor el 3 de julio de 2007 en el Instituto Superior de Arte de La Habana como parte del ciclo "La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión", organizado por el Centro Teórico-Cultural "Criterios".

2 © Fernando Martínez Heredia, 2007. Cuando se cite, en cualquier soporte, alguna parte de este texto, se deberá mencionar a su autor. Se prohíbe reproducirlo y difundirlo íntegramente sin las previas autorizaciones escritas correspondientes.

Reseñas bibliográficas

***De Hacia la recuperación de la
soberanía educativa en América Latina:
conciencia crítica y programa***

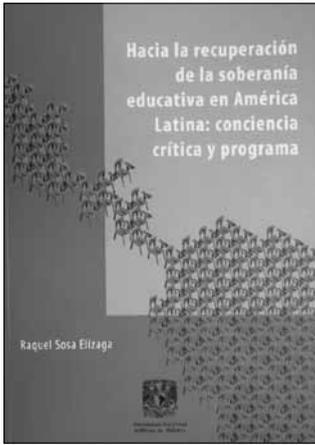
Marath Baruch Bolaños López

***De Sociabilidades emergentes
y movilizaciones sociales
en América Latina***

Efraín Quiñonez León

De Zapata cabalga por el Tepozteco

Valentina Sarmiento Cruz



Hacia la recuperación de la soberanía educativa en América Latina

conciencia crítica y programa

RAQUEL SOSA ELÍZAGA
México, UAM/CLACSO, 2012

MARATH BARUCH BOLAÑOS LÓPEZ

Licenciado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estudiante de maestría en el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El libro de la doctora Raquel Sosa Elízaga titulado *Hacia la recuperación de la soberanía educativa en América Latina: conciencia crítica y programa*, es el resultado de una investigación que nace con la intención de incidir en un debate en cuyo centro se encuentra la educación en los países de América Latina. La autora se pregunta: ¿qué hizo posible la destrucción de la educación en nuestros países, pese a la riqueza del pensamiento, la existencia de tradiciones pedagógicas reconocidas de larga data y, sobre todo, la gran creatividad e inteligencia de nuestros pueblos?

En la actualidad, somos testigos de la vulneración de la comunidad educativa por la introducción de lenguajes, procedimientos, comportamientos y actitudes muy distintas a las heredadas y que nos dieron identidad, memoria, y de donde se nutre nuestra imaginación. Existe en nuestra región un franco deterioro y mercantilización de las escuelas, e imposición de patrones que, en lugar

de promover el aprendizaje a partir del despliegue de la natural creatividad de niños, niñas y jóvenes, han sido contruidos para disminuir, controlar y desviar su energía vital.

Pero, ¿quiénes son los responsables de la debacle educativa? ¿Dónde podemos encontrar los prolegómenos de la destrucción de nuestra educación? Para responder a dichas interrogantes, la investigación de la doctora Raquel Sosa comienza con un estudio histórico sobre el derecho a la educación que cruza por los procesos sociales y políticos de nuestras sociedades. Para llevar adelante este recorrido, la autora se remonta hasta los años de la Colonia y desde ahí transita por nuestros países a través de los procesos emancipatorios y los diversos proyectos constitutivos de nación en el siglo XIX, donde la educación es concebida como garantía de la conformación de la soberanía popular, la principal salvaguarda de la memoria y voluntad colectiva e, igualmente, la expresión de la identidad nacional.

De la misma forma, aborda los sucesos acaecidos a lo largo del siglo XX, etapa de grandes conquistas en derechos sociales y de las luchas por la educación universal. Dicho siglo también fue habitado por diversas experiencias revolucionarias –como México y Cuba–, así como por los contragolpes oligárquicos que depusieron violentamente las genuinas experiencias políticas de los gobiernos populares. Estos eventos fueron seguidos por el arribo de las oleadas neoliberales cuyo viraje político-económico –bajo el denominado ajuste estructural– vino mielgo de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) que, entre otros devastadores efectos ya conocidos, intentaron atajar el paso al pensamiento crítico y las ricas tradiciones pedagógicas en el continente por medio del diseño e implementación de políticas que desmontaron el principio de la universalidad de la educación, así como la concepción que la define como derecho social y responsabilidad del Estado, y de esta manera revalorarla como un espacio más de rentabilidad e inversión, es decir, como una oportunidad, un privilegio.

Ya en el colofón del siglo XX y por medio del denominado ajuste estructural, entendido como un conjunto de medidas impuestas por el FMI a los gobiernos de la región en el marco de la crisis de la deuda externa, se produjo la debacle de las economías de los países latinoamericanos. Dicho ajuste estructural provocó niveles de empobrecimiento, desigualdad y exclusión abismales, traducidos en un galopante deterioro de las condiciones de vida y trabajo de buena parte de la población. Las medidas serían impuestas bajo el despliegue de la mayor violencia estatal en décadas, usada como principal instrumento de coerción y subordinación colectivas y en cuyos objetivos se encontraba la destrucción de la capacidad de resistencia social que se hizo presente tras la disminución radical del Estado en educación, salud y seguridad social, entre otros ramos. La autora documenta esta etapa con una fecunda serie de datos que dan concreción a la investigación, pues muestra el desarrollo de este período con el cruce de variables como las del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto social y el índice de precios, con las de la población total de los países seleccionados en la muestra, la distribución del ingreso, la población en condiciones de pobreza, el empleo y el desempleo, la migración y el analfabetismo, entre otros.

La obra de Raquel Sosa nos lleva de la mano al entendimiento profundo del problema de la educación en nuestros días. Una de sus tesis al respecto gira en

torno a la destrucción de la educación como un medio de apropiación del Estado. Al igual que la dirección de las políticas económicas en América Latina, otros aspectos de la vida social fueron determinados heterónomamente. Así se entregó la conducción de la política educativa de nuestros países a los organismos internacionales. Las reformas educativas, propuestas por el BM y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo e implementadas por los gobiernos latinoamericanos bajo el eufemismo de la descentralización, tenían entre sus ejes mantener una estructura central de mando con la cual el BM llevaría las negociaciones. Asimismo, se planteaba la eliminación de todos los programas que no estuvieran incluidos en el plan de modernización educativa al sustituir el derecho a la educación con la fórmula de igualdad de oportunidades, acceso condicionado y focalización, así como con la ejecución del esquema de calidad y competencia. Se proponía, además, desarticular las redes corporativas de burocracia y las sindicales, y también limitar el poder de los funcionarios medios. Por otro lado, sugerían reorganizar planes y programas de estudio, así como fortalecer los vínculos de las empresas con las instituciones educativas y, finalmente, reducir sustantivamente el presupuesto estatal para el ramo educativo con miras a su futura privatización. Este proceso vino acompañado del descrédito, la desarticulación y la flexibilización laboral del magisterio.

Para ejemplificar lo arriba explicado, la autora reconstruye la historia de destrucción de la educación en sus casos más emblemáticos, a saber, Chile, Colombia y México. Es en estos países donde aconteció una intervención explícita y cumplimiento a la letra de las instrucciones del nuevo rector de la educación a partir de la década de los años ochenta del siglo XX: el Banco Mundial. Los cambios en estos países comenzaron, primero, a través del rediseño institucional y de reformas legislativas. En segundo lugar, mediante la destrucción del sindicalismo magisterial que se lanzó en defensa de la educación pública, en lucha por mejores condiciones de trabajo e, indudablemente, en resistencia contra las medidas de la reforma.

El propósito de este rediseño institucional y legislativo era modificar a fondo la conciencia y las expectativas de la sociedad, e insertarla en la lógica de los presupuestos del modelo económico. Las metas de la reforma educativa y la reconversión del andamiaje institucional suponían la incorporación de la fuerza del trabajo al mercado. Nada más lejos de la realidad. Los indicadores a los que recurre la autora muestran que, para este período, la reforma en realidad heredó una gran fragilidad económica y social a las generaciones que se educaron bajo su égida. El caso chileno es representativo de esta situación. En cuanto a Colombia, esta inserción en la reforma estuvo marcada no sólo por la violencia del régimen político-económico excluyente, sino también por la violencia explícita desplegada como principal forma de hegemonía en el país. Para el caso de México, no fue sino posteriormente a la debacle económica –sortear la crisis de la deuda de los años ochenta– y del conflicto político tras el fraude electoral de 1988 que se estuvo en condiciones de repensar y actuar para “resolver” la crisis educativa. En la fórmula aplicada en México se combinaron más claramente los dos procedimientos, es decir, el rediseño institucional y la destrucción o control de los sindicatos de trabajadores de la educación, sumado al aumento de la injerencia del Banco Mundial tras los últimos gobiernos mexicanos, ya en el siglo XXI.

A pesar del funesto panorama, destacan otras experiencias de pueblos que, tras la conquista de espacios en los gobiernos, intentan contestarle a la influencia del BM y de otros organismos internacionales sobre la educación. Nuevamente, y como pasó en otro momento, para los gobiernos populares instalados actualmente en América Latina la educación se ha vuelto un pilar básico que apuntala la reconstrucción de la soberanía popular, el establecimiento de condiciones para un ejercicio democrático y, principalmente, las posibilidades de plantear un verdadero desarrollo basado en la justicia social en reconocimiento de la diversidad. Destacan aquí los casos de Argentina y Brasil. En el primer caso fueron las manifestaciones y demandas por el derecho a la educación encabezadas por diversos movimientos de resistencia de docentes y estudiantes, entre otros, los que abrieron el espacio de crítica y debate educativo. Lo anterior fue seguido por las reformas promovidas por Néstor Kirchner, que modificaron distintos campos de la vida pública, incluyendo la educación, y aseguraron una mayor autonomía de decisión sobre la política educativa, en contraste con la etapa anterior, donde la educación estaba orientada fundamentalmente por los organismos internacionales.

Para el caso brasileño, han sido los programas sociales –como Bolsa Familia– los que han permitido paliar los indicadores de pobreza y pobreza extrema del país y, en consecuencia, han modificado las condiciones necesarias para revalorar a la educación como un derecho. Aquí es preciso resaltar que la autora no elude en ningún momento las debilidades y contradicciones de ambos modelos.

Otras de las experiencias de recuperación de la soberanía educativa son encabezadas por Cuba, Venezuela y Bolivia. Toda proporción guardada, el reto aquí lo constituye reconocer a la educación como derecho universal y esto implica garantizar los requerimientos de alimentación, salud, vivienda digna, transportes, materiales educativos y vestido de sus estudiantes, así como construir a partir de la educación una identidad colectiva propia, una concepción ajena al mercantilismo, al individualismo y la propiedad privada: en otras palabras, una nueva perspectiva de la soberanía popular. Para el caso cubano, la autora destaca la concepción de soberanía como eje del programa social y educativo. La educación para la isla se ha convertido en un elemento fundamental de la vida y la política pública del gobierno revolucionario. Es la constatación empírica de que, aun con escasos recursos y en medio del bloqueo más feroz de la historia, es perfectamente posible lograr incorporar a la educación al conjunto de la población. Cuba es el país con más desarrollo educativo del continente, el que posee el índice de mayor desarrollo cultural y humano del subcontinente, y uno de los mayores en el mundo. La investigación insiste en que fue sobre las bases de la Revolución cubana que se consolidó la consideración de la educación como eje de la recuperación de la soberanía frente a las amenazas externas y para la construcción de un nuevo régimen.

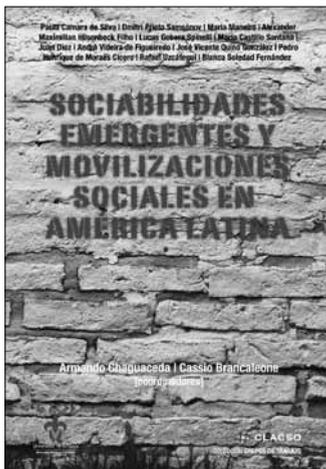
Igualmente se estudian las experiencias en materia educativa de Venezuela y Bolivia en los últimos años. En cuanto a Venezuela, el arribo de Hugo Chávez con gran apoyo popular supuso un cambio fundamental en la vida pública del país que contempló, en su eje principal, la recuperación del papel del Estado en asuntos estratégicos de economía, política y vida social. El sistema de programas sociales –misiones Barrio Adentro, Mercal, Vuelvan Caras y Vivienda y Hábitat– inauguró en Venezuela una forma de gestión estatal en que la política social se convirtió en

parte fundamental de la militancia y la organización popular para la transformación social. Sobresalen así las “misiones de alfabetización” y la creación de nuevas instituciones de educación que permiten mayor incorporación de la sociedad al campo educativo. Respecto a Bolivia, el desafío va más allá. Las transformaciones sociales en el país andino pasan no sólo por consolidar a la educación como derecho universal, sino también por franquear la brecha impuesta a los pueblos originarios en el tema educativo, es decir, promover una educación que reconozca su identidad y la inclusión de un sujeto con voluntad y capacidad de ejercicio de sus plenos derechos.

Por último, es preciso señalar un gran acierto del libro de Raquel Sosa: haber hecho un estudio sobre la educación a través de una revisión histórica crítica de nuestras sociedades, desglosando en diversos pisos de análisis los efectos de los drásticos procesos de desarticulación y desnacionalización de la economía y el orden público, la reducción violenta de los incrementos inestables del PIB y del presupuesto gubernamental, el deterioro sistemático de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y el empobrecimiento y pérdida de calidad del sentido de espacio público.

Resulta complicado reseñar en pocas cuartillas –tarea que, por lo demás, no estaríamos en capacidad de cumplir sin sacrificar parte de su riqueza– un libro que realiza un análisis denso y serio sobre la problemática de la educación en nuestros países. El libro de Raquel Sosa se propone el reto de estudiar integralmente el problema y no elude variables para realizar dicho propósito. Es un texto provechoso, que tras un nutrido despliegue de datos, de un agudo análisis cualitativo de la situación de la educación y, a su vez, de una posición política clara –pero también objetiva–, nos brinda un halo de esperanza.

Se aleja decididamente de las visiones que sitúan al problema educativo como un problema de presupuestos. Nos ayuda a entender que la educación es un tema mucho más profundo que involucra el núcleo de lo que se entiende por espacio público en América Latina –espacio de todos, nuestro territorio, poblado por seres humanos diversos en sus características, origen y condición social, como plurales en su ideología, preferencias, hábitos y formas de organización– y en cuyo fondo se encuentra el eje de disputa del Estado y su significado, a su vez, como espacio público. A propuesta de la autora, el reconocimiento de lo anterior nos permitirá, por un lado, reencaminar las iniciativas en un sentido contrario al impuesto a lo largo de las últimas décadas y realizar así transformaciones sustantivas y sensibles desde el aula, la comunidad y la nación; por el otro, ser la obertura de un debate público y académico, con nuevas investigaciones e interrogantes sobre el ejercicio de la crítica y la revalorización del pensamiento propio como eje rector de la educación.



Sociabilidades emergentes y movilizaciones sociales en América Latina

ARMANDO CHAGUACEDA NORIEGA
Y CASIO BRANCALEONE
(COORDINADORES)
Buenos Aires, CLACSO/
Universidad Veracruzana, 2012

EFRAÍN QUIÑÓNEZ LEÓN

Doctor en Ciencias Antropológicas, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana.

El volumen *Sociabilidades emergentes y movilizaciones sociales en América Latina* forma parte de los esfuerzos que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) viene realizando a fin de promover la investigación social e incentivar el trabajo académico colectivo. Adicionalmente, semejante labor debe ser reconocida porque brinda la posibilidad de hacer comparaciones entre distintas experiencias y favorece el intercambio entre pares académicos. Y favorece, en el formato de coediciones, la cooperación en los ámbitos investigativo y editorial con diversas entidades de la región.

En ese sentido, este libro es producto de la labor colectiva emprendida por el Grupo de Trabajo “Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes”. En particular, debe reconocerse la iniciativa tomada por sus coordinadores, Armando Chaguaceda y Cassio Brancaleone, a fin de reunir a un conjunto muy diverso de estudiosos de la realidad social latinoamericana bajo una perspectiva que, si bien recupera parte de la literatura sociológica clásica, trata de ser comprometida con su entorno y su tiempo; lo que la hace diferente de aquellas posturas asépticas que pasan por objetivas, con la indolencia o el abierto rechazo a prácticamente cualquier forma

de disidencia social. Por ello, los autores tratan de ir más allá de los esfuerzos democratizadores en actores institucionales, de tal manera que no se pierdan los registros de las “prácticas y representaciones sociales emergentes”.

El libro se organiza en tres partes sustantivas. La primera de ellas intenta situar teóricamente el tema de los sujetos y los procesos sociales emergentes. Por un lado, se trata de revalorar al sujeto de la acción social, al mismo tiempo que ella se inscribe en un universo simbólico que no sólo determina modelos de actuación sino que, además, posibilita formas de inserción en la realidad social con el fin de modificar o estabilizar la distribución de los recursos sociales en un campo determinado de conflictos.

Por otra parte, una segunda entrega reconoce que aun los sistemas que históricamente se habían considerado como liberadores, han resultado modelos contruidos sobre la base de una renovación de las formas de opresión y dominación. Reconociendo que las nuevas expresiones de inconformidad y de protesta utilizan toda una serie de recursos a su alcance, para los autores resulta imprescindible articular las fuerzas y nuevos actores populares en propuestas emancipadoras viables, que necesariamente requieren una apreciación teórica desde y hacia el poder. El eje conceptual de semejante empresa se materializa en el término de transdominación, propuesto por el investigador Dmitri Prieto en su texto, el cual significa la emergencia de un nuevo sistema de dominación en el seno de un proceso liberador exitoso.

La segunda sección del libro recupera un conjunto muy diverso de experiencias de resistencia en el contexto latinoamericano, sin dejar de lado incursiones desde algún punto de vista teórico, a través de los cuales puedan ofrecerse explicaciones plausibles de los fenómenos acometidos. Así, se intentan desentrañar los contenidos -digamos- íntimos de la diversidad de formas asociativas descritas tanto en términos de las prácticas, su funcionamiento interno, los temas que enarbolan y las propuestas innovadoras que intentan realizar. También, la identidad colectiva es un eje conceptual en esta recuperación de experiencias de resistencia, misma que se explora en una diversidad de movimientos de protesta como las organizaciones de desocupados en Buenos Aires, Argentina; el movimiento zapatista en México y sus formas de autogobierno; así como la lucha de los Sin Tierra en Brasil, en la que se destacan las posibilidades pedagógicas del teatro. Desde luego, el tema de la etnicidad está presente en varios de los casos apuntados, pero llama la atención los cruentos episodios de racismo y discriminación de los ñáñigos cubanos, en donde se relatan sucesos del siglo XIX sobre prácticas libertarias que se han tratado de silenciar.

La última parte del libro nos convoca al análisis de la relación entre los movimientos sociales y el sistema político. Bajo esta lógica, se traen a la reflexión los casos de Ecuador, Venezuela, Cuba, Guatemala, Brasil y México. En este sentido, se describen los alcances y limitaciones de los propios esfuerzos de la acción colectiva y de protestas sociales contemporáneas.

Para el caso de los neo-zapatistas si bien se reconoce “el distanciamiento del modelo tradicional de organización política, al desplazar las luchas dirigidas al Estado y al sistema político hacia formas de acción que conciernen a la vida cotidiana y que se orientan más bien a modificar matrices culturales, formas de so-

ciabilidad así como de pensar y hacer política”, también se nos informa sobre las dificultades de replicar estas experiencias más allá de las propias comunidades zapatistas en el sureño estado de Chiapas y los riesgos latentes derivados tanto de la fragmentación y el aislamiento, así como del cerco militar y el acoso de los grupos paramilitares. La experiencia brasileña, por su parte, se sitúa en los procesos de construcción material y simbólica del territorio de una comunidad negra rural dedicada a la producción primaria, que justamente por el largo proceso de apropiación del espacio reivindica como derecho no sólo la propiedad colectiva sino que, además, construye una identidad basada en los vínculos con la tierra.

El caso guatemalteco se encara desde la dominación ejercida por sucesivos gobiernos autoritarios que dieron lugar a una sangrienta lucha armada y un largo interregno de gobiernos militares que perduró hasta la primera mitad de los años ochenta del siglo pasado. Este ciclo prácticamente se cierra con la firma de los acuerdos de paz en 1996, lo que a su vez da lugar a una apertura en el sistema político con la incorporación de la guerrilla (en particular, la URNG) a las disputas por el poder mediante la vía electoral. Sin embargo, la acción colectiva de los movimientos sociales con un perfil contestatario quedó atrapada en las redes del poder político estatal, al mismo tiempo en que se imponía el modelo económico neoliberal; lo que quizás no pueda interpretarse como una derrota, muestra al menos alguna forma de mediatización de las iniciativas sociales encuadradas en el “horizonte liberal de la acción colectiva”.

En Cuba, por su parte, el análisis se sitúa entre los incentivos estatales a la participación y las prácticas innovadoras como resultado de la constitución de nuevos grupos y asociaciones diversas. Se enfatiza que el peso de las estructuras estatales dificulta una acción eficaz frente a las expectativas y demandas sociales. Por lo tanto, se impone la necesidad que actores no estatales puedan cumplir una función de evaluación y corrección de las políticas públicas. Con todo, nuevas sociabilidades se abren paso alejadas de las estructuras estatales a fin de conservar su autonomía, pero lamentablemente son aún muy débiles y enfrentan problemas organizativos, de articulación y por la precariedad de sus recursos.

Por su parte, la experiencia venezolana es abordada desde el análisis de las bases de apoyo del gobierno chavista, sus diversas corrientes y las contradicciones que presentan. Como en varias de las experiencias narradas, se observa al Estado como uno de los principales protagonistas que despliega toda una estrategia de organización de la sociedad. Sin embargo, las disputas al interior de los propios grupos hegemónicos del régimen de Chávez no está resuelta, dando lugar a un escenario que puede conducir a una fortaleza del poder concentrado en Hugo Chávez, o bien se fortalecen las fuerzas populares que podrían ampliar los márgenes de la democratización. Finalmente, el caso de Ecuador se aborda también desde la perspectiva del Estado, pero ahora bajo el análisis de la construcción de la nacionalidad que se fundó sobre la exclusión y el nulo reconocimiento a las culturas indígenas. En ese contexto, cobran especial relevancia los actuales esfuerzos por imponer en el nuevo marco constitucional, “el carácter plurinacional del Estado”.

Buena parte de los autores del libro destilan una peculiar predilección por las acciones de protesta, las movilizaciones que son prueba irrefutable de las incon-

formidades sociales que a menudo desafían al poder constituido. Intentan llevar un registro puntual de estas historias casi heroicas en el concierto de cambios que se vienen dando en América Latina. Se puede decir que provienen de esa estirpe de académicos o intelectuales que, aunado a su sentido y compromiso críticos, tienden a ser partidarios y partícipes con el entorno social de su tiempo. Por ello, no esconden la pasión que les domina y a la cual tratan de ser fieles: la especial predilección por las luchas autonómicas de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, la mayoría de ellos, casi con un ojo clínico, desmenuzan los objetos de su análisis con denodada inclinación por comprender y explicarnos la acción colectiva que los movimientos sociales contemporáneos enarbolan. Actitud encomiable, sobre todo para los momentos de desencanto democrático que actualmente vivimos en el contexto latinoamericano.

El libro es un esfuerzo conjunto que apela y constituye genuinamente un concierto de voces que nos recuerdan las distintas formas de expresión que han adquirido en los últimos años los movimientos sociales latinoamericanos. Por ello mismo, es prolífico tanto el espectro geográfico que se cubre como la perspectiva histórica que en algunos casos se asume para poder explicar los fenómenos que a cada uno de sus autores parecen relevantes y dignos de dejar su testimonio plasmado en estas páginas, como una suerte de inquietante sello ante la volatilidad de nuestra memoria. Así, los relatos y el carácter episódico de algunas luchas se aterrizan en un mosaico muy diverso de países latinoamericanos.

Pero algo más que ser producto de las movilizaciones en el vasto territorio latinoamericano, detecto que tres líneas de análisis atraviesan todos los registros aquí reunidos: la recuperación de los esfuerzos democratizadores al interior de los propios movimientos y sus repercusiones en los sistemas políticos que los albergan; el contenido identitario que adquieren las luchas por ellos emprendidos y, finalmente, el esmero con que se protege la autonomía de los movimientos con el fin de evitar las perniciosas interferencias de los actores políticos.

Cierto es, no obstante, que en varios de los casos aquí descritos se observa que las estructuras estatales conservan todavía un poder casi incontrastable que, con frecuencia, tienden a clientelizar la acción social derivada de los movimientos sociales. Con todo, los autores tratan de encontrar aquellas formas de socialización que nos permiten hablar de formas de resistencia y de algunas innovaciones tanto en los temas, como en los recursos empleados y la manera en que se expresan sus demandas en el espacio público.

Sin embargo, los horizontes, como antaño, ya no están contruidos sobre una meta clara y predefinida de antemano, como ocurría a principios del siglo XX en las muy diversas luchas emancipatorias ocurridas en el mundo. La geometría política, desde luego, no ha sido tan simple y ahora se enfrenta a nuevos derroteros, tal y como lo registran los trabajos aquí reunidos.



Zapata cabalga por el Tepozteco

LUCIANO CONCEIRO BÓRQUEZ
México, Universidad Autónoma
Metropolitana - Xochimilco,
División de Ciencias Sociales
y Humanidades, Colección
Teoría y Análisis/CLACSO, 2012

VALENTINA SARMIENTO CRUZ

Pasante de Sociología de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Morelos es un estado característico por la actividad social en defensa de sus culturas, territorios, tradiciones, recursos naturales y derechos humanos. A principios del siglo XX, el pueblo de Anenecuilco hizo su aportación a la Revolución Mexicana con el “Caudillo del Sur”, Emiliano Zapata, cuya participación no fue menor en la lucha contra los latifundios y a favor de la repartición de las tierras. En la historia estatal más reciente, el pueblo de Ocotepc, al noroeste del estado, enfrentó la construcción de una tienda Soriana con el objetivo de recuperar el terreno (de carácter comunal) vendido, en 2000, y, meses más adelante, rechazó la construcción de una gasolinera frente a una escuela. En ambos casos, la comunidad resultó triunfante al evitar la realización de dichos proyectos. También se registran las luchas en contra de los basureros a cielo abierto y rellenos sanitarios. Por los daños a la salud, contaminación de tierras de cultivo y de la laguna de Coatetelco, la cercana comunidad de Alpuyecá exigió clausurar el tiradero a cielo abierto en Tetlama. Caso similar es el de Loma de Mejía, donde se pretendía realizar un relleno sanitario que, de acuerdo con un diverso grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, era una zona inadecuada para tal propósito. A pesar de tratarse de un medio meramente urbano (a diferencia de los casos anteriores), en mayo del 2001 la capital morelense

se vio igualmente afectada cuando los grupos Costco y Comercial Mexicana compraron el terreno en el que se encontraba el abandonado Hotel Casino de la Selva para construir dos grandes supermercados. En este caso, las movilizaciones ciudadanas que buscaron salvar la vegetación (árboles de decenas de años), obra arquitectónica, murales (de artistas como Félix Candela, Joseph Renau, Jorge Flores y José Reyes Mesas) y piezas prehispánicas, fracasaron frente al gobierno panista de Sergio Estrada Cajigal (sucesor de Jorge Carrillo Olea) y las transnacionales. En el presente, la tradición de lucha se mantiene. Ejemplos de esto son el pueblo de Tepoztlán en contra de la ampliación de la autopista La Pera-Cuatla, la comunidad de Huexca en oposición a la construcción de la planta termoeléctrica y gasoducto o las propuestas alternativas al proyecto de Libramiento Norponiente de la Ciudad de Cuernavaca.

Es en este contexto que Luciano Concheiro Bórquez expone detalladamente el desarrollo del caso de Tepoztlán frente a la construcción de un complejo que contendría un club de golf profesional de dieciocho hoyos, un club de tenis, cerca de seiscientas residencias, un hotel de cinco estrellas con treinta habitaciones, oficinas, lagos artificiales, un helipuerto, un complejo industrial y un "parque corporativo inteligente", que iba a tener un área para la concentración de información sobre América Latina para el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, así como un centro de informática en el que estaría asociada la Ford Motor Company, todo a construirse con un presupuesto reunido por 250 asociados, encabezados por el grupo empresarial llamado KS en 1994.

El autor, especialista en economía agraria, desarrollo rural y campesinado, expone los elementos históricos, culturales, políticos y sociales que conformaron el proceso de lucha del pueblo de Tepoztlán. Concheiro analiza por qué el caso de Tepoztlán cuestiona las dicotomías de lo tradicional frente a lo moderno y del campo frente a la ciudad, abriendo paso a una concepción menos excluyente de los objetivos y resultados del movimiento. Al igual que otros pueblos mexicanos y latinoamericanos, más que en defensa de su pasado, como se podría afirmar superficialmente, los tepoztecos se movilizaron en favor de un presente y futuro moderno, democrático y ecologista. A pesar de que el movimiento del pueblo de Tepoztlán cuenta con elementos incompatibles con las políticas del capital en su forma actual, como su carácter popular y horizontal, éste no se articuló como un movimiento anticapitalista.

A lo largo de *Zapata cabalga por el Tepozteco*, Concheiro remarca claramente y de forma muy completa la relevancia del íntimo vínculo del pueblo con el territorio que ocupa, definiendo a este último como un espacio lleno de símbolos que conforman una identidad cuya formación se remonta a la época precolombina. Dicha relación pueblo-espacio surge de dos vertientes. Una, de la apropiación de los tepoztecos del territorio a partir de un movimiento ecologista popular de larga tradición. En este sentido, el término "ecologismo popular" o "ecologismo de los pobres" fue propuesto y acuñado por el catalán Joan Martínez Alier, quien lo define como aquel de las organizaciones sociales que se particularizan por ser ecologistas sin denominarse a sí mismas en tanto que tales. En un primer momento, parecen tener objetivos y metas separadas

del cuidado del ambiente, pero en el fondo terminan siendo ecologistas, puesto que defienden sus tierras y bienes naturales. En el caso de Tepoztlán, además de la defensa de la dignidad, de los usos y tradiciones y de las formas propias de organización, fue evidente la consecuente defensa de los bienes naturales, especialmente del agua. La segunda vertiente de la relación pueblo-espacio se debe a la recurrencia cíclica de la lucha por construir un poder municipal y autónomo con miras a lograr una democracia territorializada. Una de las características de ésta es que el modelo político gira en torno a la comunidad y que se retoman formas y procesos de las prácticas de organización tradicionales. De esta manera, los referentes culturales y políticos se institucionalizan, por ejemplo en los barrios y las fiestas, y son particulares a ciertos espacios, sirviendo así como fronteras de una identidad común e histórica que se reforma y refuerza en la cotidianidad. A través de esto se puede explicar la recurrente referencia al héroe mítico Tepoztécatl en los discursos realizados en las asambleas y mítines del movimiento, frente al Palacio Municipal.

Atinadamente, los llamados “nuevos movimientos sociales” son para Concheiro movimientos por y de la identidad, por lo que, si se piensa al territorio como el anclaje y espejo material de la identidad, éste se vuelve fundamental en dichos movimientos, como ha sido evidente en el pronunciamiento de las últimas luchas sociales de América Latina, sobre todo aquellas categorizadas como “socio-ambientales”. El caso de Tepoztlán es un ejemplo de la situación problemática sobre la tenencia de la tierra y el manejo del territorio en México. La participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales descrita en el texto evidencia la inconsistencia y parcialidad de la institución a lo largo del proceso del “No al club de golf” en Tepoztlán mediante la elaboración de los dictámenes sobre el uso del suelo. Cabe mencionar que una consecuencia de esto es el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) en Morelos, que surge de una propuesta por parte de la sociedad civil. Dicha iniciativa da cuenta del adelgazamiento del Estado y sus instituciones, y del fuerte corporativismo existente tanto en 1994 como en la actualidad.

A pesar de que los movimientos y flujos poblacionales han ocurrido siempre, con el fenómeno de la globalización se han incrementado. Estos tienen como resultado una desterritorialización (tanto física como simbólica) y dificultan el mantenimiento de una sola identidad a lo largo del tiempo, efectos que el pueblo tepozteco a logrado controlar, como afirma el autor. A pesar de que Concheiro marca útiles matices respecto a las dificultades presentadas entre los grupos sociales originarios de Tepoztlán (tepozteco-tepozteco), hubiera sido enriquecedor también abordar la relación tepozteco-tepoztlizo¹, debido al gran número de “fuereños” con que cuenta esta zona. Es decir, profundizar en los procesos de aculturación o choque entre los diversos actores sociales y sus respectivas identidades y fronteras internas dentro del movimiento. De la mano del tema anterior está el de la ampliación del sujeto político que participa en las luchas sociales, elemento reconocido también en movimientos más recientes, por lo que cabe preguntarse si dicha inclusión social está sucediendo de manera homogénea en las movilizaciones sociales de este país y a qué se debe tal apertura en el caso de Tepoztlán, donde la participación de las mujeres fue parte activa y necesaria.

Finalmente, el libro cuenta con testimonios que sustentan y dan claridad a las ideas que el autor plantea. A casi una década del inicio del conflicto, ¿cómo visualiza la comunidad de Tepoztlán al movimiento? ¿Cómo se transmite la experiencia a las nuevas generaciones?

Con un lenguaje accesible y de lectura fluida, *Zapata cabalga por el Tepozteco* es un texto para un amplio público, y obligatorio para aquellos interesados en el conocimiento de los movimientos socio-ambientales en México. Luciano Concheiro nos facilita la comprensión del proceso a través del cual evoluciona la postura social de un pueblo que procura mantener su forma de vida, que se halla frente a un conflicto y que termina por adquirir una gran experiencia política democrática y autónoma.

Como puede desprenderse de este trabajo, los tiempos y ritmos de la vida rural son uno de los puntos clave de referencia de las estrategias de desarrollo desde lo territorial, de tal forma que incluya o contemple no sólo los tiempos condensados en las luchas, sino los tiempos de vida que toman forma...

Este libro es un acercamiento a la experiencia del pueblo de Tepoztlán que, como muchos otros, lucha por su lugar y su tiempo, ambos distintos de los que exige el sistema capitalista y su forma de expansión, la globalización. Son engranes de distintos tamaños, que se mueven a distintas velocidades y que difícilmente embonarán.

Notas

1 "Tepoztizo" es la denominación que, en forma despectiva, se le da a las personas que no nacieron en Tepoztlán pero que viven permanentemente ahí.

Lista de publicaciones recientes

Bolivia

- Anaya Navia, Susana 2012 *Balance energético departamental 2005-2009* (La Paz: CEDLA).
- Arce, Héctor 2012 *Proceso de Cambio en Bolivia* (La Paz).
- Barja, Gover; Villarroel, Sergio y Zavaleta, David 2012 *Diseño institucional e incentivos implícitos en la descentralización boliviana (1994-2008)* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos/MpD-UCB).
- Barragán, Rossana et al. 2012 *Rescrituras de la Independencia: actores y territorios en tensión* (La Paz: Plural/Coordinadora de Historia/ABH).
- Bautista, Rafael 2012 *Del Estado Colonial al Estado Plurinacional* (La Paz: Rincón).
- Benavides, Maya y Serrano, Mariano 2012 *Y tú, ¿de qué raza eres? La construcción social de lo racial desde una visión de las y los universitarios de la ciudad de La Paz* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos).
- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 2012 *Memoria del seminario nacional "Transformaciones estatales: avances, dificultades y desafíos"* (La Paz).
- Chávez, Marxa; Dávalos, Mariel; Eróstegui, Morelia; Fischermann, Bernd; Paz, Sarela 2012 *Extractivismo y Resistencia indígena en el TIPNIS* (La Paz: Autodeterminación).
- Choque, Roberto 2012 *Historia de una lucha desigual* (La Paz: IIICAB).
- Cruz, Daniel; Canedo, Fernando; Gruberg, Helga; Luján, Fabiola; Pérez, César y Zelada, Erika 2012 *Cambio climático y políticas municipales. Acciones en las comunidades de Aiquile, Challapata y Padcaya* (La Paz: PIEB/Embajada Real de Dinamarca).
- Dargatz, Anja y Zuazo, Moira (eds.) 2012 *Democracias en transformación. ¿Qué hay de nuevo en los nuevos Estados andinos?* (La Paz: FES).
- De Alarcón, Silvy 2012 *Comunidad, ética y educación* (La Paz: IIICAB).
- De la Barra, Zdenka; Lara, Marcelo y Coca, Oscar 2012 *Exclusión y subalternidad de los urus del lago Poopó. Discriminación en la relación mayorías y minorías étnicas* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos).

- De Sousa Santos, Boaventura y Exeni, José Luis (coords.) 2012 *Justicia Indígena, Plurinacionalidad e Interculturalidad en Bolivia* (La Paz: Fundación Rosa Luxemburg).
- Dibbits, Ineke; Peredo, Elizabeth; Volgger, Ruth y Wadsworth, Ana Cecilia 2012 *Polleras Libertarias. Federación Obrera Femenina. 1927-1965* (La Paz: Tahipamu/Garza Azul).
- Ernst, Tanja y Schmalz, Stefan (eds.) 2012 *El primer gobierno de Evo Morales. Un balance retrospectivo* (La Paz: Plural).
- Fundación Tierra 2012 *Marcha indígena por el TIPNIS. La lucha en defensa de los territorios* (La Paz).
- García, Estefanía 2012 *El proceso de cambio en Bolivia. Una mirada desde las "bartolinas"* (La Paz: Veterinarios Sin Fronteras/Gobierno de las Islas Baleares/AECID).
- García Linera, Álvaro 2012 *Geopolítica de la Amazonia* (La Paz: Vicepresidencia de Estado Plurinacional).
- Gotkowitz, Laura 2012 *La revolución antes de la revolución. Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia. 1880-1952* (La Paz: PIEB/Plural).
- Grebe, Horst; Medinaceli, Mauricio; Fernández, Rodrigo; Hurtado, Cristina 2012 *Los ciclos recientes en la economía boliviana. Una interpretación del desempeño económico e institucional (1989-2009)* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos/ Instituto Prisma).
- Gutiérrez, Rita 2012 *Gestión Pública y áreas protegidas en Bolivia. Diagnóstico del estado del arte y temas relevantes de investigación* (La Paz: PIEB/Embajada Real de Dinamarca).
- Gutiérrez, Rita y Días, Carlonia 2012 *Gestión pública, cambio climático y agua. Una aproximación a temas relevantes de investigación* (La Paz: PIEB/Embajada Real de Dinamarca).
- Guzmán, Ismael 2012 *VIII Marcha Indígena en Bolivia: por la defensa del territorio, la vida y los derechos de los pueblos indígenas* (La Paz: CIPCA).
- Iraegui Balenciaga, Aitor 2012 *La democracia en Bolivia* (La Paz: Plural).
- Laats, Henkjan; Inturias, Mirna; Caymani, Clemente 2012 *Megaobras en Madidi y Pilón Lajas. Hacia una transformación de los conflictos* (La Paz: PIEB/Embajada Real de Dinamarca).
- Lopes, Mieke 2012 *Los futuros maestros y el cambio social en Bolivia. Entre la descolonización y las movilizaciones* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos).
- Llanque, Jorge y Villca, Edgar 2012 *Qamiris aymaras. Desplazamiento e inclusión de élites andinas en la ciudad de Oruro* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos).
- Llorenti, Sacha 2012 *La verdad secuestrada. Medios de comunicación privados y el proceso de cambio en Bolivia* (La Paz: Sigma).
- Machicado, Carlos; Nina, Osvaldo y Jemio, Luis 2012 *Factores que inciden en el crecimiento y el desarrollo en Bolivia. Análisis nacional y regional (1989-2009)* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos/INESAD).
- Mamani, Rolando; Molina, Wilder; Chirino, Fabiana y Saaresranta, Tina 2012 *Vivir Bien, significados y representaciones desde la vida cotidiana* (La Paz: U-PIEB/Embajada de los Países Bajos).
- Mayorga, Fernando 2012 *Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado Plurinacional* (La Paz: CESU-UMSS/Plural).
- Mazurek, Hubert 2012 *Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de investigación social* (La Paz: U-PIEB).
- Migraña 2012 (La Paz: Vicepresidencia de Estado Plurinacional) Nros. 2 y 3.

- Miranda, Boris 2012 *La mañana después de la guerra* (La Paz: El Cuervo).
- Miuba, Simar; Loayza, Oscar; Durán, Ángel y Gonzales, Lenny 2012 *Territorios compartidos. Construyendo un modelo de gestión territorial para el Madidi y el pueblo leco de Apolo* (La Paz: PIEB/Embajada Real de Dinamarca).
- Modonesi, Massimo (coord.) 2012 *Horizontes gramscianos: estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci* (La Paz: Autodeterminación).
- Molina, Fernando 2012 *La trayectoria de Antonio Negri. De Marx al radicalismo posmoderno* (La Paz: Fundación Pazoskanki).
- Mora, David 2012 *Educación sociocomunitaria y productiva* (La Paz: IICAB).
- Morales Anaya, Rolando 2012 *El desarrollo visto desde el sur* (La Paz: INESAD).
- Murillo, Mario 2012 *La bala no mata sino el destino: una crónica de la insurrección popular de 1952 en Bolivia* (La Paz: Plural).
- Oliver, Lucio (coord.) 2012 *La otra política* (La Paz: Autodeterminación).
- Oporto, Henry 2012 *Un Nuevo Rumbo* (La Paz: Fundación Pazoskanki).
- Oporto, Henry y Molina, Fernando 2012 *El proceso de cambio en la encrucijada* (La Paz: Fundación Pazoskanki).
- Oviedo, Atahualpa 2012 *Qué es el Suma Kawsay. Tercera vía: vitalismo, alternativa al capitalismo y al socialismo* (La Paz: Garza Azul).
- Peñaranda, Raúl; Mercado, Isabel; Miranda, Boris y Berríos, Clara 2012 *30 años de democracia en Bolivia* (La Paz: Página 7).
- Pereira, Rodney; Sheriff, Ernesto y Salinas, Valeria 2012 *Finanzas públicas. Comportamiento e impacto en el desarrollo nacional y regional (1990-2010)* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos).
- Rodríguez, Huáscar 2012 *La choledad antiestatal: El anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano (1912-1965)* (La Paz: Muela del Diablo).
- Rojas Paredes, Pablo 2012 *El sueño del Presidente: la pesadilla de la Madre Tierra* (Cochabamba: Runa).
- Salazar, Cecilia; Sulcata, Ana Evi y Rodríguez, Mirco 2012 *Intelectuales aymaras y nuevas mayorías mestizas. Una perspectiva post 1952* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos).
- Salmón, Josefa 2012 *Decir Nosotros. En la encrucijada del pensamiento indianista* (La Paz: Autodeterminación).
- Sandóval, Carmen Dunia 2012 *Debates y propuestas en tiempos de cambio* (La Paz: IRFA/CIPCA).
- Sarzuri-Lima, Marcelo 2012 *Escenarios (des)colonizadores* (La Paz: IICAB).
- Schavelzon, Salvador 2012 *El Nacimiento del Estado Plurinacional* (La Paz: Friedrich Ebert Stiftung/Plural/CEJIS).
- Seone, Alfredo y Wanderley, Fernanda 2012 *La brecha ahorro-inversión y la olvidada agenda de transformación productiva con equidad (1989-2009)* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos/CIDES-UMSA).
- Sotto, Antonio 2012 *Para que no se pierda la historia: diario de la VIII Marcha indígena por la defensa del TIPNIS* (La Paz: CIPCA).
- Tancara, Constantino 2012 *La promesa de Warisata* (La Paz: IICAB).
- Tapia, Luis 2012 *Ciclos* (La Paz: Autodeterminación); *La política como relación de fuerzas*.
- Tapia, Luis; Paz, Sarela; Bautista, Rafael; Chávez, Patricia; Chávez, Marxa y Prada, Raúl 2012 *La victoria indígena del TIPNIS* (La Paz: Autodeterminación).

- Tejeiro, José 2012 *TIPNIS: reflexiones de a pie. Girando en torno al problema* (La Paz: ABECOR).
- Tinkazos 2012 (La Paz: PIEB) Nros. 30 y 31.
- Umbrales 2012 (La Paz: CIDES-UMSA) Nro. 23.
- Van der Valk, Alba y Flores, Silvia 2012 *Colonialidad del poder en Caraparí. Estudio de la disputa por la tierra, relaciones de trabajo y autoridad* (La Paz: PIEB/Embajada de los Países Bajos).
- Vargas, María; Garzón, Noelia; Osinaga, Edil y Müller, Robert 2012 *Compensación por servicios ambientales de carbono. Una alternativa para reducir la deforestación en el TIPNIS* (La Paz: PIEB/Embajada Real de Dinamarca).
- VVAA 2012 *Enciclopedia Histórica del Proceso Constituyente Boliviano* (La Paz: Vicepresidencia de Estado Plurinacional) 5 tomos, 8 volúmenes.
- VVAA 2012 *Más allá del Desarrollo* (La Paz: Fundación Rosa Luxemburg).
- VVAA 2012 *Pensando el mundo desde Bolivia. II Ciclo de conferencias* (La Paz: Vicepresidencia de Estado Plurinacional).
- Wilka 2012 (El Alto: Wilka) Nro. 5.
- Yaksic, Fabián 2012 *Interpelación Silenciosa del Voto Blanco y Nulo* (La Paz: Muela del Diablo).
- Zuazo, Moira; Faguet, Jean Paul y Bonifaz, Gustavo 2012 *Descentralización y democratización en Bolivia: la historia del Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia* (La Paz: Friedrich Ebert Stiftung).

Guatemala

- Álvarez Aragón, Virgilio; Figueroa Ibarra, Carlos; Taracena Arriola, Arturo; Tischler, Sergio y García, Edmundo (eds.) 2012 *Guatemala: Historia Reciente. Tomo I. Proceso político y antagonismo social (1954-1996)* (Guatemala: FLACSO-Guatemala/Editorial de Ciencias Sociales).
- Bulmer-Thomas, Víctor 2012 *La Economía política de Centroamérica desde 1920* (Serviprensa).
- Camayd-Freixas, Erik 2012 *Etnografía imaginaria. Historia y parodia en la literatura hispanoamericana* (Guatemala: F&G Editores).
- Casaús Arzú, Marta Elena y Fuentes Oliva, Regina 2012 *El libro de la vida de Alberto Masferrer y otros escritos vitalistas. Edición crítica de la obra teosófico-vitalista (1927-1932)* (Guatemala: F&G Editores).
- Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 2012 *Reivindicación política. Doce comunidades maya kaqchikeles en defensa del territorio* (Guatemala).
- CEUR-USAC 2012 *Gestión metropolitana: Una acercamiento a las problemáticas municipales de la Nueva Guatemala de la Asunción, Quetzaltenango y Antigua, Guatemala* (Guatemala).
- Chinchilla Mazariegos, Oswaldo 2012 *Cotzumalguapa: la ciudad arqueológica. El Baúl - Bilbao - El Castillo* (Guatemala: F&G Editores).
- Cortez, Beatriz; Ortiz Wallner, Alejandra y Ríos Quesada, Verónica (eds.) 2012 *(Per)Versiones de la modernidad. Literaturas, identidades y desplazamientos* (Guatemala: F&G Editores). Tomo III de la colección "Hacia una Historia de las Literaturas Centroamericanas".

- Dabroy, Jahir 2012 *Caracterización del sistema político de Huehuetenango: análisis del proceso electoral 2011* (Guatemala: CEDFOG/Serviprensa).
- Dary, Claudia 2012 *Los profesionales mayas y la justicia social* (Guatemala: FLACSO-Guatemala/Editorial de Ciencias Sociales).
- Fernández, Lafitte 2011 *Crimen de Estado. El caso Parlacen* (Guatemala: F&G Editores/Aura).
- Fundación Guillermo Toriello y Centro Rolando Morán 2012 *Fernando Hoyos y Chepito Ixil. 1980-1982. Encuentro y comunión revolucionaria desde las montañas de Guatemala*.
- Fundación Mirna Mack 2012 *Acceso a las mujeres indígenas a la justicia en el departamento de Quiché* (Guatemala).
- Hinshaw, Robert E. 2012 *Los coyotes tienen suerte* (Guatemala: F&G Editores).
- Lee Woodward, Ralph 2012 *Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala: 1821-1871* (Serviprensa).
- López, Julie 2012 *Gerardi: Muerte en el vecindario de Dios* (Guatemala: F&G Editores).
- Móvil, Antonio 2012 *El lado oscuro de la historia* (Serviprensa).
- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 2012 *Violencia en Guatemala: Una interpretación sobre el aumento de la violencia delincinencial y el trauma psicosocial* (Guatemala).
- Ordóñez Jonama, Ramiro 2012 *Un sueño de primavera* (Editorial Artgráfico).
- Palencia Frener, Sergio; Hoyos, Fernando e Ixil, Chepito 2012 *1980-1982. Encuentro y comunión revolucionaria desde las montañas de Guatemala* (FGT/Centro Rolando Morán).
- PNUD 2012 *¿Un país de oportunidades para la juventud? Informe Nacional de Derechos Humanos 2011-2012* (Guatemala).
- Rodríguez Pellecer, Martín; Naveda, Enrique; Sas, Luis Ángel y Martínez de Zárate, Ana 2012 *Plaza Pública. Bestiario del poder* (Guatemala: F&G Editores).
- Serrano Elías, Jorge 2012 *La guayaba tiene dueño. El secuestro del Estado de Guatemala* (Panamá: Editorial Exedra).
- Sieder, Rachel y Flores, Carlos Y. 2012 *Dos justicias: Coordinación interlegal e intercultural en Guatemala* (Guatemala: Casa Comal/Arte y Cultura/ F&G Editores).
- Taracena Arriola, Arturo 2012 *Invencción criolla, sueño ladino, pesadilla indígena: Los Altos de Guatemala. De Región a Estado (1740-1871)* (Serviprensa).
- Van Akkeren, Ruud 2012 *Xib'alb'a y el nacimiento del nuevo sol* (Guatemala: Editorial Piedra Santa).
- Yagenova, Simona Violetta (coord.) 2012 *La industria extractiva en Guatemala: Políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2011* (Guatemala: FLACSO-Guatemala); *Huehuetenango: Conflictividad y Protesta Social 2010-2011* (Guatemala: CEDFOG/Magna Tierra Editores).

Sumario

Editorial

Guillermo Almeyra

Venezuela: nuevos horizontes

Venezuela y la reinención de la política: el desafío del socialismo en nuevos escenarios

Juan Carlos Monedero

Estado, disputa electoral y construcción de poder popular en la Venezuela bolivariana

Hernán Ouviña

Venezuela: proceso sociopolítico y conflictividad social. Un balance de 2012

Armando Chaguaceda Noriega y Marco Antonio Ponce

Informes sobre el conflicto social en 2012

Argentina, 2012: ¿crisis en la fuerza social democrática, nacional y popular?

María Celia Cotarelo

Bolivia: informe de coyuntura y balance anual de 2012

Dunia Mokrani Chávez y Pilar Uriona Crespo

Brasil: agravamento da crise, coesão do bloco dominante e novos horizontes para as lutas sociais

Roberto Leher *et al.*

En el tiempo del libre mercado: conflictos y protesta social en

Costa Rica durante el año 2012

Alejandro Alvarado Alcázar y Gloriana Martínez Sánchez

Ecuador en 2012: un largo año electoral

Mario Unda

Guatemala en 2012: reconfiguración autoritaria, movilización popular y criminalización de las luchas

Simona Violetta Yagenova

Entrevista

Compromiso político, tarea teórica y movimientos sociales. Entrevista a

Enrique Dussel

Luz Estrello y Massimo Modonesi

Experiencias latinoamericanas

De la generación zapatista al #YoSoy132. Identidades y culturas políticas juveniles en México

Massimo Modonesi

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

Incitaciones a pensar. Apuntes en torno a la trayectoria política e intelectual de

Fernando Martínez Heredia

Alejandra González Bazúa

Pensamiento social y política de la Revolución

Fernando Martínez Heredia

Reseñas

De *Hacia la recuperación de la soberanía educativa en América Latina: conciencia crítica y programa*

Marath Baruch Bolaños López

De *Sociabilidades emergentes y movilizaciones sociales en América Latina*

Efraín Quiñonez León

De *Zapata cabalga por el Tepozteco*

Valentina Sarmiento Cruz

Lista de publicaciones recientes

